

Utopías *en construcción*

Experiencias latinoamericanas
de producción social del hábitat



Utopías en construcción

Experiencias latinoamericanas de producción social del hábitat

Este material es producto de la labor realizada por el grupo de trabajo de Producción Social del Hábitat impulsado por la Coalición Internacional para el Hábitat - Oficina para América Latina (HIC-AL). Para más información sobre los participantes y el grupo, visita <http://hic-al.org/psh>

Autoría:

HIC-AL/Grupo de trabajo de PSH

Coordinación editorial:

Jerónimo Díaz (HIC-AL)

Enrique Ortiz Flores (HIC-AL)

Revisión:

María Silvia Emanuelli (HIC-AL)

Diseño:

Dennis Jiménez (HIC-AL)

Formación:

Tania Hernández

Ilustración:

Jazbeck Gámez

Mapas:

Jerónimo Díaz (HIC-AL)

Corrección de estilo:

Xilonen Pérez

Entre 2015 y 2017 han participado en el grupo de trabajo**movimientos y organizaciones de 15 países de América Latina:**

Asociación Civil Hábitat; Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda

Mutua del Paraguay (Ccvamp); Centro de Estudios y Promoción del

Desarrollo Desco; Centro de Investigación, Documentación y Asesoría

Poblacional (Cidap); Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento

(Copevi); Comunal: Taller de arquitectura; Comité Articulador de

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Cacvam); Comité

de Desarrollo Comunitario Los Pinos; Cooperación Comunitaria;

Cooperativa Unión Palo Alto; Coordinadora Centroamericana

Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (Coceavis); Coordinadora de

Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados (Cobañados);

Cosechando Juntos lo Sembrado; Ecoaldea Aldeafeliz; Federación de

Cooperativas Todos Juntos; Federación Uruguaya de Cooperativas

de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam); Fideicomiso de la Tierra del

Caño Martín Peña; Fundação Bento Rubião; Fundación Promotora de

la Vivienda (Fuprovi); Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda

Mínima (Fundasal); Hábitat Participativo; Hábitat Social; Movimiento

de Ocupantes e Inquilinos (MOI); Movimiento de Pioneros de

Venezuela; Movimiento Urbano Popular; Ocupa tu Ciudad; Plataforma

Urbana de Guatemala; Proyecto Habitar; Red Hábitat; Red Hábitat Popular

Chile; Somos Ecuador; União Nacional por Moradia Popular (UNMP);

UCISV-Pobladores; Unión de Cooperativas Tosepan; Vecinos Sin

Techo y por una Vivienda Digna; Virgen del Carmen del Quinto Patio.

ISBN Obra Independiente: 978-607-95101-6-9

Creative Commons CC-BY-NC 4.0

Impreso en México, 2017

Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ y por Misereor.



Utopías *en construcción*

Experiencias latinoamericanas
de producción social del hábitat



Contenidos



I. Disputar la ciudad



II. Defender el territorio



III. Acompañar los procesos

Presentación (María Silvia Emanuelli y Jerónimo Díaz, HIC-AL) **8**

Introducción (Enrique Ortiz Flores) **10**

1. Palo Alto, una cooperativa entre corporativos **28**
2. El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña: regularización con carácter comunitario **30**
3. Fucvam: territorialización de un modelo transformador **38**
4. Cooperativismo de altura: el Cacvam de Bolivia **50**
5. Por una justa reubicación para los afectados por el Metro de Lima **51**
6. CCVAMP: del barrio cooperativo a los Bañados de Asunción **52**
7. Coceavis: articulando luchas y proyectos de vida colectivos **56**
8. Campamentos de Pioneros: del barrio a la ciudad **62**
9. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y la política de vivienda autogestionaria en Buenos Aires **66**
10. La Federación de Cooperativas Todos Juntos **72**
11. La UNMP y el caso de la cooperativa Esperança **73**
12. El MUP y el caso de la cooperativa Guandaliza'a **78**
13. Ñuke Mapu: reabriendo el camino cooperativo en Chile **81**
14. Convivir en la diversidad: el Barrio Intercultural **90**
15. Reconstrucción post-desastre en la Montaña de Guerrero **100**
16. Cosechando Juntos lo Sembrado: hacia la autonomía financiera **108**
17. Masewalme kin Chiwa in Kaliwa **114**
18. La Unión de Cooperativas Tosepan **122**
19. Comunal impulsa el aprovechamiento del bambú **129**
20. Aldeafeliz: utopías ecológicas en construcción **134**
21. Con 50 años de experiencia, Desco lanza nuevas iniciativas **144**
22. El barrio Solidaridad enfrenta los efectos del cambio climático **148**
23. Hábitat para la Mujer, Comunidad María Auxiliadora **150**
24. Fuprovi: el desafío de la escala de intervención **152**
25. Un Techo para mi Hermano: el desafío de la profesionalización **158**
26. Resolviendo las necesidades de vivienda y trabajo en el Chubut **160**
27. El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda **164**
28. Proyecto Habitar: arquitectura con compromiso social **168**
29. Proyectos de Aplicación Profesional en colonias populares de Guadalajara **174**
30. Confluencia en Los Pinos: de la ocupación a la planeación participativa **178**

Presentación

El libro que tienen en sus manos es fruto del esfuerzo colectivo del Grupo regional de trabajo sobre Producción Social del Hábitat, conformado a raíz de una reunión paralela al 7 Foro Urbano Mundial (Medellín, 2014), convocada por la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés). HIC es una red internacional autónoma y sin fines de lucro que nace en el contexto de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976). Actualmente, la Coalición está conformada por 410 organizaciones civiles y movimientos sociales, grupos académicos, institutos de investigación y capacitación y activistas en derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda en 120 países.

El grupo de trabajo, abierto a todas las organizaciones interesadas en la temática, estableció como objetivo “documentar, visibilizar, defender y fortalecer las aportaciones y experiencias transformadoras llevadas a cabo desde organizaciones y comunidades tanto urbanas como rurales de América Latina en materia de producción y gestión social del hábitat, como herramienta destinada a satisfacer el derecho humano a la vivienda de las personas de bajos recursos, con el fin de incidir en leyes, reglamentos, planes, programas, políticas públicas, y presupuestos a nivel local, nacional, así como en la incidencia regional e internacional”.

¹ Los resultados de estos encuentros y otros materiales sobre PSH se encuentran en <http://hic-al.org/psh>

² Véase <http://psh.urbanmode.org>

Para llevar a buen puerto esta iniciativa, la oficina de HIC para América Latina (HIC-AL), responsable de la edición de este libro, contó con el apoyo financiero de la Fundación Rosa Luxemburgo, de Misereor y del Centro Cooperativo Sueco We Effect. Gracias a ello y al involucramiento solidario de muchas otras instancias y personas, entre 2015 y 2017, el grupo sostuvo tres encuentros, sumando una participación total de 40 organizaciones provenientes de 15 países¹. Aunque esta publicación no cubre la totalidad de aquellos intercambios, sí da cuenta de cada una de las experiencias que han confluído en estos encuentros, y ofrece un retrato de la diversidad de expresiones que emanan de la lucha por el acceso a la vivienda para los sectores populares de América Latina.

La documentación que fundamenta este libro fue recopilada por distintas vías. Por un lado, las organizaciones que asistieron a los dos primeros encuentros fueron invitadas a presentar una ficha conforme a la propuesta de Enrique Ortiz Flores para identificar experiencias transformadoras orientadas a hacer efectivos los derechos humanos vinculados al hábitat, mediante procesos controlados por la población participante. En un segundo momento, posterior a la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III (Quito, 2016), se aprovechó la puesta en marcha de un poderoso instrumento digital por parte de la asociación franco-suiza urbaMonde², mediante el cual se documentaron nuevos casos. Los más significativos fueron acreedores del Premio Latinoamericano de Producción Social del Hábitat 2017, promovido por urbaMonde, HIC-AL y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

Esta publicación supone un paso hacia adelante en relación con iniciativas previas de sistematización de casos, puesto que enfatiza el alcance territorial de los procesos documentados. El resultado es sorprendente: las 30 experiencias aquí descritas involucran a más de 60 000 familias que han transformado sus condiciones de vida mediante proyectos tan diversos como cooperativas y asociaciones de vivienda, cajas de ahorro e implementación de ecotecias en contextos rurales, programas de mejoramiento barrial, proyectos de reconstrucción post-desastres, entre otros.

Conviene recordar, sin embargo, que estos emprendimientos son herederos de un variado número de experiencias que, desde el siglo pasado, han producido alianzas entre movimientos populares, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos y académicos de distintos rincones de Latinoamérica, para generar cambios profundos y garantizar un hábitat digno para todas y todos. Son cientos, tal vez miles, los ensayos, experiencias piloto, intercambios, escuelas populares y espacios de teorización colectiva, a través de los cuales se ha gestado el concepto de producción social del hábitat (PSH) que, como aquí se demuestra, sigue teniendo una gran vigencia política y práctica.

Más que nunca, la PSH se plantea como un proceso alternativo y viable al modelo de vivienda controlado por el capital privado, pero también al que ha sido desarrollado por el Estado desde una óptica de vivienda social "llave en mano", que no contempla la participación de las y los habitantes y que con frecuencia, tampoco garantiza una vivienda adecuada. En los procesos de PSH, en cambio, se tiene la oportunidad de construir comunidad, ensayar la autogestión y eventualmente plantear la propiedad colectiva y defender así con mayor contundencia los territorios populares de la embestida del mercado. Más aún, para millones de personas, se trata de una alternativa (a veces la única) para convertir en realidad el acceso a un derecho social fundamental como es la vivienda adecuada.

Las experiencias que aquí se presentan no sólo aportan soluciones al problema habitacional, también se caracterizan por haber ensayado una serie de prácticas transformadoras en lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Algunas han sido capaces de resistir y multiplicarse incluso más allá de los países en los cuales se desarrollaron, creando importantes articulaciones políticas que consiguen incidir en los marcos jurídicos y normativos para abrir paso a nuevas experiencias; otras han sido innovadoras en relación con la participación y el desarrollo de herramientas para la defensa de sus territorios; otras más han abierto el diálogo entre distintos pueblos y avanzan en la definición de una nueva sociedad intercultural que reconoce y persigue la diversidad de saberes asociados a la construcción, la agricultura y la organización social. Todas buscan garantizar la satisfacción integral de los derechos humanos e incorporan transversalmente los temas de género, fortalecen la economía local y ensayan propuestas innovadoras capaces de combatir el cambio climático y conservar los bienes comunes. Se trata, en suma, de proyectos "utópicos" porque sus promotores se empeñan día con día en construir lo que parece imposible dentro de las condiciones del sistema capitalista, produciendo espacios de esperanza donde prima el interés colectivo, el cuidado de la naturaleza, la solidaridad y el buen vivir.

Maria Silvia Emanuelli
Jerónimo Díaz

Introducción

No hay mañana sin proyecto,
sin sueños, sin utopía, sin esperanza,
sin el trabajo de creación y
desarrollo de posibilidades
que viabilicen su concreción.

Paulo Freire

³ Véase: Enrique Ortiz Flores, María Lorena Zárate, María Carla Rodríguez (coord.), *De la marginación a la ciudadanía: 38 casos de producción y gestión social del hábitat*, HIC, Forum Barcelona 2004.

En septiembre de 2004 concluimos en la Oficina Regional de HIC para América Latina (HIC-AL) la recopilación de experiencias de Producción y Gestión Social del Hábitat de diversas regiones del planeta, base de las actividades que llevamos a cabo durante el Forum Universal de las Culturas, realizado ese año en Barcelona³. La sistematización que realizamos y el brillante texto preparado por Carla Rodríguez sobre 42 experiencias latinoamericanas, nos permitió constatar la complejidad manejada en muchos de los casos registrados y nos ilustró sobre el papel de las organizaciones sociales en el manejo de procesos integrales y de estrategias transformadoras que contribuyen a su fortalecimiento; a la construcción de una ética centrada en el ser humano y la naturaleza; y al desarrollo de métodos, instrumentos de gestión y de lucha que potencian el impacto social de esta forma de producción.

A diez años de aquel esfuerzo colectivo, HIC-AL convocó a sus miembros y aliados a profundizar en el carácter transformador de esta forma de producción y de gestión del hábitat. Se les invitó a documentar procesos que han sido capaces de manejar la integralidad compleja del territorio rural y del hábitat urbano en el que actúan; que articulan múltiples actores, campos de intervención y metodologías; que fortalecen al mismo tiempo su autonomía y su capacidad de incidencia en las políticas públicas; que favorecen el control democrático de procesos productivos y de gestión abonando así al desarrollo de una nueva cultura solidaria y responsable; que aportan transformaciones significativas tanto en las políticas y prácticas de las instituciones públicas, como en las que desarrollan las propias organizaciones y comunidades con las que interactúan.

Lo anterior plantea la urgencia de documentar, difundir y, sobre todo, articular las experiencias, no sólo para intercambiar aprendizajes sino también para fortalecer las redes solidarias y avanzar con un mayor peso específico y cobertura social en la defensa y el posicionamiento de esta forma de producir y gestionar nuestro hábitat, frente a la celeridad depredadora y excluyente impuesta por el modelo neoliberal. En oposición al sistema establecido, las experiencias aquí descritas surgen desde la base misma de los pobladores/as, de sus rasgos culturales y necesidades concretas y de la relación que establecen con las características del lugar que habitan, de su clima, su paisaje, su topografía y recursos materiales. Es por ello que generan una diversidad de abordajes y de soluciones que caracteriza a esta forma de producción, misma que difiere de las tendencias homogeneizantes y reduccionistas de la producción de mercado. En efecto, lo único que resulta común a la mayor parte de los casos documentados son las dificultades y obstáculos que reportan haber tenido con las instituciones públicas encargadas del tema, las cuales, pese a reconocer en algunos países esta forma de producción, avanzan muy lentamente en su impulso e instrumentación.

¿Qué avances y logros significativos recoge esta nueva recopilación de casos en América Latina?

A pesar de las dificultades e incluso del incremento de obstáculos y regulaciones que privilegian la producción mercantil de vivienda en la región latinoamericana, el análisis de los casos documentados en este libro permite visualizar avances importantes que superan la visión viviendista y aportan a la construcción de un hábitat vivo e integrado en lo sociocultural, lo físico-ambiental y lo económico. Destacan algunos procesos de largo aliento que influyen en las comunidades vecinas y en la defensa de los ecosistemas que, como en el caso de la Cooperativa Tosepan –unidos hombre y naturaleza– logran fortalecer las luchas contra los impactos de los megaproyectos, la depredación y el despojo de los bienes comunes ubicados en su territorio.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, se observa una mayor recurrencia a los espacios nacionales e internacionales que operan en su promoción y defensa. Tal es el caso de la iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil, algunas vinculadas a procesos de producción social del hábitat, para lograr, en alianza con el Comité DESC de Naciones Unidas, la formulación de una Observación General sobre el derecho al suelo.

Dos características inherentes a los derechos humanos, su universalidad y su interdependencia, abren una opción incluyente e integral que debe conducir a cambios significativos en la concepción de las políticas públicas y en el diseño, ejecución y operación de los programas que deben concretarlas. También plantean un gran desafío a las instituciones para superar el tratamiento sectorial de fenómenos complejos como lo son la ciudad y el territorio, y abrir cauce para su coordinación a partir de las iniciativas de la población y sus organizaciones.

En este sentido, se ha avanzado en la reivindicación no sólo del derecho a la vivienda sino de otros derechos vinculados al hábitat como el derecho al agua, la promoción del reconocimiento del derecho al suelo, los derechos al disfrute de un medio ambiente sano y a participar organizadamente en su promoción, instrumentación y defensa en caso de violaciones o de evasión de las responsabilidades adquiridas por los Estados signatarios de los pactos internacionales de derechos humanos.

La integración diversa de nuestras urbes y la obligación de garantizar un lugar seguro y digno donde vivir al conjunto de sus habitantes y usuarios, llevó en este período a promover el derecho a la ciudad como un derecho articulador del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos y por tanto como un derecho colectivo y complejo. Este proceso, impulsado globalmente por la sociedad civil organizada, se refleja en todo su potencial transformador en los casos más avanzados recogidos en este libro y en las reivindicaciones, propuestas y logros de experiencias que inician en esta perspectiva.

Otro tema importante que, a partir de las experiencias registradas en el texto de 2004, va tomando fuerza y aceptación, es el de la propiedad colectiva del suelo, en el que la vasta y sólida experiencia de las cooperativas uruguayas de vivienda por ayuda mutua es referente incuestionable. Su voluntad de compartir e internacionalizar su modelo, ha sido y sigue siendo pilar de transformaciones culturales e institucionales de vanguardia en nuestro continente. Esta forma de propiedad del suelo e incluso de las viviendas, prospera como garantía de permanencia, como baluarte frente a la especulación, como expresión de un cambio cultural profundo que fortalece la convivencia, la seguridad y la solidaridad, no sólo a lo interno del grupo participante sino hacia otras organizaciones que luchan por hacer efectivos sus derechos a un lugar digno donde vivir.

Estos y otros de los procesos de la región han profundizado la gestión democrática a lo interno de sus organizaciones y en su relación con otros actores, exigiendo de las instituciones espacios

participativos que superen la sola consulta y la propuesta para intervenir activamente en las decisiones y el control de los proyectos productivos y de gestión de su hábitat. Mediante procesos autogestionarios, mecanismos de autogobierno y el manejo responsable de sus recursos, fortalecen su capacidad creativa, su autonomía y su viabilidad de permanencia y desarrollo en el tiempo. Los más avanzados cuentan con asesoría calificada en los diversos campos implicados y reciben de ésta la información necesaria para incidir con efectividad en las decisiones y en el control de sus actividades.

Varios de los proyectos más consistentes integran a todos sus miembros niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres adultos y viejos, en el desarrollo de sus actividades y en la orientación de sus decisiones. En consecuencia, ponen especial atención y energía en la formación crítica y autogestionaria de sus miembros con espacios tanto de educación formal como autónoma, orientada a la inclusión activa de todos sus integrantes, al desarrollo de sus propias capacidades de gestión y manejo de los recursos de que disponen y al fortalecimiento en ellos de los valores de solidaridad, cooperación y compromiso. Es muy relevante el papel central que cumplen las mujeres en el impulso, desarrollo y conducción de estos procesos.

Durante los años transcurridos de este nuevo siglo se han incrementado las redes y alianzas de organizaciones involucradas en este tema tanto a nivel regional como a lo interno de algunos países, mismas que coordinan acciones conjuntas, de las que destacan las realizadas en el proceso preparatorio de Hábitat III y durante su realización en Quito en octubre de 2016. Destaca también la creación –a raíz del Foro Urbano Mundial realizado en Medellín, Colombia, en 2014– del Grupo regional de trabajo sobre Producción Social del Hábitat, mediante el cual se fortalecen los intercambios y el uso de las tecnologías y redes sociales para conectar, difundir y debatir temas de interés común, y muy recientemente para poner en marcha un programa de capacitación sobre la PSH a distancia con la participación solidaria de académicos de varios países integrados en un nuevo grupo de trabajo denominado Fortalecimiento de Capacidades en Hábitat de América Latina.

Todo ello ha tenido un impacto en la creación de nuevos organismos asesores, integrados por mujeres y hombres jóvenes, profesionales en varias disciplinas, que aportan nuevos enfoques y enriquecen los mecanismos de apoyo a las luchas y proyectos de las organizaciones sociales y de incidencia, así como la negociación de políticas, instrumentos y programas.

Surge con fuerza una inquietud por mejorar la calidad arquitectónica de los proyectos y el uso de materiales y técnicas locales al que aportan nuevos conocimientos para garantizar mayor seguridad y durabilidad de las construcciones, en un consciente intercambio de saberes con las comunidades.

Gracias a las iniciativas y a la creatividad social y la de profesionales comprometidos se incrementan paulatinamente la escala y la cobertura territorial de los proyectos de producción social organizada del hábitat y la vivienda, además de que se trabaja ya en una perspectiva de largo plazo.

También ha crecido el reconocimiento externo de este esfuerzo transformador compartido por múltiples actores, lo que les ha hecho acreedores a premios nacionales e internacionales que estimulan en mucho su posicionamiento y futuro.

¿Cuáles son los problemas más recurrentes enfrentados por los productores sociales?

El problema más relevante que enfrentó la mayor parte de los casos es el acceso a suelo adecuado a las necesidades y posibilidades de los pobladores. Muchos de ellos son resultado de ocupaciones irregulares y de largos procesos de regularización de la tenencia; de acceso a suelo vulnerable ante desastres o de adquisiciones en zonas lejanas y de difícil acceso a equipamientos, fuentes de empleo y transporte de calidad; otros derivan de desalojos o desplazamientos forzados de población, del despojo ejercido en territorios indígenas o de enfrentar condiciones discriminatorias para ubicarse en zonas disputadas por sectores de mayor ingreso. También por políticas que ignoran el derecho humano de toda persona a un lugar seguro donde vivir dignamente, con lo que se privilegia el manejo especulativo de un bien común fundamental para la vida.

El manejo del suelo como mercancía sujeta a las leyes de la escasez y a la especulación, además de dificultar su acceso a los sectores de bajo ingreso, disminuye en mucho las posibilidades de contar con espacios productivos, recreativos y de servicio a lo interno de los desarrollos habitacionales impulsados por ellos, de ahí la relevancia de algunas experiencias cooperativas incluidas en este documento.

Otro obstáculo recurrente en la región es la falta de un marco normativo e institucional que impulse, apoye y fortalezca los procesos de producción social del hábitat. En varios países prevalecen limitantes institucionales, políticas, normativas y de acceso a recursos que obligan a largos períodos de gestión e incluso a frenar iniciativas relevantes por su creatividad y potencial aporte. Algunos casos hablan de 9 y hasta 18 años destinados a gestionar sus proyectos, lo que tiene un fuerte impacto a lo interno de las organizaciones sociales y muestra la complejidad que éstas enfrentan en su trato con las instituciones. A esto se suma en algunos casos la debilidad municipal, las tensiones entre diversos niveles de gobierno y las divisiones provocadas por la intervención interesada de los partidos políticos.

La tendencia a la individualización de los problemas y de las soluciones, originada en las prácticas impuestas a las instituciones por los organismos multilaterales y por las políticas públicas, es causa de conflictos internos en las organizaciones al romper los lazos solidarios y la gestión colectiva de los procesos y de los recursos; al colocar como única opción la propiedad privada individual y al imponer formas de organización piramidales que favorecen los juegos de poder y las confrontaciones.

A esto se suman en algunos casos las rivalidades y conflictos originados por intereses o por fallas en la gestión interna de los grupos participantes. Son riesgos que se corren cuando no se establecen desde su integración inicial relaciones de confianza, procesos consistentes de formación del conjunto de sus integrantes y reglas de convivencia consensuadas y vigiladas por ellos. Algunos de los casos registrados que, pese a haber logrado cambios significativos y transformadores, han descuidado estos temas, enfrentaron o enfrentan problemas que ponen en riesgo su unidad y su consistencia como colectivo y, en consecuencia, sus logros y su potencial como sujetos de cambio.

¿Qué factores son determinantes en la construcción de procesos transformadores?

Lograr cambios que contribuyan en el mediano y largo plazo a una transformación profunda del mundo inviable que hoy se nos impone, implica actuar a contracorriente de sus postulados y prácticas, lo que complejiza en muchos aspectos nuestro trabajo, exige claridad estratégica y persistencia en el conjunto de actores involucrados.

Factor central en todo proceso de producción y gestión social del hábitat es la toma de conciencia por parte del grupo participante sobre la necesidad de asumir un papel activo en la superación de las causas y condicionantes que impiden la concreción y plena realización de sus derechos a un lugar, a una vivienda y a un entorno adecuados para el desarrollo de su vida; de organizarse y de jugar un papel activo y responsable en la lucha por lograrlo; de contar con asesoría y apoyos solidarios en los diversos campos implicados en la promoción, integración, puesta en marcha y conducción responsable e informada del proceso.

La lectura de los casos documentados permite destacar la importancia del contenido transformador de las estrategias y metodologías por las que se opte, de las herramientas, asesorías y apoyos que puedan conjuntarse y del necesario compromiso de los actores involucrados.

Al surgir desde diferentes condicionantes políticas, económicas y ambientales locales; de los sueños y aspiraciones de los participantes; y de su voluntad, capacidades y nivel de compromiso, la producción social del hábitat abre un gran abanico de opciones que se refleja en la diversidad de estrategias y prácticas desarrolladas en los casos documentados.

Las estrategias seguidas por las organizaciones parten de principios de solidaridad, ayuda mutua, igualdad, equidad y democracia directa. Se lucha por la autonomía, se practica la autogestión y se priorizan el interés colectivo y la integralidad en la formulación de su proyecto de vida. Hay casos que expresamente buscan romper con el asistencialismo y son varios los que reconocen el papel central de la mujer en la conducción de sus procesos, impulsando liderazgos predominantemente femeninos.

Un objetivo central de estos procesos es contribuir a la formación de sujetos críticos, conscientes, liberados y responsables en la transformación de las realidades que les oprimen o que operan en contra de sus derechos.

En general todos los casos dan gran importancia a la formación de sus miembros en tres aspectos fundamentales: el conocimiento de las causas directas y estructurales de la situación que viven y de sus propias capacidades para enfrentarlas; la formación política e ideológica, en especial de sus cuadros y dirigentes; y la capacitación de todos sus integrantes para participar informada y activamente en las tareas implicadas en las diversas fases del proceso habitacional.

Todo proceso capaz de resistir y de superar los obstáculos que se oponen a la concreción de nuestros sueños y de contribuir a la construcción de un mundo para todos, exige, ante todo, de una toma de conciencia crítica y comprometida, de ahí que podamos considerarla como paso fundamental en la transformación de los participantes en sujetos activos, responsables. Conciencia que se construye desde su propia experiencia e identidad cultural en procesos dialógicos y críticos que se desarrollan con quienes los asisten y apoyan en su lucha. Por surgir desde abajo, desde los lugares y la gente que los habita, no existen recetas ni manuales de aplicación universal para lograrlo.

Sin embargo existen propósitos compartidos por la mayor parte de los casos registrados e instrumentos metodológicos de los que varios de ellos echan mano. Uno de los más relevantes es el propuesto por la educación popular, basado en los planteamientos pedagógicos desarrollados por el brasileño Paulo Freire, que parten de una práctica fundada en la apertura al otro, en respeto a su

experiencia y a su identidad cultural, para "ir más allá de dónde se está" con el desarrollo de un conocimiento que refuerza su poder de resistencia y de lucha.

Más recurrente en los casos analizados es la formación política de los participantes, misma que se orienta principalmente a fortalecer su capacidad autogestiva y a promover la participación de las organizaciones y movimientos populares en reivindicaciones sociales y en las luchas políticas de mayor alcance y trascendencia.

Como sujetos capaces de conducir su propio proceso de producción y gestión social del hábitat, los participantes deben contar con información y estar capacitados para intervenir activamente en las decisiones y tareas del proceso habitacional en sus diversas fases. Varias de las organizaciones asumen este reto mediante la capacitación permanente de sus miembros. Algunas cuentan incluso con instalaciones, equipo y personal capacitado para hacerlo.

Es importante resaltar que la mayor parte de los proyectos registrados no se limitan a la construcción de viviendas, sino que trabajan desde una perspectiva integral del hábitat. Además de guarderías, escuelas y espacios de formación, salud y administración interna, incluyen en sus proyectos espacios comunitarios de encuentro y convivencia, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de juego para los niños y otros equipamientos. En varios casos dedican espacios para invernaderos, agricultura urbana y otros proyectos productivos e impulsan cooperativas de trabajo. Muchas de estas instalaciones se comparten con las comunidades aledañas, buscando la integración solidaria de su organización dentro del contexto social en que se ubican.

Para su activación y manejo organizan, de acuerdo al interés y capacidades de sus miembros, comisiones y grupos de trabajo especializados. Algunos recurren a metodologías que han mostrado su eficacia en el impulso de procesos transformadores en campos como la economía social y solidaria, la preservación del equilibrio ecológico y la sustentabilidad, el manejo de esquemas sociales de cofinanciamiento y la lucha por la igualdad de género. También a expresiones artísticas como el teatro, en apoyo de sus actividades formativas y de sus proyectos.

En el campo habitacional, utilizan metodologías de diagnóstico, planeación, monitoreo y evaluación, de reflexión-acción, de diseño participativo y comunicación, enfocadas a fortalecer la producción social como sistema, aspecto fundamental para ampliar su cobertura territorial y su impacto social.

En lo organizativo existe una gran diversidad de opciones, donde predominan, por sus características intrínsecas y sus impactos sociales, las cooperativas. Destacan en nuestro campo las de vivienda, aunque varios de los casos más relevantes parten o están vinculados a cooperativas de producción, de ahorro y préstamo o de servicio. Algunos son casos aislados y otras forman parte de movimientos sociales, como es el caso del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos en Argentina, o de estructuras cooperativas de segundo grado, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (Coceavis).

Algunos de los proyectos más significativos son financiados por cooperativas de ahorro y préstamo y son asesoradas por grupos profesionales autónomos o vinculados estructuralmente a la organización social. También existen estructuras organizativas muy complejas como es el caso del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña en Puerto Rico y el del Barrio Intercultural de San Martín de los Andes en Argentina, en el que conviven en alianza formas organizativas que responden a comunidades culturalmente diversas.

Uno de los casos más interesantes y de mayor potencial transformador por la integralidad de su planteamiento, es el de la Unión de Cooperativas Tosepan, constituida actualmente por ocho cooperativas y tres asociaciones que trabajan en forma integral y coordinada en lo socio-cultural, lo físico-ambiental y lo económico.

Otro tema central de la estrategia seguida en gran parte de los casos registrados, es el de la incidencia ante los organismos públicos para lograr concretar proyectos que salen de la normatividad establecida y para impulsar cambios en las políticas, los instrumentos y los programas públicos. Orientación fundamental en este campo, que se ha utilizado y enriquecido en los últimos años, es el de dar esta lucha desde la perspectiva de los derechos humanos; lucha no sólo limitada a su utilización como argumento y base de sus propuestas sino como generadora de espacios y nuevos instrumentos que coadyuven a superar la exclusión social, la segregación urbana y a proteger a los habitantes de violaciones graves a los mismos.

Desde los primeros años de este siglo, diversas actividades, documentadas en gran parte de los casos, lograron no sólo concretar proyectos de alto contenido transformador, sino promover el reconocimiento de nuevos derechos relacionados con el hábitat, participar activamente en su defensa frente violaciones y en su realización dentro del concepto integral definido en los pactos e instrumentos internacionales. También lograron colocar en diversas constituciones, leyes e instrumentos financieros, fiscales, administrativos y de fomento, temas relacionados con el reconocimiento y apoyo público a la producción social, al cooperativismo de vivienda y a la planeación y gestión participativa del hábitat.

Esta actividad se hace a través de negociaciones, de presión política y, lo que es más relevante, mediante la demostración de experiencias concretas que muestran tanto otra forma de abordar los problemas como los impactos sociales, urbanos y de gestión territorial de proyectos surgidos, gestionados y controlados desde la base social organizada.

La necesidad de construir un mayor peso específico para impulsar cambios más profundos ha exigido avanzar, desde el ámbito local hasta el internacional, en el acercamiento y vinculación de los diversos actores comprometidos en la producción y la gestión social del hábitat. Desde los primeros años de este siglo se avanza en la articulación estratégica de los numerosos actores que desde distintos ámbitos venimos impulsando esta forma de producción en la región y en otras partes del mundo. Se organizan intercambios anuales de experiencias, estudios y publicaciones conjuntas, documentación y difusión de experiencias; acciones solidarias y urgentes en casos de violaciones a los derechos humanos por desplazamientos, desalojos forzados e impactos negativos de las políticas públicas; comités populares para incidir, desde las bases de los distintos países, en procesos como la negociación de la Nueva Agenda Urbana consensuada en el proceso de Hábitat III; cursos de formación a distancia, plataformas regionales e internacionales y actividades que contribuyen al posicionamiento del derecho a la ciudad y al reconocimiento y premiación de proyectos significativos de producción social a nivel mundial.

Son múltiples y diversas las alianzas que se establecen entre las comunidades organizadas y diferentes actores en apoyo de sus proyectos y luchas: con otros integrantes de movimientos sociales afines, con organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos gremiales en temas sociales, técnicos, legales, financieros y administrativos necesarios al desarrollo de sus proyectos, tales

como diseño participativo, arquitectura bioclimática, ecotecnias, sustentabilidad energética, utilización de materiales locales; con partidos políticos y entidades que puedan generarles apoyos solidarios como la cooperación internacional, las iglesias, los organismos de derechos humanos. También presionan y negocian con instituciones públicas y entidades financieras para viabilizar sus proyectos.

Los casos más complejos, gestionados por movimientos y organizaciones sociales, han sido capaces de promover e integrar la asesoría y los apoyos necesarios a sus luchas y proyectos formativos, productivos, culturales y recreativos.

Todo ello muestra la capacidad que han desarrollado en el manejo integral de su proyecto de vida y la importancia estratégica de administrar la complejidad y la acción interactoral como alternativa profundamente transformadora a la individualización, homogeneización y reduccionismo que impone el sistema vigente como mecanismos de control y de sometimiento.

Destaca también la persistencia de gran parte de los organismos que dan asistencia en diversos campos a los procesos populares y la de las propias organizaciones y movimientos de mayor trayectoria incluidas en este trabajo.

Gran parte de ellas tiene entre 26 y más de 50 años operando y otro buen número entre 10 y 25 años. Copevi de México y Desco de Perú cuentan con 53 años de experiencia; el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda de la Universidad Nacional del Noroeste en Argentina con 51; Fundasal de El Salvador con 50; la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua con 48; la Unión de Cooperativas Tosepan y Cosechando Juntos lo Sembrado, ambas de México, con 38 y 34 años respectivamente; Fuprovi de Costa Rica con 29 años; y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI de Argentina con 27. Cabe señalar que no son las únicas que en nuestra región operan desde hace más de un cuarto de siglo en este campo. Pese a las dificultades que todas ellas han debido enfrentar para impulsar nuevos caminos para llevar a la práctica lo que consideran "utopías posibles", se mantienen vivas y en constante proceso de actualización, lo que les ha permitido acumular una gran experiencia, concretar logros importantes y abrir los nuevos caminos por los que hoy transitan múltiples experiencias en nuestro continente.

Los mapas preparados por Jerónimo Díaz para esta publicación, dan cuenta de la cobertura territorial y de la escala alcanzada por las cooperativas de vivienda en varios países de la región, por los proyectos impulsados desde los principales organismos asesores y por movimientos sociales de larga trayectoria. Los casos más avanzados, incluyen en su estrategia el rescate y defensa de los territorios que ocupan, el usufructo responsable y sustentable de su patrimonio natural, ambiental y construido, y el fortalecimiento y la viabilidad económica de la comunidad participante. Sustentan su estrategia en la valoración de su cultura y en el potencial transformador que ésta puede infundir a sus procesos; desde ella, se abren a la desafiante tarea de concretar sus objetivos y sus sueños.

Enrique Ortiz Flores

I. Disputar la ciudad

Buscando alternativas a la urbanización desigual

A diferencia de los países que entraron al capitalismo y se urbanizaron desde el siglo XIX, en América Latina el giro rural-urbano se produjo en menos de 30 años (1940-1970), en un contexto de crecimiento demográfico y desarrollo de los mercados internos que resultó en una concentración sin igual de capital y mano de obra hacia las grandes urbes. En este periodo, si bien surgieron algunos proyectos estatales y gremiales para planificar la vivienda obrera, la mayoría de los migrantes campo-ciudad fue abandonada a su suerte en los inquilinatos de las zonas centrales que, al verse saturadas, comenzaron a expulsar a los pobladores hacia zonas inundables, laderas, cañadas y todo tipo de lugares inhóspitos.

Las tomas de tierra y el surgimiento de mercados irregulares de suelo fueron el punto de partida de las “favelas” en Río de Janeiro, los “pueblos jóvenes” en Lima, las “villas” en Buenos Aires o los “ranchos” en Caracas. A raíz de esto, nacieron lo que los sectores dominantes calificarían como “tugurios” o “asentamientos irregulares”. Claramente, ni el Estado ni el mercado tenían la capacidad de satisfacer el derecho de todas y todos a la vivienda adecuada, reconocido desde 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y reiterado en el marco de la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I), realizada en 1976 en Vancouver, Canadá, donde los gobiernos nacionales aceptaron que “la mayoría de las viviendas que se construyen en el tercer mundo son suministradas por los propios ocupantes”¹.



Ante este escenario, decenas de organizaciones del sector no gubernamental –promovidas en su mayoría por jóvenes profesionales que se encontraban en ruptura con el autoritarismo y con la falta de compromiso social que imperaba en el ámbito universitario– comenzaron a vincularse orgánicamente con los sectores populares y generaron alternativas para la autoproducción de vivienda, con enfoques más comprensivos sobre los procesos de poblamiento². Además de asesorar la planeación y construcción de barrios y conjuntos habitacionales, organismos como el Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento (Copevi), el Centro Cooperativista Uruguayo (ccu) o el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Desco lograron incidir en programas y políticas públicas orientadas a apoyar la producción progresiva de las viviendas, con la participación y el reconocimiento de las organizaciones de pobladores.

La experiencia de la Cooperativa Palo Alto, por ejemplo, acompañada en aquel entonces por Copevi, sirvió para allanar el camino hacia la creación, en México, del Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (Fonahpo), institución flexible en sus reglas y criterios de operación que permitió que los grupos de pobladores organizados pudieran obtener apoyos crediticios; en un decenio (1982-1992) otorgó alrededor de dos mil créditos que beneficiaron a unas 150 000 personas.

En el caso del ccu, como se verá en este capítulo, los primeros conjuntos realizados con los sindicatos obreros sirvieron de "laboratorio" para el diseño de la Ley de Vivienda de 1968 y desembocaron en el modelo que hoy defiende la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

La conformación de redes por el derecho a la vivienda

Para los años ochenta, las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) y varios sectores de la iglesia católica progresista, en especial los jesuitas, comenzaron a formar redes como el Sistema Latinoamericano y Asiático de Vivienda Popular (Selavip) y movilizaron a profesionistas que de manera individual o adscritos a universidades, entendían la necesidad de adoptar un enfoque más integral sobre la cuestión habitacional. Según Gustavo Romero, quien formó parte de Copevi, "no sólo se trataba del financiamiento, de las normas o de las soluciones constructivas de la vivienda y la infraestructura, sino de ver los problemas como una oportunidad para que la población misma pudiera decidir y controlar cómo mejorar su vida"³.

Fue desde esta perspectiva que en 1987, declarado por la ONU como el Año Internacional de Vivienda para los Sin Techo, se propuso la refundación del Consejo Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) creado en 1976, para dar vida a una verdadera coalición. Se inició entonces una transformación importante y se decidió que tanto la sede como el secretario general de esa nueva organización fueran del hemisferio sur. Así fue como se originó la primera red con más de 300 miembros de organizaciones no gubernamentales, civiles y centros de estudio e investigación, con una clara definición de estrategias en favor de los derechos vinculados a la vivienda y al hábitat⁴.

¹ Véase: *Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos*, aprobada el 11 de junio de 1976. De este acuerdo derivaron algunas políticas destinadas al mejoramiento de la vivienda y a ofrecer lotes con servicios.

² Véase: John Turner, *Vivienda, todo el poder para los usuarios*, Madrid, Hermann Blume, 1977. Turner fue de los primeros en proponer la creación de un sistema abierto y descentralizado que permitiera a los autoprodutores elegir entre diversas opciones de apoyo en las distintas fases de construcción.

³ Véase: Gustavo Romero, "La producción social del hábitat", en *Vivitos y coleando*, Ciudad de México, HIC-AL/UAM, 2002.

⁴ Véase: Enrique Ortiz Flores, *Hacia un hábitat para el buen vivir. Andanzas compartidas de un caracol peregrino*, Ciudad de México, Rosa Luxemburg Stiftung, 2016.

Más tarde, en la segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), realizada en Estambul en 1996, las organizaciones nucleadas en HIC, junto con otras instancias aliadas, acordaron promover la Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV) como la concepción y estrategia que permitiría encauzar y potenciar los esfuerzos de los pobladores organizados destinados a concretar su derecho a una vivienda adecuada. Desde entonces, esta ha sido una de las principales banderas de lucha de los movimientos sociales urbanos, en particular en América Latina.



Conjunto de vivienda de interés social producido bajo la lógica de mercado en las periferias de Ciudad de México. Fotografía: Isadora Hastings.

El panorama urbano actual

⁵ Véase: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, *Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe, Brasil, 2012*,

⁶ Véase: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y CAF, *Construcción de ciudades más equitativas. Políticas públicas para la Inclusión en América Latina*, Colombia, 2014.

(<http://es.unhabitat.org>)

A inicios del siglo XXI, con el 80% de sus 588 millones de habitantes ubicado en ciudades, América Latina es la región más urbanizada del mundo. Tan sólo ocho “megaciudades” concentran al 14% de la población: Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago y Belo Horizonte. A ello se suman otras 55 ciudades con un rango de uno a cinco millones de habitantes y una constelación de miles de ciudades menores que sin embargo concentran a más de la mitad de la población urbana. Por otro lado, las áreas urbanizadas siguen expandiéndose a un ritmo superior al del crecimiento demográfico, a causa de la construcción de complejos residenciales, centros comerciales, zonas industriales y con la aparición de nuevos barrios “informales”⁵.

Desafortunadamente, la historia nos enseña que muchas de las propuestas emanadas de la sociedad civil han sido incorporadas como parte de los discursos gubernamentales sin que ello se vea reflejado en acciones y recursos estatales.

Con el Consenso de Washington y el giro neoliberal observado en la década de los noventa, los pocos avances que existían en la implementación de sistemas de apoyo a la producción social del hábitat fueron en gran parte desmontados y sustituidos por políticas económicas encaminadas a la creación de “mercados de vivienda”. Hoy sabemos que éstos fueron incapaces de resolver las necesidades de los sectores más desprotegidos: en 2010, cerca de 111 millones de personas en América Latina seguían viviendo en asentamientos urbanos precarios, es decir, cinco millones más que en 1990⁶.



Adaptación de una vivienda social en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. *Fotografía: Pierre Arnold.*

La PSH en la Nueva Agenda Urbana

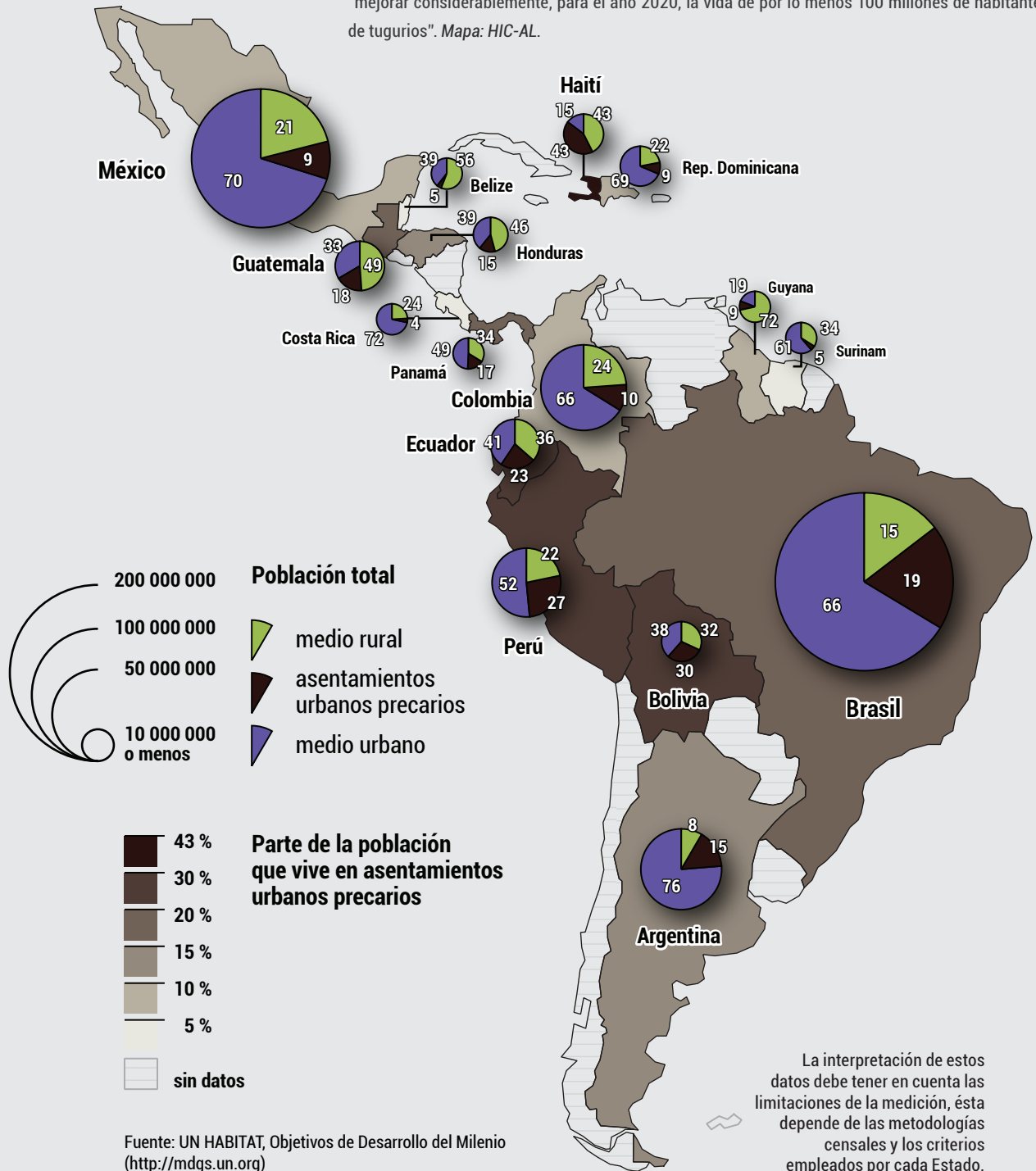
“Nos comprometemos a promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y local que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para todos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, que luchen contra todas las formas de discriminación y violencia e impidan los desalojos forzosos arbitrarios, y que se centren en las necesidades de las personas sin hogar, las personas en situaciones vulnerables, los grupos de bajos ingresos y las personas con discapacidad, y propicien al mismo tiempo la participación y colaboración de las comunidades y los interesados pertinentes en la planificación y aplicación de esas políticas, entre otras cosas, apoyando la producción social del hábitat, de conformidad con la legislación y las normas nacionales”⁷.

Lo que el mercado inmobiliario sí generó en las últimas décadas son los tristemente célebres conjuntos horizontales de vivienda social, apartados de las ciudades, en los que se han endeudado millones de familias a costa de empresas constructoras y corporaciones bancarias, cuya imaginación no tiene límites a la hora de crear productos financieros riesgosos. Quienes han accedido a este tipo de soluciones habitacionales “llave en mano” no son los más pobres, son trabajadoras y trabajadores del sector formal que ahora padecen la falta de servicios, equipamientos públicos y fuentes cercanas de empleo. Así, paradójicamente, mientras los llamados “tugurios” siguen su lento proceso de consolidación, los conjuntos de vivienda social producidos desde la lógica del mercado se van “informalizando” en la medida en que, para resolver sus necesidades de espacio y empleo, las familias tienen que realizar adaptaciones sobre sus pequeñas casas.

⁷ Aprobado tras la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III), el 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, este documento integra el concepto de producción social del hábitat en su inciso 31. Disponible en <http://habitat3.org>

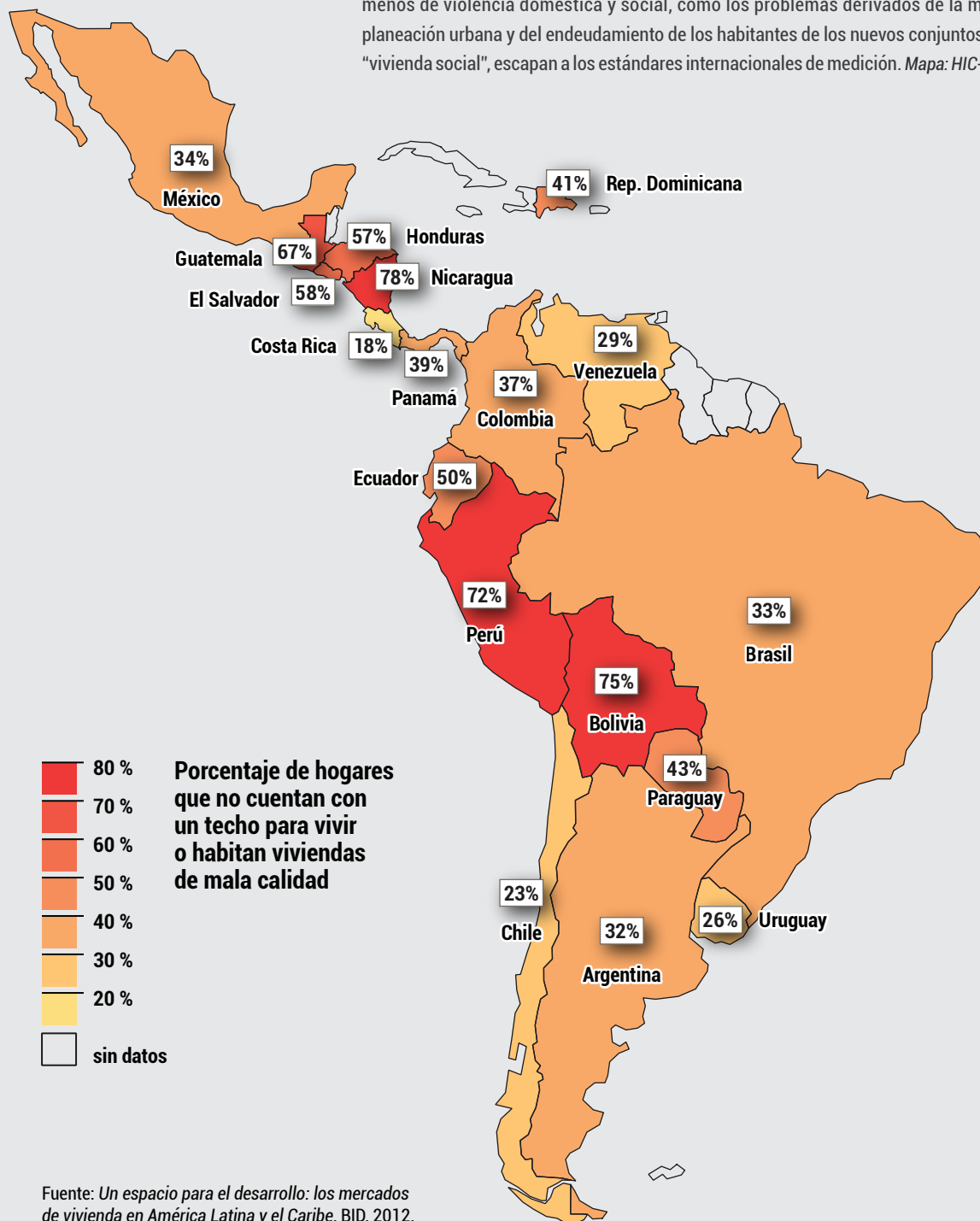
MAPA 1. Entre lo urbano y lo rural, persiste un continente precario (2014)

De acuerdo con la agencia ONU-Hábitat, un hogar reside en un asentamiento precario cuando carece de una o más de las siguientes condiciones: a) vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas; b) espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas compartan una habitación; c) acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable; d) acceso a saneamiento adecuado, con letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de personas; e) tenencia segura para evitar los desalojos forzados. Esta definición ha sido el marco de la meta 7D de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se propone "mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios". Mapa: HIC-AL.



MAPA 2. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en América Latina

El déficit habitacional es un indicador de la presencia de necesidades habitacionales insatisfechas. En América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, involucra a 37% de la población. El déficit cuantitativo (6%) concierne la carencia absoluta de vivienda, incluyendo los hogares que viven hacinados en una misma vivienda. El déficit cualitativo (31%), responde a criterios como la falta de tenencia segura, los materiales constructivos y otros estándares mínimos de calidad que fija el Estado. Cabe señalar que, tanto la agudización de los fenómenos de violencia doméstica y social, como los problemas derivados de la mala planeación urbana y del endeudamiento de los habitantes de los nuevos conjuntos de "vivienda social", escapan a los estándares internacionales de medición. *Mapa: HIC-AL.*



Fuente: *Un espacio para el desarrollo: los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe*, BID, 2012.

Repensar la propiedad colectiva

⁸ Véase: Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (ed.), *Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias*, Santiago de Chile, HIC, 2010 (<http://hic-al.org>); Nelson Saule Júnior, Lorena Zárate y Maria Silvia Emanuelli (coord.), *Avanzando en la Implementación del Derecho a la Ciudad en América Latina y a nivel Internacional*, Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2015 (www.righttothecityplatform.org.br)

La propiedad colectiva constituye una estrategia para garantizar el control social de los habitantes sobre sus conjuntos habitacionales, incluso sobre sus barrios y territorios. Como se verá en este capítulo, las organizaciones sociales han ensayado diversas formas de tenencia social de la tierra y la vivienda, con miras a realizar la utopía del derecho a la ciudad⁸. Entre estas posibilidades destaca la modalidad del fideicomiso, como se ilustra con la experiencia del Caño Martín Peña, de Puerto Rico, pero también la figura del comodato, que emplean en este caso los Campamentos de Pioneros de Venezuela, o las cooperativas de vivienda, ampliamente desarrolladas en Uruguay.

En todos estos casos, las personas adquieren derechos de uso y goce sobre los espacios que habitan, mas no derechos de cambio en el mercado inmobiliario. La especulación y la gentrificación quedan de este modo controladas por instituciones sociales, que en su mayoría practican la democracia directa y velan por los intereses de la comunidad.

Además de ofrecer viviendas de calidad y seguridad en la tenencia, estas experiencias generan lazos de solidaridad y capacidades productivas entre los habitantes, que se ven involucrados en todas las etapas del proceso: desde la adquisición del terreno, la planeación y la construcción, hasta la gestión del conjunto terminado. Más aún, en ellas prosperan iniciativas barriales diversas –bibliotecas y huertas comunitarias, escuelas gestionadas con la participación de los pobladores, campeonatos deportivos–, así como proyectos de economía social vinculados con los movimientos ambientales más significativos de nuestros tiempos.

En su disputa por la ciudad, los movimientos que sostienen estas experiencias han tenido que articularse en distintas escalas y con diversos actores sociales, académicos y estatales. En el caso del cooperativismo de vivienda, que hoy toma fuerza en Paraguay, Bolivia y Centroamérica, incluso se ha recurrido a la generación de redes de cooperación internacional para llevar adelante proyectos demostrativos. Desde luego, estas experiencias se vuelven transformadoras en la medida en que los grupos que acceden a la vivienda y al hábitat mantienen la gestión colectiva de sus espacios; sobre todo, cuando persisten en la lucha por conquistar mejores condiciones de vida para todas y todos, e inciden en las políticas de sus municipios, provincias y estados.

Los casos presentados de Argentina, Brasil, México y Chile, muestran precisamente la importancia de trascender la escala del proyecto aislado para involucrarse en la definición de políticas y presupuestos públicos que permitan ampliar y profundizar el alcance y la escala de los proyectos. Esto es fundamental ya que sin el apoyo estatal, los sectores de más bajos ingresos no pueden competir en el acceso a espacios bien ubicados en la ciudad con los grandes capitales inmobiliarios. Además, en la ausencia de marcos normativos que regulen y avalen a los productores sociales de vivienda, se corre el riesgo de que los apoyos conquistados para impulsar estas alternativas, sean cooptados por las mismas empresas que ya controlan el mercado de la vivienda. Finalmente, los grupos interesados en desarrollar estrategias de tenencia colectiva del suelo y/o la vivienda pueden beneficiarse de un marco legislativo que las reconoce, les facilita su operación y les permite garantizar la seguridad jurídica de sus emprendimientos.



Jornada solidaria de Fucvam en el Barrio 26 de Octubre, Montevideo. *Fotografía: Gustavo Castagnello.*



FICHA 1.

Palo Alto, una cooperativa entre corporativos

Ciudad de México. 325 viviendas progresivas. Caso seleccionado para la Bienal de Venecia de Arquitectura 2016. Facebook: "CooperativaPaloAltoPaginaOficial"

La cooperativa Unión Palo Alto se creó en 1972 cuando los trabajadores de una mina de arena en quiebra se unieron para obtener los derechos sobre la tierra que habían habitado por más de 30 años. Además de los bajos salarios que percibían, eran obligados a arrendar un pedazo de tierra para construir sus barracas, que pasaban a ser propiedad del dueño de la mina en caso de que dejaran el trabajo. Ante la amenaza de desalojo, y con base en dictámenes legales favorables a la cooperativa, decidieron ocupar el lugar en 1973 mediante la construcción sorpresiva de viviendas provisionales. Un año más tarde se firmó un convenio entre el propietario, los vecinos y las autoridades, que definió la forma en que serían determinados los linderos del terreno a entregar a la cooperativa. A partir de eso, gracias al apoyo de grupos eclesiales y la asesoría técnica del Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento (Copevi), fue posible autoproducir la vivienda que necesitaban.

Durante la autogestión del proyecto, un aspecto estratégico fue la decisión de la asamblea de no recibir directamente el dinero de los donativos o de los financiamientos, para no entrar en problemas internos. Lo que se hizo fue recibir directamente el material y pagar la asesoría técnica. Otro aspecto importante, fue la decisión tomada por la organización de que todas las casas fueran iguales, esto para demostrar la unión y la igualdad entre los integrantes de la cooperativa.

Palo Alto es actualmente el hogar de 1,458 personas. En las últimas décadas se ha tenido que enfrentar a varios intentos por dividir a la comunidad y hacerse de su tierra. Ante las presiones inmobiliarias descomunales que se dan en esta zona —definida como centro financiero del país a partir de los años noventa—, las y los socios se encuentran gestionando vivienda para alojar a su juventud, darle vida al proceso colectivo y mantener la cooperativa como única poseedora del terreno.

Vista sobre la cooperativa en los años ochenta. Se aprecia el mural con la imagen del padre Rodolfo Escamilla, miembro del Secretariado Social Mexicano, quien fue un importante aliado y promotor de la organización popular hasta su asesinato en 1977. *Fotografía: archivo de la cooperativa.*

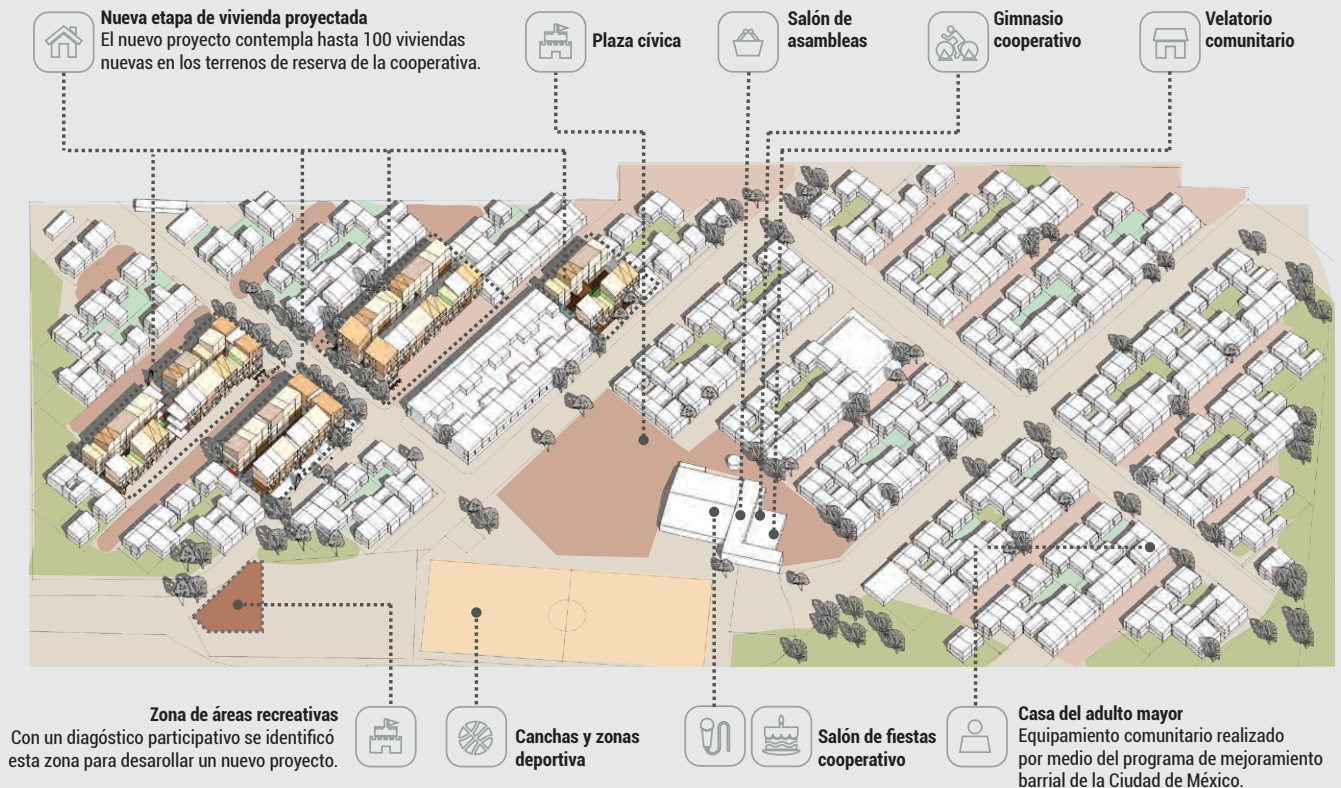


En la página anterior: vista del corporativo Arcos Bosques desde el campo de fútbol de la cooperativa. A partir de los noventa, surgen proyectos inmobiliarios de alta renta y se generan tensiones ligadas a los intereses de algunos vecinos por privatizar y vender la tierra.

Fotografía: Livia Radwanski.

Proyecto de continuidad de Palo Alto

En su historia, la cooperativa ha tenido tres etapas constructivas de vivienda unifamiliar y multifamiliar, donde ha incorporado diversas infraestructuras comunitarias. Actualmente, el proyecto de continuidad, diseñado con asesoría de la asociación Hábitat Participativo, busca ser la etapa concluyente con vivienda multifamiliar. *Gráfico: Hábitat Participativo.*





FICHA 2.

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña: regularización con carácter comunitario

San Juan, Puerto Rico. Experiencia reconocida con el Premio mundial del Hábitat 2015. Sitio web: <http://fideicomisomartinpena.org>

El Caño Martín Peña discurre por el corazón de San Juan, capital de Puerto Rico. Como resultado de la acción humana, este canal estuarino está contaminado y obstruido, ocasionando inundaciones severas. Por ello, desde 2002, las comunidades asentadas en los márgenes del Caño se han organizado para exigir el dragado del cuerpo de agua y la instalación de infraestructura sanitaria, de acuerdo al plan de desarrollo integral elaborado por las mismas. Conscientes de que recuperar el cuerpo de agua transformará la ciudad y aumentará el valor de la tierra, éstas mismas diseñaron un instrumento para evitar la gentrificación y el desplazamiento de sus pobladores: el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Asimismo, gestaron la Corporación del Proyecto Enlace para implementar su plan; y el G-8 inc. para asegurar la participación ciudadana y superar la marginación.

Antecedentes

Estas comunidades fueron construidas informalmente entre los años treinta y cincuenta, cuando dos huracanes, la reforma agraria y la industrialización obligaron a las personas a salir de sus áreas rurales. En un período de menos de 20 años, Puerto Rico se transformó de una sociedad principalmente rural en una sociedad urbana e industrial. Los campesinos desplazados y sus familias tuvieron que trasladarse a los centros urbanos en busca de trabajo. Muchos de ellos se establecieron en San Juan, en el espacio que ocupaban los manglares a lo largo del Caño Martín Peña. Para hacer la zona habitable, los residentes hundieron los escombros en el pantano hasta que fue capaz de sostener las casuchas que construyeron de madera y estaño. Se registra que en la década de 1960, 86 000 personas vivían a lo largo del Caño.

Con el tiempo, los residentes fueron mejorando sus hogares y los gobiernos proporcionaron material de relleno, pavimentaron las carreteras y suministraron electricidad y agua potable. Sin embargo, la

mayoría de los barrios todavía carecen de alcantarillado y las aguas residuales no tratadas fluyen hacia el canal, mismo que se encuentra obstruido por la acumulación de residuos. Esto provoca frecuentes inundaciones con aguas que contienen altos niveles de coliformes fecales y otras bacterias, lo cual genera graves problemas de salud pública.

A pesar de haber reducido su población a unas 26 000 personas –tanto por iniciativas gubernamentales de vivienda y desalojos, como por la migración económica hacia los Estados Unidos–, aún se trata de las comunidades más densamente habitadas de Puerto Rico. Desde luego, las condiciones de hacinamiento persisten en ciertos sectores, donde el acceso a las viviendas es a través de estrechos callejones. Ello, sumado a la instalación informal de sistemas eléctricos y al tipo de materiales de edificación, resulta en una mayor vulnerabilidad a incendios.

El proceso organizativo y sus actores

Entre 2002 y 2004, los/as residentes participaron de un proceso de planificación-acción-reflexión que incluyó más de 700 actividades de educación popular, toma de decisiones y acciones concretas a corto plazo. El proceso resultó en el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, adoptado en 2007 por la Junta de Planificación de Puerto Rico y aprobado el mismo año por el Gobernador de las islas. Se trata de una carta de navegación para el desarrollo en cada una de las siete comunidades que componen dicho Distrito.

Asimismo, los/as participantes presentaron un anteproyecto de Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, aprobado en 2004 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que dio vida a los organismos que sostienen la iniciativa:

- › La Corporación del Proyecto Enlace es una institución de carácter público que tiene vida limitada a 25 años para implantar el plan de desarrollo de la zona, incluyendo obras de infraestructura, vivienda y dragado del Caño. Hoy impulsa 30 iniciativas de transformación social, con la participación protagónica de los residentes en la toma de decisiones.
- › El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se crea como una persona jurídica privada, sin fines de lucro, independiente y a perpetuidad, como instrumento de la comunidad para evitar la gentrificación y mantener la titularidad colectiva de los terrenos que le fueron transferidos por el gobierno. En ellos se albergan alrededor de dos mil familias que no poseen título de propiedad, sino que están en proceso de adquirir sus escrituras de derecho de superficie. Las 78.6 hectáreas de terreno con las que cuentan inicialmente no pueden venderse. Se mantendrán en el corpus del Fideicomiso, custodiadas y administradas por y para beneficio de las comunidades.
- › El grupo de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña (G-8 Inc.) es la emanación del poder ciudadano, ya que asegura procesos deliberativos que permiten una amplia participación. En él están representadas las comunidades que forman parte del Fideicomiso de la Tierra (Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista-Santurce, Israel-Bitumul, Buena Vista-Hato Rey, Las Monjas y Parada 27), así como el barrio Península de Cantera, que colinda con el Caño pero que fue previamente regularizado y por ello no forma parte del Fideicomiso. En virtud de la propia Ley, el G-8 provee ternas de candidatos al Gobernador/a de Puerto Rico y al Alcalde/sa de San Juan para constituir la junta de directores de la Corporación del Proyecto Enlace. Ello permite que la comunidad tenga acceso directo a los recursos e instrumentos del Estado diseñados por la misma para viabilizar su proyecto. Asimismo, el G-8 fiscaliza al Fideicomiso y al Proyecto Enlace.

En 2009, tras otros dos años de procesos deliberativos en torno a la administración de los bienes colectivos, los derechos propietarios y las formas de participación de sus miembros en la toma de decisiones, se nombró la primera Junta de Fiduciarios. En junio, la Corporación del Proyecto Enlace transfirió, mediante escrituras públicas, las tierras al Fideicomiso. Semanas más tarde, el gobierno enmendó la Ley 489-2004 queriendo así dar marcha atrás y devolver las tierras a las agencias públicas a las que pertenecían en 2005, para promover su titularización como propiedad individual. En 2013, tras una intensa lucha por mantener la propiedad colectiva, la comunidad recuperó la tenencia de sus tierras. Ello permitió comenzar el otorgamiento de escrituras de derecho de superficie y el realojo *in situ*, para viabilizar el dragado del Caño. Asimismo, se dio inicio la construcción de nuevas viviendas.

Permanencia de los habitantes ante las mejoras urbanas

El Fideicomiso de la Tierra evita que un proyecto de justicia social y ambiental genere el desplazamiento involuntario de las comunidades que por años han sufrido la degradación ecológica de su entorno. De no existir esta entidad, los especuladores podrían adquirir desde ahora las viviendas a precios deprimidos. Ello hubiera llevado a las familias a mudarse lejos de su lugar de trabajo y a permanecer en condiciones de pobreza, y serían los especuladores quienes se beneficiarían del aumento de valor de la tierra cuando se realicen las obras de infraestructura necesarias.

Bajo el modelo del Fideicomiso de la Tierra, en cambio, la familia puede vender, arrendar y heredar su derecho de superficie, esto es, su derecho a una propiedad separada a la tierra, que incluye la vivienda y el derecho de uso del solar donde ella enclava. Quienes no adquirieron previamente un título de propiedad individual pueden ser miembros del Fideicomiso y sus pares les acompañan en el proceso de formalizar la escritura de derecho de superficie. La tierra, no obstante, no puede venderse, pues es propiedad colectiva de la comunidad a perpetuidad. Si un titular decide vender su derecho de superficie, tiene la obligación de ofrecerlo primero al Fideicomiso.

Otra forma de evitar la gentrificación, similar a la del modelo *community land trust* norteamericano, es que las unidades de vivienda que el Fideicomiso llegue a vender quedan sujetas a límites en el precio de reventa. De esta forma, cuando la familia decida vender, no lo hará por el valor de tasación, sino mediante una fórmula que le permite recuperar su inversión y obtener una ganancia limitada. Con ello se espera mantener la vivienda asequible a largo plazo, tanto para los residentes que no poseen vivienda propia como para nuevas familias de bajos ingresos, una vez se satisfagan las necesidades propias de la población actual.

Ahora bien, el ensanchamiento del Caño y las mejoras programadas sobre los espacios públicos que lo bordean, implican la reubicación de las familias asentadas sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, una misión primordial del Fideicomiso de la Tierra consiste en ofrecer alternativas de realojo dentro de su propio perímetro de actuación. Para tal efecto se utiliza, entre otros, el mecanismo de permuta siguiente: (a) la Corporación del Proyecto Enlace adquiere una vivienda en la comunidad, la rehabilita a través de empresas comunitarias y transfiere su titularidad al Fideicomiso de la Tierra; (b) el Fideicomiso le cede el derecho de superficie a la familia en proceso de realojo; y (c) la familia transfiere la estructura donde residía a la Corporación, quien la demuele para dar paso al proyecto. Para llevar adelante esta tarea, se conformó el Comité de Realojo, mayoritariamente compuesto por residentes de las comunidades que, junto al personal de la Corporación del Proyecto Enlace, se encargan de orientar a las personas.

Al adquirir el derecho de superficie, las familias pueden tener acceso a créditos para mejorar sus viviendas. Desde luego, el Fideicomiso se asegura de tener la opción de compra en caso de ejecución



Vivienda del barrio. Fotografía: Pierre Arnold.

Yo fui realojado. El Proyecto Enlace nos compró la casa de mis padres. A mis hermanos les pagaron y a mí, que residía en la casa de mis padres, me dieron a escoger una vivienda. Casa es casa. El dinero se va rápido y es importante tener donde vivir. Don Ismael

hipotecaria, lo que le permite llegar a acuerdos con las familias para evitar que queden sin hogar. En este sentido, se ofrecen capacitaciones para el manejo de presupuestos familiares. Asimismo, el Proyecto Enlace ha desarrollado guías de educación popular sobre cómo hacer mejoras sencillas a las viviendas para hacerlas más seguras y eficientes. El Fideicomiso, por su parte, tiene el potencial para apoyar esta agenda, no sólo por permitir el acceso al crédito, sino porque en el futuro podría llegar a ofrecer microcréditos con sus propios recursos.

Finalmente, es de destacar que el Fideicomiso de la Tierra está facultado para desarrollar los lotes vacantes, de conformidad con los usos y tipologías dispuestos en el Plan de Desarrollo Integral. En este sentido, planifica construir unas 480 unidades de vivienda. El proceso inició con la construcción de las primeras dos viviendas que incorporan energía solar y uso adecuado de las aguas de lluvia.

Estrategia de financiamiento

El Fideicomiso obtuvo las 78.6 hectáreas que constituyen su corpus inicial con la transferencia por vía legislativa y mediante escritura pública. Ello no conllevó costos para el Fideicomiso ni para las comunidades del Caño, ya que son las tierras que han ocupado durante décadas y se les transfieren como medida de justicia. Cuando se instó el caso en los tribunales, se estimó el valor de los terrenos en 200 millones de dólares. En años recientes, el Fideicomiso ha adquirido de la Corporación del Proyecto Enlace otros bienes inmuebles valorados en dos millones de dólares.

Por otra parte, el proceso de conceptualización del Fideicomiso de la Tierra contó con el trabajo voluntario de la comunidad y sus asesores, así como del personal de la Corporación. Actualmente hay más de 30 abogados notarios que proveen servicios pro bono para el otorgamiento de escrituras de derecho de superficie. Además, la Ley 489-2004 exime al Fideicomiso del pago de derechos y contribuciones sobre la propiedad y se reciben subvenciones de entidades públicas y privadas para llevar a cabo proyectos especiales, como el desarrollo de viviendas.

En 2015, la institución percibió ingresos anuales de 140 000 USD por concepto de alquiler de propiedades. Las fuentes de financiación futuras incluyen: arrendamiento de inmuebles; desarrollo de proyectos de vivienda y uso mixto; transacciones de arbitraje; subvenciones y donaciones; emisiones de bonos exentos; inversiones en fondos mutuos; acciones; bonos de impacto social; entre otras.

En cuanto al desarrollo económico local, uno de los objetivos del Fideicomiso de la Tierra es ser un instrumento para superar la pobreza (en el año 2000, 54% de los hogares percibía menos de diez mil dólares anuales). Por ello, está facultado para generar riqueza a través de bonos de participación que en su momento podrán constituir un ingreso adicional para las familias. Este mecanismo aún no se ha implementado, pero es parte del plan de trabajo tanto del Fideicomiso como del Proyecto Enlace, que procuran contratar empresas comunitarias.

Bahía de San Juan

Actores y espacios del Fideicomiso de la Tierra



Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña

Cuenta desde 2007 con un Plan de Desarrollo Integral y Usos del terreno diseñado por las y los residentes y aprobado por el Gobernador.

Marina

Comunidades que integran el G8 inc.



Sedes de la organización



Centros comunitarios



Reservas territoriales del Fideicomiso

El necesario dragado del Caño



Zona que va a ser impactada por el dragado

Las 175 familias asentadas en este perímetro tienen la posibilidad de ser reubicadas dentro del Distrito de Planificación Especial.



Zonas inundables

Fuente: Federal Emergency Management Agency (FEMA). Las inundaciones en las riberas del Caño resultan nefastas: dañan las construcciones y afectan la salud de la población a causa de la concentración de coliformes fecales en las aguas estagnantes.

Tejido comunitario y actividades impulsadas por el Proyecto Enlace



Huertos comunitarios



Viviendas ecológicas



Universidades aliadas



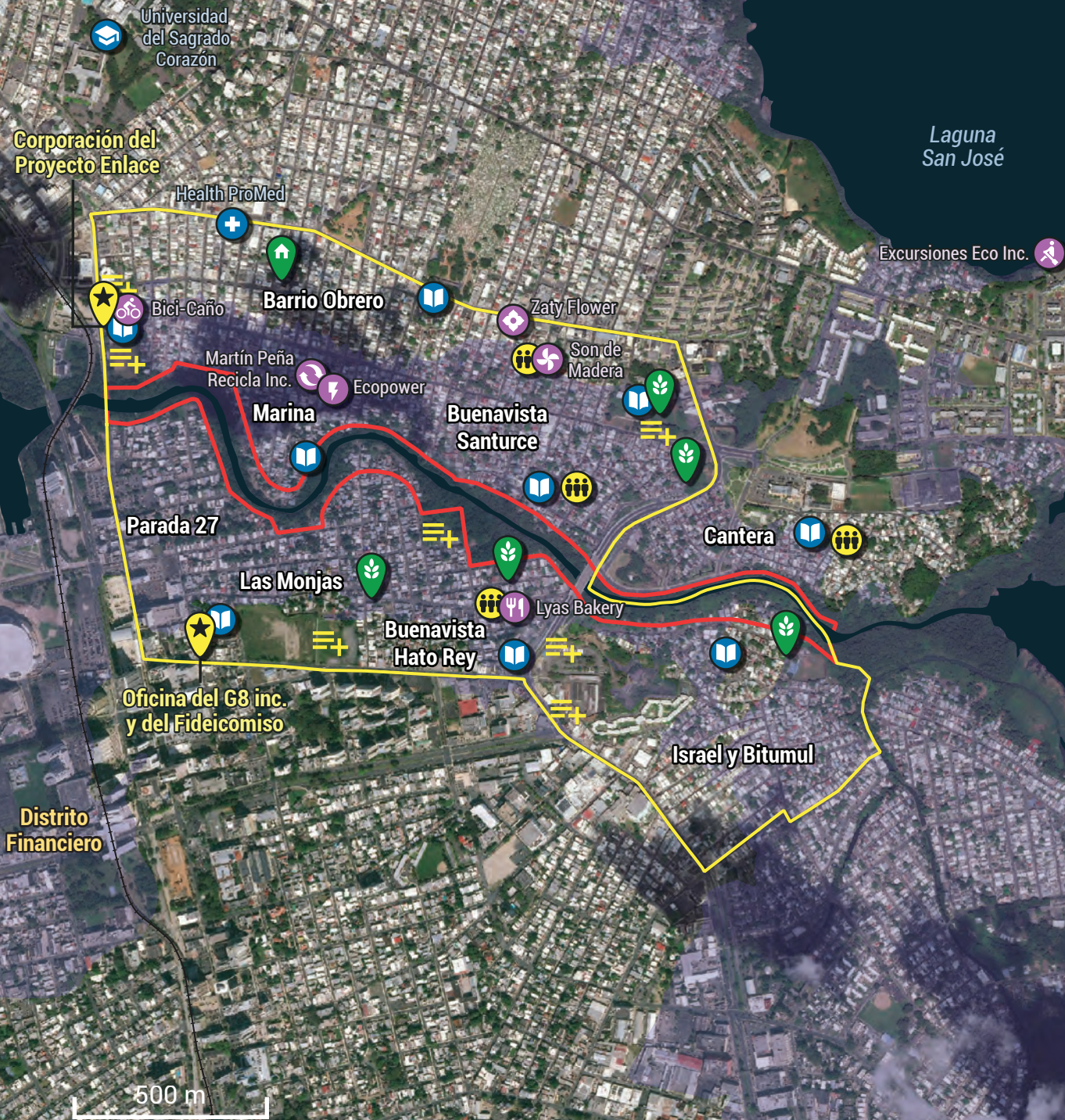
Micro-empresas comunitarias



Escuelas vinculadas

MAPA 3. Territorio de actuación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, en San Juan, Puerto Rico.

Mapa: HIC-AL.





El huracán María provocó la pérdida de más de 800 techos. A través del Proyecto Enlace se gestiona la reconstrucción, incluyendo paneles solares para la generación de energía en tres centros comunitarios. *Fotografías de la página de Facebook "ProyectoEnlaceCMP".*

Desarrollo social y cultural para todas las generaciones

En cada paso del Proyecto Enlace se provoca el pensamiento crítico, la organización comunitaria y la acción colectiva. Para procurar una participación inteligente e informada, se orienta y capacita a las/os integrantes de la comunidad mediante herramientas de educación popular tales como el teatro popular, cómics, música, entre otras. Ello permite establecer una base común de términos, y allanar el camino para los procesos deliberativos.

En la actualidad existen 30 programas de desarrollo social que abren espacios participativos para distintos segmentos de la comunidad. La niñez se integra desde las escuelas, donde se han desarrollado programas tales como el de Guardianes de la Prevención. A través de éste, niñas y niños generan acciones ligadas a la prevención de la violencia y consumo de drogas. También se realizan torneos de baloncesto y voleibol en los cuales los jóvenes, como condición para participar, toman talleres sobre manejo de conflictos, violencia de género, entre otros. Como estrategia para estimular el estudio de las ciencias y la conservación ambiental, se ha creado el programa Patrulleros del Ambiente, donde niños, niñas y jóvenes participan en la toma y análisis de muestras de calidad de agua, promueven la salud mediante actividades de control de vectores y desarrollan huertos comunitarios y escolares.

Mediante el programa Líderes Jóvenes en Acción (Lijac), personas de entre 12 y 21 años participan de talleres y conversatorios semanales que estimulan el pensamiento crítico, así como el desarrollo de liderazgo y de conocimiento intelectual, cultural y destrezas prácticas. También asisten, opinan y participan en los procesos deliberativos de la comunidad, ofrecen talleres y desarrollan sus propios proyectos. Como parte del relevo generacional, participantes de Lijac han sido electos por habitantes de sus barrios para colaborar en las juntas directivas de las organizaciones que componen el G-8.

Los adultos mayores, por su parte, desarrollan sus destrezas de liderazgo a la vez que voluntariamente toman cursos que enriquecen su acervo intelectual. Participan de la Universidad del Barrio en la que profesores universitarios ofrecen clases sobre temas diversos. Mediante el curso Clemente para las Humanidades, se forman en filosofía, lógica, literatura e historia. Asimismo, hay un programa de alfabetización de adultos, que comenzó con el propósito de generar espacios de participación para los inmigrantes. Todas estas iniciativas tienen el objetivo de que, generación tras generación, las y los habitantes puedan llevar las riendas de su destino colectivo.



Además de fomentar la participación y la buena convivencia, el Proyecto Enlace impulsa iniciativas de economía solidaria tales como Bici Caño. Fotografías: Pierre Arnold y Alex Figueroa.

Intercambio de experiencias

La participación prolongada de los residentes en los procesos de organización y acción colectiva les ha hecho protagonistas de procesos transformadores en sus barrios, cuya experiencia se convierte en un modelo para otros. Los líderes del Caño son entrevistados frecuentemente por medios de comunicación sobre temas de interés del país. Recientemente, se les dedicó el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York por su trayectoria de lucha. Además, se les invita para compartir sus experiencias en foros académicos y comunitarios.

En efecto, otras comunidades en Puerto Rico han visto en el Fideicomiso de la Tierra una posibilidad para evitar su desplazamiento. Tras intensos intercambios, los pobladores del asentamiento Villas del Sol, por ejemplo, optaron por la tenencia colectiva mediante un modelo cooperativo. El proyecto autogestivo de conservación ambiental denominado Casa Pueblo, por su parte, lideró un proceso para la creación del primer bosque modelo en Puerto Rico. Dicha iniciativa aprendió sobre el modelo organizacional del Proyecto Enlace y sus tres entidades, y lo replicaron con la creación de una corporación pública de corta duración y un fideicomiso de tierras de existencia perpetua. Más recientemente, a unos kilómetros al sur de Martín Peña, se creó el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, que fungirá como agente fiduciario con facultad para adquirir estructuras, terrenos y solares en desuso o abandono para la reconstrucción y desarrollo de viviendas asequibles.

Finalmente, con el reciente reconocimiento de ONU-Hábitat y la Fundación para la Construcción de Vivienda Social (BSHF, por sus siglas en inglés) que en 2015 condecoraron el esfuerzo de las comunidades del Caño Martín Peña al otorgarles el Premio Mundial del Hábitat, se espera que muchos grupos de diferentes países se inspiren y que desarrollen soluciones similares. No obstante, el desarrollo de un fideicomiso comunitario de tierras debe surgir mediante procesos que estimulen la participación y la toma de decisiones por parte de las propias personas involucradas. No se trata de un mero ejercicio de copiar y adaptar una figura jurídica al contexto legal de cada país. Para que sea exitoso, un fideicomiso comunitario cuyo fin sea la regularización de asentamientos humanos debe gestarse desde la realidad de sus pobladores, con apoyo técnico externo para que sea entendido, aceptado y exitoso.



Barrio Zitarrosa. Fotografía: Gustavo Castagnello.

FICHA 3.

Fucvam: territorialización de un modelo transformador

Uruguay. 408 cooperativas construidas, 80 en construcción, 114 en trámite.

Premio Mundial del Hábitat 2012. Sitio web: www.fucvam.org.uy

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) es una organización de segundo grado que agrupa cooperativas de vivienda en todo el Uruguay. Desde su fundación en 1970, la Federación impulsa un esquema de Producción Social del Hábitat basado en la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva, como una estrategia para extraer del mercado inmobiliario territorios urbanos cada vez más amplios. El Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM) ha sido tan exitoso que, además de ofrecer vivienda adecuada a más de 20 000 hogares uruguayos, se expande a grandes pasos por toda América Latina.

Antecedentes

Desde hace 46 años el cooperativismo de ayuda mutua uruguayo defiende el carácter de usuario de las cooperativas y practica la propiedad colectiva. Esa es nuestra base material, es lo que hace que el derecho a la vivienda sea eso, un derecho, y jamás una mercancía. Discurso de Pablo Caballero, ex-secretario general de Fucvam, en el 46 aniversario de la Federación el 24 de mayo de 2016.

⁹ Raúl Vallés y Benjamín Nahoum, "Acceso al suelo urbano y construcción de la ciudad. El caso de las cooperativas de vivienda uruguayas", *Passerelle* n° 10, Medellín, Colombia, Ritmo, AITEC, 2014.

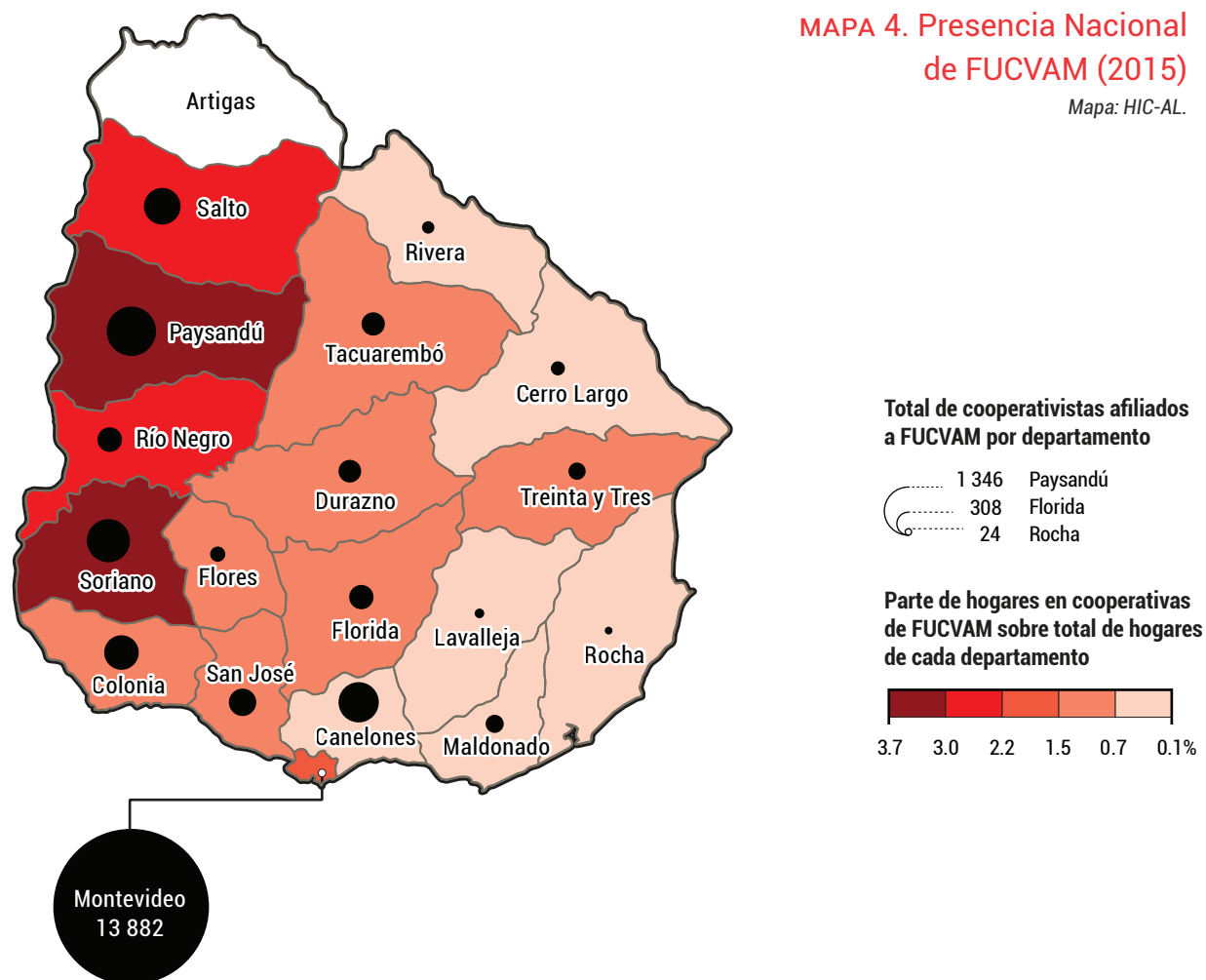
Fucvam encuentra sus orígenes en una serie de experiencias impulsadas por el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), mismas que sirvieron de ejemplo a la hora de diseñar la Ley de Vivienda de 1968. Además de reconocer las cooperativas de vivienda, esta ley introdujo distinciones importantes tanto en la manera de construir (por autoconstrucción o por ayuda mutua) como en el régimen de propiedad (cooperativas de usuarios o de propietarios). Desde sus inicios, Fucvam promueve la formación de cooperativas de usuarios que construyen sus viviendas por ayuda mutua.

Un elemento fundamental para el desarrollo de esta propuesta fue la creación, por parte del Estado, de una Cartera de Tierras que permitió a los grupos obtener financiamiento y terrenos para construir viviendas. Esto dio un impulso al movimiento cooperativo, que en sólo cinco años llegó a ser la principal línea de producción del Plan de Viviendas.

"Luego vino una dictadura de doce años (1973-1985), que impuso una economía neoliberal en la cual el cooperativismo, con sus ideas de solidaridad, democracia y participación del Estado, no tenía lugar", afirman Vallés y Nahoum⁹.

MAPA 4. Presencia Nacional de FUCVAM (2015)

Mapa: HIC-AL.



En 1983, ante el desmantelamiento de las centrales sindicales y la persecución de los líderes del movimiento obrero, Fucvam asumió la responsabilidad de desafiar abiertamente al régimen, tomó las calles e impulsó una huelga de pagos contra el Banco Hipotecario Federal. Esto despertó un amplio movimiento popular que acabó por desechar al gobierno militar¹⁰.

Pasada la dictadura, se reconoció la necesidad de restablecer el funcionamiento de la Cartera de Tierras, no sólo porque era funcional al conjunto de los programas de vivienda, sino porque dotaba a los gobiernos municipales de un instrumento inigualable de planificación: al ser el propio Estado el que aporta la tierra, ello le permite ser quien decide dónde y cómo se va a construir. Y dado que esos terrenos posteriormente son pagados, el mecanismo funciona como un fondo rotatorio. Así, en 1990, la Intendencia de Montevideo creó una Cartera de Tierras, ejemplo que fue seguido por otros gobiernos municipales y, desde 2008, por el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda.

¹⁰ Gustavo González, *Una historia de FUCVAM*, Uruguay, Ediciones Trilce, 2013.

El funcionamiento de las cooperativas y el papel de la Federación

Para llevar adelante la construcción de las viviendas, cada cooperativa cuenta con el apoyo de un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que asesora el proceso de conformación, acceso al crédito y edificación. No obstante, la conducción del proceso reposa en el Consejo Directivo de cada cooperativa, que escoge a los asesores técnicos y contrata a la mano de obra especializada, es así que los propios cooperativistas son quienes aportan la mano de obra no calificada.

Los proyectos se financian a través de un crédito proporcionado por el Banco Hipotecario Uruguayo y se ejercen diferentes esquemas de subsidio: subsidio al interés (con tasas por debajo del interés de mercado), subsidio de capital (una parte del crédito no se devuelve) y subsidio a la cuota de amortización. En esta última modalidad, que es la que más se emplea actualmente, si las familias no pueden abonar la cuota completa (ingreso familiar inferior a dos mil dólares mensuales), el Estado le subsidia la diferencia.



Ayuda mutua y asistencia técnica

- › Cada familia aporta 21 horas de trabajo por semana, lo que reduce costos y crea relaciones solidarias entre futuros vecinos.
- › Todos trabajan en la construcción de todas las viviendas, distribuidas por sorteo al final de la obra.
- › Las tareas se adecuan a las personas según sus habilidades.
- › Cada cooperativa contrata un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que asesora el proyecto arquitectónico y otros aspectos (financiero, jurídico, social y técnico) sin fines de lucro.
- › Es crucial que los institutos técnicos crean en el modelo.



Autogestión y democracia directa

- › Aunque los Institutos de Asistencia Técnica proveen asesoramiento, es la cooperativa la que asigna los recursos y dirige el proyecto.
- › El proceso constructivo favorece la adquisición de capacidades de dirección, contabilidad y organización.
- › Cada familia tiene un voto en la asamblea a través de su socio titular, el cual puede delegar la representatividad en otro integrante de la familia.
- › Los procesos democráticos existen no sólo al nivel de la cooperativa, son también la espina dorsal de la estructura de la Federación.

Al final cada socio adquiere un contrato de uso y goce con la cooperativa y ésta se convierte en la legítima propietaria del bien inmueble. Ante la asamblea, cada familia define un titular que la representa y, en caso de que el titular no pueda asumir sus tareas y responsabilidades, puede delegar este derecho en cualquier integrante del núcleo familiar que sea mayor de edad.

Todas las cooperativas disponen de una Comisión Fiscal que lleva las cuentas y otra de Desarrollo Social, cuya principal tarea es la formación política de los socios y la activación de procesos que rebasan el ámbito de la vivienda, como la creación de policlínicas, guarderías, escuelas, bibliotecas, o la promoción de actividades deportivas. Por lo general, estas comisiones desempeñan sus labores en el salón comunitario, que es el primer espacio que se construye en cada conjunto.

Si bien las cooperativas generan su propia identidad, estas experiencias no se desarrollan de manera aislada. Fucvam posee una Dirección Nacional que integra a quienes representan los diferentes departamentos del país y que es elegida por la Asamblea Nacional de Delegados. La Federación se sostiene económicamente en función del aporte que realizan mensualmente las cooperativas afiliadas.



Propiedad colectiva

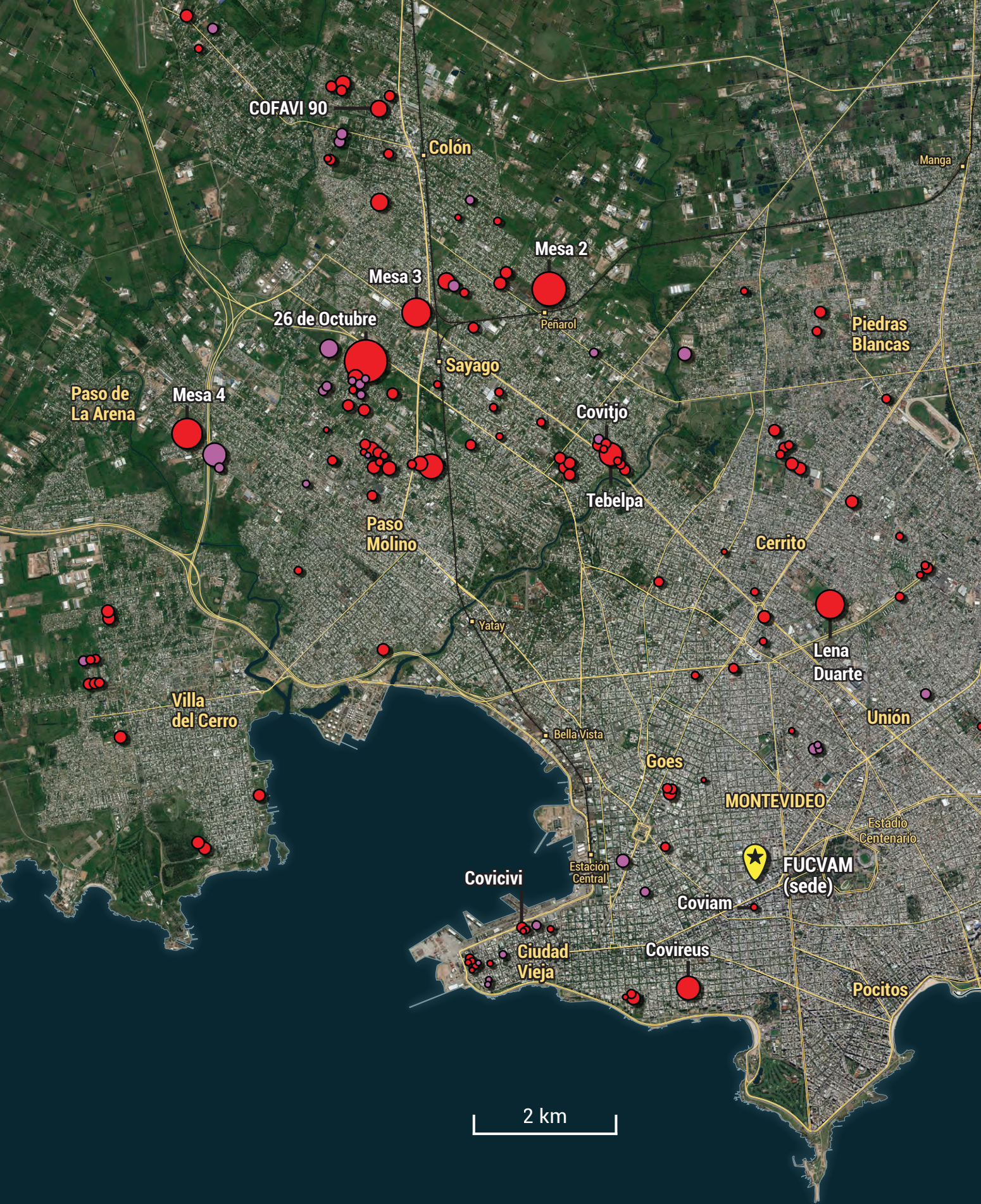
- › La cooperativa es la única propietaria permanente del parque de viviendas y de las áreas comunes.
- › La propiedad colectiva da seguridad a las familias y evita la especulación sobre el valor de la vivienda.
- › Si una familia abandona su unidad, recibe el pago por sus horas de trabajo más el monto del préstamo amortizado. La cooperativa reasigna la vivienda a un nuevo socio.
- › El valor de las viviendas se calcula en Unidades Reajustables (UR), una unidad de moneda ficticia creada por la Ley Nacional de Vivienda.



Independencia política

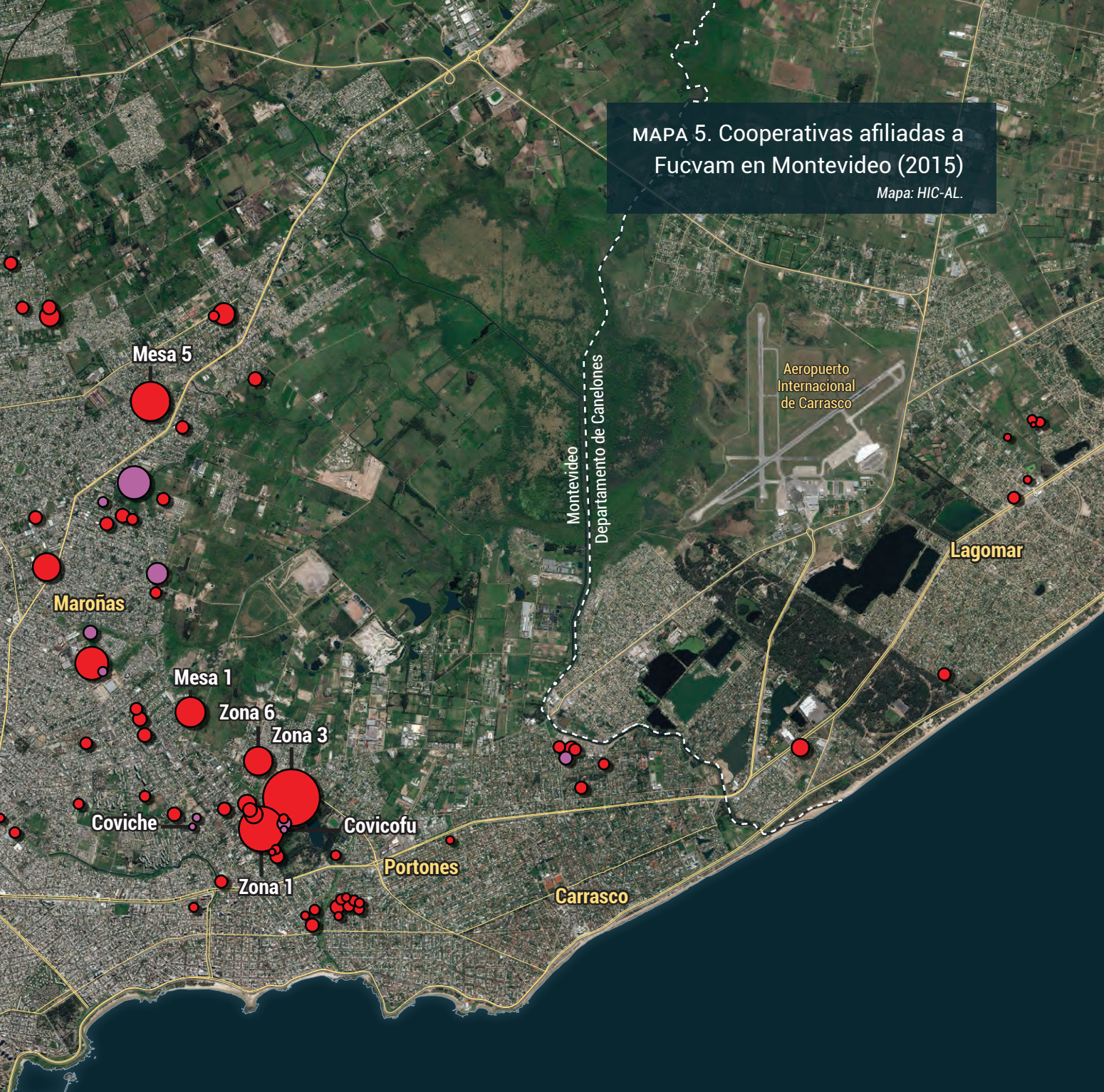
- › Aunque sus miembros pueden pertenecer a cualquier organización, la Federación no puede pertenecer a ningún grupo o partido político.
- › Fucvam no se alinea a ningún interés ajeno al de las cooperativas.

Fotografías: Gustavo Castagnello.



MAPA 5. Cooperativas afiliadas a Fucvam en Montevideo (2015)

Mapa: HIC-AL.



Viviendas producidas por cooperativistas de FUCVAM en la capital uruguaya

■ Habitadas

■ En obras

○ 1 303 en trámite

La variación de tamaño indica la cantidad de socios por cooperativa, mesa, zona o barrio intercooperativo.



Zona 6 del Complejo José Pedro Varela. De las seis “zonas” propuestas en 1971, sólo pudieron concretarse tres con características muy diferentes, ya que cada una responde a las demandas y decisiones que cada grupo de cooperativas llevó ante los arquitectos del Cedas, liderados por Norberto Cubría, Jorge Di Paula y Walter Kruk. *Fotografía: Jerónimo Díaz.*



Cooperativa Ana Monterroso (Coviam). Esta operación de reciclaje se realizó sobre un antiguo corralón municipal del céntrico barrio Cordón, mediante la organización de los ocupantes, con el asesoramiento de técnicos de la municipalidad y con recursos de la Junta de Andalucía. *Fotografía: Jerónimo Díaz.*

Asimismo, se han recibido apoyos de instituciones de cooperación internacional que respaldan proyectos específicos.

A grandes rasgos, sus acciones apuntan en dos direcciones: en defensa de los intereses de los/as cooperativistas y sus cooperativas, así como hacia la contribución al desarrollo social y cultural del movimiento, dentro del cual ocupa un lugar preponderante el esfuerzo por el mejoramiento, la profundización y la innovación de la autogestión. De esta manera, la Fucvam funciona como un movimiento social que además de construir vivienda y hábitat, busca transformar a la sociedad en general.

De los grandes conjuntos a la reconquista de las áreas centrales

Las realizaciones de las cooperativas afiliadas a Fucvam han variado tanto en forma como en escala; se han ido adecuando a las condiciones generales de poblamiento y urbanización, así como a las corrientes arquitectónicas y a las nuevas técnicas constructivas. Desde luego, la ciudad de Montevideo ha sido testigo de estas transformaciones.

A inicio de los sesenta, ante una situación de parálisis del sector de la construcción de vivienda –tanto estatal como privada–, se comenzaron a construir grandes complejos habitacionales. En este contexto surgieron las cinco “mesas intercooperativas” que, como se aprecia en el mapa 5, fueron ganando terreno sobre las periferias de la capital, a una distancia promedio de diez kilómetros de la Ciudad Vieja. Todas ellas fueron asesoradas por el CCU y se caracterizan por sus tiras de viviendas duplex de ladrillo rojo, atravesadas por sendas peatonales que conectan las áreas verdes y los equipamientos montados y administrados por las mismas cooperativas (jardines infantiles, policlínicas, gimnasios, escuelas, comercios).

En ese mismo periodo, se formó el Centro de Asistencia Técnica y Social (Cedas), el cual realizó numerosos asesoramientos a las cooperativas surgidas del Sindicato Único de la Construcción y Ramas Anexas (Sunca). En 1971, el Estado adjudicó a este sindicato un predio de magnitudes tales



Covireus al Sur fue fundada en 1997, su construcción inició en 2007 y fue terminada en 2013. Además de incluir unidades diseñadas para personas con discapacidad, esta experiencia representa un importante paso adelante en cuanto a las negociaciones con las autoridades públicas para el acceso de las cooperativas a una tierra muy valiosa en el centro de Montevideo. *Fotografía: Jerónimo Díaz.*

que autorizaba la proyección de cuatro mil viviendas y el desarrollo de un programa urbanístico integral sobre la cuenca del Arroyo del Molino, que carecía de equipamientos y servicios básicos. Así nació el conjunto cooperativo de ayuda mutua más grande de Uruguay: el Complejo José Pedro Varela.

Para los años ochenta, de la mano de varios actores interesados en revalorar la Ciudad Vieja, Fucvam impulsó la formación de cooperativas conformadas ya no por gremios profesionales, sino por grupos de vecinos y habitantes de un territorio que se encontraba sumamente deteriorado. De 1992 a la fecha se han formado más de veinte cooperativas que llevan a cabo procesos de rehabilitación sobre fincas adquiridas por la Intendencia Municipal de Montevideo, misma que en 2004 instauró el programa Ciudad Vieja Renueva. Con el apoyo de la Unión Europea, este programa ha contribuido a la formación de mano de obra calificada en restauración y, sobre todo, ha garantizado la permanencia de los habitantes en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario.

El reciente regreso de las cooperativas de Fucvam hacia las áreas céntricas de la ciudad se debe a que los costos ambientales derivados de la expansión urbana son cada vez más insostenibles. En este contexto, la cultura de la vivienda dúplex, tan arraigada en el sistema cooperativo, ha ido cediendo el paso a la aceptación de conjuntos en altura. El caso más emblemático de este giro es el de la cooperativa La Colonia cuyo inmueble, finalizado en 2016 con asesoría del CCU, alcanza hasta ocho niveles. En general, la tendencia actual es al desarrollo de edificios de departamentos de tres o cuatro niveles, que pueden involucrar hasta 182 viviendas, como el complejo de vivienda Covireus al Sur que alberga desde 2013 a integrantes de los gremios de maestros, del gas, metalúrgicos y de la salud, así como vecinos de la zona.



El agua como aislante térmico. La cooperativa Treinta Jóvenes (Covitjo) limita el uso de combustibles fósiles durante el invierno.
Fotografías: Gustavo Castagnello.

Desafíos actuales

El desarrollo de la propuesta de Fucvam ha significado una lucha permanente contra los intentos de negar personería, tierra y préstamos para las cooperativas. En la actualidad, el modelo cuenta con el reconocimiento del Estado y se dispone de mesas de negociación con el Ministerio de Vivienda y los municipios para debatir los aspectos fundamentales de la problemática de vivienda. Sin embargo, aún se padece la falta de acceso al suelo urbanizado por parte de los grupos constituidos, la falta de recursos financieros para la construcción de viviendas, los privilegios acordados al sector privado, así como la falta de preparación de los profesionales para trabajar con la población, entre otros desafíos.

Continuidad. Este prolongado proceso de producción colectiva del hábitat ha afirmado el sentido de pertenencia y la autoestima de los pobladores. Sin embargo, persiste la dificultad de mantener la unidad en el mediano y largo plazo, principalmente cuando interviene la transferencia de derechos y el reemplazo de los socios. En estos casos, el desafío consiste, por un lado, en conseguir los apoyos del Estado para solventar la incorporación de nuevos socios/as en función de su necesidad de vivienda y no del tamaño de su billetera; y, por otro lado, en fortalecer el ámbito de la educación cooperativa.

Formación. “La educación debe comenzar desde que se ingresa al movimiento y no debe cesar nunca, pues el sistema imperante permea constantemente nuestro pensamiento”, afirman los promotores de la Escuela Nacional de Formación Enforma, fundada en 2013, que reúne cada año hasta 200 líderes cooperativistas (mapa 15). Por un lado, la escuela sirve para fortalecer los valores de solidaridad y cooperación del movimiento. Por otro lado, responde a la necesidad de mejorar las capacidades de gestión de las cooperativas, desde la obra hasta la gestión cotidiana de los conjuntos construidos.

Igualdad de género. Desde su origen, Fucvam persigue el papel igualitario del hombre y la mujer, y reafirma el concepto de equidad de género, puesto que todas y todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Tanto hombres como mujeres pueden asociarse, representar a su familia y aportar su mano de obra. Sin embargo, Mónica Ramírez, ex-presidenta de la cooperativa Itacumbú y miembro de la comisión de Desarrollo Social de Fucvam entre 1999 y 2005, apunta lo difícil que ha sido hacer efectiva esta aspiración:



Inauguración de la cooperativa de vivienda Che Guevara (Coviche). Como en cada evento importante, el área de comunicación de Fucvam documenta y difunde a través de sus redes sociales y su sitio web: www.fucvam.org.uy

"Las estadísticas recogidas en el movimiento indican que hay un número elevado de mujeres, en cooperativas 'de la vieja época', integrando sub-comisiones o bien la Comisión de Fomento. Son pocas las que acceden al Consejo Directivo y éstas, mayoritariamente, desempeñando funciones de secretaría, en un rol más vinculado a la organización administrativa y no tanto a la gestión política del grupo. En cambio, en las cooperativas de conformación más reciente, a pesar de perdurar algunos resabios 'machistas', se comienza a revertir la situación y la elección para los cargos es por aptitud e incluye a las mujeres en pie de igualdad"¹¹.

¹¹ Mónica Ramírez, "Un corte en la visión. Las cuestiones de edad y género en las cooperativas de ayuda mutua", en Benjamín Nahoum (comp.), *Una historia con quince mil protagonistas*, Intendencia Municipal de Montevideo; Junta de Andalucía; Agencia Española de Cooperación, Uruguay, 2008.

Innovación ambiental. Las cooperativas han sido pioneras en la aplicación de tecnologías nuevas y en uso de materiales innovadores. Al fomentar la autogestión y la participación directa de los interesados, Fucvam contribuye a valorar conceptos que muchas veces son dejados de lado por la producción mercantil, como la sostenibilidad, el uso de recursos locales y la utilización de materiales y formas de energía renovables. Por ejemplo, en la producción de vivienda social de Uruguay, las únicas experiencias recientes que utilizan materiales como tierra o madera, corresponden a programas cooperativos, mientras que en el sector mercantil hay una utilización casi exclusiva de cementos, hierro, asbesto-cemento y combustibles fósiles.

Además, en los programas cooperativos surgidos por iniciativa de los propios destinatarios, es cada vez más frecuente la utilización de energía solar o eólica; la reutilización de desechos de la propia construcción, como ladrillos, escombros y envases; o la optimización energética gracias al comportamiento de los edificios (orientación, barreras naturales, aislamientos).

Vinculación con el entorno. Los equipamientos urbanos desarrollados por las cooperativas benefician a la población en general. El mejor ejemplo de ello son los espacios para la infancia y las escuelas abiertas en el seno de los barrios cooperativos como el José Pedro Varela o, más recientemente, en el barrio Juana de América (Mesa 5). En ambos casos las cooperativas cedieron parte de sus terrenos a favor de la educación pública. Otro ejemplo importante son los salones comunales, donde se han generado experiencias contradictorias. Según José Tongola:

¹² José Tongola, "La relación cooperativa-medio. La cooperativa después de la vivienda", en Benjamín Nahoum (comp.), *op. cit.*

*"Existen casos en que se limita el ingreso, transformando el salón comunal en algo privado del grupo, y otros en que el salón comunal de la cooperativa es el centro del barrio o incluso, en el interior del país, de la ciudad. Un ejemplo notorio de esto último es el de Covinuvi en la localidad de Durazno: no hay actividad departamental que no se desarrolle en este salón comunal, siendo un punto de referencia de escuelas, liceos, comisiones de fomento y aún de la propia Intendencia Municipal"*¹².

En suma, el alcance transformador de la propuesta de Fucvam rebasa el ámbito de las cooperativas y se expresa en distintos niveles de la sociedad uruguaya, desde el urbanismo hasta la vida política nacional. En lo urbano, si bien la Federación se articuló inicialmente en torno a la demanda de vivienda, el proceso apunta hacia la generación de espacios habitables en todos los sentidos. Los barrios construidos integran espacios verdes y recreativos, salones comunales, escuelas, bibliotecas, guarderías y espacios deportivos, lo que beneficia a las mismas cooperativas pero también a los barrios circundantes. Asimismo, se impulsó la rehabilitación de importantes vestigios arquitectónicos de la Ciudad Vieja en beneficio de sus habitantes originarios que, al adoptar la propiedad colectiva, han disminuido el campo para la gentrificación.

Se han impulsado, además, cooperativas de consumo, producción y crédito, entre otras iniciativas que estimulan la economía local y desafían las "reglas del mercado". Y no es casual que los valores de solidaridad y colaboración que enarbola Fucvam se opongan al modelo de sociedad imperante: en su Declaración de principios, el movimiento afirma estar en contra del capitalismo salvaje y en contra de la apropiación por unos pocos de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad. Esto habla del carácter transformador de la propuesta llevada adelante por los trabajadores uruguayos desde los años sesenta.

Finalmente, es a partir de los años noventa cuando Fucvam se propone desarrollar un proyecto de cooperación Sur-Sur para difundir su utopía. Con apoyo del Centro Cooperativo Sueco, hoy We Effect, el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua se ha transferido con distintos niveles de intensidad en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Haití. Asimismo, se encuentra en vías de instalación en Perú, Chile, Ecuador y México.



Fotografía: Cofavi 90, Gustavo Castagnello.



Cooperativa de vivienda Ciudad Vieja. Fotografía: Jerónimo Díaz.



Cooperativa Señor de Piñami, municipio Quillacollo, Cochabamba. Fotografía: Pierre Arnold.

FICHA 4.

Cooperativismo de altura: el Cacvam de Bolivia

Cochabamba, Bolivia. 5 cooperativas de vivienda. Facebook "cacvam.bolivia"

Los grupos pre-cooperativos de Bolivia comenzaron a formarse en 2002 con trabajadores del sector informal del departamento de Cochabamba. Los grupos Nueva Esperanza, Sindicato Semapa, Sayariy, Miraflores, Señor de Piñami y Virgen del Rosario, no sólo tuvieron que abrir el camino en un contexto institucional y económico dominado por la ideología de la "casa propia", también tuvieron que adaptar un modelo surgido del sindicalismo uruguayo a un país de profunda raigambre indígena y campesina. Para vencer el desafío se necesitaba, por un lado, desarrollar una experiencia piloto que animara a la gente y que sirviera para convencer a los tomadores de decisiones; éste fue el caso de la Cooperativa Señor de Piñami (Covisep). Por otro lado, era necesario consolidar una organización de segundo nivel que permitiera mantener la unidad y generar intercambios entre los grupos. De allí surgió el Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Cacvam), que hoy asocia cinco cooperativas.



Mobilización nocturna por el derecho a la tierra y la vivienda cooperativa. Fotografía: Cacvam.

La perseverancia y el trabajo de incidencia realizado por el Cacvam ha permitido avances significativos en el campo jurídico. Más allá del reconocimiento del derecho a la vivienda y hábitat adecuados en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), el Comité participó en la elaboración de la Reglamentación de la Ley General de Cooperativas y logró que se incluyera al Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua en el Decreto Supremo promulgado en mayo de 2014. Aunque falta incidir en el proyecto de Ley Nacional de Vivienda, hoy se cuenta con un marco normativo que respalda al modelo. Finalmente, dado que cerca del 80% del parque habitacional boliviano ha sido autoproducido por sus propios habitantes, el Cacvam tiene el campo abierto para convertirse en un referente de primer orden que ayude a encauzar esta dinámica espontánea y a producir ciudades más habitables y socialmente justas.



Condominio Metro de Lima. Fotografía: Pierre Arnold.

FICHA 5.

Por una justa reubicación para los afectados por el Metro de Lima

Lima, Perú. Premio PSH - América Latina 2016.

Documental: https://youtu.be/Zwo_rzazC3Q

En 2007, el gobierno peruano anunció la creación del programa Mejorando mi Quinta que consistió en 40 obras de rehabilitación de viviendas populares (también conocidas como vecindades o conventillos) ubicadas en los distritos limeños de Barrios Altos, Breña y La Victoria. Pero en la Quinta de la Virgen del Carmen del Quinto Patio —donde habitaban 40 familias desde mediados del siglo XX, que pagaban su alquiler a la autoridad pública del transporte de Lima, dueña del terreno— la alegría del mejoramiento se vio pronto frustrada cuando la población se enteró, por casualidad, que la construcción del tramo elevado de la línea 1 del metro, pasaría literalmente por encima de las viviendas, sin reubicar o indemnizar a los afectados.

Con métodos de presión y negociaciones individuales, el municipio y la empresa del tren eléctrico consiguieron desplazar a siete familias de la Quinta. Aquellas que permanecieron, en cambio, decidieron llevar su lucha ante medios locales y organismos internacionales; impulsaron un proceso de consulta ciudadana y supieron encontrar aliados como el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap) para conseguir una justa reparación por parte del Estado.

A finales de 2014, los vecinos consiguieron su reubicación en el condominio Metro de Lima, a menos de un kilómetro de donde estaba su Quinta. A partir de esta experiencia exitosa, la asociación de vecinos apoya a otros grupos para organizarse contra las expulsiones y promueve, de la mano de Fucvam, el desarrollo de un marco normativo que haga posible la instalación del cooperativismo de vivienda en el Perú.

El casco antiguo de Lima ha sido uno de los principales terrenos de acción del Cidap. En 2006, esta institución impulsó la nominación del sitio a la Lista Watch del Fondo Mundial de Monumentos (WMF, en inglés) como una estrategia para posicionar la problemática del patrimonio construido y cultural del corazón limeño e impulsar su rescate desde una perspectiva social. La iniciativa logró colocar al casco antiguo en la agenda de la sociedad civil, del Estado y de la cooperación internacional. También dio pie al lanzamiento del Plan Nacional de Destugurización y Recuperación Urbana del Centro Histórico, para que en coordinación con la alcaldía y las asociaciones de inquilinos, se mejoren las condiciones de vida y se garantice el derecho de residencia de los actuales ocupantes.



FICHA 6.

CCVAMP: del barrio cooperativo a los Bañados de Asunción

Paraguay. 15 cooperativas. Reconocido con el premio PSH - América Latina 2017.
Documental: <https://youtu.be/5IDGxmkZExU>

Barrio cooperativo Kuarahy Rese ("sol naciente" en Guaraní). Ubicado al sur de Asunción, el barrio integra a las primeras cinco cooperativas de vivienda del país. Además de sus 300 viviendas de 72 m², las familias construyeron un tanque elevado, una escuela primaria, una guardería, un taller de costura, un gimnasio, un local administrativo, una tienda, una cabina para la radio cooperativa y una cancha de fútbol.

Fotografía: Pierre Arnold.

En 1999, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), con el financiamiento de We Effect y el apoyo técnico de Fucvam, conformó el grupo impulsor que promueve la idea de cooperativas de viviendas como una forma de enfrentar el déficit habitacional en Paraguay. Dos años más tarde, se crearon cinco cooperativas que, gracias al ahorro y al apoyo de la Gobernación Central, adquirieron un terreno de 16 hectáreas ubicado a 35 kilómetros al sur de Asunción.

A partir de 2003, unificadas en torno a su consorcio Kuarahy Rese, las y los cooperativistas construyeron un primer lote de 80 viviendas, financiadas por medio de un convenio firmado entre el Cipae y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también contemplaba la capacitación de 30 cooperativistas en construcción civil. Poco después, gracias al éxito de esta primera fase constructiva, se logró gestionar una línea de financiamiento con el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) para otras 55 viviendas.

Una vez conformada la Mesa Coordinadora, hoy Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Paraguay (CCVAMP), se logró incidir en la aprobación de la Ley 2329 de 2003, que estableció el Marco Administrativo de las Cooperativas de Vivienda así como el Fondo para Viviendas Cooperativas. A partir de ese momento, se tomó la tarea de difundir el modelo por todo el país, incluso de inventar la modalidad de vivienda en lote disperso a partir de la problemática de los Bañados de Asunción.

MAPA 6. Inundaciones y megaproyectos en Asunción:
Cobañados resiste y propone

Mapa: HIC-AL.



Avenida costanera: amenaza y oportunidad

- construida** Bien diseñada, la vialidad puede servir como defensa costera ante inundaciones
- en construcción**
- en proyecto**

Mega Emprendimientos privados vinculados al megaproyecto

Los Bañados: zonas inundables

Experiencias que hacen vida con Cobañados

Jukyty Barrios con coordinadoras zonales

Viviendas construidas por ayuda mutua
Se han construido 173 viviendas a través de cooperativas de CCVAMP

Huertos comunitarios
Iniciativas agroecológicas impulsadas por la Coordinadora Juvenil de los Bañados, que forma parte de Cobañados.

Espacios para la infancia

1 km

Vista sobre el barrio inundado de Jukyty, desde el Cerro Lambaré, julio de 2014. Fotografía: Pierre Arnold.



Entre inundaciones y megaproyectos, Cobañados resiste y propone

¹³ Véase: Oxfam América, *Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina*, Oxfam internacional, 2016. El informe señala que para 2014, 68% de la superficie agrícola de Paraguay estaba sembrada con soja transgénica.

¹⁴ Véase: Ricardo Canese y Mercedes Canese, *La lucha por la tierra en Asunción. La conveniencia de la defensa costera para los bañados*, Asunción, Cipae, Cobañados, 2016.

Los Bañados constituyen una franja de 18 kilómetros de extensión que bordea la capital paraguaya; en total, suman dos mil hectáreas de tierra a orillas del Río Paraguay. La crecida de las aguas del río inundan cada lustro una parte importante del área, lo que afecta a las 21 000 familias, en su mayoría de origen campesino, asentadas allí a causa de las escasas posibilidades de desarrollo en las áreas rurales y, sobre todo, como consecuencia de las limitaciones para el acceso a la tierra y el cercamiento de su territorio por parte de la agricultura mecanizada, en especial por el monocultivo de soja transgénica¹³.

Ante el abandono del Estado, los bañadenses construyeron a lo largo de más de medio siglo su propia infraestructura comunitaria, como escuelas, clubes de salud, centros deportivos, iglesias, calles empedradas y pavimentadas, plazas y servicios públicos. Sin embargo, todos sus esfuerzos se ven actualmente amenazados por el megaproyecto de la Franja Costera, que incluye autopistas urbanas, complejos industriales y residenciales, así como conjuntos de “vivienda social” en espacios de hasta 62 metros cuadrados que –según las organizaciones locales– son verdaderas “cajas de fósforos” donde difícilmente puede reproducirse la economía popular: en los bañados mucha gente tiene animales de traspatio, huertos, almacenes y talleres.

Para defender el derecho de los bañadenses a mantenerse en la ciudad que han consolidado, se creó la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados (Cobañados), una organización independiente y con personería jurídica, fundada en agosto de 2003. Cobañados articula ocho coordinadoras zonales que a su vez están compuestas en promedio por 15 organizaciones de base: grupos juveniles de barrio, de pescadores, cooperativas de recolectores y recicladores, guarderías comunitarias, entre otras.



Viviendas en lote disperso producidas por cooperativas de CCVAMP. El proyecto fue financiado por la Entidad Binacional Itaipú, desde su oficina de responsabilidad social. También recibió el financiamiento del Centro Cooperativo Sueco (We Effect) y del Comité de Iglesias para Ayuda y Emergencias (Cipae). La gestión del financiamiento llevó tres años, del 2009 hasta el 2012, mientras la construcción llevó otros cuatro años, de 2012 a 2016. *Fotografía: CCVAMP.*

Hasta ahora, la resistencia opuesta al capital inmobiliario por parte de los habitantes de la zona ribereña ha logrado frenar su desplazamiento. Ante ello, Cobañados ha presentado una propuesta concreta para que las obras de infraestructura no se traduzcan en su desarraigo: en vez de rellenar las zonas inundables, se propone convertir las nuevas autopistas urbanas en defensas costeras¹⁴.

Por otro lado, la Coordinadora ha impulsado propuestas comunitarias que van desde la producción social de vivienda hasta la generación de huertos orgánicos y la creación de espacios educativos.

En materia habitacional, se gestionó la financiación para construir 166 viviendas, realizadas por ayuda mutua y en lote disperso, que además tuvieron la peculiaridad de ser edificadas sobre terrenos municipales declarados de interés social. De esta forma, se ha avanzado hacia la regularización de la tenencia de la tierra, con el reconocimiento del derecho al arraigo de las familias que allí han habitado por décadas. Más aún, las viviendas se mantienen en propiedad de la cooperativa, por lo que resulta una interesante combinación de derecho de uso y goce de las viviendas que garantiza la permanencia de las familias.

Cabe destacar que sobre las 166 viviendas inicialmente planificadas y aprobadas se construyeron siete más, debido al buen manejo de los recursos, que en total sumaron 173 viviendas construidas. Además, dado que la financiadora entregó los fondos como donación, las familias establecieron voluntariamente una cuota que podían pagar para la generación de un Fondo Rotatorio Solidario, administrado por Cobañados, con el cual se están generando nuevos proyectos de mejoramiento comunitario.

Más allá de la vivienda, Cobañados ha desarrollado un proyecto para la promoción de los derechos de la niñez en los bañados de Asunción. Con el apoyo de We Effect, trabaja en el fortalecimiento de los centros de cuidados existentes y propone capacitaciones para las docentes y madres cuidadoras. Asimismo, cuenta con un Centro de Cuidado donde mujeres comprometidas trabajaron cinco años sin percibir salarios y pelearon para que el Instituto de Bienestar Social (IBS) reconociera y remunerara la labor de las cinco madres cuidadoras. Si bien la iniciativa comunitaria es imprescindible para el funcionamiento de los Centros de Cuidado, lo que urge es un mayor compromiso del Estado Municipal y Central para el mejoramiento de este servicio, vital para el desarrollo de las mujeres y el cuidado de la niñez en Paraguay.



Mural infantil en cooperativa hondureña.
Fotografía: Covimarl.

FICHA 7.

Coceavis: articulando luchas y proyectos de vida colectivos

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 13 cooperativas construidas, 52 en proyecto. Reconocido con el premio PSH-América Latina 2016.
Sitio web: www.coceavis.org

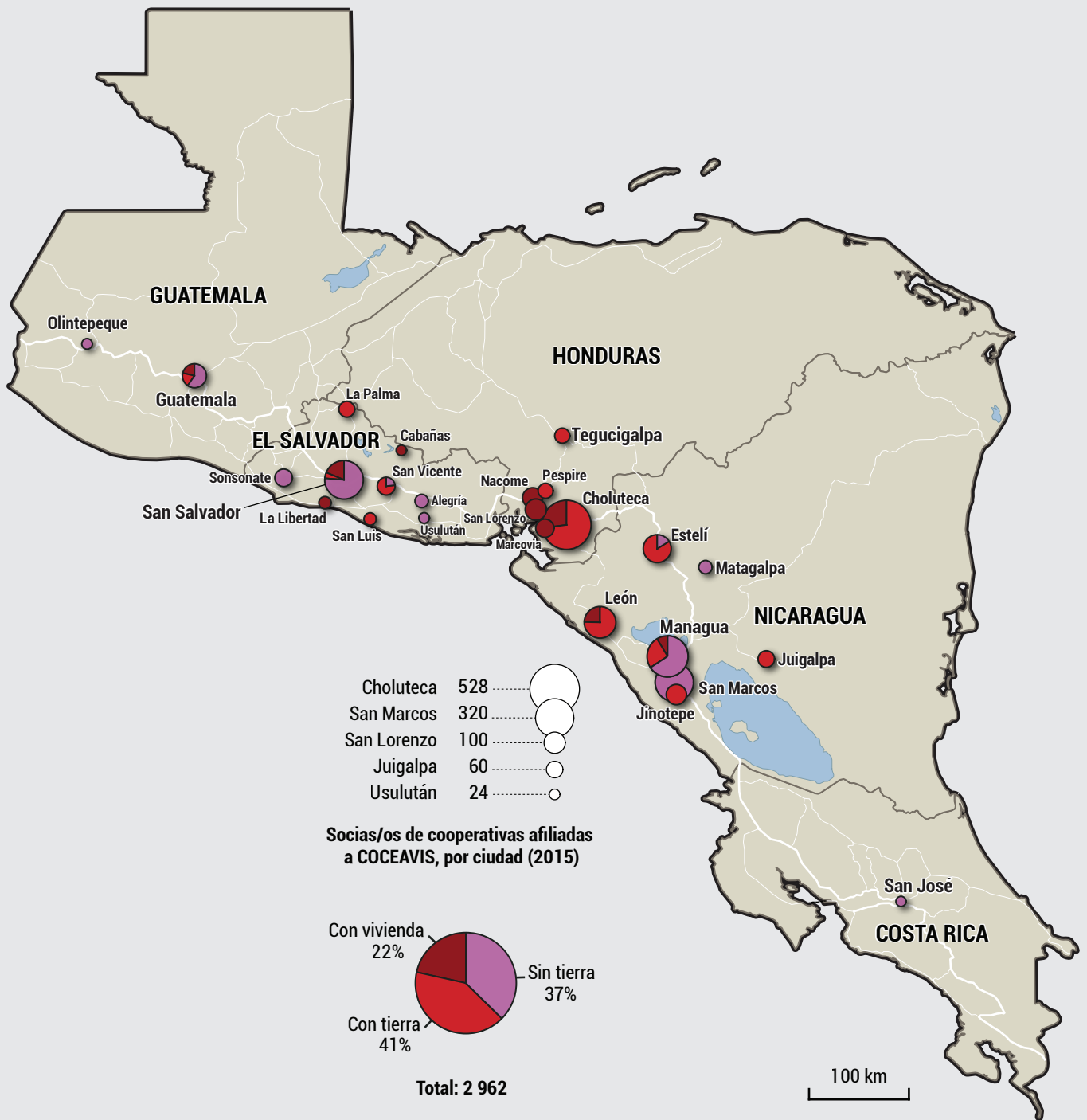
Al igual que en Bolivia y Paraguay, el viaje del cooperativismo de vivienda hacia Centroamérica se origina a partir del intercambio promovido por Fucvam, bajo la coordinación de Gustavo González, ex-secretario general de la Federación uruguaya, quien fue invitado a dirigir el área de vivienda en la oficina latinoamericana de We Effect. En 2006, de la mano con instituciones locales que fueran capaces de brindar una asesoría técnica en cada país, se inició un proceso de formación de grupos pre-cooperativos. Una vez consolidada cierta cantidad de grupos, se formaron mesas articuladoras y federaciones nacionales que ayudaron a profundizar la estrategia de incidencia. En 2010, estas organizaciones de segundo grado conformaron la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (Coceavis).

El trabajo de Coceavis se resume en tres ejes: formación, comunicación e incidencia.

1. En primer lugar, considerando que la formación de sus bases es fundamental para la sostenibilidad del movimiento, la Coordinadora ha desarrollado una Escuela Regional de Formación Cooperativista que busca potenciar los intercambios regionales, arraigar los fundamentos teóricos del CVAM y generar debate en torno a la dimensión política del modelo en el diario vivir de los/as cooperativistas como sujetos de transformación con identidad de clase. En este proyecto, iniciado en 2014, han participado cerca de 140 cooperativistas de los cinco países.
2. Por otra parte, Coceavis cuenta con plataformas de difusión en medios digitales, elabora trimestralmente su propio periódico y lidera la sistematización de las diversas experiencias, incluyendo proyectos culturales, huertos comunitarios y movilizaciones locales.
3. Finalmente, la Coordinadora planifica acciones regionales con el fin de promover leyes, políticas e instrumentos orientados a facilitar el financiamiento estatal, el acceso a suelo habitable y el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva.

MAPA 7. Avance del cooperativismo de vivienda en Centroamérica (2015)

Mapa: HIC-AL.



	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
Instrumentos estatales de apoyo al modelo CVAM aprobados y en gestión →	Anteproyecto de Ley de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ayuda Mutua	Decreto de transferencia de inmuebles del Centro Histórico de San Salvador	Financiamiento y subsidio del Fondo para la Vivienda (Fopavi) para tres proyectos piloto	Programa de Vivienda y Crédito Ciudadano Solidario (Proviccsol)	Subsidio y exoneración de impuestos, antes el Instituto de la Vivienda para 12 cooperativas
Integrantes de Coceavis →	Cooperativa de Vivienda "Fuerza, Destreza y Ayuda Mutua" (Coovifudam)	Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fescovam) Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal)	Mesa Guatemalteca de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Megcovam) Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (Idesac)	Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda del Sur de Honduras (Mecoovisurh)	Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua "Comunidades Dignas" (Cencovicod) Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)



Agricultura urbana. Los huertos orgánicos existentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fortalecen el sentido de colectividad y las capacidades de autogestión de las más de 20 cooperativas que han participado en su instalación. Para las 150 familias participantes, son una forma de caminar los primeros pasos hacia la soberanía alimentaria. *Fotografía: Fundasal.*



Movilización permanente. La "casita solidaria" recorre las calles de Guatemala durante la celebración del Día Mundial del Hábitat y los Sin Techo de 2015. Al llamado de Coceavis, distintas acciones de calle y movilizaciones son coordinadas por las organizaciones de segundo grado para ser realizadas al mismo tiempo en los cinco países de la región.
Fotografía: Megcovam.



Hacedoras de vivienda y hábitat. Las mujeres representan 71% de la membresía de las cooperativas y ocupan el 65% de los cargos de dirección. Si bien quedan barreras educativas y culturales que superar para alcanzar la equidad de género, las mujeres ya detentan puestos estratégicos en las organizaciones de segundo grado y otros espacios de articulación de Coceavis: llevan las causas del movimiento ante el Estado, dirigen marchas, construyen, siembran.
Fotografía: Jesper Klemedsso.

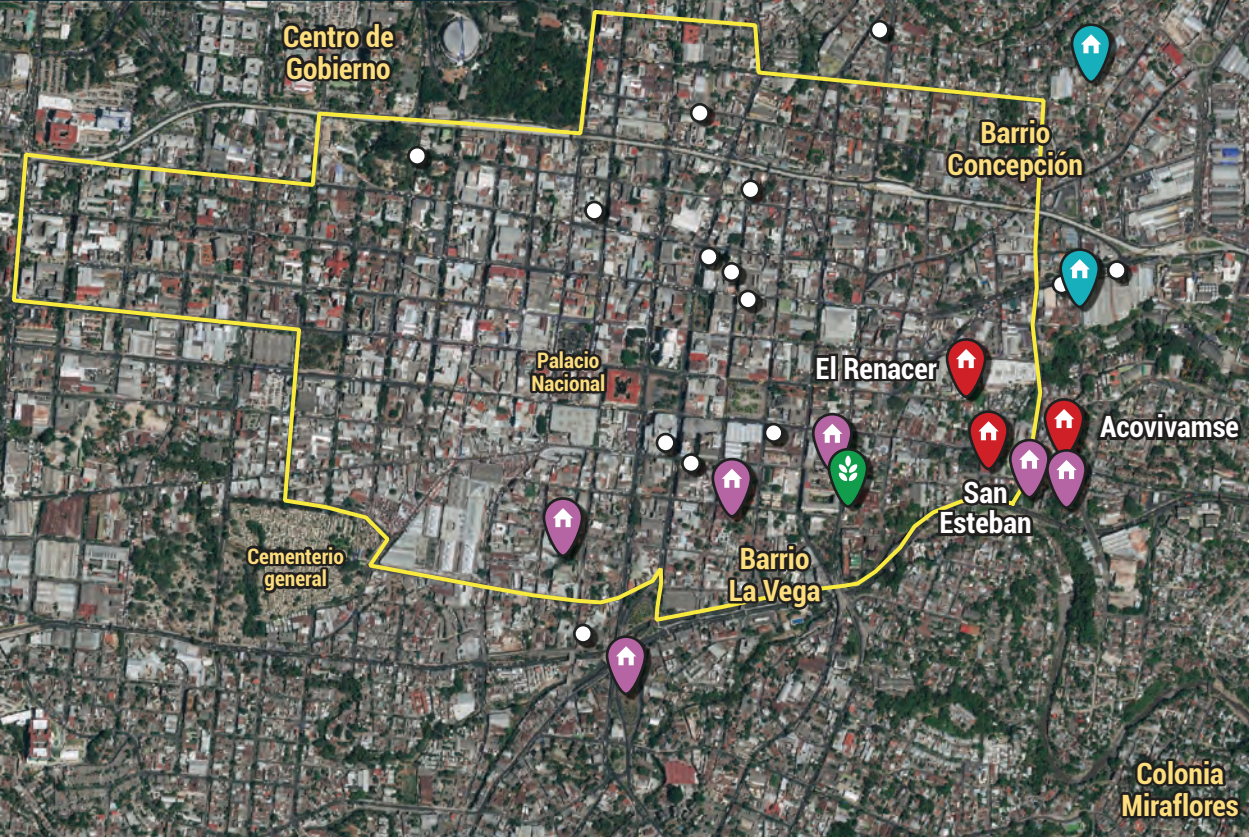
El ingreso de los hogares cooperativistas oscila entre uno y cuatro salarios mínimos y, en muchos casos, proviene de actividades de subsistencia en el sector informal. Las familias que se integran a las cooperativas, por tanto, suelen residir en asentamientos precarios, en profundas condiciones de exclusión social y riesgo ambiental.


En 2015, la Coordinadora estaba integrada por 65 cooperativas, constituidas por casi tres mil familias. De estas, el 22% había terminado de construir las viviendas. Hoy existen trece cooperativas que ya se encuentran en etapa de convivencia, y en las cuales se realizan diversos proyectos para construir condiciones de sostenibilidad social, organizativa y económica. En muchos sentidos, estos proyectos han favorecido que, en su diario vivir, las cooperativas se vayan transformando en comunidades solidarias y sustentables.


A pesar de que Coceavis tiene pocos años de haber sido conformada, constituye un esfuerzo destacable de integración entre organizaciones. Más allá de las fronteras nacionales y de las diferencias entre cuerpos técnicos y movimientos sociales, su unidad se apoya en procesos ejemplares como los que conducen las cooperativas del Centro Histórico de San Salvador o las de la ciudad de León, entre otros, que van marcando la pauta de lo que el movimiento regional puede plantearse como horizonte político y social.


MAPA 8. Recuperando la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador


Mapa: HIC-AL.





 Centro Histórico de San Salvador


 **Huerto comunitario**
Espacio autogestionado
los grupos pre-cooperativas

 **Catastro popular**
Predios con potencial de reciclamiento
identificados por Fescovam

 **Vivienda precaria**
Mesones ocupados por familias
cooperativistas

 **Vivienda cooperativa**
Conjuntos actualmente habitados,
rehabilitados por ayuda mutua

 **Proyectos de vivienda**
A ejecutarse con recursos
de la cooperación italiana

 250 m

La barriada cooperativa de León

Ubicada en el sector de expansión urbana de la ciudad de León, la barriada cooperativa se presenta como un referente para la reivindicación del derecho a suelo habitable. Liderada por la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua "Comunidades Dignas" (Cencovicod), la lucha ha resultado en la disposición de un acervo inmobiliario, producto de un esfuerzo de planificación asumido por la Municipalidad. Esta cartera de tierras ha sido creada con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda por parte de las cooperativas de vivienda de esa localidad. A la fecha, tres han logrado construir sus proyectos de vivienda.

En la barriada ninguna propiedad tiene título individual, los terrenos y las viviendas construidas para las 74 familias están a nombre de las cooperativas, mientras que las familias tienen contratos de uso y habitación que les permiten gozar de las viviendas como un bien de derecho, mas no como mercancías. Cuentan además con un salón comunal, una escuela y otros equipamientos sociales multifuncionales que han construido en colectivo, siempre bajo el esquema de trabajo de la ayuda mutua.

Esta experiencia se ha vuelto un emblema del cooperativismo de vivienda nicaragüense y pesa en las negociaciones que se llevan en otros municipios, como La Trinidad, Jinotepe, Estelí, Juigalpa, Managua y Matagalpa, así como en las gestiones con la institución a la que le corresponde facilitar políticas subsidiarias para la construcción de vivienda: el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur). A la fecha, el movimiento cooperativista nicaragüense ha logrado obtener el compromiso de estas instancias estatales para otorgar un subsidio por familia cooperativista, así como la exoneración de impuestos en la compra de materiales constructivos, que contribuyen a reducir el peso del crédito de la cooperativa para la construcción de un proyecto de vivienda.

El Centro Histórico de San Salvador

En el casco fundacional de San Salvador, las personas que viven en condiciones de precariedad son la mayoría. Sin embargo, desde hace una década, cerca de 200 familias decidieron organizarse en cinco cooperativas de vivienda que luego conformaron la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fescovam). En colaboración con el equipo técnico de la Fundación Salvadoreña de Vivienda Mínima (Fundasal), se han consolidado alianzas en redes de apoyo con distintos actores académicos y sociales. Una de las más importantes es la del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador (FPDICHSS), plataforma que hoy funge como espacio de debate y propuesta sobre el devenir de la zona.

Resultado de esta sinergia de actores, en 2007, un Decreto de Declaratoria del CHSS como Bien Patrimonial fue aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña. Asimismo, la Alcaldía de San Salvador ha reactivado la Oficina Municipal para el Desarrollo del Centro Histórico y lideró, junto al Gobierno Central, la elaboración de un Plan Parcial para dicha zona con metodologías participativas.

Las cooperativas que han logrado construir y rehabilitar conjuntos de vivienda, están integradas por familias que solían habitar en mesones, hacinadas, bajo la constante amenaza de desalojo y carecían de servicios básicos de agua y saneamiento. Al organizarse y conocer más sobre su derecho a la vivienda y a la ciudad, las familias cooperativistas desarrollaron tomas pacíficas de varios terrenos en los que habían vivido por generaciones, así como otras acciones de incidencia para conquistar el acceso a suelo. Después de años de trabajo, se han construido tres complejos habitacionales en los que ya conviven 60 familias.

Los frutos de la lucha son evidenciables y se avecinan mejores tiempos: en 2012, se logró concretar la gestión de 12 millones de dólares ante la cooperación italiana, a ser ejecutados por el Gobierno Central para la construcción de complejos habitacionales en altura, bajo la autogestión y la ayuda mutua de las cooperativas de vivienda. Se prevé que dichos fondos garanticen vivienda para 325 familias.



Fotografía: Darwin Dikó Cañas Betancourt.

FICHA 8.

Campamentos de Pioneros: del barrio a la ciudad

Venezuela. 15 conjuntos construidos. Documental en <https://youtu.be/KkER8qDS3aQ>

Nacido en 2004 en el seno de los Comités de Tierra Urbana (CTU), el Movimiento de Pioneros ocupa predios en desuso que son expropiados por la Municipalidad y luego transferidos a los pobladores. El movimiento cuenta con ingenieros y arquitectos que apoyan a los grupos organizados desde el diseño hasta la realización por ayuda mutua de sus conjuntos habitacionales verticales. Si bien el Estado proporciona los fondos iniciales, se busca que el reembolso mensual de las familias recaiga en un Fondo Autogestionario que permita financiar nuevos proyectos en zonas centrales de la ciudad, es así que se conquista el derecho al suelo históricamente negado a aquella clase trabajadora que construyó los barrios de la ciudad por sus propios medios.

Antecedentes

El movimiento urbano en Venezuela encuentra sus orígenes en las Asambleas de Barrios y en las múltiples resistencias que de manera determinada, pero aislada, se formaron durante la etapa histórica conocida como la Cuarta República (1958-1998). En este periodo de auge petrolero, el país alcanzó los niveles más elevados de urbanización en América Latina, de modo que el 90% de la población se concentraba en ciudades caracterizadas por la segregación, la pobreza y la violencia, con amplios sectores y barrios autoconstruidos por sus habitantes al margen de cualquier tipo de apoyo estatal. Aunado a ello, los "cerros poblados" ni siquiera aparecían en los planos oficiales de la administración pública.

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 dio inicio a un proceso revolucionario que buscaría atender a aquellas comunidades que se habían visto forzadas a la ocupación irregular de los espacios residuales de la ciudad (quebradas, altas pendientes, periferia sin servicios) para satisfacer sus necesidades de vivienda. El desafío era enorme, no sólo porque en dichos asentamientos vivía más de la mitad de la población venezolana, sino también porque la regularización afectaría grandes intereses inmobiliarios creados a la sombra de la Cuarta República.

Uno de los pasos más importantes para transformar esta situación se dio poco antes del intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, precisamente cuando el Gobierno Bolivariano convocó a la conformación de los CTU mediante el Decreto Presidencial N° 1666 de regularización de tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares¹⁵. Además de promover la regularización y mejoramiento de los asentamientos, este decreto sentó las bases legales para devolver el protagonismo político a la población en los procesos de planeación. Así, con la profundización de la revolución, cerca de siete mil CTU se conformaron en todo el país. Estos órganos de democracia local dieron un impulso a la participación vecinal y se abocaron, entre otras tareas, al levantamiento catastral y elaboración de múltiples *Cartas del Barrio*.

A mayor escala, los CTU participaron en la discusión de la Ley de Tierras Urbanas, aprobada en 2009, la cual abrió la posibilidad de tomar en custodia predios ociosos, previa denuncia ante las autoridades competentes. Este fue un paso importante hacia el reconocimiento de una necesidad apremiante: no bastaba con ofrecer certeza jurídica y dignificar los asentamientos precarios, había que contemplar el problema de la vivienda que enfrentaban las nuevas generaciones, aquellas que habían nacido en los barrios y cuyo horizonte de vida era el hacinamiento en la casa familiar o la ocupación de tierras en lugares cada vez más alejados de la ciudad.

Consciente de esta situación, la política de “democratización de la ciudad y transformación urbana” de los CTU contempló la creación de nuevas comunidades conformadas por las familias más necesitadas, las cuales serían ubicadas y organizadas por los propios comités dentro de su sector o parroquia. Así surgieron los Campamentos de Pioneros, no como un programa habitacional del Estado sino como resultado de una propuesta autónoma de organización popular para la movilización por el derecho a una vivienda y hábitat dignos.

Construyendo nuevas comunidades socialistas

Las familias adherentes a los Campamentos de Pioneros deben tener un conocimiento pleno de la propuesta política del movimiento y enfrentar una necesidad real de vivienda: son gente afectada por desastres naturales, en situación de riesgo, hacinada, arrimada, nuevas parejas, inquilinos o familias en situación de calle. Cada campamento cuenta con una instancia mínima de organización: los grupos de base están constituidos por aproximadamente veinte familias que provienen de un mismo sector y/o que mantienen lazos de amistad y camaradería. A su vez, los grupos de base se asocian en la Organización Comunitaria Integral de Vivienda y Hábitat (Ocivha) de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat de 2005, de manera que se conformaron nuevas comunidades de alrededor de 200 familias.

Es a través de la Ocivha que se lleva adelante el desarrollo autogestionario de la comunidad, al otorgar la personalidad jurídica necesaria (asociación civil) para realizar la adquisición y titularizar la tierra en propiedad colectiva, así como para la gestión de recursos financieros.

En 2011, tras un encuentro televisado entre el presidente Chávez y los voceros del Movimiento de Pobladores¹⁶, se abrió la oportunidad de echar a andar una serie de experiencias piloto sobre terrenos que ya se tenían en custodia. El gobierno aprobó entonces la asignación de recursos financieros necesarios para la ejecución de conjuntos habitacionales que involucraban a más de 1 700 familias organizadas en 15 Campamentos de Pioneros.

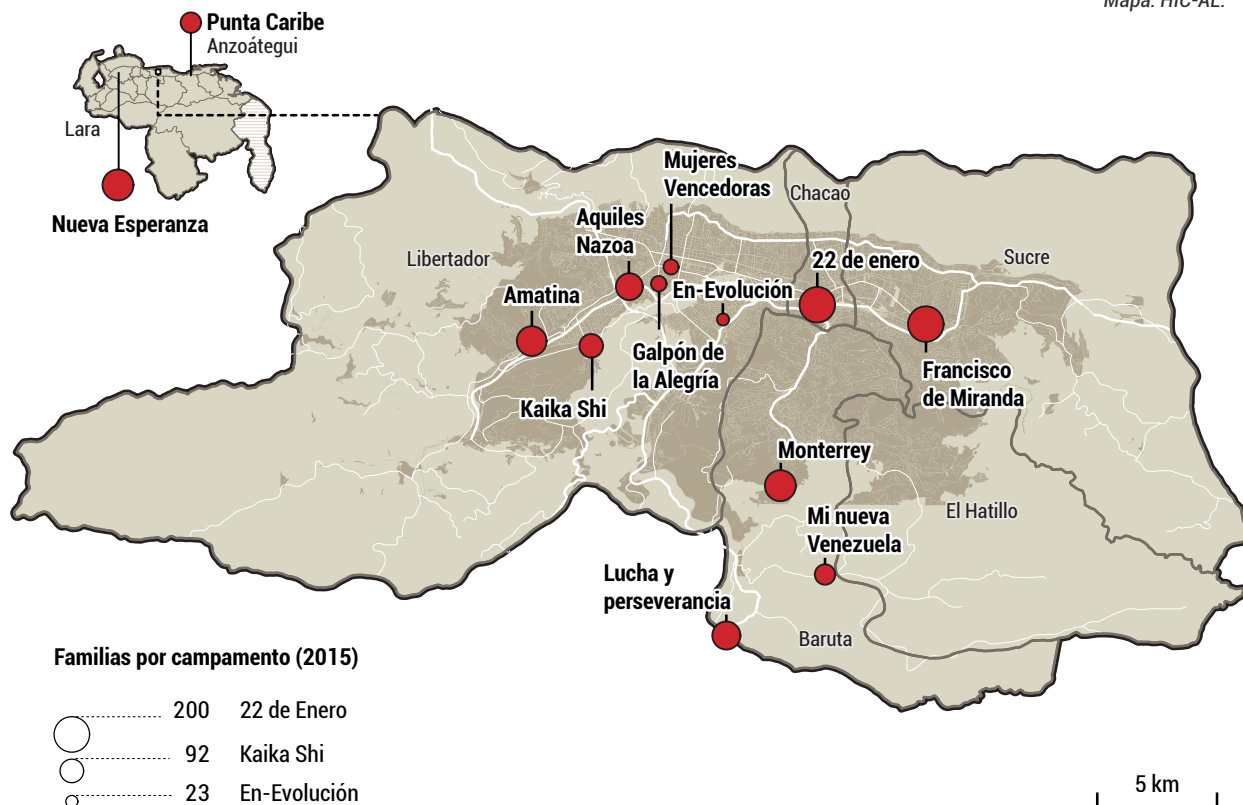
Al mismo tiempo, se instalaron mesas de trabajo con la Vicepresidencia de la República que permitieron incidir en el desarrollo e implementación de leyes, políticas y programas de vivienda de forma corresponsable. Tal es el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), impulsada ese mismo año y con la cual se habían producido –hasta diciembre de 2015– un millón de viviendas de

¹⁵ Andrés Antillano, “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los comités de tierras urbanas”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Venezuela, 2005, 11 (3).

¹⁶ Los Campamentos de Pioneros forman parte de la plataforma Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela que reúne a diversas organizaciones en torno a la lucha por la autogestión y la revolución urbana: los Comités de Tierra Urbana, las Trabajadoras Residenciales por Venezuela, el Movimiento de Inquilinos, el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados y el Frente de Grupos Organizados por el Buen Vivir.

MAPA 9. Realizaciones del Movimiento de Pioneros en el área metropolitana de Caracas

Mapa: HIC-AL.



interés social. En este marco, los Campamentos de Pioneros fungieron como un ente ejecutor dentro del Órgano Superior de Vivienda, que aglomera a los distintos ministerios y actores responsables de ejecutar la GMVV.

La ejecución, administración y construcción es responsabilidad de la organización, mientras que al gobierno nacional corresponde la dotación de servicios, maquinaria y financiamiento. Las obras también han contado con el suministro de materiales, tales como el cemento y el acero, por parte de Construpatria, ente encargado de la adquisición y distribución de materiales para la GMVV. A su vez, se han recibido maquinarias pesadas adquiridas por el gobierno mediante convenios de cooperación con la República Popular de China.

Sin embargo, los Campamentos de Pioneros se diferencian de la mayoría de los entes ejecutores de la GMVV por impulsar una política autogestionaria que abarata costos y enfatiza la formación y organización política antes que la mera construcción de vivienda. Aquí cada campamento



Construcción por ayuda mutua en el campamento Kaika Shi. Fotografía: Darwin Dikó Cañas Betancourt.

administra los recursos de forma colectiva y planifica su hábitat. Además de aportar trabajo propio durante la construcción, las familias mantienen el terreno, las casas y los equipamientos comunes en propiedad colectiva.

Al momento que una familia desee abandonar el campamento, el aporte realizado sobre el patrimonio de la organización se le reintegra. Esta modalidad impide que las viviendas sean absorbidas por el mercado inmobiliario especulativo ya que el uso, venta y valor de los inmuebles está regulado por la propia organización, con lo cual evitan los desalojos indirectos y logran que prevalezca el uso social de la vivienda, como derecho humano y social, por sobre la propiedad.

Para mantener la cohesión, cada comunidad cuenta con coordinadores políticos, comisiones de trabajo y representantes familiares que se reúnen semanalmente para organizar actividades internas, discutir cuestiones políticas y revisar los avances del movimiento en su conjunto.



Fotografía: Bachillerato Popular Miguelito Pepe.

FICHA 9.

El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y la política de vivienda autogestionaria en Buenos Aires

Argentina. Federación de cooperativas de vivienda y trabajo. Sitio web: <http://moi.org.ar>

El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) surge en 1991 en un contexto de intensificación de las ocupaciones de edificios y tomas de tierra. Con el tiempo ha adquirido el perfil de una federación que acuerpa cuatro cooperativas de trabajo, 17 de vivienda y un equipo profesional interdisciplinario. Aunque se desenvuelve principalmente en la capital, el MOI impulsa proyectos en cinco provincias: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Es además un actor de peso en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), y como tal ha participado en la conquista de derechos sociales como el reconocimiento de la vivienda autogestionaria en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996, y la posterior puesta en marcha y defensa de la Ley 341.

Antecedentes

Los orígenes del MOI coinciden con el derrumbe de la dictadura que instaló políticas de corte neoliberal a costa del asesinato de 30 000 personas (1976-1983). A finales de este período y durante la reinstalación democrática, un grupo de más de cien familias decidió ocupar un inmueble abandonado perteneciente al gobierno local. El antiguo edificio del Patronato de la Infancia, conocido como El Padelai, se convertiría a partir de 1987 en la trinchera y campo de experimentación de la lucha por la regularización dominial y, más ampliamente, por el derecho a la ciudad.

Asesoradas por la asociación Programa Hábitat (Proha) y por el Taller Vertical de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata (FAU-UNLP) –ambos surgidos del Centro de Estudios del Hábitat Marcos Winograd–, las familias del Padelai lograron elaborar una propuesta arquitectónica y organizativa para rehabilitar el lugar de manera autogestiva. Integraron viviendas, locales comerciales y un complejo comunitario-barrial que contemplaba un jardín maternal y un salón de usos múltiples. Sin embargo, a pesar del acuerdo logrado con la autoridades, la propuesta no prosperó y en 2003 los habitantes fueron desalojados por la fuerza pública.

Contra todo, el proceso seguido en San Telmo logró suscitar el interés de otros grupos de ocupantes porteños que, atraídos por el movimiento lanzado en el Padelai y por el modelo cooperativista uruguayo, se sumaron a una serie de reuniones que culminaron, en abril de 1991, con la decisión de constituir el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.

Durante su etapa de consolidación, los militantes del MOI y algunas familias cercanas a la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, desarrollaron una estrategia de inmersión y trabajo político en los edificios ocupados. El proceso se sustentaba en reuniones sistemáticas de tipo asamblea y una intensa interacción cotidiana entre familias y militantes. De esta forma, hacia mediados de los noventa, además de haber ampliado su red de militantes y profesionales, el MOI incorporaba a unas 500 familias que, organizadas en cooperativas, impulsaron procesos de regularización dominial y en algunos casos adquirieron predios en el mercado para el desarrollo de cooperativas de vivienda.

Incidencia en la política habitacional

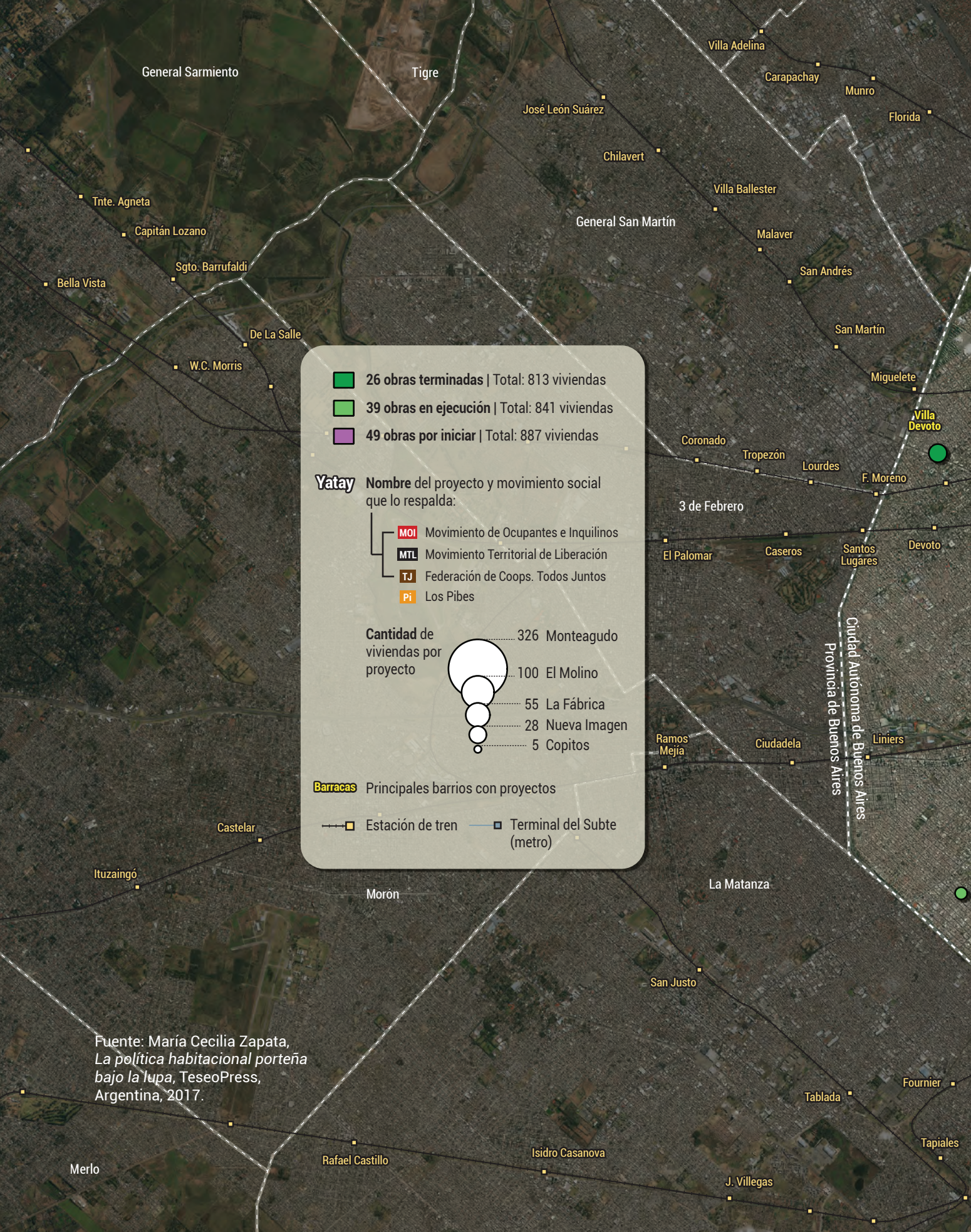
La participación del MOI y otras organizaciones sociales en los debates de la Asamblea Constituyente de la Ciudad, contribuyó a la definición de una política activa de recuperación de inmuebles desocupados para resolver las necesidades habitacionales de los sectores populares. Según lo establecido en el artículo 31º de la Constitución adoptada en 1996, la Ciudad asumió el mandato de promover planes autogestionarios de vivienda, es decir, el desarrollo de las capacidades de la sociedad organizada para producir el hábitat y las viviendas, en su condición de bienes de uso y no mercancías.

A partir de este reconocimiento constitucional, se gestó en 1999 la Ley 341, mediante el establecimiento de una mesa multiactoral motorizada por el MOI, la Mutual de Desalojados de La Boca y la primera Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sancionada en diciembre de 2000, esta ley otorga créditos blandos con recursos provenientes del presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para facilitar el acceso a la vivienda a hogares de bajos ingresos. Como rasgo central, reconoce a las organizaciones sociales como sujetos de crédito y ejecutoras de los proyectos. Incluye la posibilidad de compra de inmuebles, obra nueva, rehabilitación o mejoramiento, y recursos para asistencia técnica interdisciplinaria. El crédito se reintegra hasta un plazo de treinta años. Se subsidia la tasa de interés, con franjas entre cero y cuatro por ciento, y prevé cuotas de devolución no superiores al 20% de los ingresos familiares. No establece restricciones mínimas por el nivel de ingreso para las familias, ni requiere ahorro previo.

De este modo, a pesar de las limitaciones burocráticas, los ahogos financieros y el incremento sostenido del precio del suelo, se constituyeron numerosas cooperativas integradas por familias residentes en hoteles-pensión que se encontraban en riesgo de desalojo. Además, surgieron experiencias desde los movimientos de trabajadores desocupados, entre las cuales destacan –por su escala y complejidad– aquellas que fueron impulsadas por el Movimiento Territorial Liberación (MTL) y el MOI, ambos integrantes de la CTA.

Con base en el Programa de Autogestión para la Vivienda habilitado por la propia Ley 341, el MTL construyó el conjunto de Monteagudo, con 320 viviendas, que incluye equipamiento comunitario y comercial, así como una estación de radio. Los proyectos del MOI, en cambio, sumaron un total de 180 viviendas con equipamientos comunitarios, repartidas en cuatro proyectos, y un centro educativo integral autogestionario.

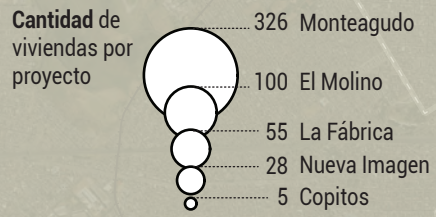
Aunado a este programa, y considerando los tiempos requeridos para hacer efectivos los proyectos arquitectónicos, las organizaciones territoriales de base –en particular el MOI– presionaron y obtuvieron en 2005 la creación del Programa de Vivienda Transitoria (PVT). Éste consiste en brindar un subsidio a aquellas organizaciones sociales constituidas en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, que se encuentren involucradas en procesos de obtención de vivienda definitiva en el marco de los programas dependientes del IVC.



- 26 obras terminadas | Total: 813 viviendas
- 39 obras en ejecución | Total: 841 viviendas
- 49 obras por iniciar | Total: 887 viviendas

Yatay Nombre del proyecto y movimiento social que lo respalda:

- MOI Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
- MTL Movimiento Territorial de Liberación
- TJ Federación de Coops. Todos Juntos
- Pi Los Pibes



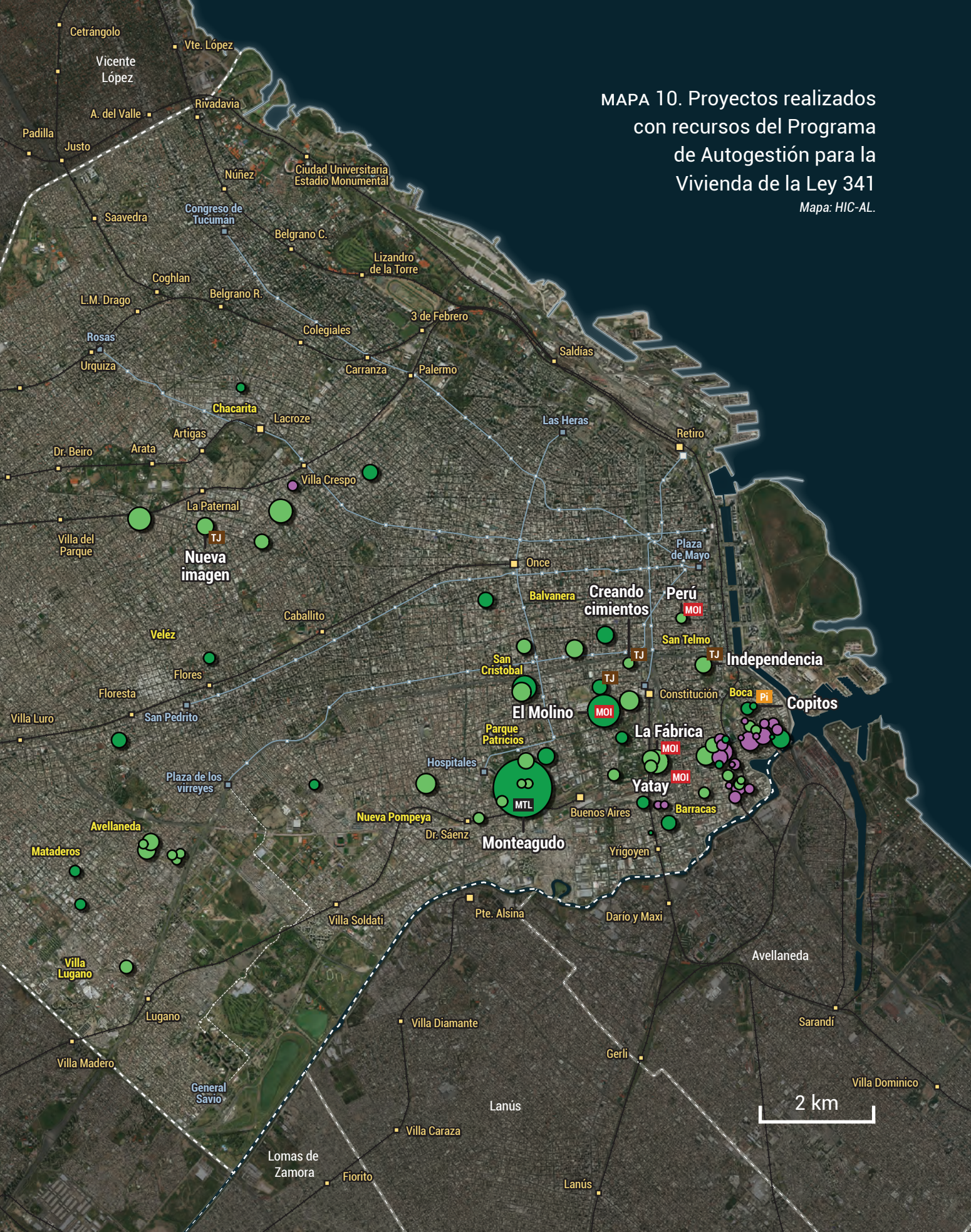
Barracas Principales barrios con proyectos

- Estación de tren
- Terminal del Subte (metro)

Fuente: María Cecilia Zapata, *La política habitacional porteña bajo la lupa*, TeseoPress, Argentina, 2017.

MAPA 10. Proyectos realizados con recursos del Programa de Autogestión para la Vivienda de la Ley 341

Mapa: HIC-AL.





La Fábrica cuenta con 55 viviendas y 2 salones de usos múltiples abiertos al barrio. *Fotografía: Camila Moro.*



Avance de obra de la cooperativa Yatay. *Fotografía: Pierre Arnold.*

A partir de los logros de la Ley 341 y la experiencia allí acumulada, se ha impulsado la conformación del Colectivo de Hábitat Popular para nacionalizar el marco normativo. En octubre de 2016, se ingresó un proyecto de Ley Nacional de Producción Autogestionaria del Hábitat, que al inicio de su curso legislativo, cuenta con aprobación de la comisión de vivienda y plantea la articulación de los siguientes instrumentos: Banco Nacional de Tierras; Fondo Nacional para la Producción Autogestionaria de Hábitat; Escuela Nacional de Autogestión; creación de un Instituto de Producción Autogestionaria de Hábitat para implementar la política; financiamiento de Unidades Productoras de Hábitat (federaciones, cooperativas, mutuales y asociaciones, junto con sus equipos profesionales interdisciplinarios); y centrales estatales de suministro de materiales, maquinaria y herramientas. Su objetivo será abrir el financiamiento público para obra nueva, mejoramiento barrial en villas y asentamientos, reciclajes, infraestructura y equipamiento comunitario, desde una concepción participativa en la cual las organizaciones sociales tendrán un lugar central a lo largo del ciclo de ejecución y evaluación de la política.

Salud y educación en la agenda del MOI

Más allá de la vivienda, el MOI cuenta con un área de género que participa en la generación de espacios tales como los Encuentros Nacionales de Mujeres. Asimismo, cuenta con un área de comunicación que al mes de marzo de 2017 había publicado 106 ediciones de su periódico *El Informador*, además realiza programas de radio como *Habitando Ciudad*, y diversas líneas de producción serigráfica.

Desde el área de salud del MOI, se han realizado talleres sobre salud sexual y reproductiva, adicciones y primeros auxilios. Otras veces se han impulsado actividades territoriales como campañas de vacunación, en articulación con los centros de salud comunitarios.

En la zona de mayor arraigo del MOI, entre los barrios de Barracas y San Telmo, se ubican los grandes hospitales psiquiátricos Borda y Moyano. Debido a esta cercanía, y dado que el movimiento tiene cierta experiencia en salud comunitaria y tratamiento de adicciones, en 2002 se decide implementar el Programa de Inserción Comunitaria (PIC) con el fin de favorecer la inclusión social de personas con padecimiento psíquico y lograr su alta de los hospitales, como proceso de desmanicomialización. Las nueve personas que se han incorporado al MOI por este medio llevan adelante el proceso cooperativo en un plano de igualdad con otros miembros, en un esfuerzo que ha implicado la articulación con un



Inauguración de la cooperativa de vivienda La Fábrica.

Fotografía: Jerónimo Díaz.

grupo de profesionales del hospital Borda. Por el carácter innovador del PIC, el movimiento fue invitado a participar como organismo consultor del cumplimiento de la Ley de Salud Mental. En la actualidad, se sigue articulando con redes de pacientes y familiares para el desarrollo de emprendimientos productivos.

Por otra parte, una de las áreas de trabajo más importantes del movimiento corresponde a los procesos político-pedagógicos, que fueron unificados en 2008 en torno al Centro Educativo Integral Autogestionario (CEIA). En este espacio, ubicado en el predio conocido como La Casona, se promueve la participación y la construcción colectiva de saberes y proyectos. En particular, allí se desenvuelve el bachillerato popular Miguelito Pepe, cuyo objetivo –al igual que el del bachillerato Alberto Chejolan-Huellas del Barrio 31– es aportar a la formación integral de sujetos críticos y conscientes. Entre 2010 y 2014, 72 jóvenes egresaron de los bachilleratos populares que impulsa el MOI, y más de cien estudiantes se encuentran cursando sus estudios secundarios.

Para los más pequeños, existe desde 2006 el jardín maternal Construimos Jugando. Su equipo de 13 educadores ha favorecido el desarrollo integral de 120 niñas y niños. En 2015, el jardín contaba con 65 pibes inscritos.

Finalmente, en cada una de las ciudades donde hace vida el movimiento, se generan iniciativas para el intercambio de conocimientos prácticos. En talleres como el de cerámica precolombina Ala de Cuervo en la capital, o el taller textil Hilando Comunidad en Santa Fe, la organización se vincula con la comunidad donde se inserta.



Marina Thia frente al edificio de la cooperativa Nueva Imagen. Fotografía: Jerónimo Díaz.

FICHA 10.

La Federación de Cooperativas Todos Juntos

Buenos Aires, Argentina.

A partir de la crisis de 2001, la Ley 341 fue apropiada por un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales que hoy reclaman su nacionalización. Es el caso de la Federación Todos Juntos, conformada por siete cooperativas de vivienda y una de trabajo que integran cerca de 186 familias, la mitad de ellas inmigrantes.

Según Marina Thia, integrante de la cooperativa Nueva Imagen: “el Instituto de Vivienda nos ponía muchas trabas porque éramos inmigrantes y porque la zona que elegimos para vivir es de clase alta, en plena capital federal. Hay una idea de que, como pobres y migrantes, los que acceden a los programas de vivienda tienen que vivir en zonas periféricas, alejados de la ciudad”. Ante esta problemática, entre 2006 y 2007 la dirigente social comenzó a sumar esfuerzos de diversos grupos que presentaban desgaste a consecuencia de la dilatación en el proceso de obra.

Además de haber conseguido la concreción de tres proyectos, desde 2009, la federación participa del espacio Habitar Argentina, un colectivo multisectorial de escala nacional que defiende el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat. En él se incluyen organizaciones territoriales y campesinas, universidades e inquilinos/as, cuyo objetivo es incidir en el ámbito legislativo. El colectivo cuenta con una plataforma política de discusión y propuestas, cuyo documento se denomina Consenso Nacional para un Hábitat Digno. Desde ahí, ha formulado proyectos de ley en materia de ordenamiento territorial, vivienda y producción social del hábitat; Programa Nacional de Regularización Dominial; y regulación de procedimientos de desalojos.

Otro ámbito de incidencia de la federación es el Colectivo de Hábitat Popular, que impulsa junto con el MOI la nacionalización de la Ley 341 mediante el proyecto parlamentario Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular.



Fotografía: Marcha de la União en Brasília.

FICHA 11.

La UNMP y el caso de la cooperativa Esperança

Brasil. Unión de movimientos presentes en 18 estados.

Sitio web: <http://autogestao.unmp.org.br>

La União Nacional por Moradia Popular (UNMP) está conformada por movimientos de vivienda de 18 estados brasileños, en torno a los siguientes principios: organización popular de base, autogestión, reforma urbana, lucha contra los desalojos y defensa de políticas públicas incluyentes. Recientemente, protagonizó la lucha por incluir a los productores sociales de vivienda en el marco del programa habitacional Minha Casa, Minha Vida-Entidades. El proyecto de la Cooperativa Esperança, detallado en este artículo, fue el primero en emplear dicho programa en Río de Janeiro, con excelentes resultados arquitectónicos y sociales. Además, hizo valer la función social de la propiedad, incluida en la Constitución de Brasil, para acceder a terrenos que eran de dominio federal.

Elementos de historia sobre la política habitacional brasileña

Las célebres favelas brasileñas son muestra de que las personas que viven en situación de pobreza luchan con todos los medios que tienen a su alcance para vivir dignamente. Sin embargo, son también la expresión urbana de un Estado que ha sido históricamente incapaz de cumplir su papel de garante del derecho a la vivienda. Esto se explica, en parte, por el acelerado proceso de urbanización derivado de las grandes migraciones campo-ciudad, pero sobre todo porque los primeros intentos por generar una política habitacional federal se dieron en plena dictadura militar (1964-1985).

Como consecuencia del abandono del sector más necesitado de la población, sumado a la debilidad del Sistema Financiero de Habitación (SFH) heredado de este período, los sin techo, los favelados, los inquilinos y los moradores de inmuebles ocupados, se fueron organizando en movimientos propiamente urbanos que a su vez dieron origen a la Unión Nacional por Vivienda Popular (UNMP, por sus siglas en portugués), que articula movimientos de 18 estados de la federación.

Durante los noventa, se constituyó el Foro Nacional de Reforma Urbana (FNRU), integrado por movimientos populares, organismos civiles e instituciones académicas, en torno a la gestión democrática de la ciudad, la promoción del derecho a la ciudad y la regulación del suelo urbano con base en el principio de la función social de la propiedad. Este último fue reconocido en 2001 con la aprobación del Estatuto de las Ciudades. Asimismo, el FNRU tuvo un papel determinante en el proceso que culminó en 2003 con la creación del Ministerio de las Ciudades y la instalación del Consejo de las Ciudades, en el cual participa formalmente la UNMP y desde donde se definen las políticas sectoriales vinculadas a las temáticas urbanas.

¹⁸ Véase: Evaniza Rodrigues y Leonardo Pessina, "São Paulo. Mutirões autogestivos", en *De la marginación a la ciudadanía*, Forum Barcelona, HIC, 2004.

¹⁹ Véase: Leonardo Pessina, "La experiencia brasileña en vivienda y ciudad", en *El camino posible*, Uruguay, Trilce, 2012.

Tras la llegada de Luiz Inácio "Lula" da Silva al gobierno federal, las experiencias de autogestión conducidas en ciudades como São Paulo¹⁸ inspiraron el diseño de los primeros programas masivos de vivienda social. Así, en 2004 se creó el Crédito Solidario para atender familias de escasos recursos, organizadas en cooperativas, asociaciones y demás entidades privadas que operan sin fines de lucro. Si bien este programa resultó poco práctico para las organizaciones, dada su burocracia, en algunos estados del país ayudó a difundir la construcción por autogestión.

En 2005, luego de más de una década de lucha para llevar adelante el primer proyecto de ley de iniciativa popular en el país, se consiguió la creación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNHIS) y su Fondo de Vivienda. Con este marco jurídico y financiero, se estableció desde el Ministerio de las Ciudades, el Programa de Apoyo a la Producción Social de la Vivienda, con el cual se logró la adquisición de terrenos para construir vivienda.

Sin embargo, ese mismo año el sistema comenzó a sufrir retrocesos debido a un cambio de dirección en el Ministerio de las Ciudades, donde fue colocado un integrante del Partido Progresista, como consecuencia de lo que en Brasil se conoce como "presidencialismo de coalición" (cuando el presidente carece de mayoría en

las Cámaras, distribuye los ministerios a partidos aliados en aras de formar una base parlamentaria de apoyo). Lo que hizo la derecha fue romper con la idea de vincular la política habitacional con la política urbana; ésto, en palabras de Leonardo Pessina, "significó el fin de una propuesta holística, más avanzada y original, que estaba sustentada en las fuerzas de izquierda"¹⁹.

En este contexto, el gobierno federal lanzó en 2009 el mayor programa de vivienda del que se tenga memoria en América Latina: Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Con él se ha facilitado la construcción de cuatro millones de viviendas (el programa prevé un total de 6.75 millones hasta 2018) para familias con ingresos entre cero y diez salarios mínimos (0 a 3 000 dólares), así como la designación de subsidios inversamente proporcionales a los ingresos de las familias. No obstante, dicho programa fue concebido como un instrumento "anticíclico" en plena crisis financiera de 2008, con el objetivo de mover la cadena productiva de la construcción y, sólo de manera complementaria, atacar el problema de la vivienda. Desde este enfoque, naturalmente, los recursos públicos comenzaron a fluir hacia las grandes empresas constructoras.

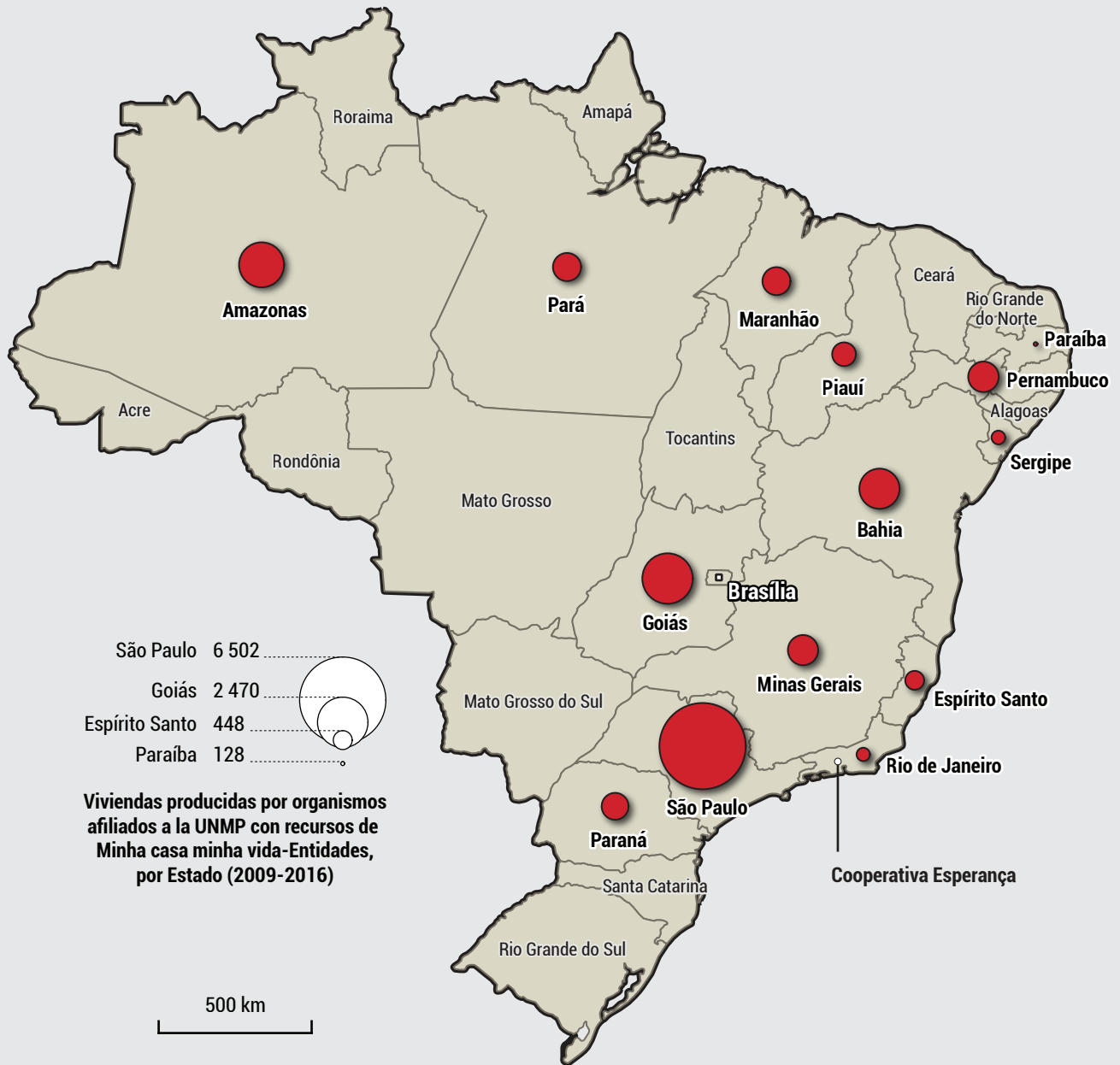
MCMV-Entidades

Ante esta situación, la UNMP, junto con otras organizaciones, protagonizó la lucha por incluir a productores sociales de vivienda y hábitat. Así consiguió que al menos el 1% del presupuesto del programa fuese dirigido a proyectos habitacionales autogestionados. Esto se logró con la creación del subprograma MCMV-Entidades, que entre 2009 y 2016 atendió con créditos y subsidios a 88 000 familias con ingresos de hasta 1 800 reales (530 dólares), organizadas en cooperativas de vivienda, asociaciones u otras entidades con finalidad habitacional y sin fines de lucro, previamente habilitadas por el Ministerio de las Ciudades.

Antes de ser paralizado por el gobierno golpista de Michel Temer, la UNMP logró abrir 103 frentes de obra en 14 estados con recursos de MCMV-Entidades, donde suman 19 000 viviendas. Esta modalidad permitió reforzar los procesos de educación y organización popular, tan importantes como la construcción misma de las viviendas. Asimismo, la UNMP conformó un grupo de monitoreo del programa para acompañar las contrataciones y agilizar el flujo presupuestal, que propuso mejoras para que los dispositivos formales pudieran adaptarse a las prácticas colectivas y a las realidades objetivas de los grupos populares.

MAPA 11. Geografía de los proyectos impulsados por la União Nacional por Moradia Popular en el marco de MCMV-Entidades

Mapa: HIC-AL.



El caso de la Cooperativa Esperança

La Cooperativa de Vivienda Esperança surgió en marzo del año 2000 para mejorar las condiciones de vida de 70 familias de escasos recursos, casi todas lideradas por mujeres que vivían en condiciones de hacinamiento. El proyecto fue motivado por dos experiencias previas: las cooperativas Shangri-lá y Herbert de Souza, que lograron construir sus viviendas con el apoyo social de la União por Moradia Popular de Río de Janeiro (UMP-RJ), con recursos de la cooperación internacional (Misereor/KZE y otras ONG) y con la asesoría técnica de la Fundación de Derechos Humanos Bento Rubião (FBR).

A diferencia de aquellos proyectos, Esperança optó por recurrir a la búsqueda de financiamientos públicos. Para ello contó con asesoría de la FBR, que además acompañó la elaboración e implementación de los proyectos social, urbano y arquitectónico.

La búsqueda del terreno fue sin duda la etapa más laboriosa de todo el proceso. Al proyectarse en una región de alta valorización inmobiliaria, en Jacarepaguá, al oeste de Río, la cooperativa optó por negociar con el gobierno municipal para ser incluida en el proyecto de refuncionalización de la colonia Juliano Moreira: una propiedad federal de 780 hectáreas que tras haber servido como área hospitalaria, fue cedida al gobierno local en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), con lo que hizo valer el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad. La obtención de un lote en esta colonia fue posible mediante la firma de un convenio entre la UMP-RJ y la Municipalidad. Pero esta última priorizó el desarrollo de conjuntos cerrados y de baja calidad arquitectónica, lo que dejó fuera a varios grupos que esperaban construir sus viviendas en autogestión.

La cooperativa se enfrentó además a la legítima reivindicación de la comunidad que reclamaba la construcción de una plaza pública en el lote asignado. En efecto, a pesar de contar con un acuerdo de financiamiento del Crédito Solidario para iniciar la construcción, Esperança no pudo negar esas demandas y decidió ceder el espacio para evitar conflictos con sus futuros vecinos. Se pasó entonces a demandar otro lote y se consiguió el apoyo de la Secretaría Municipal de Habitación para la instalación de infraestructura urbana. Finalmente, la cesión legal se logró en 2011, año en que se firmó otro convenio de financiamiento de obra, esta vez con el programa MCMV-Entidades.

La modalidad "entidades" de MCMV representó un gran avance en la gestión de recursos públicos, pues permitió que las familias tuvieran poder de decisión soberano, a través de las asambleas semanales y del Consejo Fiscal, sobre la Entidad Organizadora Habilitada (en este caso la FBR). Además, las familias adquirieron responsabilidad tanto en la selección de materiales como en la gestión de la obra, realizada en este caso en régimen mixto, es decir, por ayuda mutua y con mano de obra contratada: 17 profesionistas, de los cuales cinco eran integrantes del grupo.

Además de las comisiones obligatorias dentro de MCMV-Entidades, tales como las de representantes y seguimiento de obra, Esperança se dotó de comisiones específicas: cocina, guardería, movilización, salud, consejo fiscal y coordinación. Todas las familias contribuyeron con 17 horas semanales de trabajo, que incluyen las horas de ayuda mutua y de vigilancia del terreno.

Las decisiones más relevantes, como la utilización del Fondo de Reserva para apoyar a personas mayores o con problemas de salud, se tomaron en las asambleas que tenían lugar cada domingo en la bodega. En definitiva, una estrategia para garantizar la participación de todas y todos consistió en no atribuir las casas durante la primera fase de ayuda mutua, sino hasta la fase de acabados internos.

Actualmente, los habitantes de Esperança, así como algunas personas que aportaron la mano de obra profesional, han formado una cooperativa de trabajo para la manutención de las viviendas, con el fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto y generar, además, ingresos para la comunidad.



El proyecto cuenta con 70 viviendas bioclimáticas (techos altos, ventilación cruzada), tres plazas públicas, canchas deportivas y juegos infantiles abiertos al barrio. Fotografías: Florian Kop.

La lucha de la cooperativa Esperança permitió que las familias conocieran íntimamente la evolución de la política habitacional en el país, pero también sufrieron los estancamientos administrativos durante 16 largos años. Al final, esta experiencia demuestra que, con el acceso a tierra pública urbanizada y bien ubicada, las propias familias son capaces de producir conjuntos habitacionales seguros y conviviales, conectados a la ciudad por medio de espacios públicos de gran calidad. Desde luego, además de reivindicar la presencia del Estado como proveedor de servicios, esta experiencia representa una alternativa frente al modelo dominante de grandes conjuntos habitacionales cerrados, tendientes a generar mayor segregación social.

Por ser un proyecto pionero de MCMV-Entidades en Río de Janeiro, el grupo Esperança recibió la visita de diversos grupos en formación. También recibió apoyo en mano de obra por parte de otras cooperativas de vivienda que ya habían conquistado sus viviendas en procesos semejantes, como la cooperativa de Ipiiba de São Gonçalo que, al igual que otros doce grupos organizados, están a la espera de la liberación de la tierra o de financiamiento por parte de dicho programa.

Por último, con el apoyo de Fiocruz, se está conformando una Cooperativa de Servicios que integra a representantes de Esperança y nuevos grupos de vivienda en la colonia. Esta cooperativa también desempeñará un papel fundamental en la transferencia de conocimientos. La Fundación Bento Rubião, por su parte, está impulsando un proyecto piloto de MCMV-Entidades en el Valle de Parauapebas, con base en las prácticas autogestionarias y en los aprendizajes del proyecto de Esperança.



FICHA 12.

El MUP y el caso de la Cooperativa Guendaliza'a

Ciudad de México

Celebración de una anti-pastorela. Además de recaudar fondos, las actividades culturales generan convivencia e integran al grupo.

Fotografía: archivo de Guendaliza'a.

El Movimiento Urbano Popular (MUP) se desprende de un proceso de lucha que nació a principios de los años setenta y que tuvo un auge tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México, cuando la solidaridad vecinal y la ayuda mutua se hicieron imprescindibles. Treinta años más tarde, las organizaciones sociales que conforman esta plataforma, constituyeron un actor clave en la definición de un proyecto de ciudad democrático, incluyente, sostenible, productivo, educativo y habitable, que se expresa en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Al firmar este documento en 2010, el gobierno de la ciudad endosó el compromiso de seguir sus lineamientos conceptuales y se comprometió a diseñar y promover, junto con las organizaciones del MUP y la oficina para América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL), el Programa Comunitario de Producción y Gestión Social del Hábitat (Progesha), que sería operado mediante el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI).

A partir de 2011, en aras de materializar dicho programa, tres organizaciones del MUP comenzaron a desarrollar experiencias piloto. Así, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez) identificó 35 zonas de trabajo y generó interesantes propuestas arquitectónicas y comunitarias orientadas hacia la agricultura urbana, el ahorro de energías y la vinculación con los barrios receptores de los proyectos. De igual modo, un grupo perteneciente a Patria Nueva realizó estudios técnicos y socioeconómicos sobre varias colonias de la delegación Iztapalapa. Finalmente, Sociedad Organizada en Lucha hizo lo propio: facilitó la formación de un grupo inicial de 15 familias dispuestas a experimentar en el marco del Progesha y ubicó un terreno propicio para el desarrollo del proyecto Guendaliza'a. A la fecha, a pesar de los compromisos asumidos por el gobierno local y los esfuerzos de decenas de grupos, éste ha sido el único proyecto en salir adelante.

Guendaliza'a adopta el modelo cooperativo

Guendaliza'a significa hermandad en lengua zapoteca y es el nombre que adoptó el grupo en 2014 tras un largo proceso de maduración organizativa que apunta hacia la constitución de una cooperativa de vivienda. La aventura comenzó en 2011, cuando dos grupos de solicitantes de vivienda establecidos en las colonias Arenal y Villa de Aragón, se unieron en búsqueda de un terreno y fusionaron sus ahorros. El grupo unificado no tardó en hallar un predio en la colonia Cuchilla Pantitlán, que había servido como bodega y que estaba en desuso a pesar de su excelente ubicación junto a un parque público. El dueño del predio, sensible a la causa del grupo, accedió a la venta a un precio justo, que sin embargo superaba lo ahorrado por los solicitantes de vivienda. Por este motivo se requirió en 2012 el apoyo crediticio del INVI, el cual se obtuvo por medio de la figura asociativa de Sociedad Organizada en Lucha (SOL).

Hubo entonces que plantearse mecanismos financieros más estrictos y a la vez más incluyentes. Por un lado, para combatir el ausentismo y lograr una participación equitativa, se establecieron sanciones para quienes faltaran a las asambleas. Por otra parte, se acordó que cada miembro debería aportar 45 pesos semanales al fondo de ahorro y otros 15 pesos a gastos administrativos. Para reafirmar la solidaridad interna, el fondo contempla un seguro que permite cubrir las aportaciones de un miembro en caso de que se quede sin empleo o sufra un accidente. Finalmente, los gastos no contemplados –como el pago de las escrituras, el proyecto arquitectónico, los aguinaldos para el arquitecto, los costos de demolición y retiro de cascajo– fueron cubiertos gracias a la organización de actividades colectivas tales como kermeses, eventos culturales, venta de postres, recaudación y venta de pet, entre otras.

La adquisición del predio aceleró la reflexión acerca del tipo de proyecto que se quería impulsar en el marco del Progesha. Además de sumar al arquitecto Eduardo Mújica, con experiencia en construcción de vivienda social, los integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de realizar valiosos intercambios y de conocer otras experiencias locales como la Cooperativa Palo Alto. Asimismo, en 2015 y 2016, asistieron a los encuentros del grupo de trabajo regional sobre PSH y participaron en la escuela de formación de Coceavis, donde consolidaron sus convicciones en torno al cooperativismo de vivienda.

La construcción se llevó a cabo entre 2015 y 2017, e incorporó a las familias en tareas de vigilancia, acarreo de materiales, limpieza de la obra e incluso, cuando existían las capacidades, en labores de ingeniería y dirección. Además de las viviendas, se construyó un comedor comunitario y una clínica, ambos abiertos a todos los habitantes de la colonia. Asimismo, por medio del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial²⁰, se edificó una biblioteca sobre un terreno perteneciente a la delegación Venustiano Carranza. Si bien los socios de la cooperativa son quienes impulsan este proyecto, los vecinos del área también participan en las asambleas y se han integrado al comité de administración que vigila el uso adecuado de los recursos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social.

²⁰ Este programa público es resultado de la lucha contra la privatización del espacio público. De 2007 a 2015 fueron aprobados 1,527 proyectos en barrios populares que cumplieron con el principio de integralidad: no solo se trata de construcción de obra, si no de potenciar en las comunidades la capacidad de organización, ejercicio de derechos, autogestión y construcción de poder local.

La Constitución de la Ciudad de México: nueva batalla en el campo legislativo

A pesar de las dificultades asociadas a la ausencia de un marco normativo para las cooperativas de vivienda de la Ciudad de México, y a la falta de voluntad política por parte del Instituto de Vivienda, la experiencia de Guendaliza'a ha motivado a otros grupos a seguir su ejemplo y profundizar los logros: Tochant y Yelitzá ya cuentan con terrenos para desarrollar sus proyectos. Entre sus socios más jóvenes y entusiastas, prevalece la intención de lograr que el gobierno de la ciudad apoye el financiamiento de conjuntos en propiedad cooperativa, como lo hace con los conjuntos condominiales.

Estos grupos emergentes no sólo impulsan que se conforme una federación donde se encuentre la primera generación de cooperativas de vivienda (Palo Alto, Uscovi-Pueblo Unido, entre otras), también promueven con el MUP la adopción de un marco jurídico que consolide esta forma específica de producción de vivienda. En el proceso de la Asamblea Constituyente (2016-2017), mediante el cual se dotó a la capital mexicana de una Constitución propia, el MUP y sus aliados (entre ellos HIC-AL) consiguieron que el Estado se dispusiera a "fomentar la vivienda cooperativa". Desde luego, estos actores sociales y civiles seguirán trabajando tanto en el desarrollo de experiencias concretas como en el proceso de adecuación de leyes al nuevo orden constitucional, para lograr que las familias capitalinas de escasos ingresos tengan la posibilidad de mantenerse en la ciudad y de realizar proyectos habitacionales conforme a sus ideales y aspiraciones.



Guendaliza'a en obras. Fotografía: Jerónimo Díaz.

Constitución de la Ciudad de México. Art. 16. Inciso E. Vivienda

El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:

- Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en sus diversas modalidades;
- Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;
- Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y
- Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios.



Mujeres de la cooperativa Ñuke Mapu realizan taller de fortalecimiento organizativo. Fotografía: archivo de Red Hábitat Popular.

FICHA 13.

Ñuke Mapu: reabriendo el camino cooperativo en Chile

Santiago de Chile. 36 viviendas nuevas en conjunto

La Cooperativa Ñuke Mapu se constituye en 2015 con mujeres jefas de hogar, familias jóvenes y madres solteras, todas residentes de la comuna Pedro Aguirre Cerda en la región metropolitana de Santiago de Chile, que viven en situación de allegados. Su intención es favorecer el desarrollo e implementación material y normativa de políticas públicas que viabilicen la construcción de viviendas sociales de manera no lucrativa.

El proyecto surge de un convenio en 2013 entre la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (Selvihp) y el municipio de Pedro Aguirre Cerda, donde la Red Hábitat Popular de Chile fungió como intermediaria. En un inicio se elaboró un Catastro Participativo de terrenos potenciales para vivienda en la comuna. La carpeta técnica con información de cada predio (avalúo, normativa, dimensiones, características de emplazamiento, destino, propiedad) permitió llegar a la mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con propuestas y prioridades. Con ello, se logró negociar la adquisición de un terreno de 3 200 metros cuadrados, perteneciente al propio Ministerio.

Las viviendas serán financiadas por el subsidio que otorga el Estado a través del Decreto Supremo 49 –que costea vivienda sin deuda para los sectores vulnerables– consistente en 30 000 dólares. Gracias a múltiples gestiones, se logró que los subsidios se asignen colectivamente a la Cooperativa. Cada familia aportará un ahorro de 30 Unidades de Fomento (1 300 dólares) y un ahorro colectivo para la construcción de espacios comunes de 10 000 dólares. Se espera que las familias aporten alrededor de un 13% del valor total del proyecto (70 000 dólares) con ayuda mutua.

La Red Hábitat Popular se origina desde 2006, con el proyecto de escuela abierta Constructores de Ciudad que propuso Sur Corporación, en el cual participaron organizaciones de deudores habitacionales y movimientos de pobladores de Santiago. Sin embargo, hasta 2011 se define el nombre de la red y su principal objetivo: recuperar el modelo cooperativista de vivienda que fue suprimido durante la dictadura. Hoy, además de Ñuke Mapu, la red integra a la cooperativa Yungay, constituida en 2014 en un contexto de gentrificación de su barrio capitalino, así como otras experiencias ubicadas en Valparaíso: la Población Obrera, el Centro Santa Ana y grupos pre-cooperativos en Cerro Barón y Cerro El Vergel.

II. Defender el territorio

Megaproyectos, catástrofes socio-ambientales y cambio climático

En toda la región, las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas se encuentran amenazadas por la imposición de proyectos de “desarrollo e infraestructura” como autopistas, proyectos de generación y distribución de energía eléctrica, extracción minera, complejos industriales, habitacionales y turísticos, entre otros. Por su escala e impacto sobre la vida de miles, estos emprendimientos se conocen como “megaproyectos” y están vinculados con la violación de múltiples derechos humanos y profundos conflictos¹.



En el capítulo anterior vimos que existen estrategias para contener los efectos negativos de estas grandes obras, incluso para encauzarlas a favor de los barrios marginados. En Puerto Rico, por ejemplo, gracias a la iniciativa del Fideicomiso de la Tierra, se ha evitado que el dragado del Caño Martín Peña implique el desplazamiento de las comunidades ribereñas. En Paraguay, está la propuesta de utilizar la futura avenida Costanera como barrera protectora ante las inundaciones que afectan a la población de los asentamientos populares de Asunción.

Sin embargo, la mayoría de los megaproyectos responden esencialmente a intereses financieros ajenos a las necesidades de la mayoría de la población y son operados por consorcios privados que a menudo omiten la consulta de las poblaciones afectadas y su participación, o bien, las tergiversan y simulan².

Ésta y otras violaciones a los derechos humanos se han vuelto particularmente sistemáticas en el medio rural, debido a la falta de visibilidad mediática de los conflictos socio-ambientales que allí se desenvuelven, pero sobre todo, porque se sigue considerando al campo como un apéndice sujeto a los intereses de la gran ciudad. Así, en vez de fomentar relaciones positivas de intercambio urbano-rural que garanticen la permanencia y bienestar de la población campesina, se ha favorecido la concentración de la tierra en manos de pocos consorcios agroindustriales³, cuando son los pequeños productores quienes proveen alrededor de 70% de los alimentos que consume la humanidad⁴.

En la Sierra Norte de Puebla, al oriente de México, donde se desenvuelven tres de las siete experiencias que integran este capítulo, las organizaciones sociales no sólo producen viviendas para las familias campesinas, también reivindican el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Conscientes de que los desastres ecológicos asociados al extractivismo son recurrentes –las recientes catástrofes en Brasil y México derivadas de la ruptura de represas que contenían los desechos mineros tóxicos son prueba de ello–, los pueblos indígenas luchan contra la imposición de plantas hidroeléctricas, proyectos petroleros y minas a cielo abierto impulsadas por un puñado de empresas multinacionales.

Además de representar una amenaza a la reproducción de la vida campesina, a escala global, este tipo de megaproyectos favorece la concentración de CO2 en la atmósfera y, por ende, profundiza el cambio climático y sus distintas manifestaciones: cambios en los regímenes locales de precipitación pluvial, intensidad de los deshielos anuales en los polos y glaciares, elevación del nivel del mar e

“Antes decíamos que no había que dar el pescado sino enseñar a pescar, como una metáfora para impulsar procesos autogestivos de desarrollo. El problema es que hoy ya ni siquiera tenemos acceso al lago y que está contaminado. Por eso acompañamos las luchas en defensa de los bienes comunes y los territorios”.
Rocío Lombera, presidenta de Copevi, durante la asamblea de HIC en Quito, 2016.

¹ Véase: La defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo, HIC-AL, Colectivo de Abogad@s, México, Educa, Imdec, 2015 (www.hic-al.org).

² El derecho a la consulta está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. El derecho a la participación se encuentra, entre otros instrumentos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.

³ Véase: *Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina*, de Oxfam, 2016.

⁴ Véase: Grupo ETC, “¿Quién alimenta al mundo?”, en *Biodiversidad*, abril, 2010 (www.grain.org). Para cifras por producto y país en la región, véase: Salomón Salcedo y Lya Guzmán (ed.), *La agricultura familiar en América Latina y el Caribe*, Chile, FAO, 2014 (www.fao.org).

⁵ Véase: *Quinto Informe de Evaluación* del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 2015 (www.ipcc.ch).

⁶ Véase: *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina*, de Unicef y Funproeib Andes, Cochabamba, Bolivia, 2009.

intensificación de la actividad ciclónica⁵. Todo ello incrementa el potencial devastador de los fenómenos naturales (mapa 12) que de por sí afectan a la población más pobre de la región, aquella que fue orillada a vivir en zonas de riesgo o que no tiene acceso a infraestructura para la prevención de desastres.

(Re)construir con los saberes y los materiales de los pueblos

América Latina es una región mega-diversa, tanto desde el punto de vista biológico como cultural. Además de las culturas venidas de Europa con el proceso colonial, existen al menos 522 pueblos originarios⁶, los cuales, en su mayoría, conservan tradiciones constructivas y formas específicas de habitar en el mundo.

Sin embargo, estos saberes indígenas se erosionan al mismo ritmo con el que la industria de los materiales procesados se afianza en nuestras economías y en nuestros paisajes. De este modo, el milenario bajareque Cerén —técnica constructiva utilizada por los mayas hace 1 400 años, cuya resistencia sísmica aún sorprende a los especialistas— ha cedido el paso al hormigón. Incluso los conoci-

mientos vernáculos importados del viejo continente se desvanecen ante la idea de progreso y ascenso social, según la cual vale más un tabicón de concreto producido por una de las cinco empresas que controlan el mercado mundial, que el adobe de tierra cruda elaborado en el traspatio de la casa familiar.

Ante situaciones de desastre, se ha culpado a los materiales localmente producidos, quizá por desconocimiento y olvido, pero sobre todo para promover a las grandes empresas constructoras. Esto los ha convertido en el chivo expiatorio perfecto. Todavía en los últimos sismos que enlutaron a México en septiembre de 2017, el presidente declaró que “la caída de viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación”. Cabe aclarar que la mayoría de las construcciones afectadas eran de materiales industrializados, así como las 1 145 escuelas públicas que colapsaron o resultaron dañadas. Casi al mismo tiempo, en Puerto Rico, el único consejo que alcanzó a atinar el mandatario estadounidense frente a las personas afectadas por el huracán María fue: “el hormigón aguanta, pero la madera, no”. Sobra decir que, independientemente del material que se utilice, la resistencia ante un evento natural radica directamente en el comportamiento del sistema constructivo y no en las características del material.

A pesar de estos ataques contra los saberes y las economías locales, existe en América Latina un renovado interés por la tierra, la piedra, la madera, el bambú y otras fibras naturales. En algunos países como El Salvador, Perú y Chile, incluso se han generado normas para la construcción con adobe sismorresistente, gracias al activismo científico que realizan organizaciones como la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) y a la puesta en práctica de miles de proyectos que respaldan una misma idea: los materiales producidos localmente no sólo pueden ser igual o más resistentes que los materiales industriales, también brindan mejores condiciones térmicas (fresco de día, caliente de noche) y tienen la ventaja de ser manipulables y reparables por los mismos habitantes, lo que implica además una reducción de costos monetarios y ambientales considerables.

Además de adecuar las viviendas a la materialidad del entorno, las experiencias descritas en este capítulo reflejan la preocupación de respetar la naturaleza y los bienes comunes, avanzan hacia una gestión integral de los territorios donde se ubican y se preocupan por reducir los efectos del cambio climático. Desde el Barrio Intercultural en la Patagonia, hasta la Sierra Norte de Puebla, las organizaciones que

MAPA 12. Riesgos y desastres naturales en América Latina






Mapa: HIC-AL.



Fenómenos atmosféricos agravados por el cambio climático

-  **Ciclones tropicales**
Zonas expuestas a vientos violentos y huracanes
-  **El Niño**
Calentamiento anómalo del mar produce fuertes lluvias
-  **Otros desastres**
Inundaciones, deslaves y deslizamientos de terreno

Fenómenos geológicos

-  **9 Sismos (2010-2017)**
 -  **8** Magnitud superior a 6 grados
 -  **7** Richter, con epicentro a menos de 70 km de la superficie terrestre
 -  **6**
- Fuente: Servicio Geológico Estadounidense <http://earthquake.usgs.gov>
-  **Actividad volcánica**
Lahares: flujos de lodos ligados al súbito deshielo de glaciares volcánicos

protagonizan las siguientes páginas defienden el uso de semillas criollas y desarrollan nuevas y viejas prácticas agrícolas sustentables para dar vida a huertas y viveros comunitarios; emprendimientos agroecológicos enfocados a lograr la autonomía alimentaria; y la protección de los bosques.

Para fortalecer sus organizaciones, algunos proyectos —como el de la Unión de Cooperativas Tosepan o Cosechando Juntos lo Sembrado— incluyen cajas de ahorro y préstamo, ferias y mercados locales que permiten activar la economía popular y, sobre todo, que consolidan la capacidad de los pueblos de decidir el tipo de desarrollo que desean para sus territorios. No sorprende, entonces, que se reivindiquen al mismo tiempo los derechos y la cultura indígena, ni que se estén consolidando proyectos educativos de profunda raigambre mapuche, nahua o totonaca.

En este camino hacia la sustentabilidad y para contener el cambio climático y sus efectos, también encontramos experiencias “neo-rurales” que se ubican en ruptura con respecto a los modelos productivos y sociales imperantes. Como embajadora de la Red Global de Ecoaldeas en Colombia, la Aldeafeliz defiende y practica el concepto de *permacultura*, cuyos tres principios son: cuidar de la Tierra (suelo, bosque, agua), al humano (a sí mismo, sus parientes, su comunidad) y compartir equitativamente los recursos (limitar el consumo y la reproducción, redistribuir los excedentes). Esta experiencia fue seleccionada por el jurado del Premio Latinoamericano de Producción Social del Hábitat, ya que persigue un ideal transformador de las relaciones sociedad/naturaleza, tan necesario como la propia supervivencia de la especie humana en la Tierra.

Los materiales locales en la Nueva Agenda Urbana:

- Punto 70. Nos comprometemos a apoyar la prestación local de bienes y servicios básicos y aprovechar la proximidad de los recursos, reconociendo que la utilización intensa de fuentes distantes de energía, agua, alimentos y materiales puede plantear problemas de sostenibilidad como la vulnerabilidad a las alteraciones en el suministro de servicios, y que el proveimiento local puede facilitar el acceso de los habitantes a los recursos.
- Punto 71. Nos comprometemos a fortalecer la gestión sostenible de los recursos, entre ellos la tierra, el agua (los océanos, los mares y los recursos de agua dulce), la energía, los materiales, los bosques y los alimentos, prestando especial atención a la gestión racional desde el punto de vista ambiental y la reducción al mínimo de todos los desechos, los productos químicos peligrosos, incluidos los contaminantes del aire y del clima de corta vida, los gases de efecto invernadero y el ruido, y a hacerlo de tal manera que se tengan en cuenta los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales, las cadenas de valor y de suministro funcionales en relación con su repercusión y sostenibilidad ambientales, y que se luche por lograr una transición hacia una economía circular al tiempo que se facilita la conservación de los ecosistemas, su regeneración, su restablecimiento y su resiliencia frente a los retos nuevos y emergentes.
- Punto 76. Nos comprometemos a hacer un uso sostenible de los recursos naturales y centrar la atención en la eficacia de los recursos de materias primas y materiales de construcción, como el cemento, los metales, la madera, los minerales y la tierra. Nos comprometemos a establecer unas instalaciones seguras de reciclaje y recuperación de materiales, fomentar la creación de edificios sostenibles y resilientes y dar prioridad a la utilización de materiales locales, no tóxicos y reciclados y pinturas y revestimientos libres de aditivos de plomo.



La Cooperativa de Vivienda Mano a Mano (Kolomm, por sus siglas en criollo haitiano), está compuesta por 23 familias que fueron afectadas por el terremoto de Haití en 2010. Tras este hecho, la Alianza Cooperativa Internacional decidió contribuir a la reconstrucción del país, con la aplicación del modelo del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua. Constituida en septiembre de 2012, Kolomm logró construir su barrio cooperativo en la zona de la Morene, ciudad de Lascahobas, gracias a la asesoría de Fucvam y Fundasal y a los acompañamientos locales de GARR y Heifer. Actualmente, Kolomm espera desarrollar un proyecto productivo que permita la generación de ingresos para la organización y evalúa posibilidades de replicabilidad de la experiencia. *Fotografías: Fernanda Soto. Videoreportaje disponible en: https://youtu.be/DeYO_6J4dtc*



La comunidad Mbyá Guaraní de Chafariz, Paraguay, construye un salón comunitario con materiales locales y metodologías participativas. A partir de un proyecto de la Universidad Nacional de Misiones que reúne a un equipo interdisciplinario, se trabaja en conjunto con la comunidad para promover el mejoramiento del hábitat, cuyo objetivo es la revalorización de los conocimientos y prácticas tradicionales. *Fotografía tomada de la plataforma psh.urbamonde.org*



El programa Servicios de Impulso a la Vivienda Adecuada, conducido por la asociación Tu Techo Mexicano de Occidente, se desenvuelve con un grupo de once mujeres indígenas jefas de hogar, en Tatei Kie, comunidad wixárika de Jalisco. *Consulta el documental *Ukari: mujer wixárika* en <http://vimeo.com/198374090>*



FICHA 14.

Convivir en la diversidad: el Barrio Intercultural

San Martín de los Andes, Argentina. Vivienda ecológica, 56 construidas y 100 en construcción. Finalista del Premio Mundial del Hábitat 2016. Facebook: "Vecinos.sintecho"

El Lote 27 corresponde a 400 hectáreas que fueron incorporadas al Parque Nacional Lanín en 1937 y luego cedidas al Ejército en 1946. Su restitución se logró con la Ley Nacional 26.725/11 que establece la "transferencia" sin cargo de dicho lote al *lof* Curruhuinca como propiedad comunitaria. *Fotografía: VST.*

Vecinos Sin Techo reúne a vecinas y vecinos comunes organizados en torno a la necesidad de la vivienda. Intervenimos en política pública de hábitat y vivienda en San Martín de los Andes, comprometiendo nuestro propio destino y, aliados al *lof* (comunidad) Curruhuinca del pueblo originario Mapuche, desarrollamos el Barrio Intercultural: una propuesta de convivencia digna y pacífica que nos desafía amorosamente a cultivarnos en valores que nos lleven al *buen vivir*. Esta experiencia se desarrolla en un terreno de 77 hectáreas, ubicado a tres kilómetros de dicha ciudad.

Fundada a finales del siglo XIX, después de la llamada Campaña del Desierto que implicó un proyecto genocida contra el pueblo Mapuche, San Martín de los Andes es hoy una ciudad turística de altos contrastes. La ciudad se desarrolló en medio de un impactante entorno natural a orillas del Lago Lácar, entre los bosques y las montañas del Parque Nacional Lanín. Sin embargo, buena parte de sus 40 000 habitantes subsisten de la economía popular en precarias condiciones habitacionales. Mientras que 40 agentes del mercado turístico-inmobiliario especulan con la tierra, imponiendo el barrio cerrado como modelo y elevando el precio de la tierra, cerca de 2 500 familias carecen de vivienda propia.

En abril de 2004, en medio de una intensa crisis que mantenía a un amplio sector de la población excluido del acceso a una vivienda apta para vivir, surge en la vida política y social de esta ciudad Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna (VST). El Barrio Intercultural condensa nuestra visión del mundo y se materializa en un proyecto de urbanización, conformado en alianza con el Pueblo Nación Mapuche, que aún exige sus derechos territoriales a lo largo y ancho de la Patagonia.

“Cada una de sus máquinas destruye en un día lo que un hombre podría construir en toda su vida. Cinco de sus empresas destruyen lo que una población construye en 50 años. Entonces, el concepto de producción social del hábitat nos parece incompleto si no va de la mano de la lucha en contra de estos grandes capitales”. Participación de VST en el Tercer Encuentro Latinoamericano sobre Producción Social del Hábitat, Cuetzalan, México, 2017.

La restitución de tierras comunitarias

Creado en 1937 con un enfoque conservacionista, el Parque Nacional Lanín ejerció el control sobre los recursos naturales de las comunidades originarias hasta 2001, cuando la Confederación Mapuche Neuquina obtuvo el derecho de participación en la gestión del parque (política de co-manejo), en cumplimiento al *Convenio 169* de la Organización Internacional del Trabajo y al artículo 72 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios.

Entre 2004 y 2005, en VST comenzamos a proyectar la posibilidad de habitar dicho territorio y se generó un diálogo entre el *lof* Curruhuinca, la Confederación Mapuche y la administración del Parque Nacional Lanín. Así se desarrolló la idea de desafectar tierras del parque —en particular el llamado Lote 27—, restituir las a la comunidad y crear un Barrio Modelo Medioambientalmente Sustentable, proyecto que fue declarado “de interés municipal” por el Concejo Deliberante y de “interés institucional” por la Administración de Parques Nacionales. En ese mismo periodo obtuvimos la firma de un Convenio de Factibilidad en presencia del entonces presidente Néstor Kirchner. Necesariamente se sumó al proyecto la Municipalidad de San Martín de los Andes y así se conformó la Mesa Política del Lote 27, un espacio de articulación y gestión donde las instituciones públicas y las organizaciones supimos construir política por consenso.

Incidencia en políticas públicas: logros y obstáculos

Mientras maduraba la propuesta del Barrio Intercultural, en VST supimos mantener una estrategia más amplia de incidencia en la política pública municipal. De la mano de diversas organizaciones sociales, promovimos en 2004 la realización de un censo de demanda habitacional que evidenció las carencias de la población sanmartinense y obligó al Municipio a hacer una primera declaración de “emergencia habitacional”. En este contexto, el ente municipal encargado de la vivienda se elevó al rango de subsecretaría y pronto se conformó una Comisión de Vivienda que sirvió hasta 2010 como un espacio abierto para la formulación de políticas públicas. Tanto la emergencia habitacional como el establecimiento de un marco político de prioridades, que propusimos desde VST a manera de plan de acción ante la emergencia, fueron consecuencia de una ardua movilización en la calle y espacios públicos, en diferentes y creativas modalidades de presión política que afectaron intereses de varios sectores del poder económico y político del pueblo.

El *Marco Político de Prioridades* contempló, entre otras acciones, la construcción de 50 viviendas del programa El Hogar Más Urgente; el lanzamiento del Programa de Erradicación de Viviendas de Lugares Inhabitables (se relocalizaron las colonias Maipú y Esperanza Arriba); la puesta en marcha de los planes Federalismo I y II (con 120 y 200 viviendas, respectivamente); y la planificación participativa de la urbanización de Chacra 32 para 150 familias.

La fuerte resistencia institucional hacia VST fue cediendo ante la propuesta de la organización que significaba cambiar la lógica clientelar de la política de vivienda por una política enmarcada en el ámbito de los derechos humanos. Para ello fue necesario reformular los instrumentos de la elaboración de los criterios, así como los mecanismos de adjudicación de las viviendas, a través de procesos participativos y de fiscalización popular, con la publicación de toda la información generada. Con esta serie de cambios impulsados desde VST, el proceso de transformación de la cultura política neuquina conoció un importante auge hasta 2007, cuando la administración municipal volvió a las manos del partido que gobierna la provincia del Neuquén desde hace medio siglo.

En efecto, una de las dificultades que hemos identificado, es la falta de continuidad de los mecanismos institucionales previstos para la participación social en contextos de cambio político. Con el regreso al poder del partido Movimiento Popular Neuquino (2007-2011), se desalentó la participación de los movimientos sociales en la política de vivienda, dirigida de manera cerrada desde una subsecretaría que ahora desconocía a la Comisión de Vivienda. Lo que es peor, la clase política tradicional procuró socavar la autonomía de las organizaciones sociales mediante "tomas espontáneas de tierras" con fines clientelistas. Así, mientras VST y el *lof* Curruhuinca construían acuerdos para consolidar un proyecto en propiedad comunitaria, el gobierno reubicaba a 200 familias en el predio de Chacra 28, como recompensa tras una ocupación teatral. En realidad, los principales beneficiarios de dicha operación fueron los dueños de esos terrenos, quienes formaron dos loteos "sociales" privados, inmediatamente dotados de servicios básicos por la municipalidad, y consiguieron elevar la densidad habitacional al amparo de una nueva declaración de emergencia habitacional.

A pesar de todo, desde la Mesa Política se formuló el proyecto de ley para lograr la restitución de 400 hectáreas de tierras mapuches y la cesión, en propiedad comunitaria, de una porción de 77 hectáreas para desarrollar el Barrio Intercultural. En 2009, el proyecto ingresó al Senado y un año más tarde consiguió media sanción. Esto dio pie para lograr el financiamiento de un equipo técnico interdisciplinario –otorgado por la Unidad Nacional de Preinversión del Ministerio de Economía–, con el cual realizaríamos el diseño participativo del Barrio Intercultural.

En 2011, la asociación VST y diversas organizaciones sociales comenzamos a juntarnos en asamblea y, frente a un escenario electoral municipal, decidimos hacer pública nuestra oposición a la continuidad del partido gobernante. El cambio fue posible y desde entonces hemos impulsado una gestión más abierta de la política de vivienda. Junto al Movimiento de Ocupantes Inquilinos (MOI), formulamos la ordenanza de creación del Instituto de Vivienda y Hábitat para acordar las políticas integrales de hábitat y facilitar la gestión de los programas sectoriales y de distintos niveles de gobierno. Desde el nuevo Instituto se han impulsado normativas de autogestión, plusvalía urbana, construcción en adobe y gestión de recursos para la construcción de viviendas.

La planificación empieza por generar acuerdos internos

Durante más de un año, las más de 150 familias involucradas en el proyecto participamos en talleres junto con un equipo técnico asesor –compuesto por dos sociólogas, cuatro arquitectos, dos ingenieros, un biólogo, un técnico en energías alternativas y un economista– con el objetivo de concretar una propuesta general y formular acuerdos comunitarios. En este ejercicio mediaron 20 coordinadores comunitarios integrantes de VST comprometidos con el proceso social, quienes procuraron que el abordaje de las propuestas fuera cabalmente comprendido por las familias, tanto en su dimensión técnica como política.



Corte de paneles en La Fábrica. En 2016, ante la necesidad de optimizar los procesos de producción, VST tomó la iniciativa de lanzar este “cláster de vivienda y hábitat” que coordina un entramado de empresas cooperativas (construcción) y privadas (proveedores), universidades e institutos tecnológicos.



Construyendo el vivero colectivo. Por principio, las semillas que dan vida al huerto no se compran, se cosechan e intercambian con productores tradicionales de la región. También se han instalado colmenas.

En el devenir colectivo de este proceso participativo, emergió la esencia humana no sólo de “una casa y un barrio para vivir” sino de “cómo queremos vivir”. Asimismo, armamos una propuesta valórica de convivencia sintetizada en el concepto de *comunidad de cambio*, que surge en la interacción con el teólogo brasileño Leonardo Boff y se nutre de la *Carta de la Tierra*. Esta propuesta integra los principios esenciales que llamamos “acuerdos primarios”. También se realizó un levantamiento ambiental que permitió definir los criterios y las pautas de intervención. Así se decidió urbanizar sólo en las áreas donde no se comprometiera la calidad paisajística y se plasmaron los “acuerdos comunitarios”.

Por otra parte, entre las actividades que permitieron cohesionar al grupo en torno a un sueño común, destaca el juicio a la vivienda social, que consistió en salir por distintos barrios de la ciudad a visitar planes sociales de viviendas construidas bajo diferentes gestiones y modalidades. En cada lugar compartimos la mirada de sus habitantes sobre lo positivo y negativo de las casas, la obra, la convivencia generada, la infraestructura y el entorno natural. Nosotros mismos conocíamos, o conocimos en ese momento, esas realidades y las volvimos colectivamente conscientes para repensar cómo serían las viviendas del Barrio Intercultural.

A la par, el equipo técnico apoyó en la realización de un diagnóstico socioeconómico y cultural de las familias de VST, y otro ambiental. Además, presentó varios anteproyectos de vivienda y concretó las primeras propuestas para la urbanización, contemplando sistemas alternativos de calefacción y tratamiento de efluentes. Este valioso trabajo nos puso frente al enorme desafío de la gestión para producir todo lo propuesto, por lo que conformamos comisiones de trabajo, cada una asignada a tareas específicas.

Hacia un barrio ecológico y productivo

Pasaron ocho años desde el nacimiento de VST, antes de empezar a materializar el sueño. Sin embargo, la espera sirvió para avanzar y madurar a cada paso una propuesta integral. Más allá de las viviendas, los talleres nos ayudaron a imaginar proyectos productivos al interior del barrio, según tres líneas prioritarias definidas colectivamente: 1) construcción y servicios múltiples; 2) producción agroalimentaria y agroturismo; y 3) mercado intercultural.

En 2012, cuando se formaron los equipos de trabajo para generar condiciones básicas de desembarco en el territorio, se comenzó a levantar el edificio del Salón de Usos Múltiples, una construcción de 150 m² que alberga una cocina-comedor comunitario, una oficina, una habitación y un espacio de taller. Ahí se desenvuelve –entre otros proyectos de colaboración con diversos actores– el germen de un espacio definido como Centro de Capacitación, Experimentación y Producción Comunitario (CCEPC) que sirvió para el ensayo y desarrollo de materiales, componentes apropiados y tecnologías alternativas. Este espacio, ideado desde 2010 en convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, es ahora parte del clúster de vivienda y hábitat La Fábrica.

La falta de infraestructura básica nos limitaba enormemente. Necesitábamos electricidad para alumbrar y hacer funcionar máquinas de trabajo, lo cual nos negaba el ente responsable del servicio eléctrico; además, el lugar carecía de todas las instalaciones sanitarias y su incorporación al sistema de tratamiento de agua de la ciudad era poco probable. Efectivamente, tuvimos que recurrir al trabajo comunitario para instalar los postes y cables de un tendido eléctrico de 650 metros.

Por otro lado, tuvimos que luchar por hacer valer una propuesta novedosa en materia de servicios sanitarios. En 2013 obtuvimos un premio en el III Concurso Provincial de Proyectos Sociales por el proyecto Cambiando Hábitos, Cuidando Recursos, con lo que se financió el desarrollo de un baño seco experimental en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). VST proyectaba este tipo de instalación en todas las viviendas, pero su propuesta se enfrentó al rechazo de las autoridades debido a la inexistencia de normativas municipales. Nos lanzamos entonces tras la validación de esta tecnología y conseguimos el acompañamiento del INTI, del departamento de Gestión Ambiental de la municipalidad y del Ministerio de Salud de la provincia, para realizar muestreos y desarrollar protocolos de verificación. Hoy, el INTI trabaja en la elaboración de un *Manual de sistemas de saneamiento seco con separación de orina* y acompaña procesos como el nuestro en todo el país.

El mismo año, con el anhelo de generar fuentes de trabajo genuino y autónomo, sin capataces ni patrones, se gestionó la adquisición de maquinaria de carpintería y herrería por medio del programa Unidades Productivas del Ministerio de Trabajo, el cual entregó un apoyo de 500 000 pesos. Los medios de producción adquiridos por la asociación fueron instalados en La Fábrica, donde se producen aberturas y diversos componentes para las viviendas.

Todavía en 2012, VST consiguió el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social para echar a andar proyectos agroalimentarios. Con 54 000 pesos del programa federal Manos a la Obra, se instalaron invernáculos y se adquirieron herramientas, bomba y paneles solares, mangueras y tanques de acumulación para riego. Así comenzamos a cultivar hortalizas en un predio que servirá para ofrecer capacitaciones en agroecología a los habitantes del barrio y a la comunidad sanmartinense en general.

Diseño inicial del Barrio Intercultural

Gráfico: Vecinos Sin Techo

Tierra del Lof Curruhuinca

Acuerdos primarios (convivencia)

- Respetar el barrio y la vida en toda su diversidad.
- Cuidar la comunidad de cambio con entendimiento, compasión y amor.
- Construir un barrio con relaciones democráticas, justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
- Asegurar que los frutos y la belleza del barrio se preserven para las generaciones presentes y futuras.

Acuerdos Comunitarios (urbanización)

- Preservar sin urbanizar al menos 50% de la superficie del lote.
- La urbanización no será en cuadrícula.
- Construir en los claros del bosque.
- Evitar la impermeabilización del suelo (calles de ripio).
- La densidad disminuye hacia las áreas de bosque protector y pendientes.



Construcción de viviendas y alianzas para la innovación ambiental

La construcción de un primer conjunto de 56 viviendas inició en 2014, con un financiamiento de 17.8 millones de pesos comprometidos por el programa federal Mejoramiento del Hábitat y Viviendas de Pueblos Originarios y Rurales. Para su ejecución se abrieron dos frentes de trabajo. Por un lado, las acciones de limpieza, agrimensura y demarcación de calles y parcelas, se realizaron bajo el esquema de trabajo comunitario. Por otro lado, se constituyeron dos cooperativas que son las que recibieron el financiamiento y llevaron a cabo la construcción de las viviendas: la Cooperativa Cull Rañi, en la cual participan tanto mujeres como varones de VST con cierta experiencia en la albañilería; y la Cooperativa Newen Mapu, conformada por integrantes del *lof* Curruhuinca.

La obra se concentró en cuatro manzanas o islas con un número dispar de viviendas, según el diseño que el bosque fue permitiendo. Tres de estos agrupamientos están conformados por casas en construcción tradicional, a base de mampostería de ladrillos. La cuarta manzana agrupa casas en construcción natural, con cerramientos de tierra cruda, adobe, paredes con la modalidad de quincha y techos "vivos" cuya cobertura externa es de tierra y pasto.

En diciembre de 2015 se realizó la adjudicación de las primeras viviendas. Este ansiado momento demandó la elaboración de los criterios de adjudicación por parte de los dos colectivos, VST y Curruhuinca. En el caso de VST, realizamos una elección casa por casa, familia por familia, hasta completar las 28 que nos correspondían, en un proceso sin conflictos.

Aunque no se llegó al final de obra por no haberse librado el último desembolso del convenio, desde el mes de marzo de 2016 comenzamos a habitar progresivamente las viviendas. Esto se produjo a la par de conseguir el financiamiento para las siguientes 100 viviendas, que incorporan modificaciones nacidas de un nuevo juicio a la vivienda, mediante el cual se revisaron nuestras propias experiencias, convencidos de que el diseño y la belleza no son lujos sino virtudes que complementan la técnica. También incorporamos nuevas tipologías de vivienda con diferentes sistemas constructivos.

Hay que decir que la autogestión fue una novedad para todos los compañeros y compañeras que llevaron adelante el trabajo: el desarrollo de obra fue un complejo proceso humano de aprendizajes compartidos. Con esa experiencia y la evaluación consiguiente, la aplicación del nuevo programa se concibió de manera diferente: ahora los fondos no llegan a las cooperativas (Cull Rañi y Newen Mapu) sino a las organizaciones (VST y Curruhuinca) y son éstas las que tutoran la gestión de obra desde su responsabilidad legal, política y técnica. En lo que resta por construir, trabajaremos con otro equipo interdisciplinario de ocho técnicos contratados mediante un convenio con la Dirección Nacional de Preinversión Municipal, del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.

Bajo esta misma lógica de articulación, una innovación ambiental significativa fue la introducción de estufas SARA –Estufa Social Argentina de Alto Rendimiento–, resultado de un desarrollo conjunto del INTI y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuya primera transferencia tecnológica se realizó en el Barrio Intercultural en 2014.

Con base en una política solidaria de alianzas con diversos actores de San Martín de los Andes, el barrio abrió sus instalaciones para la realización de los talleres en energías renovables con jóvenes de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 (EPET 21). Esta escuela funciona desde su creación sin edificio propio, por lo que en 2012 se sumó a la Mesa Política para luchar por un espacio definitivo en el Lote 27. Tras arduas gestiones y presiones articuladas por los colectivos, se ha conseguido comprometer el financiamiento de la provincia para iniciar la construcción de la Escuela.

Las estufas SARA han sido implementadas en algunas viviendas de las familias que las eligieron, con el compromiso colectivo de reducir el impacto ambiental. De igual manera, esta posibilidad será



El proyecto original se ha ido adaptando a los experimentos e innovaciones que realizan los habitantes. *Fotografías: archivo de VST.*

integrada a las futuras construcciones, mediante el Programa Consejo de Actores Sociales (Procodas) financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que incluye el rediseño de la estufa para incorporar nuevas prestaciones (horno, hornallas), así como un plan de monitoreo de su funcionamiento y rendimiento llevado adelante por la EPET 21.

El reconocimiento de la comunidad Curruhuinca

La maduración de la relación de respeto mutuo entre VST y la comunidad Curruhuinca, nos ha permitido emprender los primeros talleres interculturales, en los cuales participan las familias tanto de VST como del *lof*. Estamos formando los nuevos coordinadores comunitarios en ambos colectivos y el diseño juntos de una dinámica nueva para el abordaje y definición de las normas de convivencia que constituirán la *Carta del Barrio*; así como toda la planificación necesaria para el desembarco conjunto en el territorio y lo que resta de la urbanización.

Más ampliamente, el proceso del Barrio Intercultural ha contribuido al reconocimiento público del pueblo Mapuche. En diciembre de 2014, la plaza central de San Martín de los Andes fue testigo de un acto significativo hacia el reconocimiento institucional de la interculturalidad y sus símbolos. Por vez primera se izó la bandera mapuche (*Wenu Foye*) junto a la bandera argentina en un evento promovido desde la Mesa Política del Lote 27 por la comunidad Curruhuinca. El acto se dio como una respuesta pacífica a una serie de expresiones de intolerancia y discriminación que sólo se explican por el oportunismo político de algunos dirigentes conservadores.

Valoración final

En este proceso colectivo, más aún, comunitario, hemos aprendido a reconocer la pobreza como un punto de partida histórico. Hemos entendido que ésta es producto de un proceso civilizatorio específico que empobrece a los más débiles, un sistema que nos explota y nos arrincona en la miseria, nos niega la dignidad, nos incapacita, nos deja sin respuestas, nos vuelve dependientes, funcionales clientes de la partidocracia que nos gobierna. Este empobrecimiento es cultural. De ahí partimos.

Nos aglutinó la falta de vivienda. Cientos de familias que necesitábamos una casa donde vivir tomamos en nuestras manos la responsabilidad de nuestro propio destino. Proyectar viviendas nos puso ante la necesidad de tierras dónde asentarnos y así apareció la interculturalidad. Elegimos forjar este destino sobre el acto de justicia que representa el reconocimiento histórico del derecho ancestral del pueblo Mapuche a su territorio. Si en este territorio hay tierras, éstas son Mapuche, y por tanto son tierras comunitarias. Bajo esta concepción, la tierra no es un bien especulativo para la venta, es un bien común que sale del mercado.

En el Barrio Intercultural nos embarcamos, miserables y virtuosos, en un proceso liberador. Así comenzamos a pensar el barrio no sólo como un conjunto de casas sino como una comunidad que convive, que trabaja, que se proyecta en su educación y en el cuidado de su salud. Un barrio en toda su complejidad que no se aísla sino que se propone y articula con la ciudad a la que se integra. Esto nos puso en un camino de transformación y búsqueda que nos dispone a recrear nuestra propia identidad comunitaria; un camino arduo, contradictorio y gradual, que lleva el ritmo de los más débiles, procura una maduración colectiva y se nutre de las maduraciones individuales siempre diversas.

Propusimos, peleamos y generamos colectivamente la oportunidad política de la restitución territorial. Con la instalación del Barrio Intercultural, también se construyó la propuesta valórica de la *comunidad de cambio* y el diseño concreto de la urbanización. En este proceso se abrieron paso nuestros sueños en un poderoso entramado de voluntades, organizaciones e instituciones. Nos fuimos reconociendo de transformar la realidad.



Fotografías: Gobierno de San Martín de los Andes.



FICHA 15.

Reconstrucción post-desastre en la Montaña de Guerrero

Malinaltepec, México. Construcción de 33 viviendas de adobe reforzado y recuperación de prácticas agrícolas sustentables. Premio Green Star Award 2017, Selección oficial del pabellón mexicano en la XV Bienal de Arquitectura en Venecia 2016, Mención honorífica en el Concurso de Vivienda Rural 2016 de Conavi, Premio Razón de Ser 2015. Sitio web: <http://cooperacioncomunitaria.org>

En septiembre de 2013, los huracanes Ingrid y Manuel azotaron al estado de Guerrero. Ante la emergencia, la asociación civil Cooperación Comunitaria realizó donaciones en varias localidades hasta lograr establecer una estrecha colaboración con la comunidad indígena de El Obispo, con la cual se diseñó un programa de reconstrucción del hábitat. En un inicio participaron 33 familias me'phaa, desde la construcción de una biblioteca comunitaria hasta la reconstrucción de sus propias viviendas. Además de mejorar las técnicas tradicionales de construcción con adobe, se analizaron las causas de la vulnerabilidad y se establecieron medidas para el manejo sustentable del territorio. Hoy esta metodología se extiende a otros pueblos del municipio de Malinaltepec, en la región Montaña de Guerrero.

En la comunidad de El Obispo, compuesta por 92 familias indígenas me'phaa, se registró la pérdida parcial de 26 viviendas, la destrucción total de once viviendas, daños severos en instalaciones escolares, destrucción de las milpas –que son la principal fuente de alimentos como maíz, frijol, calabaza y quelites–, así como la devastación de cafetales, árboles frutales y platanares que complementan la economía familiar. Además, la comunidad estuvo incomunicada durante dos meses a causa de los derrumbes que obstruyeron el camino hacia la cabecera municipal de Malinaltepec, hasta que los pobladores/as se organizaron para retirar la tierra con picos y palas.



Los participantes aprenden mientras hacen un centro comunitario. Si bien rebasa las dimensiones de las casas promedio (10 x 5m), con cinco metros más de largo (15 x 5m), el edificio recupera la tipología de la vivienda tradicional y sirve como modelo de vivienda reforzada.
Fotografía: Isadora Hastings.

Entrelazando saberes tradicionales y nuevas tecnologías

A partir de la necesidad de evaluar las causas de los deslaves ocurridos durante el huracán, se realizó un análisis geológico que condujo al mapeo de las viviendas y los cultivos en situación de riesgo. Este esfuerzo se logró gracias al apoyo de una geóloga de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien además impartió talleres para el reconocimiento y la prevención de riesgos.

Por otra parte, imperaba la necesidad de recuperar las áreas de cultivo destruidas. Para tal efecto, un equipo de biólogos e ingenieros agrícolas realizaron un análisis de suelos y condiciones climáticas para evaluar los rendimientos productivos, así como las técnicas de cultivo empleadas por la gente. De este modo se identificó que la práctica de "roza, tumba y quema" en zonas empinadas, así como el uso de plaguicidas químicos, propiciaban la pérdida de suelos e incrementaban la posibilidad de deslaves. Se implementaron entonces talleres de agricultura orgánica enfocados en la elaboración de compostas y biofertilizantes, y se evaluaron distintas técnicas para la retención de suelos.

En el ámbito de la salud y la nutrición, se hizo un diagnóstico para conocer los hábitos alimenticios de la población. El estudio arrojó una disminución en la producción de los cultivos de autoconsumo y un aumento en el consumo de alimentos procesados; de igual manera se observó el desplazamiento de la medicina tradicional por la alópata.



Las estufas ahorradoras de leña contribuyen a disminuir la deforestación y a mejorar la salud familiar, que se ve afectada por los fogones abiertos. En El Obispo se construyeron 31 estufas Patsari, cada una incluye un tanque de 20 litros de agua que se calienta mientras se cocina. La gente dice que ahora es más fácil que los niños se bañen porque tienen agua caliente.

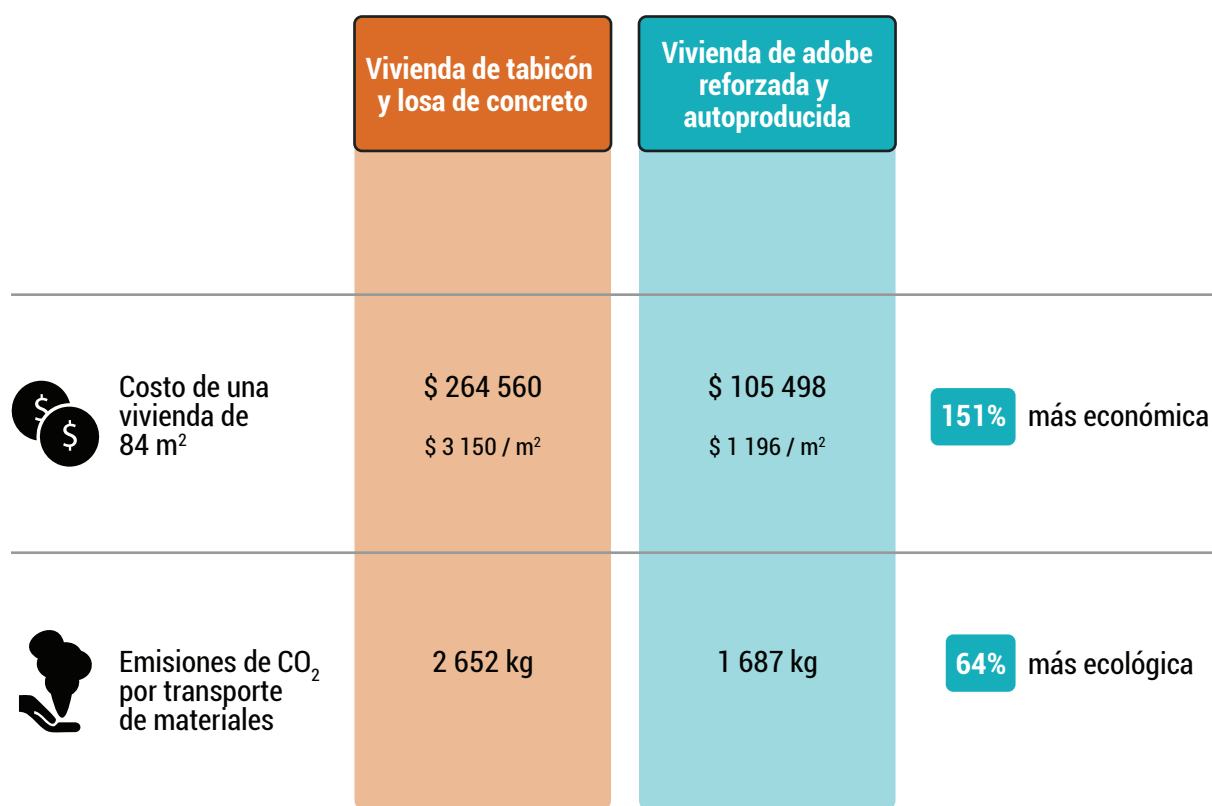


Presentación del programa ante la asamblea comunitaria. Estas reuniones se prolongan hasta por siete horas, ya que cada punto expuesto en castellano debe ser traducido al me'phaá. El involucramiento del comisariado de bienes comunales, que vela por los recursos de uso común, facilitó el aprovechamiento de materiales locales como madera, piedra, arena y grava.

Dado que estas tendencias permean toda la región, Cooperación Comunitaria impulsó la realización de talleres y discusiones en torno a la soberanía alimentaria y medicinal en distintas comunidades. Posteriormente, se logró generar un taller regional de intercambio de conocimientos en plantas medicinales. En estos encuentros intercomunitarios las y los habitantes de otros pueblos pudieron descubrir las tecnologías puestas en marcha por la gente de El Obispo, entre las que destacan las estufas ahorradoras de leña (Patsari).

Si bien la prioridad estaba centrada en la reconstrucción de las viviendas, el proceso se retrasó debido a que la época de lluvias comenzó antes de que llegaran los recursos financieros. Sin embargo, se aprovechó este tiempo para elaborar un diagnóstico sobre las causas y afectaciones que sufrieron las viviendas de adobe. Además, se hicieron pruebas de resistencia de materiales en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); se experimentaron técnicas de aislamiento térmico orgánico para los techos de lámina; y se elaboró un manual de autoconstrucción con adobe reforzado, que fue traducido al me'phaá por un promotor cultural de la región.

Vivienda Económica y Ecológica



Cooperación Comunitaria realizó un análisis comparativo entre las viviendas producidas por las constructoras y aquellas que realizan los habitantes con materiales locales. Si se considera que el traslado de materiales industriales implica dos horas de camino hasta las comunidades donde la asociación apoya la reconstrucción, los costos económicos y ambientales (emisiones de CO₂) de su propuesta de vivienda de adobe reforzado son mucho menores que los de una vivienda convencional, para la misma superficie construida.

Fortalecer las instituciones comunitarias

El modelo de trabajo que persigue Cooperación Comunitaria es diametralmente opuesto a la forma de trabajar del gobierno federal, el cual individualiza los apoyos, promueve modelos alimentarios y arquitectónicos ajenos a la región, sectoriza su acción y evade las asambleas comunitarias. Por el contrario, la asociación considera que el respeto y fortalecimiento de las instituciones locales es un factor de éxito y sustentabilidad a largo plazo. Dicho propósito se ha logrado gracias a la formación de promotores locales pero también al establecimiento de reglas y acuerdos claros.

Desde un inicio, se elaboró una carta de compromiso que fue firmada por ambas partes, la asociación y las autoridades comunitarias que emanan de la asamblea del pueblo. Durante el desarrollo del programa, también se planteó la necesidad de elaborar un reglamento de trabajo con la finalidad de establecer un consenso sobre la mejor forma de dar cumplimiento al proyecto. Los puntos del reglamento fueron definidos por la comunidad y los participantes firmaron el documento.

Otro componente estratégico del programa consiste en la identificación y formación de promotores locales, que son los beneficiarios que demuestran mayor entusiasmo, desean aprender las técnicas productivas y/o constructivas, y manifiestan interés por reproducir los aprendizajes en otras comunidades. Durante los procesos constructivos, se les pagó un apoyo simbólico por realizar tareas especializadas (construcción de los cimientos, cerramiento, colado de pisos) y actualmente ya supervisan obras de adobe reforzado.

En materia financiera, la comunidad contribuyó con mano de obra, talleristas, alimentos y alojamiento para los técnicos profesionales. A cambio, Cooperación Comunitaria aportó en investigación y coordinación de actividades, así como en la gestión de recursos monetarios provenientes de dos fundaciones nacionales: Fundación Merced y Compartir Fundación Social, la cual comprometió un fondo especial para Guerrero tras el paso de los huracanes.

Las empresas Grupo Xaxeni y Grupo SAI han apoyado, respectivamente, con asesorías para el diseño e implementación de técnicas agroecológicas adaptadas al lugar; y con pruebas sísmicas del prototipo de vivienda de adobe reforzado. Asimismo, la UAM, unidad Xochimilco, prestó sus instalaciones para la realización de pruebas de resistencia de adobes, tierras y pajadobe de distintas comunidades. Finalmente, el Instituto Nacional de Desarrollo Social brindó un pequeño financiamiento que sirvió para la construcción del primer edificio (obra-escuela).

La resiliencia se construye desde abajo

Esta experiencia se presenta como una anomalía dentro del modelo de desarrollo vigente, que promueve la erradicación de las formas de vida campesinas e indígenas, así como la concentración poblacional en "núcleos urbanos" para que de esa manera las industrias extractivas puedan ocupar los territorios liberados. Por el contrario, lo que se busca en este caso es garantizar la seguridad de las personas y fortalecer su arraigo. Así, mientras la cultura dominante genera desprecio, aquí se persigue el bilingüismo y se genera autoestima; mientras la macroeconomía expulsa, los micro-emprendimientos locales favorecen la cohesión social; mientras las mineras explotan los recursos minerales que entraña la Montaña de Guerrero, las organizaciones solidarias aplican una geología comprometida con la sociedad.

A partir de una justa valoración de la experiencia, es posible afirmar que sus efectos rebasan el ámbito local. En primer lugar, porque la recuperación de los bosques y las cabeceras de cuenca favorece a todas las poblaciones que se ubican río abajo. En segundo lugar, el programa ha contribuido al rescate de la arquitectura vernácula de una región olvidada y que sin embargo presenta paisajes bioculturales únicos.

Finalmente, todo el trabajo invertido en la revalorización de las semillas criollas apunta hacia la conservación de especies de gran valor genético en un contexto de pérdida acelerada de biodiversidad y penetración de semillas transgénicas, que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de México y la salud humana.



Cooperación Comunitaria extiende su acción al Valle del Mezquital, Hidalgo, México. Desde 2013, con un grupo de productores de ixtle (fibra de agave), impulsa la construcción de una casa-taller para la transmisión del conocimiento del pueblo fihãñhu en el procesamiento de esta fibra vegetal. La Casa de la Penca (*xü ta ngaa*) utiliza materiales locales y técnicas tradicionales que conservan algunos maestros indígenas. Se inserta además en el desarrollo de una red de comercio justo para evitar intermediarios. Hoy se imparten talleres de ixtle a grupos interesados, tales como los pulqueros de Tlaxcala que quieren aprovechar las pencas y aprender a procesar el ixtle. *Fotografía: Isadora Hastings.*



CABALLETE
Evita filtraciones de agua



AISLANTE DE PAJARCILLA
Mejora la capacidad térmica de la vivienda



ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA A MUROS
La viga madrina soporta los barros que se anclan a grapas de la cadena de cerramiento



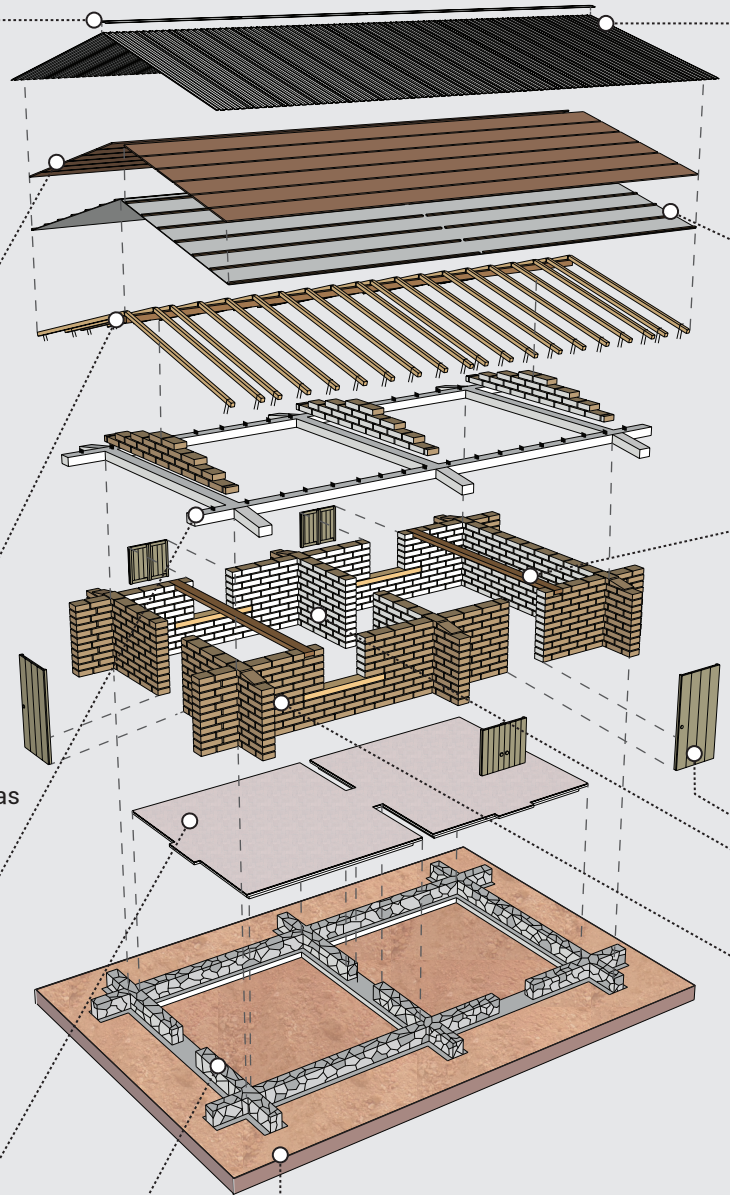
CADENA DE CERRAMIENTO
Soporta tensiones de la corona del muro y permite anclar la techumbre contra fuertes vientos



FIRME Y PETATILLO
Se coloca el firme de concreto sobre suelo aplanado y nivelado. Acabado de petatillo con junta y cuatrapeo



CIMIENTO Y RODAPIE
El cimiento da soporte a la casa y el rodapie protege los muros del desgaste y humedad



EXCAVACIÓN
Se delimita el área a construir marcando la sepa de cimentación con cal



Construcción de una vivienda reforzada, paso a paso

Gráfico y Fotografías:
Cooperación Comunitaria.



LÁMINAS

Láminas ancladas a estructura de cubierta con el número de clavos calculado para soportar los fuertes vientos



MALLA GALLINERA Y FAJILLAS SECUNDARIAS

La malla se coloca tensada sobre los barrotes y sobre ella se colocan las fajillas secundarias



ESTRUCTURA SECUNDARIA

Se coloca para acortar el claro de viga madrina y generar un posible tapanco de almacenaje



PUERTAS Y VENTANAS

Fabricación y colocación de puertas y ventanas de madera



PINTURA EN MUROS

Pintura de cal al interior y de tierra para el exterior. Evita anidación de insectos, crecimiento de materia orgánica y mejora la iluminación



MUROS DE ADOBE

Tienen un espesor idóneo para soportar sismos y cuentan con cruces en las esquinas y en los centros de claro a manera de contrafuerte



Junta comunitaria Demiño, municipio de Cadereyta. Fotografía: Bea Varnai.

FICHA 16.

Cosechando Juntos lo Sembrado: hacia la autonomía financiera

Tequisquiapan, Querétaro, México. 4 801 mejoramientos de vivienda rural entre 2009 y 2014. Mención "Financiamiento" del Premio Nacional de Vivienda 2014 de Conavi. Sitio web: <http://udec.org.mx>

Cosechando Juntos lo Sembrado (CJS) es una cooperativa de ahorro y préstamo que persigue el desarrollo integral de comunidades rurales de la zona oriental del Estado de Querétaro. Dada su propia metodología de trabajo, las familias asumen los programas crediticios como suyos y generan nuevas iniciativas que se financian con recursos propios y en menor medida, con pequeñas donaciones. En 2009, ante la apertura del gobierno federal a la Producción Social de Vivienda Asistida, y ante las necesidades expresadas por su base social, CJS comenzó a intervenir en el campo habitacional. En su programa Vivienda Sustentable y Productiva, las familias idean soluciones y diseños que intercambian entre ellas. Esta colaboración vecinal estimula la innovación, genera autoestima y fortalece la confianza en las propias comunidades, que redescubren su aptitud para romper los lazos de pobreza y dependencia a los que han sido históricamente sometidas.

Antecedentes

Los orígenes de CJS remontan a la fundación, en 1984, de la asociación Unión de Esfuerzos para el Campo (UDEC), que inició sus labores con campañas de alfabetización, atención a la salud, educación primaria abierta y producción de hortalizas, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre el estado de las comunidades marginadas de Querétaro. En 1989, ya con el respaldo de líderes comunitarios, se creó la Unión Regional de Apoyo Campesino (URAC) bajo la figura jurídica de una Sociedad de Solidaridad Social.

Más tarde, la organización emprendió el rediseño de sus formas de trabajo a partir de una pregunta muy simple. ¿Cuál era el elemento más incluyente, el que podía unir a todos en una misma demanda? Pronto se llegó a la conclusión de que este elemento era el dinero, concretamente, el ahorro. A partir

de este análisis se comenzaron a formar grupos de ahorro y en 2007, con motivo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la URAC se transformó en una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con el nuevo nombre de Cosechando Juntos lo Sembrado (CJS).

La organización cuenta entonces con dos ramas operativas. Por un lado, la UDEC, que está integrada por un equipo multidisciplinario de seis promotores: un antropólogo, un sociólogo, una administradora de empresas, un ingeniero agrónomo, un veterinario y un arquitecto. Cada promotor coordina y supervisa a un grupo de comunidades y es responsable de un programa. Por otro lado, la cooperativa CSJ es administrada por doce trabajadores que gestionan la parte financiera para los 23 000 socios y socias, integrados en 345 grupos de ahorro y cuyo capital acumulado permite la operación de los distintos programas. Cabe destacar que CJS no selecciona los beneficiarios/as sino que son las propias familias quienes deciden integrarse y formar parte de un grupo de ahorro. En la organización de la cooperativa también participan voluntarios que se comprometen por un período de al menos seis meses. Las mujeres representan 71% de la membresía de CJS. En los órganos internos de gobierno ocupan más del 90% de los cargos.

De este modo, el único actor externo es la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Desde 2009, la cooperativa canaliza subsidios públicos del programa nacional Esta Es Tu Casa, y acompaña a sus socios en el mejoramiento y construcción de sus viviendas. Esta iniciativa no se desenvuelve de manera aislada, sino que se ha incorporado al resto de programas propios de CJS, lo cuales fueron diseñados en función de las necesidades históricas de las familias.

El ahorro como factor de inclusión

“El ahorro es un instrumento aglutinador”, asegura Alfonso Castillo, fundador de la UDEC y asesor principal de la cooperativa. “Queremos llegar a la economía de la gente, donde se forman y deforman conciencias”, puntualiza. Y es que al formar parte de los grupos de ahorro y al adoptar diferentes funciones dentro de la cooperativa, las personas asociadas adquieren mucho más que un simple préstamo. En este proceso, cada quien aprende a manejar sus cuentas y las del grupo, a organizarse y resolver conflictos, a prever acciones futuras, a tomar la palabra y defender su opinión, a ser solidario con el grupo, la comunidad y la cooperativa.

Gracias al ahorro, CJS ha dispuesto un conjunto de programas que tienen por objetivo fortalecer la organización campesina con base en la participación, la solidaridad, la recuperación histórica y la acumulación de poder social, a través de procesos educativos que apuntan modestamente hacia una sociedad más justa.

El programa Granos Básicos retoma el lema de la antigua URAC: “Producir lo que el campesino consume y consumir lo que la Unión produce”. Los participantes pueden sacar préstamos para el mejoramiento de las parcelas y compra de semillas, reciben asesoramiento del ingeniero agrónomo en agricultura ecológica, asisten a talleres de capacitación y participan en intercambios con productores de otras organizaciones.

El programa Buen Negocio busca el fortalecimiento y la diversificación de la economía local, mediante la asesoría a socios y socias que quieran iniciar o mejorar su negocio. Se ideó como un programa que contribuye a arraigar a la gente en sus comunidades, en un contexto de crisis de la economía campesina y de fuerte migración hacia los Estados Unidos. Participar en el programa significa tener acceso a una línea de crédito especial para negocios, asistir a talleres de capacitación, ser integrado a un directorio de negocios y asistir a las reuniones trimestrales del grupo.



El programa Buen Negocio apoya actividades productivas y comerciales. *Fotografías: Cosechando Juntos lo Sembrado.*

El programa Vivienda Sustentable y Productiva fue establecido junto con la Conavi. Su esquema de financiación está compuesto por el ahorro de las familias, el préstamo concedido por CJS a partir del fondo acumulado de los socios/as, y el subsidio de Conavi. El préstamo se devuelve en un plazo máximo de 18 meses y se destina a la compra de materiales, mientras que el subsidio se entrega en efectivo para pago de mano de obra. Este subsidio se puede percibir hasta por tres ocasiones y está condicionado a la devolución del crédito.

Entre 2009 y 2014, Conavi entregó 4 801 subsidios a socios de CJS; la cooperativa, por su parte, dispuso préstamos complementarios y dio seguimiento técnico a cada obra. Si bien los dos primeros años se trabajó con constructoras convencionales, desde 2010 la lista de proveedores incorpora a socios de la cooperativa (herrereros, carpinteros, vidrieros, tabiqueros, etc.), a fin de reemplazar a las grandes casas de materiales por proveedores locales. Actualmente, cerca de 60% de la inversión realizada por una familia para mejorar su vivienda se reintegra a los circuitos económicos locales.

Por otro lado, aunque su principal objetivo es elevar la autosuficiencia alimentaria familiar, el programa Traspatio Familiar también responde al concepto de vivienda sustentable. El traspatio consta de al menos cinco elementos: hortalizas, árboles frutales, borregos o chivos, puercos y gallinas ponedoras. Las familias inscritas en el programa reciben capacitación, asesoramiento y visitas de los técnicos (un agrónomo y un veterinario) y tienen la responsabilidad de rellenar unos cuadernos de seguimiento del estado de su traspatio. Los traspacios se evalúan una vez al año y se realiza un evento de premiación a los mejores de la cooperativa.

Debido a su inmersión en un territorio tan vasto, la cooperativa tuvo que fortalecer su programa de Comunicación y Difusión, que consiste en la publicación del boletín mensual *Cosechando*, donde se incluye toda la actualidad sobre el trabajo de la organización: estados de cuenta de la cooperativa, juntas y reuniones, información sobre los distintos programas, avisos y convocatorias, así como temáticas actuales con fines educativos. Además, cada año se publica un calendario, donde están programadas todas las juntas comunitarias y las reuniones de cada programa.

Hay que destacar que CJS también ofrece un seguro de vida pensado como un mecanismo que genera una cultura de previsión y responsabilidad. Es obligatorio por un año para todo aquel que saca un préstamo. Después las familias deciden si quieren renovarlo o no.



El mercado multitrueque y las actividades culturales del Día de la Unión. Fotografías: *Cosechando Juntos lo Sembrado*.

Control social sobre cada proceso

Las personas que forman parte de la cooperativa en ningún momento son consideradas meras “beneficiarias” de los programas. El propio modelo organizativo apunta a que sean sujetos de los procesos que ellos mismos administran y lideran. En principio, formar parte de la cooperativa supone integrarse a alguno de los grupos existentes o abrir uno nuevo con otros vecinos. Los grupos deben constituirse con al menos veinte personas y el ahorro mínimo por persona debe ser de cinco pesos semanales. Cada grupo elige a un cajero/a que se encarga de recoger y anotar el ahorro de cada miembro del grupo y depositarlo semanalmente en una de las oficinas de CJS. A su vez, cada comunidad, así como con uno o varios grupos, elige a un/a representante que actúa como vínculo con la administración central de la cooperativa: se encarga de recoger las demandas de capacitación y llevarlas a CJS. Además debe acompañar a los técnicos durante las visitas de asesoramiento.

Los órganos de gobierno de la cooperativa funcionan en distintos niveles. A escala regional el Día de la Unión (primer domingo de cada mes) es un evento de suma importancia. Ese día los cajeros/as, los/as representantes de las comunidades y el equipo de CJS se reúnen en las oficinas centrales, ubicadas en Tequisquiapan, donde se distribuye el boletín *Cosechando* y se discute su contenido. Localmente se celebran juntas comunitarias mensuales en las cuales se vierte la información obtenida durante el Día de la Unión. Por su parte, quienes representan a las comunidades se reúnen dos veces al año en la llamada junta de representantes, donde se evalúan los avances del proyecto comunitario, se proponen nuevas actividades y se realizan talleres de capacitación.

La unidad se consigue mediante mecanismos de *solidaridad inducida*. Además de considerar la regularidad del ahorro y la atención a las juntas comunitarias, la concesión de los préstamos no depende tanto de la relación del solicitante con la oficina central sino de la confianza que le otorgan sus propios vecinos: las solicitudes deben ser aprobadas por al menos diez personas del grupo de ahorro para evitar que se establezcan relaciones particulares entre las familias y la administración central de CJS. Esto refuerza el control del proceso, fortalece el tejido social, fomenta un buen entendimiento entre vecinos y coadyuva a la resolución de conflictos.

Sobra decir que, desde sus inicios, la organización optó por mantener una absoluta independencia política y no tiene ningún tipo de relación con partidos políticos para evitar el riesgo de una apropiación ideológica o partidaria del proyecto.



El desarrollo agropecuario es uno de los principales ejes de trabajo de la cooperativa. *Fotografías: Cosechando Juntos lo Sembrado.*

Transformar la vida cotidiana con tecnologías socialmente apropiables

Entre los distintos programas existentes, el de Vivienda Sustentable ha producido cambios perceptibles sobre el entorno inmediato de las familias participantes, que tienen la obligación de incluir al menos dos ecotecnias durante el proceso de construcción. Entre ellas se encuentran: el fogón ahorrador de leña, el calentador solar, la cisterna de almacenamiento de agua de lluvia, el sanitario seco, el biofiltro de aguas grises, el gallinero o el chiquero ecológico.

Además de proporcionar asesoría y capacitación, el programa induce el intercambio directo entre socios/as que experimentan con nuevas técnicas y que a menudo encuentran soluciones creativas. Es así que CJS imparte talleres para socializar las distintas ecotecnias entre los albañiles de la cooperativa, quienes a su vez son contratados por las familias que acceden al programa de vivienda. También se han elaborado manuales de construcción de cada una de las ecotecnias.

El Programa Traspatio, por su parte, influye en las actividades de producción con el reforzamiento de la autosuficiencia familiar, la agricultura sustentable y la toma de conciencia ambiental. El impacto de este programa sobre el paisaje rural es notorio, y va de la mano de una serie de actividades educativas que buscan incidir sobre el comportamiento de los más pequeños en su relación con la naturaleza.

Los desafíos que se presentan

Para garantizar la continuidad de los diferentes programas es preciso mantener un flujo constante entre los niveles de ahorro y préstamo. Como ya se ha dicho, el ahorro es el eje articulador, casi el pretexto, para fomentar la participación comunitaria y la educación integral de quienes participan. Si dejaran de ahorrar, no sólo se restarían las capacidades financieras de la cooperativa sino que se reduciría el alcance de los programas y en última instancia, se destruiría la base organizativa. Es por ello que CJS realiza un esfuerzo constante de formación para evitar, por ejemplo, el sobreendeudamiento de sus integrantes.

Con la campaña *Capacidad de pago*, los socios aprenden a calcular su capacidad de pago en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se aplican mecanismos de control social dentro de cada grupo de ahorro, ya que el buen cumplimiento de las obligaciones individuales condiciona las oportunidades



Aspectos de una vivienda mejorada con incorporación calentador solar y estufa ahorradora. Fotografías: Enrique Ortíz.

de la totalidad del grupo. Desde luego, no se puede exigir el compromiso sin ofrecer a cambio una transparencia absoluta. Por eso, las cajas tienen la responsabilidad de informar mensualmente a cada grupo sobre su estado de cuenta. Cuando la situación económica se torna difícil para algún miembro, existe la posibilidad de reestructurar los mecanismos de reembolso de su préstamo. En caso de incumplimiento, el último recurso es la visita de un abogado y, si no hay respuesta, se presenta una demanda judicial, aunque afortunadamente esta situación se ha presentado en muy pocas ocasiones.

Finalmente, en aras de asegurar el futuro de la cooperativa, la generación fundadora tiene que propiciar el relevo generacional e implicar a los/as más jóvenes cooperativistas. Esta transición natural se ha enfrentado de manera consciente, con la apertura del proyecto a nuevos modos de pensar, sin dejar de apelar a los principios que dieron origen al proyecto y que quedaron plasmados en el documento *Hacia una economía campesina alternativa*. Uno de los factores que permiten comprender la trayectoria de la organización y su consolidación en el tiempo, es precisamente que los socios/as se han mantenido fieles a los principios establecidos en dicho documento. Es importante transmitirlos a los/as jóvenes para que el futuro de la organización lo sigan determinando sus miembros y para no caer en las “modas del desarrollo”, como se ha logrado hasta ahora.



FICHA 17.

Masewalme kin Chiwa in Kaliwa

Sierra Norte de Puebla, México. 600 viviendas nuevas en lote disperso.

Premio Nacional de Vivienda 2014, de Conavi, en la categoría "Producción social de vivienda asistida". Finalista del Premio Mundial del Hábitat 2014.

Sitio web: www.copevi.org

Diálogo de saberes entre organizaciones urbanas y rurales

El proyecto Masewalme kin Chiwa in Kaliwa, que en castellano significa "los indígenas construyendo sus casas", se desarrolló en 14 comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Cada vivienda se adaptó a las necesidades de las familias, con materiales y saberes propios de la región. La experiencia es producto de la colaboración entre dos organizaciones con historia e identidad propias: el Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda (Copevi) y Comunidades Indígenas Unidas por la Defensa del Maíz y Nuestra Cultura (Ciudemac).

Ciudemac nació en 2002 en el municipio de Tepetzintla por el impulso tanto de la Pastoral Social Indígena, como de la organización regional Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), que se dedicaron previamente a formar a las personas con cargos religiosos (catequistas y fiscales) en temas de derechos humanos, rescate de las raíces culturales, conservación de plantas medicinales y del maíz criollo. Hoy Ciudemac está integrada por más de 500 personas de 17 comunidades, asentadas en los municipios de Tepetzintla, Tetela de Ocampo y Zacatlán de las Manzanas. En estas comunidades se preservan las lenguas originales, el náhuatl y el totonaco, y se mantiene una cosmovisión de respeto y amor por la tierra, la familia y los semejantes.

Por su parte, Copevi se gestó en 1961 como un departamento del Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES) en el que participaban jóvenes entusiastas por poner en práctica su formación técnica y profesional en proyectos sociales. Desde entonces, aunque ya con una figura asociativa propia, la organización ha estado comprometida con diversos emprendimientos sociales en la Ciudad de México, tales como las cooperativas Palo Alto, Uscovi o Guerrero, así como en el desarrollo conceptual y práctico del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.

En este caminar, la organización se ha propuesto "la construcción de poder en los actores colectivos con los que trabajamos, es decir, la capacidad de ser, pensar y hacer por nosotros mismos; poder ser (identidad), poder pensar (autonomía crítica) y poder actuar (decisión) para transformar lo que nos afecta, enfatizando la acción desde y entre sujetos y territorios". Asimismo, tanto en el campo como en la ciudad, Copevi avanza hacia la concreción de lo que denomina *procesos territoriales integrados*, que se sustentan en metodologías emanadas de la educación popular, la planeación estratégica participativa con perspectiva de género y la investigación-acción.



Poblamiento disperso en la Sierra Norte de Puebla, refugio de los pueblos originarios desde la colonia. *Fotografía: Ciudademac.*

Abriendo el camino a la producción social de vivienda indígena

El acercamiento de Copevi se dio en 2007 a través de la invitación de Servicio, Desarrollo y Paz, AC (Sedepac), para apoyar en el fortalecimiento de la Unitona. La instancia de dirección de dicha organización regional le propuso entonces a Ciudademac trabajar en conjunto.

Las primeras entrevistas con integrantes de esta organización local pintaban un escenario complicado. Hacía tiempo que las asociaciones religiosas se habían retirado de la zona y Ciudademac perseguía un proceso de legalización, pero su estructura era débil y aún no era capaz de responder a los cargos que la figura de las Sociedades de Solidaridad Social (SSS) estipula en la ley. Los miembros de Ciudademac mostraban disposición a trabajar pero no sabían cómo; se detectaba un trabajo por cosas específicas, pero sin claridad de un proceso más conciso que integrara los diferentes esfuerzos.

En 2008 se dio inicio al acompañamiento formal de Copevi con una serie de talleres de Planeación Estratégica Participativa que ayudó a definir las cinco líneas de trabajo a seguir: 1) sistemas de producción de los pueblos Náhuatl y Totonaku; 2) espiritualidad y cultura; 3) desarrollo y gestión comunitaria; 4) derechos de los pueblos indígenas; y 5) fortalecimiento organizativo. En cada una se establecieron

⁷ En México, desde 2006 se logró modificar la Ley Federal de Vivienda para incorporar el concepto de Producción Social de Vivienda (PSV), gracias a la incidencia de movimientos sociales, académicos y organismos civiles. Con este antecedente, varias organizaciones, entre ellas Pobladores, se propusieron disputar los presupuestos públicos de la Conavi, que hasta la fecha se mantienen bajo el dominio de empresas privadas que operan auténticos desastres en las áreas rurales, en complicidad con las autoridades estatales y municipales.

acciones específicas, desde la creación de huertos familiares y bolsas de semillas hasta la recuperación de danzas y ritos. Fue en el marco de la estrategia de desarrollo y gestión comunitaria que Ciudemac decidió impulsar una línea de acción de vivienda, aprovechando la experiencia de Copevi.

La primera discusión formal sobre este tema se dio en enero de 2009, durante la reunión mensual de la Ciudemac. Ahí se señaló que aun cuando el gobierno había entregado algunas casas, éstas no correspondían a la forma en la que los indígenas tradicionalmente las construían, ni en el sistema constructivo ni en los materiales, pero la gente las recibía por necesidad.

Como resultado de la reunión, arrancó la búsqueda de financiamientos para un pequeño proyecto piloto. Asimismo, Copevi se propuso estudiar a fondo la política y los programas de vivienda existentes, razón por la cual realizó entrevistas con diversos actores. Entre ellos, fue clave el aporte del arquitecto Enrique Ortiz para dibujar el panorama de la Conavi; y el de Cristina Almazán, de la organización Pobladores, quien lideraba en el vecino estado de Veracruz un proyecto piloto de Producción Social de Vivienda con recursos federales⁷. Pobladores no sólo estaba dispuesta a compartir su experiencia sino también, gracias a su robusta capacidad administrativa, a canalizar los subsidios del programa federal *Esta es tu Casa* hacia Ciudemac.

Una vez decidido el nombre del programa *Masewalme kin Chiwa in Kaliwa*, faltaba consolidar la propuesta arquitectónica. De manera que Copevi impulsó varios talleres de diseño participativo con integrantes de la Ciudemac, mediante los cuales se identificó la tipología de la vivienda indígena de la zona y se generó un modelo basado en dos espacios dormitorios, un espacio múltiple con cocina, un tapanco y un pórtico a la entrada de las viviendas. Si bien el modelo se adaptó a cada familia, desde un inicio se acordó mantener los siguientes ejes conceptuales:

- › **Sustentabilidad:** utilización de materiales locales e incorporación de baños ecológicos, tanques de captación de agua pluvial y cocinas ahorradoras de leña.
- › **Adecuación cultural:** incorporación de pórticos como puntos de encuentro familiar y tapancos para resguardar las semillas de maíz; utilización de teja, que resulta el mejor material para la conservación del grano.
- › **Rescate de cultura constructiva:** empleo de piedra, tierra y madera para rescatar las formas de producción tradicionales y propiciar el comercio local de materiales.
- › **Progresividad:** la vivienda inicial suma alrededor de 50 metros cuadrados habitables, más un módulo sanitario adjunto a la casa. Con el tiempo y gracias a los conocimientos adquiridos en el proceso de autoconstrucción, cada familia aporta modificaciones al diseño o edifica más habitaciones en función de sus necesidades y de acuerdo a los materiales de los que dispone.

En 2011 se habían construido 255 viviendas y se contaba ya con el aporte de tres técnicos indígenas de Ciudemac (incluyendo a una mujer) para animar el proceso y dar seguimiento a cada obra. Asimismo, ocho promotores habían sido capacitados para la construcción de sanitarios secos, tanques de captación de agua y estufas ahorradoras de leña.



Aspectos del proceso: de la asamblea comunitaria a la autoconstrucción por ayuda mutua. Fotografías: Copevi y Ciudadamac.

Según Copevi, el "crédito social" consiste en crear un compromiso de la familia a corto plazo para aportar en forma de faenas, limpieza de terrenos, realización de terraplenes, extracción de material local, acarreo, elaboración de insumos, lo equivalente a un financiamiento con una entidad crediticia.

Fue entonces cuando algunos funcionarios públicos visitaron la Sierra y quedaron convencidos de la viabilidad del modelo financiero propuesto por Copevi: considerando que muchas familias no contaban con ahorros ni disponían de capacidad de endeudamiento para cumplir con el esquema de acceso a subsidios federales vigente (ahorro + financiamiento + subsidio), se propuso cuantificar el aporte real de las familias en mano de obra y recursos naturales propios. Aunque nunca llegó a plasmarse en las reglas de operación de la Conavi, los funcionarios aceptaron tácitamente esta concepción de "crédito social".

A pesar de los excelentes resultados, el cambio de administración federal de 2012 (el retorno del PRI) implicó una reducción drástica de los recursos destinados a los Desarrolladores Sociales de Vivienda (DSV), es decir, a las organizaciones que conformaban la Red de Productores Sociales de Vivienda. Tras intensas movilizaciones y negociaciones con el nuevo jefe de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y con la nueva dirección de Conavi —que ahora desconocía la figura de DSV— se pudo destrabar el presupuesto, pero los recursos fluyeron a cuentagotas: en el caso de Ciudadmac, aún con un listado de 180 solicitantes, sólo se concretaron 42 casos en 2012.

En los años siguientes, se afianzó en la Conavi la posición de que sólo a través de crédito formal era posible llegar a construir vivienda. En 2014, la organización Pobladores, que se había constituido como referente financiero del proyecto, fue retirada del catálogo de entidades ejecutoras. Ante eso, en reunión de la mesa directiva de Ciudadmac se decidió explorar otras vías de acceso con la cooperativa de ahorro Tosepantomin, ubicada en Cuetzalan, Puebla. Las personas interesadas se asociaron a esta organización aliada para obtener un crédito que les permitiera solicitar un subsidio. Formalmente, Copevi quedó como la figura técnica ante la Conavi, mientras que la entidad ejecutora pasó a ser la Tosepantomin. Con este esquema se hizo nuevamente un piloto de 16 casas y al fin del 2016 se acumularon más de 600 viviendas para la Ciudadmac.

La defensa del territorio y la cultura

En materia ambiental, el saldo de Masewalme kin Chiwa in Kaliwa es muy positivo. Desde la primera fase del proyecto se incluyó una serie de discusiones sobre la huella ecológica de los materiales industriales y el acaparamiento de los recursos naturales y financieros en manos de unas cuantas empresas. Los participantes reflexionaron sobre la cultura constructiva del lugar y rememoraron los beneficios de las casas tradicionales. Así se decidió que el proyecto rescataría la cultura y procuraría no dañar a la *madre tierra*, por lo cual se planteó usar lo menos posible de hierro y cemento para evitar largos traslados y aprovechar, en cambio, los materiales de cada localidad (piedra, madera y tierra). Al paso del tiempo, éste ha sido el sello del proyecto y la gente le ha devuelto el valor a la teja y al adobe.

En términos económicos, se fortalecieron empresas familiares que han desarrollado pequeñas industrias en la fabricación de adobes, tejas y extracción de madera. De igual forma, cada vivienda representó un empleo pagado para un autoconstructor, lo cual permitió evitar que al menos durante ese tiempo el integrante de la familia emigrase de su comunidad en busca de empleo. Asimismo, se ha



Ciudemac organiza desde 2009 las Ferias del Maíz en diversas comunidades de Tepetzintla y en la comunidad de Cuacuila. El ayuntamiento de Zacatlán retomó la idea en 2014 y ahora promueve cada año la Feria Internacional del Maíz. *Fotografía: Copevi.*



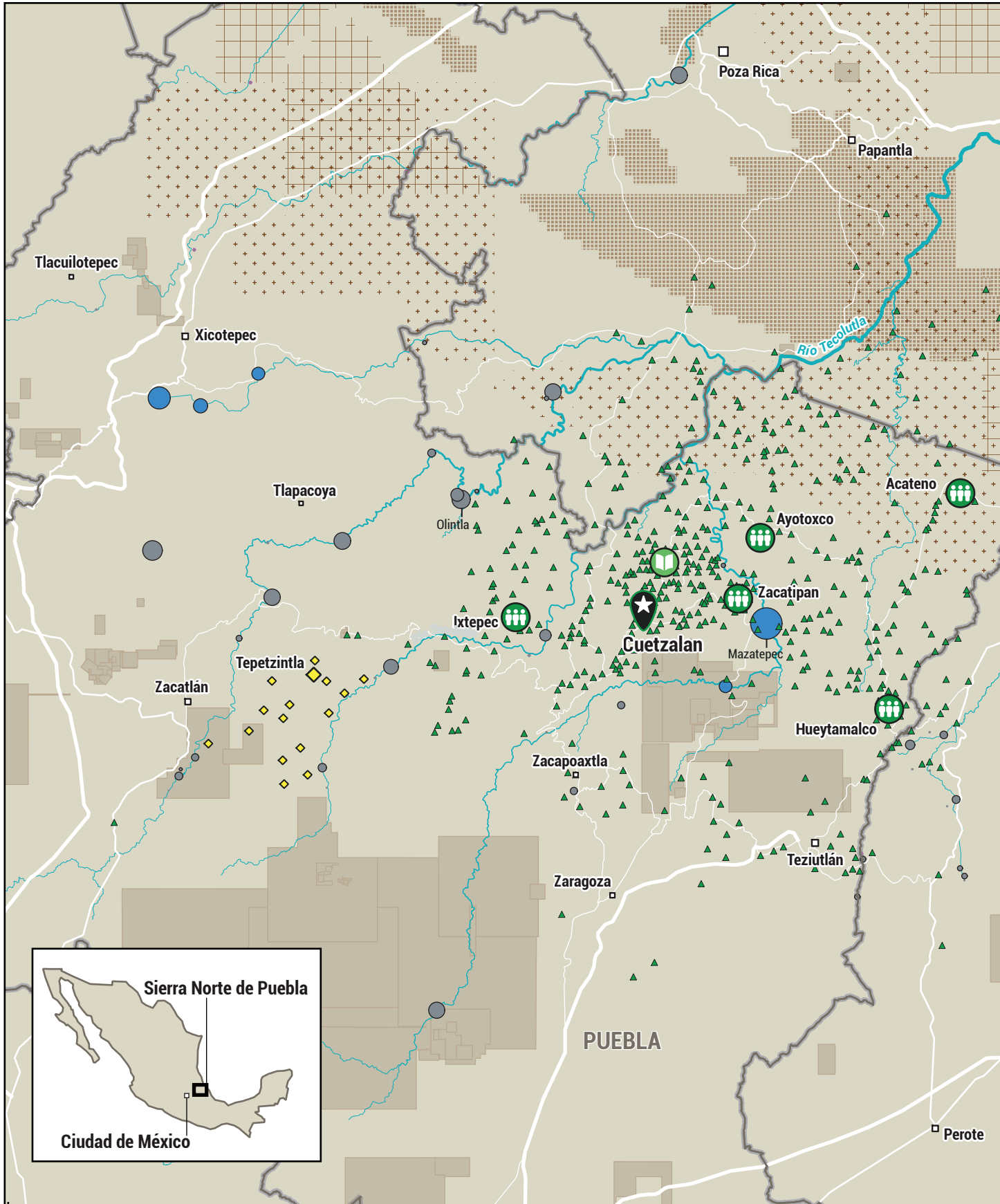
Los arquitectos consultores de la fundación Misereor, Javier Rodríguez y Sandy Minier, evaluaron las posibilidades de echar a andar un proyecto de construcción con tierra en esta región. En octubre de 2009, la fundación alemana se convertiría en una pieza clave para iniciar el proyecto, al financiar la producción de la obra-escuela llamada Masewal Tlanichikol Kali ("casa de encuentro de los indígenas") que sirvió como ejercicio formativo para la construcción de las viviendas. *Fotografía: Copevi.*

construido un fondo de ahorro en donde cada familia beneficiaria aporta la cantidad equivalente a 80 dólares para realizar acciones que son decididas de forma conjunta.

Hacia afuera, si bien la Ciudemac no ha dado el paso a articularse por sí misma a otros movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, la experiencia emprendida ha sido un ejemplo a tomar en cuenta por diversos grupo, ya que Copevi ha propiciado la participación de algunos miembros de la Ciudemac en espacios como las pasantías del movimiento urbano popular, los encuentros nacionales de la Red de Productores Sociales de Vivienda, o la plataforma mesoamericana de construcción con tierra.

En lo comunitario, en cambio, la Ciudemac ha madurado a través de su propio caminar, reflexión y quehacer. En este proceso, el proyecto de vivienda ha sido el principal motivo de que muchos se hayan planteado pertenecer a la organización. En efecto, Ciudemac cuenta hoy con una estructura democrática que se apoya en 16 comités comunitarios activos en diversos frentes, desde el monitoreo de obras municipales hasta la celebración de eventos culturales que buscan dignificar las culturas Náhuatl y Totonaca. A la par de la construcción de viviendas, la organización ha emprendido la revalorización de los lugares sagrados como los cerros y los manantiales, donde los pueblos celebran rituales relacionados con los ciclos de producción alimentaria; ceremonias con las cuales preservan, conservan y fortalecen su identidad étnica, sus lenguas originales, sus vestimentas tradicionales, sus fiestas patronales y todas aquellas actividades que son manifestaciones de sus culturas ancestrales.

Finalmente, al estar inmersa en un territorio cada vez más codiciado por las industrias extractivas, Ciudemac ha tenido que adquirir habilidades para exigir y defender los derechos de los pueblos originarios. A través de la realización y participación en diversos foros, sus integrantes se informan y denuncian la introducción de semillas de maíz transgénico, la implementación de megaproyectos o "proyectos de muerte", como se le ha denominado a la minería a cielo abierto, las represas y los grandes proyectos de infraestructura energética que pretenden atravesar la Sierra.



MAPA 13. Los pueblos guardianes de la Sierra Norte de Puebla ante la amenaza extractivista

Mapa: HIC-AL.



- Iztepec** □ Cabeceras municipales de referencia
- ▬ Carreteras
- ▬ Fronteras estatales
- ▬ Ríos

Experiencias transformadoras

Unión de Cooperativas Tosepan

★ Sede: Centro de formación *Kaltaixpetaniloyan*, almacenamiento y transformación de productos del agro, materiales de construcción, escuela alternativa, centro ecoturístico *Tosepan Kali* y radio comunitaria

👥 Sucursales de la cooperativa de ahorro y crédito *Tosepantomin*

▲ Comunidades y cooperativas locales de la Unión

Bachillerato rural de Tepetzintan

📖 Impulsado por Tosepan y Comunal: Taller de arquitectura

Copevi - Ciudadmac

♦ Comunidades donde se desenvuelve el proyecto *Masewalme kin chiwa in kaliwa*

Amenazas: proyectos energéticos y extractivos

Licitaciones sobre hidrocarburos (2015-2016)

Exploración Convencionales
 No convencionales (*fracking*)

Extracción

Concesiones mineras vigentes en 2015

Presas hidroeléctricas

● En operación ● En proyecto

○ Mazatepec (220 mw)
 ○ Olintla (75 mw)
 ○ menos de 5 mw

Los círculos son proporcionales a la potencia en megavatios



FICHA 18.

La Unión de Cooperativas Tosepan

Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. 7 463 viviendas nuevas en lote disperso y 8 770 mejoramiento entre 2007 y 2016. Organización acreedora del Premio Europeo a las Microfinanzas 2017. Facebook "tosepan.titataniske1"

Vista desde el auditorio. Fotografía: Pierre Arnold.

La Unión de Cooperativas Tosepan es el resultado de cuatro décadas de lucha en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Cada una de las ocho cooperativas y tres asociaciones que la conforman, está legalmente constituida, tiene su Consejo Directivo y lleva su contabilidad por separado. La sede de la Unión se encuentra en Cuetzalan, Puebla; y, actualmente, supera los 35 000 socios, distribuidos en 430 comunidades pertenecientes a 29 municipios.

Esta cooperativa matriz funciona como una incubadora de proyecto y cooperativas, para ello cuenta con un cuerpo asesor conformado por cinco profesionistas y 60 promotores comunitarios que asumen la asistencia técnica. La mayoría de sus integrantes (73%) son indígenas, de los grupos náhuatl y totonaco. El 64% de quienes forman parte de las cooperativas locales son mujeres y cerca de 9 000 niños se han incorporado a las actividades de la Tosepan como ahorradores.

Desde 2007, por la vía de su cooperativa de ahorro y crédito, la Unión impulsa un programa de vivienda sustentable que ha beneficiado a más de 16 000 familias. Dada su capacidad para gestionar recursos y subsidios federales, como entidad ejecutora ante la Conavi, la Tosepan se ha convertido además en un actor clave dentro de la Red de Productores Sociales de Vivienda.

Dulce comienzo: de la organización del consumo a la producción cooperativa

Antes de que naciera la Tosepan, en la Sierra Nororiental de Puebla –al igual que en la mayoría de las regiones indígenas de México– prevalecía un abandono total de las instituciones gubernamentales y, por lo mismo, se mantenían altos índices de marginación y fuertes cacicazgos. La carestía de los alimentos básicos, el intermediarismo de las cosechas y la usura provocaban que la riqueza se acumulara en unas cuantas familias de comerciantes, coyotes y agiotistas, quienes además utilizaban el aguardiente como una eficaz arma de control y dominación.

Para cambiar esta situación, en 1977 dio inicio el Movimiento Cooperativo Indígena, que se formalizó en 1980 con la constitución de la Tosepan Titataniske ("unidos venceremos", en náhuatl) como



En los murales que adornan la sede de la Unión, se describe el paisaje, la cultura y las actividades productivas de la región.

una cooperativa de consumo. Los socios/as fundadores se propusieron, como primera acción, solucionar el problema de la carestía en los productos básicos para la alimentación de las familias, ya que en aquellos tiempos era la demanda más sentida por toda la población.

Los primeros pasos se encaminaron a conseguir el azúcar a un precio más bajo. En aquellos años este producto se conseguía solamente en los comercios de las cabeceras municipales y el kilogramo fluctuaba entre los 10 y los 12 pesos, mientras que el precio oficial era de 2 pesos. Con aportaciones de 50 y hasta 100 pesos, los/as socios de las primeras comunidades que se organizaron, lograron juntar un capital suficiente para comprar hasta 20 toneladas de azúcar cada mes y distribuirlos en sus propias comunidades a un precio de 3 pesos el kilo.

Este primer logro animó a los/as cooperativistas para incorporar otros productos como maíz, frijol, arroz, pastas, jabones, galletas, etc. De esta manera, se dio forma a pequeñas tiendas que más adelante fueron la base para que en la región se estableciera el Programa Conasupo-Coplamar, como fruto de las negociaciones realizadas entre los directivos de la cooperativa y los funcionarios del programa.

En 1977 se tuvo la primera experiencia en el acopio y comercialización de pimienta. Con la aportación de parte de sus cosechas, los cooperativistas lograron juntar 9 toneladas. El producto se vendió fuera de la región y una vez que se descontaron los gastos, el precio que obtuvieron fue tres veces mayor al pagado por los intermediarios. Durante mucho tiempo la comercialización se hizo a través de la Unión Agrícola Regional de Productores de Pimienta y Cítricos de la Sierra Norte de Puebla. Sin embargo, en 1997 se tomó la decisión de constituir la Cooperativa Maseual Xicaualis ("fuerza indígena", en náhuatl), cuyo objetivo es conseguir los mejores precios para sus integrantes a través del acopio, procesamiento y comercialización de los productos que generan más ingresos como son el café, la pimienta y la miel virgen.



Rescate y revaloración del cultivo de la abeja nativa conocida como pisinnekmej. Desde 2003 se trabaja para mejorar la cosecha de miel virgen, polen y cera que se obtienen de las mancuernas de ollitas de barro. La miel tiene un sabor agridulce y contiene propiedades medicinales; el polen es rico en proteínas; la cera se utiliza como pegamento, pero también tiene propiedades cicatrizantes; el propóleo o takauil se utiliza para curar enfermedades en vías respiratorias. También se aprovechan las características cosméticas de la miel y la cera para producir champú, crema y gel. El cultivo milenario de la abeja pisinnekmej se ha fomentado como una ecotecnia a incorporar en el hogar sustentable. *Fotografía: Gabriela Rocha.*

En la actualidad, el trabajo de los/as cooperativistas es reconocido en el mercado internacional, ya que su café orgánico es ofrecido en tiendas de *comercio justo* en países tan lejanos como Japón, Alemania y Holanda, lo que proporciona una mejor calidad de vida para productores y consumidores. Los socios/as se sienten felices de ver sus rostros en los empaques de café llenos de *canyis* (letras japonesas) y saber que ellos son los que con sus esfuerzos han logrado llegar a lugares tan distantes para compartir una bebida revitalizante con aroma de sus *kuojtakiloyan* o "jardines de café". Con la intención de ofrecer café orgánico a los consumidores mexicanos, la cooperativa también ha diseñado la marca Café Tosepan. Asimismo, Café Maseual se ofrece en la mayoría de las tiendas que se encuentran en las diferentes comunidades donde viven los cooperativistas.

Finalmente, por el delicioso sabor que tiene la miel producida por las abejas nativas y por sus innumerables propiedades curativas, este producto se ha puesto exclusivamente a disposición de los consumidores mexicanos con la marca Miel Virgen. Estos productos se ofrecen al público en cafeterías, tiendas naturistas y otros establecimientos en diferentes ciudades del país, así como en los espacios comerciales que la propia Unión de Cooperativas Tosepan tiene en Cuetzalan.

El empoderamiento de las mujeres

En 1997, algunas de las socias decidieron organizarse en grupos para emprender sus propios proyectos productivos. De esta manera, las mujeres, a través de la cooperativa Tosepan Siuamej ("mujeres unidas", en náhuatl), operan y administran tortillerías, tiendas de abasto, panaderías, un taller para agregarle valor a los productos del campo con la elaboración de cajetas, mermeladas y licores. Esas actividades han permitido que las mujeres dispongan de recursos económicos, lo que ha provocado un cambio radical en la relación hombre-mujer al interior de sus familias.

Esta cooperativa convoca a concursos de gastronomía tradicional con la intención de revalorar y recuperar la comida que se consumía antes. Los platillos reciben buena calificación si los ingredientes que se utilizan para su elaboración provienen de las parcelas orgánicas (cafetales o milpas) y si tienen un buen balance nutricional. Estos concursos y muestras gastronómicas han permitido que nuevamente se valore a los quelites, entre otras plantas, que los antepasados acostumbraban utilizar para alimentarse y que los mantenía más sanos.

Con estos antecedentes, la asamblea general declaró a 2014 como el Año de la Soberanía Alimentaria en la Tosepan. Por tal motivo, se intensificó la producción de maíz orgánico; se incrementó la cantidad de huertos y gallineros familiares; se diseñó el producto financiero denominado *creditraspatio*; se impartieron talleres de capacitación sobre la manera de preparar comidas y jugos nutritivos; se realizaron degustaciones para compartir comidas tradicionales; y se efectuaron eventos para hacer trueque de alimentos producidos en el traspatio.

Utilizar el ahorro y crédito para el buen vivir

En 1998 se formó la cooperativa Tosepantomin ("dinero de todos", en náhuatl) para ofrecer servicios financieros que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de sus primero 1 266 integrantes. Inició con una sucursal y ahora ya tiene seis, donde se atiende los siete días de la semana. También cuenta con trece *kaltomineualoyan* ("casa donde se guarda el dinero", en náhuatl), que son pequeños centros de atención que se abren durante dos o tres días a la semana, pero con el tiempo se transformarán en sucursales. En la actualidad capta ahorros, otorga créditos, ofrece seguros de vida, paga remesas y cobra recibos de teléfonos y de energía eléctrica para sus más de 35 000 socios/as (64% mujeres).

Ha sido preocupación permanente adaptar los servicios y productos financieros a las necesidades de sus socios/as. En este sentido, se han diseñado cinco productos de ahorro: infantil, *toyeknemilis*, festividades y compromisos, inversión y cuenta corriente. Los productos de crédito son: el agropecuario, comercial, de vivienda, de emergencia, *creditraspatio*, *credimujer* y juvenil.

La Tosepantomin otorga los créditos a través de Grupos Solidarios, los cuales se integran con cinco o hasta siete socios que se tienen confianza entre sí. Cada que algunos o todos los integrantes del Grupo desean obtener un crédito, deben tener la aprobación de los demás miembros y todos se hacen responsables de las recuperaciones.

Hogares sustentables

A través de la cooperativa Tosepan Tichanchiuaj ("juntos construimos nuestros hogares", en náhuatl) se han buscado alternativas que permitan a sus integrantes mejorar las condiciones de sus viviendas hasta transformarlas en hogares sustentables. Para lograr lo anterior, se ha trabajado no sólo en la construcción y mejoramiento de las viviendas, sino que además se les han incorporado ecotecnias relacionadas con el uso racional de la energía; el aprovechamiento del agua de lluvia y tratamiento de las aguas residuales; y el reciclaje de los residuos domésticos y de la parcela. El sistema de ecotecnias completo abarca la captación, filtrado y almacenamiento de agua de lluvia; el uso de secadoras solares, de estufas ecológicas y de energía solar; el tratamiento de aguas residuales y la elaboración de compostas; la producción de miel, hortalizas, plantas medicinales, huevo y carne en el traspatio.

Con el hogar sustentable no solamente se busca que las familias tengan una vivienda adecuada, sino que también hagan un uso más eficiente de los recursos naturales, disminuyan la contaminación y prevengan enfermedades.

Entre 2007 y 2014, cerca de 10 000 familias mejoraron o construyeron sus viviendas. A través de Tosepan Tichanchiuaj, se invirtieron 655 millones de pesos en vivienda, lo que ha generado empleo para 1 500 personas. El programa de vivienda incluye 15 supervisores que son de las comunidades. Los beneficios del programa se aprecian en voz de Juan Francisco Espíritu, socio de la comunidad de Tonalix, quien asegura: "Ahora me siento más seguro, aunque llueva ya no se nos mete el agua, ya no se mojan mi maíz y mis cositas; y mis hijos, mi esposa y yo no nos llenamos de lodo los pies".



Aspecto del hotel Tosepan Kali. Aunque el bambú crece en forma natural cerca de los arroyos, no se le daba un aprovechamiento adecuado hasta que en 2004, en la Tosepan se le comenzó a estudiar para utilizarlo en la construcción de las primeras cabañas del programa de ecoturismo. En 2009 se integró la cooperativa Tosepan Ojtat Sentikitinij ("juntos trabajamos el bambú", en náhuatl) para dar empleo a jóvenes en un taller donde no solamente se le da tratamiento al bambú, sino que también se procesa para transformarlo en muebles, en material para la construcción, en carbón o en artesanías. *Fotografía: HIC-AL.*

Ecoturismo y sensibilización ambiental

La cooperativa Tosepan Kali ("casa de todos", en náhuatl) nació en 2004 para ofrecer servicios de ecoturismo a quienes visitan la región de Cuetzalan. Entre sus objetivos, interesa que los turistas conozcan las actividades que los productores realizan en sus parcelas y valoren los productos que el campo ofrece a quienes viven en las ciudades. Muchos de los grupos atendidos provienen de escuelas o universidades que se encuentran en las grandes ciudades, a quienes se les ofrece un paquete que incluye recorridos por las áreas de la Unión, trabajo en las diferentes actividades agropecuarias y una jornada de educación ambiental.

El Programa de Turismo Alternativo tiene la finalidad de fomentar la cultura turística y ambiental al integrar atractivos, servicios y actividades recreativas con temas de educación e interpretación del medio ambiente. Es así que se contribuye a la conservación del entorno natural. Esta cooperativa la integran jóvenes –mitad hombres, mitad mujeres– que tienen una divertida manera de trabajar en la región y de esta manera han evitado la emigración.

Tosepan Kali dispone de nueve cabañas, un hotel con alberca y spa, así como con varios módulos de atención turística para albergar a los visitantes y ofrecerles todos los servicios que solicitan. Las construcciones se han hecho con materiales de la región (piedra, tierra, bambú, etc.), en las que se probaron diferentes sistemas constructivos.

Cooperativa sana en cuerpos sanos

Muchos/as cooperativistas ya contaban con seguro de vida, pero insistían en que preferían un seguro para ser atendidos cuando se enfermaran, ya que los precios de las consultas y de los medicamentos eran muy altos. Para dar respuesta a esta demanda en 2009 se formó la Cooperativa Tosepan Pajti ("salud para todos", en náhuatl), la cual ha diseñado un programa de salud que prioriza la prevención de enfermedades y da atención primaria a las familias que lo requieren.

El objetivo de este programa es mantener sanas a las familias a través del consumo de alimentos balanceados y producidos en forma orgánica, de la práctica de adecuados hábitos de higiene, del uso de la medicina tradicional, de la transformación de sus viviendas en hogares sustentables, de la realización de análisis clínicos en forma permanente, de la recreación y el esparcimiento.

En la asamblea general de 2012 se tomó la decisión de declarar al 2013 como el Año de la Salud. La Tosepan concibe este tema de forma distinta a como lo hace el sector oficial: mientras éste se enfoca



Mujeres de la comunidad de Necteppec preparan camas de cultivo para sembrar plantas medicinales. *Fotografía: Tosepan Pajti.*



El tequio o ayuda mutua facilita la construcción de viviendas e infraestructura comunitaria. *Fotografía: Tosepan Titataniske.*

en la atención a enfermos, la Tosepan destina esfuerzos a la producción de la salud en la vida cotidiana. Por otro lado, la cooperativa ofrece atención dental a sus integrantes y garantiza bajos costos en los análisis clínicos a través de un laboratorio propio. Asimismo, la farmacia de Tosepan Pajti ofrece medicamentos a un costo menor al de las farmacias comerciales.

La cooperativa cuenta con un grupo de promotoras comunitarias que se dedican a capacitar a las guardianas de la salud (personas responsables en cada familia de velar por la salud de todos) en temas relacionados con la alimentación, la higiene, la herbolaria, el hogar sustentable y el entretenimiento. Además, cuenta con el apoyo de un grupo de médicos para brindar atención a los socios/as en las casas de salud, las cuales disponen de un consultorio y de una farmacia.

Preparar el futuro: el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan

Para depender menos de la asesoría externa, en 1989 la Tosepan se dio a la tarea de formar a un grupo de promotores comunitarios, principalmente jóvenes interesados en la producción del campo y que ya habían cursado los niveles de educación primaria y secundaria. Sus primeras actividades consistieron en introducir en sus propias parcelas cultivos alternativos al café, pues éste tenía precios muy bajos, con el compromiso de compartir sus aprendizajes con los demás productores.

En la actualidad, los promotores tienen la responsabilidad de acompañar la organización comunitaria y de brindar la asistencia técnica y capacitación en aspectos de producción orgánica, desarrollo de la mujer, microfinanciamiento, educación y salud. En su mayoría, son socios o hijos de socios con bastante experiencia, que no solamente hablan el náhuatl o el totonaco, sino también el español.

Para fortalecer sus propias capacidades, la Unión inauguró en 2003 el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan ("lugar donde se abre el espíritu", en náhuatl). Éste ha sido concebido como el espacio que formará a las actuales y futuras generaciones de cooperativistas en todos los temas que se requieran. Por lo mismo, se ve en el Kaltaixpetaniloyan al corazón de la Tosepan que riega de sangre a todas las cooperativas y a sus integrantes, a través de la socialización de conocimientos.

Como parte esencial del Centro de Formación, se ha construido la Escuela Tosepan Kalnemachtilyan ("escuela de todos", en náhuatl). El proyecto inició el 2 de octubre de 2006 –fecha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco en 1968– y es un modelo educativo alternativo al que actualmente ofrece la Secretaría de Educación Pública. Aquí la educación básica promueve la participación activa de los

padres de familia, revalora y recupera muchos de los conocimientos y costumbres de la población indígena, se empeña en lograr que los niños/as aprendan a leer y a escribir primeramente en su lengua materna, practiquen los principios y valores del cooperativismo, y cultiven el campo para que fortalezcan su arraigo a la tierra que los vio nacer. En la Escuela se están formando quienes le darán continuidad a la Unión de Cooperativas Tosepan y serán responsables de lograr que en el futuro todos los socios/as alcancen una vida buena y sean felices.

Comunicación comunitaria

La radio comunitaria *Tosepan Limaxktum* ("universo de todos", en náhuatl y en totonaco) se instaló el 2 de octubre de 2012 con el fin de que los/as cooperativistas tengan un espacio donde den a conocer su palabra, escuchen la de los/as demás y se mantengan informados sobre los acontecimientos más relevantes que suceden en las cooperativas, en la región, en el país y en el mundo.

Esta radiodifusora transmite programas en náhuatl, totonaco y español, y ofrece sus servicios a todos los/as habitantes de la Sierra. Actualmente está en la etapa de prueba, pero ya se iniciaron los trámites para obtener la concesión.

La radio comunitaria se ha convertido en el mejor medio de comunicación de los/as cooperativistas, después de las asambleas comunitarias. A través de ella, se han fortalecido tradiciones, costumbres, prácticas y valores propios de los grupos náhuatl y totonaco: la lengua, las danzas, la música tradicional y las festividades comunitarias son temas de difusión permanente. Asimismo, la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y la defensa de la vida son temas que también ocupan el espacio radiofónico de la *Tosepan Limaxktum*.

Defensa del territorio

Con la reforma energética aprobada en 2014, se vuelve tentador para empresas extranjeras la explotación del petróleo y del gas Shale que la Sierra ha conservado en sus entrañas por miles de años. De hecho, el gobierno federal ya ha otorgado concesiones a grandes empresas transnacionales para que exploten los minerales y para que inunden los ríos con la construcción de plantas hidroeléctricas.

Ante esta situación, los/as cooperativistas acordaron declarar 2015 como el Año de la Defensa de la Vida y del Territorio. La lucha que corresponde dar a los/as actuales y futuros cooperativistas va a ser difícil y larga, pues los enemigos a vencer son mucho más poderosos que los caciques enfrentados por los/as fundadores y las concesiones que les han dado tienen una duración de 50 años. La voracidad y la ambición de las grandes transnacionales no tienen límites, pues su dios es el dinero y además gozan del apoyo y de la complicidad del gobierno. El espíritu cooperativista, la dignidad y la identidad serán los motores que impulsen todas las acciones que se emprendan ahora y en los próximos años contra las empresas voraces.



Fotografía: Erwin Jaquez.

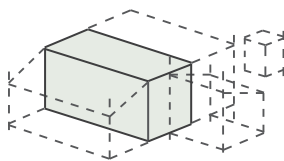
FICHA 19.

Comunal impulsa el aprovechamiento del bambú

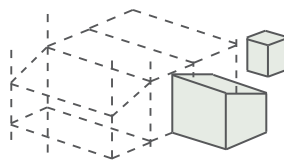
Sierra Norte de Puebla, México. Vivienda demostrativa y bachillerato rural. Selección oficial del pabellón mexicano en la XV Bienal de Arquitectura en Venecia 2016. Medalla de plata en la XIV Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana en la categoría Vivienda Rural. Medalla de plata en el Concurso de Vivienda Rural de 2014 de Conavi. Sitio web: www.comunaltaller.com

La comunidad de Tepetzintan, del municipio de Cuetzalan del Progreso, es considerada como una localidad de muy alta marginación. Su población sufre de casi todas las carencias posibles: viviendas en mal estado y sin drenaje, pocas oportunidades para generar ingresos, falta de infraestructura, poco acceso a la educación, migración, pobreza alimentaria y pobreza de seguridad social. Sin embargo, cuenta con otras características que bastan para superar todo lo anterior: organización, cohesión social y cooperación.

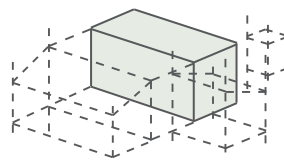
Con una altitud de 540 metros sobre el nivel del mar, ubicación que le permite gozar de una gran diversidad biológica y geográfica, Tepetzintan cuenta con uno de los ecosistemas más particulares del país: el bosque de niebla. De gran importancia para recarga de acuíferos, en este ecosistema crecen variedades de bambú nativo mexicano, entre ellas, la guadua y el oldhamii.



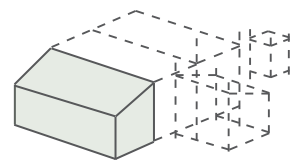
Altar + Salón
Público interior



Cocina y baño
Privado exterior



Habitaciones
Privado interior



Pórtico
Público exterior

Tipología de vivienda. Antes de realizar el primer ejercicio de vivienda, para el equipo de Comunal fue de vital importancia entender cómo habita el pueblo nahua de la región, por lo que se estudiaron 30 hogares en la comunidad. Con esta investigación se pudo identificar los usos y costumbres ligados a la vivienda, así como el funcionamiento de los espacios de mayor relevancia, tales como el altar, el salón, el pórtico, las habitaciones y la cocina.

2013-2015. Primer ejercicio de vivienda Redescubriendo el valor de los materiales locales



El sistema constructivo se compone de paneles modulares y prefabricados, tres tipos de cerchas (área principal, servicios y pórtico), y columnas en el cuerpo principal de la vivienda y en el área de pórtico. Para probar estructuralmente el oldhamii, se construyó el pórtico y los paneles de la vivienda con esta especie, mientras que el guadua se usó únicamente en los elementos estructurales principales. De esta manera, se pudo demostrar que ambas especies tienen un óptimo desempeño estructural. *Fotografía: Onnis Luque.*



Especies de bambú

A pesar de tener este material idóneo para la construcción, los pobladores de la comunidad no tenían confianza en su durabilidad ya que no existía una técnica constructiva adecuada que permitiera asegurar su mantenimiento y buen desempeño estructural. Por ello, el bambú se encuentra subutilizado para estructuras ligeras y efímeras, como cercas, corrales y huertos. Mientras tanto, los pobladores sufren severo rezago habitacional y hacinamiento.



Capacitación

Se hicieron cinco talleres de capacitación e intercambio de conocimientos entre pobladores, técnicos colombianos y el equipo de Comunal, sobre manejo, corte y tratamiento de bambú, así como talleres de mobiliario, estructuras y cerchas. En cada una de estas capacitaciones se designó un espacio para el diseño participativo, herramienta eficaz para asegurar que el modelo de vivienda fuera apropiado a los usos y costumbres de la región.

2016. Segundo ejercicio de vivienda Normas operativas de Conavi y colaboración con Tosepan



En febrero de 2016, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) lanzó nuevas reglas operativas para el financiamiento de vivienda y determinó que los sistemas constructivos que emplean materiales como el bambú, bajareque, madera, palma y carrizo no eran adecuados para la construcción ni susceptibles de recibir subsidio federal. Este dictamen obligó a Comunal a modificar su propuesta inicial y a implementar una nueva tipología mixta que empleara marcos estructurales de concreto. *Fotografías: Onnis Luque.*



Cooperativa Tosepan

En mayo de 2016 se firmó un convenio de colaboración con la cooperativa Tosepan Ojtat Sentikitinij ("juntos trabajamos el bambú", en náhuatl), con la intención de reproducir la metodología en otras comunidades de la Sierra. Para este nuevo equipo, fue primordial desarrollar un ejercicio de vivienda que empleara en su totalidad la especie *oldhamii* y que, durante el proceso, capacitara al personal de la cooperativa.



Financiamiento

Debido a que los subsidios otorgados por la federación son muy limitados, fue necesario establecer un esquema de financiamiento alternativo. En el caso del segundo ejercicio de vivienda, el cual fue aprobado por la Conavi, los pobladores pueden aportar bambú para disminuir su costo, así como autoorganizarse para aportar faenas o tequios y reducir la cantidad de mano de obra.

2016-2017. Escuela Rural Productiva Empoderamiento comunitario y educación incluyente



Las y los jóvenes de la comunidad de Tepetzintan no cuentan con un espacio educativo para continuar sus estudios de bachillerato. Ante esta problemática, estudiantes del Bachillerato Rural Digital No. 186 Halcones de Tepetzintan (quienes estudian a distancia) decidieron diseñar y autoconstruir sus propias aulas, proyecto para el cual solicitaron el acompañamiento de Comunal.



Empoderamiento social

Durante el primer ejercicio de vivienda, los jóvenes se involucraron en la construcción y recibieron talleres técnicos para la elaboración de bancas, libreros y todo tipo de mobiliario. Fueron ellas y ellos quienes, con el reconocimiento de su potencial, después de experimentar la sencillez del sistema constructivo y el valor de los materiales locales, promovieron el proyecto de autoconstruir un espacio educativo. Esta iniciativa fue apoyada por los padres de familia, el comité educativo de la comunidad y los maestros.



Diseño participativo

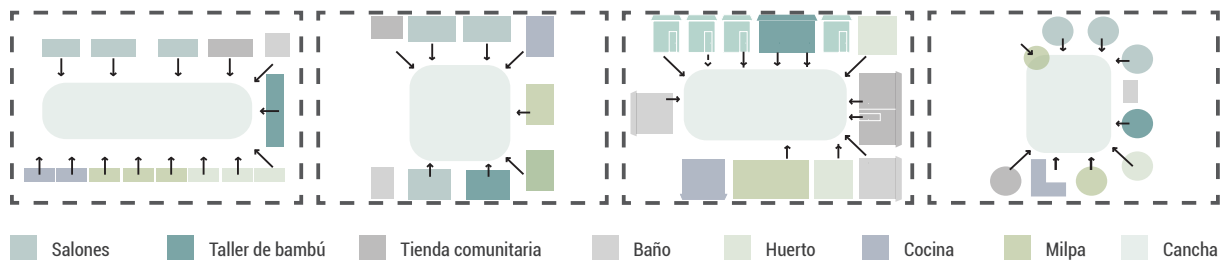
A partir de 2016, Comunal impartió cuatro talleres de diseño participativo mediante los cuales los estudiantes, maestros y padres de familia pudieron expresar sus necesidades y aspiraciones acerca del proyecto, y establecieron el concepto de Escuela Rural Productiva. Para las sesiones se conformaron cuatro equipos y cada uno tuvo la oportunidad de realizar maquetas y planos para transmitir sus aportaciones.










Equipo 1

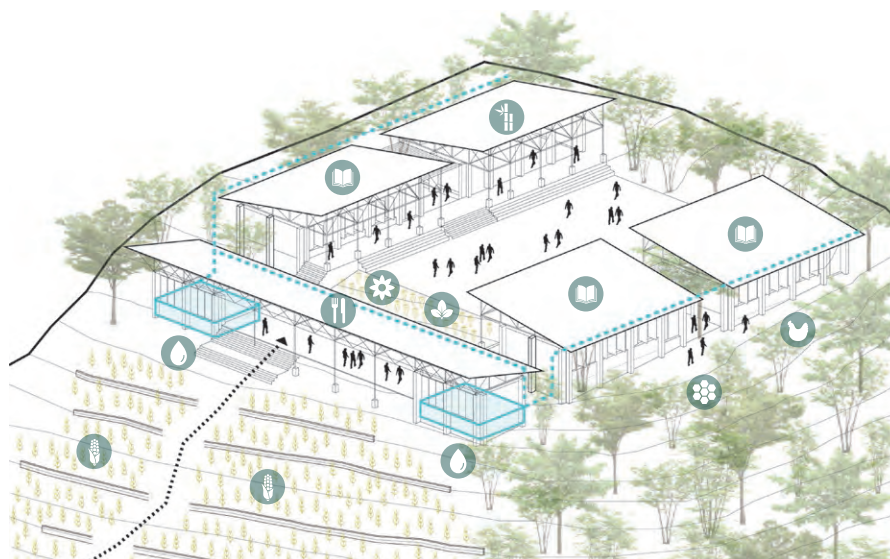
Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4



-  Taller de bambú
-  Flores / abejas
-  Reserva de agua
-  Huerto medicinal
-  Aulas
-  Comida
-  Cosecha de miel
-  Gallinero
-  Milpa



Acceso al suelo

Para hacer realidad la propuesta, la comunidad asignó un terreno al comité educativo. Además, se han organizado faenas de limpieza para realizar el trazo del proyecto y se han asignado cuotas familiares de trabajo para iniciar la construcción de las aulas una vez que se haya finalizado el proceso de diseño. Hoy se están terminando las zanjas de cimentación y se continuará con el pegado de la piedra para levantar la estructura con materiales donados por la comunidad.





FICHA 20.

Aldeafeliz: utopías ecológicas en construcción

San Francisco de Sales, Cundinamarca, Colombia. La aldea nace en 2006 y cuenta hoy con 30 viviendas ecológicas. Sitio web: aldeafeliz.com

Aldeafeliz reúne familias que migraron de la ciudad al campo en busca de un estilo de vida solidario y ecológico. La propiedad es colectiva y la aldea se autogobierna mediante *sociocracia*: sistema horizontal y equitativo inspirado en la naturaleza. Las familias autoconstruyen viviendas ecológicas de bambú y tierra dentro del bosque y utilizan pocos recursos gracias a que la mayoría de servicios, incluyendo una cocina comunitaria, son compartidos.

De la propiedad colectiva a la sociocracia

Aldeafeliz nace de una convocatoria abierta a salir de la ciudad, repensar valores y crear una vida en armonía con la naturaleza. Con ese objetivo, sin ayuda de ninguna institución, se consolidó en 2006 un grupo de personas no conocidas entre sí, con distintos niveles educativos y económicos.

La experiencia se ubica a hora y media de la ciudad de Bogotá, en un área de alto valor ecológico: el bosque andino tropical es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo y a la vez uno de los más vulnerables, con solo 4% de su superficie original restante. Las tres hectáreas de terreno en las que se desenvuelve pertenecen a la asociación Aldeafeliz, entidad sin ánimo de lucro creada para ser propietaria del bien colectivo. En un principio, cada socio/a aportó una cuota de 1 500 USD para la compra de la tierra y se crearon dos figuras de copropietarios: residentes y no residentes. En vez de subdividir la tierra, las familias donaron su bien a la asociación sin perder la tenencia y uso de su casa bajo contrato de comodato. Toda casa vacía es administrada por la comunidad y la asociación es dueña de las instalaciones comunes: cocina comunitaria, salones, casa ancestral, huertas, etc.

La organización se autogobierna mediante *sociocracia* y se inspira para sus procesos educativos en la "matriz chiminigagua" que contempla el desarrollo del ser, la familia y la comunidad en las dimensiones mental, ecológica, emocional y cultural. El grupo cuenta con su propio manual de convivencia, que integra acuerdos y protocolos detallados, elaborados de forma equitativa, transparente y eficiente. Por sus métodos de autogobierno, algunos integrantes del proyecto se han convertido en facilitadores comunitarios, hábiles en resolución de conflictos.

La ubicación, tamaño, aprobación del diseño y del plan maestro de las viviendas, así como el permiso para construirlas y el ingreso de cada familia, se han decidido por consentimiento general en asambleas. Tanto los aspectos físicos del proyecto, como los aspectos administrativos, políticos, sociales, ambientales y culturales, se planearon participativamente a través de un método llamado "búsqueda de futuro", que establecía la visión de la comunidad para los diez años siguientes. Cada año se realizan ajustes menores. Luego, este derrotero es desarrollado por células de trabajo que realizan proyectos aprobados por la asamblea, llamada "círculo general".



El Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas, CASA, fue conformado en 2012 para articular diversas iniciativas sustentables, tanto rurales como urbanas, familiares o comunitarias, nómadas, educativas u otras, que crecen día a día en Latinoamérica, contribuyendo a la regeneración de la Madre Tierra. Este consejo se integra como sección latinoamericana de la Red Global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network, GEN) y en 2015 se reunió en la Aldeafeliz. Fotografía: Común Tierra.

La construcción de las casas se da colaborativamente pero bajo responsabilidad de cada familia. Un arquitecto residente ha apoyado los aspectos técnicos para obtener permisos legales y garantizar un adecuado nivel de calidad de las viviendas, las cuales, por acuerdo general, no superan los 35 metros cuadrados por persona. Esto se debe a la voluntad de generar espacios de convivencia a través del uso compartido de los servicios comunitarios: lavandería, cocina, salón comedor, huertas y garaje común (todos los caminos son peatonales).

La mitad de las construcciones fue realizada por maestros de obra locales, la otra mitad involucró directamente las manos de la comunidad y voluntarios sin experiencia previa. Se ha utilizado bambú y maderas cultivadas para la mayoría de estructuras, también se han experimentado algunas técnicas de construcción con tierra cruda y desarrollado sistemas ecológicos de procesamiento de las materias orgánicas, residuos humanos y aguas grises. El promedio de inversión que las familias han realizado progresivamente en las viviendas es de 10 000 USD.

El proyecto se ha desarrollado gracias a una mezcla de fondos privados (de sus integrantes) y fondos comunitarios (ingresos generados). La alimentación de los *aldeanos/as*, la mano de obra de cocina y mantenimiento, así como los servicios comunes –incluido internet wifi– se sostienen gracias a las ganancias que genera una economía colectiva: ésta tiene como fuente de ingresos la labor donada por los asociados/as para la celebración de eventos educativos, encuentros, visitas, cultivo de café orgánico y huertas, y el alquiler de espacios comunitarios.

Si bien la economía de la comunidad genera recursos suficientes para sostener su forma de vida sencilla y de bajo costo, en 2017 se decidió salir a buscar fondos para desarrollar un proyecto productivo de amplio alcance: la creación de la Escuela de Tecnologías Sociales e *incubadora de ecoaldeas*. Con este proyecto se busca convertir la comunidad en una escuela de vida sostenible, que da trabajo a miembros de todas las familias asociadas y multiplica el modelo a quienes deseen replicarlo.

Difusión del modelo y generación de redes de base

En 2006, Aldeafeliz participó como co-fundadora de la Red Colombiana de Ecoaldeas y desde entonces organiza anualmente el Llamado de la Montaña, un encuentro que reúne cerca de 200 personas para compartir experiencias en sustentabilidad comunitaria. Asimismo, impulsó la Red CASA Latinoamérica (Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina), una red de base que agrupa Ecoaldeas y proyectos regenerativos. Como miembros de CASA, la asociación promovió en 2012 el primer Encuentro Iberoamericano de Ecoaldeas y en 2015 lanzó el Encuentro Latinoamericano, en el cual se ha comenzado a promover la enseñanza de la *sociocracia* como método ideal de gobierno comunitario. Hoy, Aldeafeliz es embajadora de la Red Global de Ecoaldeas y ha sido invitada a la COP21 por el gobierno colombiano, como ejemplo de solución a la crisis climática.

III. Acompañar los procesos

En cualquiera de sus modalidades, la producción de vivienda y hábitat involucra actores sociales, políticos y económicos diversos. Incluso en los territorios más marginados, interceden desde autoridades locales y movimientos políticos, hasta congregaciones religiosas, universidades y organismos del sector no gubernamental, sin olvidar la presencia de proveedores de materiales y todo tipo de intermediarios.

Asimismo, los procesos autogestionarios descritos hasta ahora –donde el sujeto protagónico es el propio habitante organizado– dan cuenta de la importancia que pueden llegar a tener las alianzas con actores externos, tales como desarrolladoras sociales, cooperativas matrices y otros agentes legalmente constituidos que realizan proyectos habitacionales para terceros de forma continua. Existen también institutos de asistencia técnica que proporcionan asesoría bajo distintas formas organizativas: asociaciones o cooperativas de profesionales, grupos vinculados a los gremios, talleres universitarios o cuerpos técnicos dependientes de organizaciones sociales. En algunos casos, estos organismos prestan una asesoría integral, que incluye aspectos constructivos, financieros, contables, legales, sociales y administrativos¹.



En este último capítulo, hemos reunido precisamente los aportes realizados por este tipo de organismos durante los encuentros del Grupo de Trabajo sobre Producción Social del Hábitat. Por orden de antigüedad, aparece en primer lugar el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Desco, cuyas prolongadas intervenciones en los barrios de Lima Sur (en especial Villa El Salvador y Villa María del Triunfo) le han convertido en un referente ineludible dentro del sector no gubernamental peruano.

Enseguida vienen dos experiencias bolivianas asesoradas por el Taller de Proyectos e Investigación del Hábitat Urbano y Rural, Red Hábitat. Esta asociación impulsa desde 1993 proyectos de mejoramiento barrial y habitacional, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres y en la generación de estrategias para el acceso de los sectores populares a los derechos vinculados al hábitat. Sobre todo, se enfoca en el derecho al agua y al saneamiento, ya que en Bolivia, todavía en 2015, 765 000 personas de un total de 10.7 millones de habitantes carecían de agua potable, mientras 5.1 millones permanecían por debajo de los estándares básicos de saneamiento establecidos por la Organización Mundial de la Salud (mapa 14). En este contexto, agravado por el cambio climático y por el estrés hídrico que éste ocasiona, la experiencia de cosecha de agua de lluvia conducida por mujeres del barrio Solidaridad cobra mayor relevancia.

Los casos siguientes –el de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) y el de Un Techo para mi Hermano (UTPMH)– nos hablan del tránsito que han experimentado muchos organismos civiles de apoyo a la PSH en países considerados de “renta media”, como Costa Rica y Argentina, en donde la cooperación internacional ha dejado de tener un papel preponderante. Ante este escenario, Fuprovi supo posicionarse como un actor capaz de operar dentro del sistema nacional de vivienda, de modo que logró multiplicar su ámbito y su escala de intervención. Por su parte, UTPMH tuvo que pasar por un difícil debate interno antes de apostar por una mayor profesionalización de su acción y de sus integrantes. Si bien esta estrategia generó contradicciones, también permitió que la institución adquiriera mayor capacidad de respuesta ante las malas condiciones habitacionales que prevalecen en el Alto Valle del Río Negro.

Un poco más al sur, en la provincia del Chubut, se desenvuelve otra experiencia de asistencia técnica cuya especificidad radica en su relación orgánica con un movimiento de cooperativas de trabajo dedicadas, entre otras cosas, a la producción de vivienda social: la asociación civil Hábitat funciona como un ente especializado en brindar una asesoría integral (técnica, financiera, legal y social) a las diferentes iniciativas del llamado Movimiento de Cascos Amarillos.

Finalmente, este capítulo termina con una serie de experiencias de corte universitario que apuntan hacia la formación de nuevas generaciones de técnicos y profesionales comprometidos con las luchas sociales y el hábitat popular. Sería imposible tratar aquí el amplio debate que se ha generado al respecto², así como tampoco podemos abarcar todas las iniciativas de capacitación a la producción social del hábitat que se desarrollan en el ámbito de las organizaciones civiles y populares (mapa 15). Los casos que aquí se retoman, sin embargo, sintetizan la riqueza de un quehacer universitario responsable que además de realizar investigaciones científicas y formar a los estudiantes, se vuelca hacia los barrios y los procesos populares, lo que da sentido y contenido a las áreas de extensión universitaria. Así lo demuestra, desde 1967, el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda “Víctor Saúl Pelli”, pero también Proyecto Habitar, que empezó en 2008 como una cátedra de vivienda vinculada a la Red Ulacav y se fue convirtiendo en un colectivo de arquitectas y arquitectos que opera en decenas de

¹ Véase: Enrique Ortiz Flores, “Producción social de vivienda y hábitat: bases conceptuales para una política pública”, en *El camino posible*, Uruguay, Trilce, 2012.

² Véase: Hábitat y Sociedad n°10, Universidad de Sevilla, España, noviembre de 2017. <http://editorial.us.es/es/numero-10-2017>

barrios del área metropolitana de Buenos Aires. De México, se presenta la experiencia de extensión universitaria en el Cerro del Cuatro, impulsada por un colectivo de profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), que utilizan los Proyectos de Aplicación Profesional propios de su institución para diseñar e impulsar mejoras urbanas junto con las organizaciones de los barrios populares de Guadalajara.



La Escuela Regional de Formación de Coceavis es el principal instrumento para la promoción y el fortalecimiento del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en Centromérica. Por dos años consecutivos, esta propuesta político-pedagógica se ha implementado en México y ha favorecido varios proyectos del Movimiento Urbano Popular. *Fotografía: HIC-AL.*



El Colectivo Ciudadano Tlacuayoan (COCIT) impulsa programas de vivienda, mejoramiento barrial, compostaje, producción de plantas y educación ambiental, que en conjunto abonan al bienestar y fortalecimiento social de la población de la colonia popular Tlacuayoan, fundada en 1998 en Tlapacoyan, Veracruz. En la imagen, integrantes del colectivo se reúnen con sus aliados para evaluar los avances en materia de vivienda. *Foto: Casa y Ciudad.*



Taller práctico realizado en junio de 2017 durante el Tercer Encuentro Latinoamericano sobre Producción Social del Hábitat, en Cuetzalan, Puebla. El taller impartido por organizaciones de la red centroamericana Mesoamerikaab, muestra de manera científica la interacción de la tierra con el agua y el aire, para una mejor comprensión acerca del comportamiento de este elemento como material de construcción. *Fotografía: HIC-AL.*

MAPA 14. Agua y saneamiento en América Latina: un derecho humano insatisfecho

Mapa: HIC-AL.



Fuente: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (www.washdata.org)



FICHA 21.

Con 50 años de experiencia, Desco lanza nuevas iniciativas

Lima, Perú. 30 viviendas de emergencia. Caso reconocido como Buena práctica del Concurso Internacional de Dubái. Sitio web: <http://urbano.org.pe>

En 1965, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Desco, se constituyó como un equipo dedicado al estudio de la "marginalidad" urbana con el objetivo de establecer un enfoque de intervención en las zonas que iban surgiendo en los alrededores de Lima. Hoy, su Programa Urbano acumula más de 50 años de trabajo con organizaciones, municipios e instituciones diversas. Esto le permite proyectar alternativas de desarrollo sostenibles y replicables para mejorar las condiciones de vida en los sectores populares de las ciudades del Perú. Su agenda de trabajo incluye: derechos humanos vinculados al hábitat, cambio climático y gobernanza ambiental; conflictos sociales, seguridad y soberanía alimentaria; seguridad ciudadana; entre otros.

Una propuesta para los barrios periféricos de Lima

³ Véase: José Barreda y Daniel Ramírez, "Lima: Consolidación y expansión de una ciudad popular", en *Perú Hoy*, Lima, Perú, Desco, 2004.

El Perú encara un considerable y creciente déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, por el crecimiento vegetativo de la población. Las alternativas ofrecidas desde el Estado se centran en el modelo impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual propone que los gobiernos promuevan una mayor inversión por parte del sector privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles para las familias. Sin embargo, este modelo atiende únicamente a los sectores medios y altos del país que pueden acceder a un crédito del sistema bancario y asegurar un encaje del 10% de la vivienda construida en condominio. Esta situación ha propiciado que el modelo de invasión o toma de tierras por parte de las personas más pobres aún se utilice como estrategia para acceder a suelo para vivienda en áreas residuales o alejadas del centro de la ciudad.

Los "nuevos barrios" de la periferia de Lima se caracterizan por su baja consolidación urbana, falta de servicios y equipamiento, viviendas precarias y un entorno de vulnerabilidad ambiental y riesgo físico³. Estas características los distinguen de aquellos formados entre la década del cincuenta y fines de los ochenta, dado que en los nuevos barrios sus propios habitantes han edificado las viviendas sin asistencia técnica, sin supervisión profesional y sin apoyo estatal a través de los programas correspondientes. A pesar del enorme esfuerzo de estas familias, en su mayoría migrantes del interior del país, los barrios periféricos de Lima actualmente carecen de servicios públicos como agua potable y

alcantarillado; de equipamiento urbano adecuado; y de fácil acceso a los centros de trabajo, salud, comercio y educación. Peor aún, estas familias están expuestas a condiciones climáticas extremas producidas por el cambio climático que va en aumento.

Módulos mínimos de emergencia

Ante esta situación, el Programa Urbano de Desco generó recientemente una propuesta para mejorar las condiciones de habitabilidad de familias vulnerables en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, con énfasis en hogares liderados por mujeres jefas de familia. Se trata de construir módulos de emergencia para enfrentar los efectos del cambio climático y proteger a las familias de las bajas temperaturas del invierno. El módulo ha sido diseñado de manera que puede adaptarse a los cambios y al crecimiento progresivo de la vivienda, conforme la economía de la familia mejore.

La propuesta se enmarca en el trabajo que desarrolla esta institución desde los años ochenta en los distritos de Lima Sur, y se concretó gracias a la cooperación solidaria de Misereor y del Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático para la Vivienda Social (Selavip). Con este antecedente, la iniciativa se presentó a los/as representantes políticos de los nuevos barrios, quienes convocaron a las reuniones, faenas comunales y acciones de trabajo necesarias. Dada la falta de información censal pertinente, el proceso de selección de beneficiarios/as fue mediado por los representantes barriales, quienes conocen la situación socioeconómica y habitacional de la gente.

Una vez establecidas las 30 familias jefaturadas por mujeres que participarían en el proyecto, se firmó un acuerdo de compromiso voluntario a participar de la totalidad del proceso y se realizaron reuniones con grupos de familias por cada barrio para explicar las etapas de la implementación de los módulos.

El sistema constructivo debía ser de fácil y rápida instalación, económico, seguro y hermético. Se optó entonces por el sistema de construcción en seco denominado *drywall*, una técnica utilizada generalmente en la construcción de tabiques y divisiones interiores. Sin embargo, las propiedades físicas que ofrece y la facilidad de su construcción aún no ha sido muy difundida en los sectores populares. Estas ventajas, así como la reducción de costos y tiempos de construcción –en cumplimiento de los estándares de confort y habitabilidad–, permiten que sea una alternativa para las familias ubicadas en los barrios periféricos de la ciudad de Lima.

Se realizaron talleres sobre mejoramiento del hábitat, movilización comunitaria, gestión de riesgos, derechos de las mujeres y equidad de género, como antesala teórica al proceso de diseño participativo de las viviendas. De esta manera, el equipo de arquitectos de Trazo Verde se dedicó a discutir e interpretar los atributos ideales que cada miembro de la familia tenía sobre su propia casa. Esto, con la finalidad de que las ideas expresadas para emprendimientos futuros aterrizaran en diseños arquitectónicos factibles, que consideren la importancia de factores como iluminación y ventilación natural; los riesgos de construir sobre pendiente y arena; así como los parámetros municipales que se deben respetar, como son límites de terreno, retiros, áreas libres, entre otros. Dado que cerca de la mitad de las viviendas carecía de acceso a servicios básicos, había que considerar espacios para letrinas.

Mientras se diseñaban las edificaciones, Desco buscaba el apoyo de pequeñas empresas para conseguir recursos y/o materiales que pudieran ser usados en los módulos. Las dificultades encontradas en este terreno no fueron menores, pues además del alza de precios en algunos materiales, que alteró el presupuesto inicial, hubo que enfrentarse a la poca accesibilidad de los barrios. Debido a la falta de apoyos por parte del Estado, se tuvieron que movilizar recursos locales, incluyendo donativos y rebajas por parte de empresas que operan en la zona. A su vez, la propia población se movilizó para



Arribo de paneles de tablaroca para la construcción de un módulo de emergencia. *Fotografía: Desco.*

brindar su apoyo en la construcción de los módulos de emergencia, específicamente a través de las faenas comunitarias y traslado de materiales.

Cabe decir que la relación con las municipalidades de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador no fueron las esperadas, ya que las áreas responsables de brindar la autorización de las obras nunca atendieron a los/as solicitantes, a pesar de haber sido convocadas reiteradamente. Afortunadamente, en ambos casos se contó con el apoyo de regidores municipales, quienes representan a la población ante los respectivos Consejos Municipales.

Finalmente, uno de los aportes más significativos de este esfuerzo tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, quienes tuvieron plena participación desde las primeras reuniones con los representantes, las firmas de acuerdos, la selección de coordinadoras, hasta la realización de las obras. Ellas mismas acondicionaron sus terrenos ("pampear" en términos locales) y, organizadas por grupos de afinidad, se ocuparon del traslado de los elementos necesarios (arena, cemento, perfiles metálicos, placas de fibrocemento, puertas, lana de vidrio, contramarcos de madera y pinturas).



Familiares participan en la construcción. Fotografía: Desco.

Indicadores para la acción

Un aspecto escasamente atendido y visibilizado por la política social en el Perú es el tema de la mujer y la vivienda. Según el *Panorama social de América Latina 2012*, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2010 y 2011, Perú logró reducir 3.5 puntos porcentuales la tasa de pobreza e indigencia. Sin embargo, el informe señala que se han acrecentado las brechas entre hombres y mujeres, lo que supone una mayor “feminización de la pobreza” en toda la región.

Ante la falta de datos precisos y asequibles para identificar dónde se encuentran las mujeres pobres que viven junto con sus familias en situación de precariedad, donde sus derechos humanos y al hábitat son vulnerados, Desco desarrolló el Sistema Comunal Territorial Urbano Ambiental (Sicotua) como un mecanismo para identificar a las familias pobres jefaturadas por mujeres; y que de esta manera la determinación de los casos para atender tenga una base que oriente los escasos recursos con los que se cuenta. Estas acciones de apoyo a las familias lideradas por mujeres constituyen, en el marco de una economía liberal, una experiencia para mostrar los límites del crecimiento económico con evidencias concretas y la necesidad de emprender políticas públicas generales de otro tipo para mitigar las vulnerabilidades en las que cotidianamente viven las mujeres en los barrios pobres de la ciudad de Lima.

En esta experiencia, se ha complementado la construcción de los módulos de emergencia con la instalación de termohidrómetros para medir la temperatura ambiental, específicamente en la zona de Villa María del Triunfo. Es ahí donde se pretende contar con la evidencia para denunciar los problemas climáticos que afectan a una población de aproximadamente 19 000 familias en todos los cerros del poblado.

Más allá de construir indicadores, a través de esta experiencia el equipo de Desco sentó las bases de una metodología validada por los actores locales, en particular la Diócesis de Lurín. Junto a este actor social, se implementa el proceso de identificación de familias y la movilización de recursos para poder impulsar un nuevo proceso en el cual Desco facilita asistencia técnica y la Diócesis lidera el desarrollo del proyecto en una nueva zona del sur de Lima.



FICHA 22.

El barrio Solidaridad enfrenta los efectos del cambio climático

El Alto, Bolivia. 30 módulos sanitarios y empoderamiento de las mujeres.

Sitio web: www.red-habitat.org

El barrio Solidaridad, ubicado en el distrito 5 de El Alto, fue fundado hace menos de dos décadas en las faldas del nevado Huayna Potosí, el cual se encuentra en proceso de deshielo debido al calentamiento global. Hoy lo habitan cerca de 1 500 personas en viviendas que fueron autoconstruidas, principalmente de adobe, con plancha de zinc en la cubierta y pisos de tierra. La mayoría de las familias cuenta desde 2007 con un grifo de agua potable en el patio y energía eléctrica, servicios que se obtuvieron gracias la presión ejercida por la junta vecinal ante las autoridades locales. Así también se logró el emplazamiento de las matrices del alcantarillado sanitario, pero el drenaje nunca llegó.

A pesar de la cercanía al canal abierto que conduce las aguas de la represa Milluni hacia la planta de tratamiento de agua de la ciudad, el barrio sufre una escasez hídrica y, paradójicamente, las viviendas tienen problemas de filtración ligados a la cercanía de humedales. Desafortunadamente, la exigencia de mayores dotaciones de agua y de mejoramiento de la red de drenaje nunca ha sido bien recibida por el gobierno local, rebasado desde hace tiempo por la demanda que ejerce el millón de habitantes de El Alto. Por si fuera poco, con el deshielo de los glaciares, sólo se espera mayor escasez del vital líquido en un futuro cercano.

Es en este contexto que a lo largo de 2013 se realizó la escuela-taller *Gestión democrática del hábitat y elaboración de proyectos*, por parte de la asociación Red Hábitat. De este proceso surgió el Comité Impulsor de Agua y Saneamiento Ambiental (Cisaca), conformado por 30 mujeres que decidieron autoconstruir sus baños y lavanderías incorporando sistemas de cosecha y filtración de agua de lluvia. Además de la asesoría integral de Red Hábitat, las obras se realizaron gracias al apalancamiento de recursos (23 mil USD) del Selavip.

El empoderamiento de las mujeres se dio a lo largo de talleres informativos, jornadas de trabajo y visitas casa por casa, apelando en cada momento al autoestima y liderazgo de las participantes. Más allá del mejoramiento de sus propias condiciones, las mujeres que integraron el Cisaca han realizado asambleas y reuniones con diversas autoridades e instancias que culminaron con la ejecución de un colector principal para la urbanización Solidaridad, así como la ampliación del alcantarillado de la urbanización Atalaya.



El colector principal del barrio Solidaridad, producto de la lucha de CISACA. Fotografía: Pierre Arnold.

Esta experiencia constituye un antecedente de uso racional y aprovechamiento del agua de lluvia que podría ser tomado como ejemplo práctico para otros emprendimientos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático. Debería incluso incorporarse como un antecedente para la política del uso eficiente del agua promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua desde 2013, pero que hasta la fecha no cuenta con ningún resultado ni se han socializado los proyectos ejecutados en este ámbito. Más aún, esta experiencia podría servir para el desarrollo de proyectos de agricultura urbana, a partir de la reutilización de las aguas grises para el regadío de los huertos familiares.

Red Hábitat

Red Hábitat inició sus actividades con el Proyecto de Mejoramiento de la Vivienda (1993-2000) que consistió en otorgar préstamos a familias de bajos ingresos para ampliar las viviendas, instalar servicios básicos, regularizar el derecho propietario, legalizar las construcciones y apoyar la compra de lotes. Además de aportar asistencia técnica y legal, impulsó la creación de un banco de materiales y una ferretería popular. De 1996 a la fecha ha implementado programas de planificación participativa, gestión de riesgos, desarrollo económico y vivienda. En el marco de su programa de gestión ambiental, en 2012 la asociación desarrolló un proceso de prospección-diagnóstico de barrios potenciales para el trabajo con tecnologías alternativas para mitigar los efectos del cambio climático.



FICHA 23.

Hábitat para la Mujer, Comunidad María Auxiliadora

Cochabamba, Bolivia. 500 viviendas progresivas desde 1999 a la fecha.

Finalista del Premio Mundial del Hábitat 2008. Documental: <https://youtu.be/W0mMxBdxS4c>

La fundación de la comunidad remonta a 1999, cuando surgió por iniciativa de un grupo de compañeras pertenecientes al Comité Interdistrital de Mujeres Líderes Barriales de Cochabamba que aspiraban a construir un espacio libre de violencia hacia las mujeres y los niños. El terreno de 18 hectáreas fue adquirido por una de ellas mediante un arreglo con el antiguo dueño, ante el cual la deuda sería reembolsada gradualmente. Así, las familias se fueron vinculando al proyecto con un pago inicial de 10 USD y pagos mensuales mínimos de la misma cantidad.

En 2004 se instauró un comité de apoyo a las familias para contribuir a la resolución de problemas causados por la violencia doméstica e intrafamiliar. A la par se definieron mecanismos de apoyo a las iniciativas productivas de las mujeres y, entre otras cosas, se logró que exista una guardería y un centro de apoyo a niños en edad escolar.

En este periodo, también se instaló el Comité de Vivienda y Servicios Básicos, encargado de coordinar la implementación de un sistema de agua potable para 373 familias con apoyo del Centro de Investigación, Promoción y Desarrollo de la Ciudad (Ciprodec) y del National Centre of Competence in Research (NCCR North-South) de Suiza. Asimismo, llevó adelante las obras de alcantarillado con un crédito de la boliviana Fundación Pro Hábitat, además se creó un banco de herramientas, un equipamiento para oficina y un centro de capacitación con apoyo de la Unión de Instituciones de Trabajo de Acción Social (Unitas). La autoconstrucción de las viviendas también fue posible gracias a la vinculación con diversos actores de la cooperación internacional tales como Hábitat para la Humanidad.

Desde 2006, la población se rige por un pacto normativo que estipula la propiedad colectiva de la tierra, además de otras disposiciones como la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y la prohibición de lucro con la vivienda en cualquiera de sus formas. Todas las resoluciones quedan registradas en actas de asamblea y todo el actuar orgánico es llevado adelante por un Directorio que es elegido cada dos años, cuya presidenta debe ser inexcusablemente mujer. Además, no hay reelección para los cargos de presidenta y secretaria de hacienda, de modo que se garantiza la transparencia y se forjan nuevas y nuevos líderes. Una vez que concluyen su gestión en el Directorio, todas las lideresas pasan a formar parte de la Asociación de Mujeres Líderes Hábitat para la Mujer, organización encargada de velar por los intereses de las familias y de la comunidad.



Comunidad libre de violencia contra las mujeres. Fotografías: Pierre Arnold.

Entre 2008 y 2009, se amplió la cobertura del sistema de alcantarillado al instalar el primer prototipo biorreactor en conjunto con la Fundación Aguatuya. Además, se establecieron directrices para la planificación comunitaria, la seguridad social y la reintegración familiar. Como resultado, se ha logrado la reducción de los índices de violencia doméstica e intrafamiliar: hoy la comunidad tiene el índice más bajo de inseguridad ciudadana de todo el distrito⁴.

⁴ Véase: Comunidad María Auxiliadora, *Buscar un lugar... y construir una comunidad*, Bolivia, Periferia, 2014.



FICHA 24.

Fuprovi: el desafío de la escala de intervención

Costa Rica. Más de 12 000 viviendas desde 1989 a la fecha (atención de desastres, mejoramiento, vivienda nueva en condominio, regularización).

Premio a la mejor experiencia (condominio La Esperanza) por el Congreso Internacional de Construcción Sostenible, Green Building Council Costa Rica, 2016.

Sitio web: www.fuprovi.org

La Fundación Promotora de Vivienda nació en 1987 con la misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores con menores ingresos mediante el desarrollo de proyectos de vivienda, servicios básicos y fortalecimiento comunal. Con el apoyo de la cooperación internacional, logró generar un fondo rotativo con el cual se financian los nuevos proyectos. A la fecha, sus acciones de vivienda han beneficiado directamente a más de 12 000 familias en distintos rubros: atención de emergencias y reconstrucción tras eventos climáticos, atención a barrios precarios, y acompañamiento en procesos de autoproducción de vivienda en condominios.

Tres décadas de desarrollo

Las 25 personas que originalmente se agruparon, eran especialistas de la construcción relacionadas con el sector público de vivienda, quienes se percataron de la dificultad de las instituciones para desarrollar un modelo de trabajo flexible y ágil que atendiera la problemática habitacional. Tras lograr un acuerdo entre el gobierno y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), se encomendó a Fuprovi el diseño e implementación del primer Programa de Desarrollo Habitacional. En este contexto, la fundación pudo echar a andar el Proyecto Especial de Vivienda para Asentamientos Precarios (1988-1991), que consistió en llevar asistencia a más de 1 600 familias.

La metodología de intervención de estos primeros años, se basó en la organización de grupos de trabajo apoyados por una fuerte etapa de capacitación organizativa y la participación de un equipo interdisciplinario, liderado por un ingeniero y un coordinador social (sociólogo o trabajador social). La idea era utilizar intensamente la mano de obra comunal en la autoproducción de sus viviendas, sin descartar contrataciones de mano de obra calificada para actividades con un mayor nivel de complejidad; a esta modalidad se le conceptualizó como *modelo de ayuda mutua*. En estas primeras experiencias –incluyendo programas de atención a emergencias como el huracán Juana de 1988 y el sismo que afectó a Limón en 1992– se reconoció la participación de tres actores claves: las familias organizadas, las entidades financieras que integran el Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV) y Fuprovi como la entidad privada, técnica-asesora del grupo en todo el proceso y que provee, en algunos casos, el financiamiento de corto plazo.

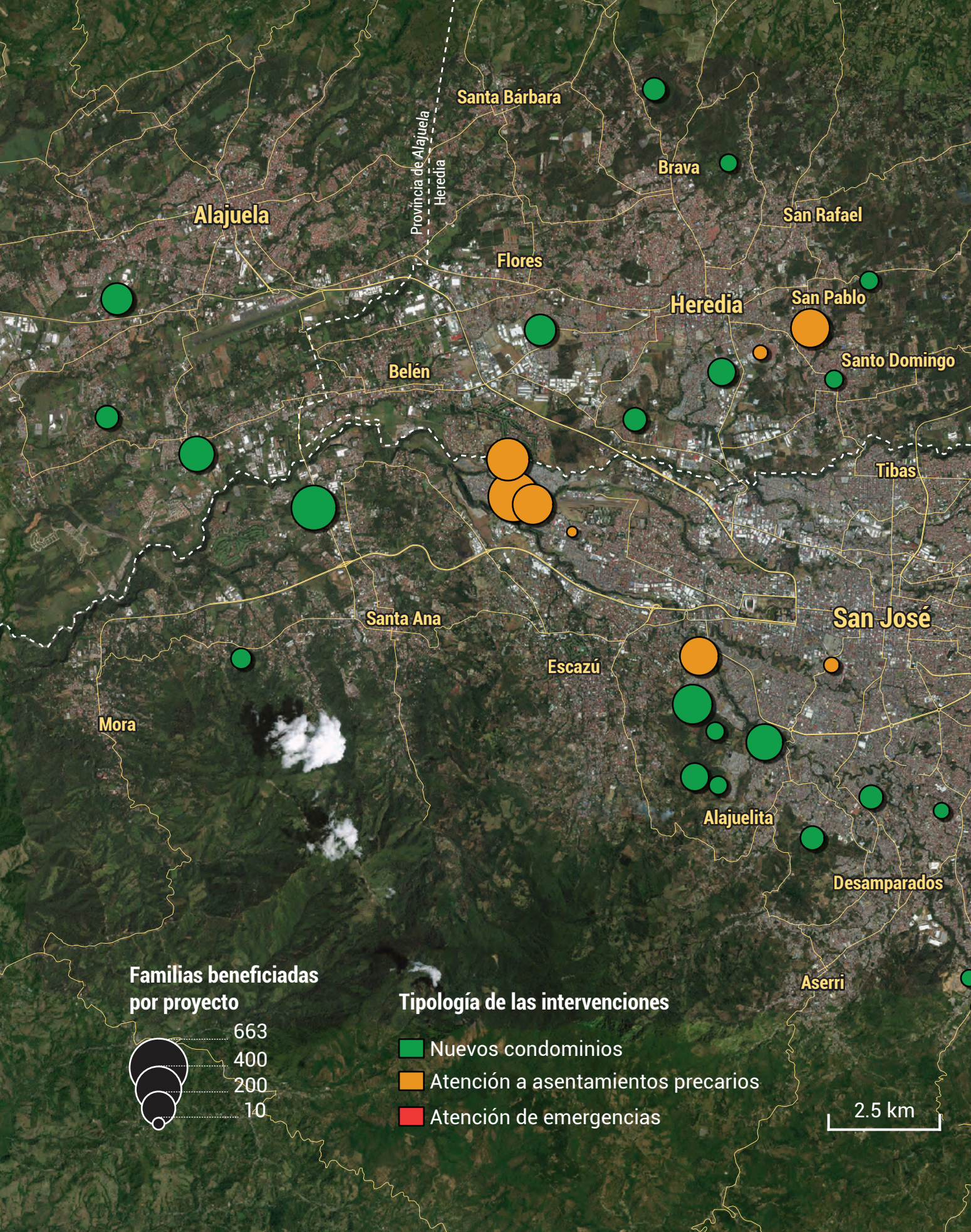


Asentamiento Linda Vista, taller con el equipo universitario y la Escuela de Liderazgo de Fuprovi.

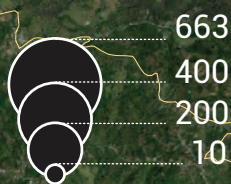
El segundo modelo de intervención, desarrollado entre 1992 y 1998, fue denominado *modelo de administración comunal*. En esta modalidad, se practicó la idea de descentralización de la administración del proyecto, con el fin de que las comunidades tuvieran un rol mucho más protagónico en todo el proceso. Diferentes responsabilidades fueron entonces trasladadas a la comunidad, como la vigilancia, la gestión de proveeduría, la administración de las bodegas y el pago a los proveedores. El concepto de cogestión del proyecto fue el que sirvió de guía para el desarrollo metodológico de esta propuesta, en la cual se entiende que el aporte comunal es mucho más que simple mano de obra, y que se pueden obtener resultados importantes si se da la oportunidad a las familias de participar más en la gestión y administración del proyecto, siempre y cuando exista organización, capacitación y asesoría. Otra de las características de esta modalidad, fue la introducción de actividades de mejoramiento ambiental como parte del proyecto.

El tercer modelo de intervención que se desarrolla desde 1998 a la actualidad, se ha denominado *mixto*, ya que se caracteriza por promover una cogestión de proyectos basada en la gerencia por parte de Fuprovi, a partir de la contratación de empresas y profesionales para la ejecución de algunas actividades. Esto se realiza junto con la participación activa de los grupos organizados de cada proyecto. La intensidad del aporte de mano de obra de las familias en el proceso constructivo, depende en gran medida del nivel de ingresos de las familias y de su capacidad para movilizar recursos como grupo. Uno de los aspectos importantes de este modelo es que, dentro de la estrategia de asesoría técnica que brinda Fuprovi a los grupos, se incorpora un pre-proyecto constructivo que tiene como objetivo fortalecer la estructura organizativa y asesorar la elaboración de un plan de gestión para la movilización de recursos. Una actividad que se retoma en los últimos años, es la administración de la bodega de materiales con la capacitación y asesoría de la Fundación. Además, se revitaliza la propuesta de intervención con la ampliación de la asesoría técnica desde el Programa de Fortalecimiento Comunal en la etapa de pos-proyecto constructivo.

Finalmente, destaca el aporte de Fuprovi en materia de investigación y producción de información estratégica sobre el estado de la vivienda en Costa Rica. Cada año, la Fundación produce un informe que forma parte del Informe del Estado de la Nación. Con esto se brinda una base sólida al país para la toma de decisiones y la formulación de política pública en el sector de vivienda y desarrollo territorial urbano.



Familias beneficiadas por proyecto



Tipología de las intervenciones

- Nuevos condominios
- Atención a asentamientos precarios
- Atención de emergencias

2.5 km

Las Anas es una urbanización para 198 familias que vivían en asentamientos precarios. La construcción fue financiada por medio del subsidio del bono familiar de la vivienda, concedido por el Estado costarricense, luego de estudios sociales y financieros a familias beneficiadas. El complejo cuenta con 37 condominios, conformados cada uno por cinco viviendas. *Fotografía: Fuprovi.*



Tres botones de muestra

Linda Vista

El asentamiento surgió en el año 2000, cuando un centenar de familias ocupó un terreno propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Después de varios intentos fallidos, en 2005 un grupo de líderes logró conformar una Junta Directiva y legalizar a la organización como Asociación Pro Vivienda Linda Vista. Asimismo, se realizó un censo de las familias y se llevaron a cabo actividades para gestionar fondos, especialmente rifas, ventas de comidas, bingos y una cuota mensual de un dólar por familia para soportar los gastos administrativos en que incurría la Junta. El mismo año, se estableció una coordinación con la Maestría de Vivienda y Equipamiento Social de la Universidad de Costa Rica, la cual llevó adelante un primer ejercicio de diseño participativo para comenzar a imaginar alternativas de mejoramiento habitacional.

El equipo universitario facilitó el enlace con Fuprovi de tal modo que, a partir de 2012, la Fundación acogió el proyecto e inició un proceso de fortalecimiento comunal e incidencia política hacia el IMAS para lograr el traspaso del terreno. Este proceso contribuyó a la formación política de la dirigencia, ya que aprendió a posicionar su proyecto en la agenda pública, a utilizar herramientas de presión adecuadas y a generar consensos con su asamblea.

En 2013, una vez lograda la titulación del predio a favor de la asociación, se procedió a tramitar los permisos de construcción. Fuprovi y la asociación acordaron, por medio de la figura legal de fideicomiso, llevar adelante el expediente técnico y financiero ante el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), encargado de aprobar los bonos familiares de vivienda (subsídios) según los criterios del Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV). Por su parte, la asociación puso al terreno como garantía de cumplimiento del fideicomiso.

Muchos obstáculos se han atravesado en el camino y apenas en 2017 se estaba terminando el proceso de obra. En términos legales, algunas familias nicaragüenses no contaban con cédula de residencia al día, lo que les impedía acceder a una solución de vivienda financiada por el gobierno. Por otro lado, no todas las familias calificaban al subsidio, lo que implicó un lento y doloroso proceso de negociación para reubicar a algunas familias en otros proyectos de Fuprovi y así poder dar inicio a la construcción.



Capacitación ambiental pos-proyecto en el condominio El Rosarito. Desde 2013, través de su Área de Desarrollo Comunal, Fuprovi ha potenciado la creación de un comité de gestión de los condóminos, pues en este esquema la estructura asociativa se disuelve una vez que los habitantes acceden a la propiedad. *Fotografía: Fuprovi.*

Las Anas

En el caso del complejo Las Anas, el acompañamiento técnico de Fuprovi se dio desde el momento en que las familias de un asentamiento precario de la capital decidieron unirse para mejorar sus condiciones habitacionales. Desde 2012, la Fundación comenzó a impartir una serie de sesiones formativas a todos los jefes/as de familia, primero quincenalmente y luego de manera mensual, sobre cómo conformar una asociación, normas de convivencia, prácticas amigables con el ambiente, resolución de conflictos, prevención del abuso de alcohol y del consumo de drogas, equidad de género, entre otros temas.

La organización se constituyó en 2014 como Asociación Pro Vivienda Las Anas de Desamparados y desde entonces Fuprovi ha acompañado las reuniones de la Junta Directiva y ha mantenido una intensa labor social para garantizar que todas las familias comprendan las implicaciones de la vida en condominio, tales como pago de una cuota de mantenimiento mensual, respeto y aplicación de un reglamento consensuado, así como la responsabilidad con las áreas comunes. Asimismo, la Fundación implementa un curso especializado para jefes/as de familia que fungirán como administradores de los 37 condominios, sobre aspectos administrativos, legales y contables. Si bien la comunidad podría contratar administradores, la limitación de recursos de las familias hace más viable que un jefe/a de familia por condominio asuma esta tarea de manera rotativa.

El Rosarito

El proyecto habitacional El Rosarito se destinó a familias que calificaban para el programa ahorro-bono-crédito del SFNV, lo que significa que percibían ingresos mensuales de entre 450 000 y 700 000 colones y que, además del subsidio estatal, requerían un crédito por parte del Banhvi. El grupo está conformado por administradores, educadoras, contadores, oficiales de seguridad, trabajadores de construcción y misceláneos. También destaca la jefatura exclusivamente femenina: un total de diez hogares presentan esta condición. Desde 2007, se conformó la Asociación Pro Vivienda Progreso del Este, la cual se encargó de coordinar la búsqueda del terreno y de llevar adelante, junto con Fuprovi, la gestión del proyecto. La urbanización cuenta con un único acceso, está conformada por un área de juegos infantiles, un área recreativa, un parque, una laguna de retardo de aguas pluviales y una zona de protección.



FICHA 25.

Un Techo para mi Hermano: el desafío de la profesionalización

Río Negro, Argentina. 264 viviendas mejoradas y nuevas entre 2006 y 2016.

Sitio web: <http://untecho.org.ar>

La organización comenzó a operar en 1986 con el nombre de Programa Diocesano Un Techo para mi Hermano (UTPMH), bajo la dirección del padre Claudio Faivre Dubozen, párroco de Choele Choel. Entre sus principios rectores, el programa establecía la necesidad de trabajar "a partir del criterio de liberación del hombre, orientado a cambiar las estructuras y comportamientos de injusticias que condicionan y a veces imposibilitan el desarrollo de las familias y de la sociedad". Desde esta perspectiva, se acompañó a familias marginadas constituidas en grupos, para que levantaran sus viviendas y, a raíz del reconocimiento de sus capacidades colectivas, encauzaran sus propios procesos de cambio.

A mediados de los años noventa, se retiró la cooperación internacional –con la que se solventaban los materiales de construcción–, lo cual nos colocó en una situación delicada. Por un lado, tuvimos que aprender a exigir y administrar recursos públicos, al tiempo que comenzamos a articularnos a nivel nacional con organizaciones afines para incorporar a la agenda pública el tema de la vivienda. Por otra parte, fuimos orillados a sostener un proceso de evaluación y reflexión interna que detonó importantes debates.

Si para algunos este proceso significó abrirse a un mundo de posibilidades de crecimiento (capacitación, asesoría a los municipios), para otros, en cambio, la crisis trajo aparejadas dudas acerca de si esto no se iba a transformar en una salida laboral para profesionales sin trabajo, lo que desvirtuaba el carácter "militante" que desarrollábamos hasta ese momento. Se pudo consensuar que debíamos diversificarnos sin perder nuestros objetivos esenciales, al compatibilizar el trabajo remunerado con los ideales y el crecimiento profesional con el compromiso de estar al servicio de la gente.

En una reunión de octubre de 1997, dos miembros de la secretaría ejecutiva manifestaron la voluntad de alejarse de la UTPMH, pues consideraban que era un paso necesario para el crecimiento de la organización y para su despegue de la órbita de la Iglesia. Por el carisma y trayectoria de estas personas, fueron momentos de incertidumbre y dudas. Luego de muchas discusiones, en 1999 el Programa Diocesano se transformó en la asociación civil Un Techo para mi Hermano.

En esta nueva etapa, la concepción del trabajo de los técnicos ha cambiado. Ahora se tiende hacia una profesionalización, no sólo por una cuestión remunerativa, sino por la necesidad de ofrecer un



Para la construcción de vivienda nueva, cada grupo trabaja la cantidad de horas semanales acordadas por su asamblea y todos/as deben trabajar en las viviendas de todos/as, con el acompañamiento de UTPMH tanto en lo administrativo como en lo constructivo y lo social. Una vez concluidas las viviendas, se procede al sorteo de las mismas, lo que garantiza el esfuerzo paritario durante la obra.
Fotografías: UTPMH.

Según el Censo de 2010, de las 204 000 viviendas existentes en Río Negro, 2 589 son "irrecuperables" y en 10 048 casos prevalecen condiciones de hacinamiento inaceptables (más de tres personas por cuarto). Por otro lado, se contempla un universo de 34 571 viviendas "recuperables", es decir, que requieren acciones de mejoramiento.



mejor acompañamiento a los grupos. Cabe recordar que, en sus inicios, UTPMH se conformó con gente de la Iglesia, la cual, si bien estaba involucrada con las comunidades, carecía de experiencia en el ramo de la construcción: las asesorías técnicas eran esporádicas y, en el mejor de los casos, los albañiles hacían la tarea sin transmitir sus conocimientos. Ante esta situación, la idea de ofrecer un apoyo permanente y mejor capacitado, se fue implementando poco a poco.

Otro cambio sustancial es que, en sus inicios, UTPMH se consideraba como una organización mixta, en la cual los "beneficiarios/as" participaban de decisiones que les eran propias. En la actual conformación, si bien se asocian algunos pobladores, UTPMH se constituye como una organización técnica orientada a la capacitación, la incidencia en políticas públicas y a dar solución a familias excluidas de los sistemas de créditos tradicionales para el acceso a una vivienda adecuada. Cabe subrayar que la asociación no forma los grupos, sino que responde a la demanda de familias autoconvocadas, en su mayoría lideradas por mujeres con hijos, que solicitan el apoyo de la organización.



FICHA 26.

Resolviendo las necesidades de vivienda y trabajo en el Chubut

Provincia del Chubut, Argentina. Acompañamiento a cooperativas de trabajo y producción de vivienda nueva. Sitio web: <http://asociacioncivilhabitat.org>

En la provincia del Chubut, el equipo encargado de aterrizar las políticas sociales impulsadas desde la federación a partir de la llegada de los gobiernos progresistas, generó dispositivos de empoderamiento de destinatarias y gestó una red de cooperativas que prosperó de manera independiente. En 2010, los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional y ello dio origen al Movimiento Cascos Amarillos de la República Argentina (Mocara). Como parte de éste, la asociación civil Hábitat, junto a las nuevas cooperativas, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La asociación nuclea a trece cooperativas de trabajo desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, construye viviendas en once localidades de la provincia patagónica.

Antecedentes

Los orígenes se remontan a 2006, cuando un nuevo equipo llegó a hacerse cargo de la conducción del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Chubut. La misión del equipo consistiría en generar dispositivos de empoderamiento de los beneficiarios/as de programas sociales. Para esas fechas, los efectos de la crisis, primero económica y luego política, desatada a partir de 2001 en Argentina, aún eran agobiantes para gran parte de la población del Chubut, y los planes sociales resultaban un sostén austero aunque clave para muchos ciudadanos.

Con el formato de talleres participativos, el CDR se abocó al trabajo con mujeres sostén de hogar que se encontraban nucleadas en el programa Familias para la Inclusión Social. Como resultado de los talleres en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, el equipo del CDR implementó en 2008 el programa territorial Haciendo Comunidad, pilar de un proceso de organización que más adelante derivaría en la creación de la asociación civil Hábitat y la red de cooperativas del Mocara.

En lo inmediato, los talleres permitieron identificar los liderazgos emergentes y sumar compañeras que deseaban consolidar la red de cooperativas de trabajo. Ante la falta de empleo y las malas condiciones de la vivienda en la región, Haciendo Comunidad buscó generar respuestas mediante la instalación de mesas de gestión participativa en los distintos territorios. Así se fueron delineando las

necesidades y prioridades de la población involucrada: atender el déficit habitacional, recuperar los espacios públicos, promover la capacitación y calificación laboral, garantizar el acceso de las comunidades a las herramientas y líneas de trabajo de la Economía Social, entre otras.

Financiado con fondos nacionales, el programa propuso un acuerdo tripartito entre los distintos niveles de gobierno: el CDR llevaría adelante el proceso organizativo en el territorio; el Gobierno Provincial aportaría con capacitación laboral desde la Secretaría de Trabajo y con fondos para la autoconstrucción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU); mientras que los municipios cederían las tierras para la construcción.

La formación de cooperativas de trabajo

El éxito más destacado del programa fue sin duda la consolidación de las primeras cooperativas de trabajo: 4 de Mayo (Rawson), 6 de Abril (Trelew) y Manos Constructivas (Puerto Madryn), que pronto sumaron un total de 150 personas. De este modo, las mujeres beneficiarias de planes sociales, que así lo deseaban, se reconvirtieron en obreras de la construcción.

Entre 2008 y 2009 se llevaron adelante las cesiones de terrenos en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y se construyeron los centros comunitarios que serían el puntapié inicial del desarrollo de cada barrio por construir. Sin embargo, por esos mismos años, las tensiones políticas entre el gobierno provincial y nacional trabaron el arribo de las líneas de financiamiento para la construcción de las viviendas, lo que obligó a los responsables del programa Haciendo Comunidad y a sus destinatarios/as a redefinir su estrategia. En este período turbulento, los actores involucrados comprendieron que el proceso de empoderamiento ya no tenía retorno.

Hábitat y Mocara: pilares para la autonomía del proceso

Ya caído el acuerdo tripartito que estructuraba el trabajo de Haciendo Comunidad, en 2010 los referentes del programa y los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional. Aquello sucedió en dos direcciones casi simultáneas: por un lado, ante la necesidad de una maduración conceptual y organizacional se establecieron los Encuentros Provinciales de Cascos Amarillos que derivaron en la constitución del Mocara. Por otro lado, se constituyó la asociación civil Hábitat como una herramienta formal que habría de nuclear el trabajo de las cooperativas en sus facetas legales, administrativas y financieras, a fin de gestionar y garantizar la ejecución de las obras pendientes para la comunidad.

Para 2012 las circunstancias de la organización ya eran distintas. Bajo la premisa de buscar alternativas de financiamiento, se logró la vinculación directa entre la organización y el Estado nacional. El Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales fue la línea que hizo posible el desarrollo de las cooperativas agrupadas en la asociación.

El proceso organizativo acumulado hasta entonces no sólo tenía un saldo motivacional y político sino también en la efectividad de la construcción. Las cooperativas lograron la meta de construir en el plazo de seis meses viviendas de entre 70 y 82 metros cuadrados, con tres trabajadores por unidad habitacional. Estos datos resultan de vital importancia si se toma en cuenta que en esta provincia una vivienda social tiene un promedio de 60 metros cuadrados, con el insumo del doble de tiempo y emplea un tercio de la mano de obra, a razón de un trabajador por unidad. En esta primera etapa se construyeron 54 viviendas distribuidas 26 en Puerto Madryn, 14 en Trelew y 14 en Rawson.



La estrategia de acción se centró en los procesos para la producción social del hábitat. El impacto de la capacitación para el trabajo, la generación de fuentes de empleo y la construcción de viviendas y barrios entre familias que habían cimentado previamente lazos comunitarios fue exponencial.

Los consensos de convivencia y la toma de decisiones permitieron que nuevas generaciones se formen conociendo alternativas colectivas. Abordar el hábitat en forma integral ayudó a preservar el capital identitario de la comunidad involucrada; se superaron las diferencias étnicas, culturales, sexuales y se reforzaron los derechos a la igualdad y a la responsabilidad. Este proceso también se vio reflejado en las manzanas del barrio no intervenidas por la organización, pues cada vecino no sólo mejoró las fachadas de sus casas sino también sus peridomicilios.

Expansión hacia toda la provincia del Chubut

Una vez concretada la primera experiencia financiada por el Plan Federal de la Nación y a partir del óptimo resultado de administración de los fondos, el gobierno nacional decidió continuar el apoyo a la asociación dentro de sus presupuestos anuales. A través de la articulación de los recursos públicos de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), desde un rol administrador y facilitador, la asociación Hábitat comenzó a recibir nuevas demandas por parte de la comunidad y de los municipios interesados en replicar la experiencia en sus localidades.

Es así que en la segunda etapa se desarrollaron mesas de gestión participativa en diferentes localidades de la provincia. La construcción de nuevos barrios tomó dos rumbos paralelos: por un lado se intensificó la construcción en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson con nuevos proyectos habitacionales; por el otro, se avanzó hacia el oeste de la provincia, acompañando el trayecto de la Ruta Provincial 25. En esa dirección se desplegaron proyectos sobre la localidad de Gastre en la comarca de la Meseta Central, y de Lago Puelo, El Hoyo, Corcovado y Trevelin en la comarca de la cordillera de Los Andes.

La cooperativa Trama Urbana fue la que operó los nuevos emprendimientos y apoyó el surgimiento de cooperativas locales capaces de asimilar la metodología y adquirir capacidad de ejecución propia. De esta etapa son las cooperativas La Estrella y KMS (Lago Puelo), Leña de Piedra (Gastre), LAM (El Maitén), Valle del Oeste (Trevelin), Unión Corcovado (Corcovado), Havitra y Valkiria (Puerto Madryn), Siembra, La constructora, Construyendo Realidades (Trelew), Cascos Amarillos (Rawson) y Terrenal (Comodoro Rivadavia), que en total construyeron más de 300 viviendas y cinco centros comunitarios.

La Casa de Barro, en Rawson. Obra emblemática de la cooperativa Construyendo Realidades, dedicada a la bioconstrucción, bajo la técnica de pasto encofrado con barro. En efecto, se ha iniciado un camino hacia la sustentabilidad ambiental que también incluye sistemas de calefacción con bajo consumo de leña. En esa dirección, la asociación firmó con la Universidad del Chubut un convenio marco para ejecutar viviendas ecológicas. El objetivo es insertar la discusión de la sustentabilidad energética, bastante olvidada en el territorio chubutense pues la mayor actividad productiva es extractiva. *Fotografías: Asociación Civil Hábitat.*



Polo Cooperativo: recuperando la capacidad productiva

Ante la crisis económica de principios del siglo XXI y el subsecuente cierre de innumerables industrias, surgió en Argentina un importante movimiento social que dio pie a una serie de experiencias de recuperación de empresas por parte de los mismos trabajadores. Es importante mencionar este proceso ya que en 2014, tras un acuerdo de colaboración entre la cooperativa de trabajo Elastax y Hábitat, la asociación instaló sus nuevas oficinas en una antigua fábrica recuperada años antes en Rawson. En este mismo lugar se estableció el Polo Cooperativo Mocara, que además de ser sede de Elastax, abrió sus puertas para recibir nuevas unidades productivas en manos de las cooperativas de trabajo Trama Urbana, Cascos Amarillos y Nuevo Proyecto.

La recuperación de Elastax, que entre tanto mutó su producción de guantes a ropa de trabajo y blanquería, puso en valor no sólo un predio fabril considerado como una referencia histórica de la región, sino también la identidad de un barrio obrero.

Hoy el Polo Cooperativo propone respuestas al trabajo, la capacitación y la organización comunitaria. Esto abarca la producción de insumos para la construcción, de manera que se abaratan los costos de las viviendas: la cooperativa Cascos Amarillos se especializa en aberturas de aluminio; la cooperativa Trama Urbana en la producción de revestimiento para paredes y pisos, moldes para cordón cuneta, postes de luz, cámaras sépticas, construcciones en seco y carpintería de bajos mesada, alacenas y mueblería para el hogar. Por su parte, la cooperativa de consumo Nuevo Proyecto articula las compras y el acopio de materiales.

El desarrollo productivo del Polo Cooperativo fue potenciado con una estrategia comercial común a los diferentes emprendimientos a través de la marca colectiva Epicca. Bajo esa denominación se engloba la producción de todas las cooperativas e integra rubros disímiles entre sí, lo que conlleva el desafío de articular las particularidades de cada unidad productiva y sus diferentes modos de inserción en el mercado.



FICHA 27.

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda

Área Metropolitana del Gran Resistencia, Chaco, Argentina. Investigación, docencia y extensión desde 1967. Sitio web: <http://arq.unne.edu.ar/centros/institutos/iidvi>

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda "Víctor Saúl Pelli" (IIDVI-VSP) es una unidad académica dependiente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la ciudad de Resistencia. Desde 1967, se dedica a tareas de investigación-desarrollo, docencia, extensión y transferencia en torno a la problemática de vivienda y al diseño y ejecución de programas y proyectos de servicios habitacionales.

La política, los objetivos y los lineamientos de desarrollo están definidos en el Estatuto del Instituto, consensado entre sus miembros y aprobado por Resolución del Consejo Directivo de la FAU-UNNE en el año 2010. Su propósito es contribuir a la evolución del hábitat residencial, a través de la actividad científico-técnica, en condiciones aceptables tanto para sus habitantes como para el sistema territorial y social del que es parte, orientado hacia una conformación equitativa e inclusiva de la sociedad y hacia una gestión ambiental sustentable.

La historia del IIDVI ha tenido como hilo conductor una fuerte articulación y convergencia entre sus áreas de investigación, docencia y vinculación, las cuales se retroalimentan y fusionan en un sistema abierto que contribuye a la formación de formadores y operadores en diferentes ámbitos de conocimiento y de prácticas. A lo largo de 50 años, el Instituto ha desarrollado una importante cantidad de proyectos de investigación acreditados, financiados por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Los resultados y desarrollos teóricos conceptuales se transfieren en la actividad docente, que desempeñan sus integrantes en la FAU en diferentes asignaturas: Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP), Desarrollo Urbano 1 y 2, Teoría del Diseño y la Gestión Urbana, Taller de Arquitectura y Proyecto Final de Carrera.

La inclusión de la asignatura GDVP en la currícula de la carrera de arquitectura, por iniciativa de quien fuera el director y fundador del IIDVI, se vio fuertemente acompañada por la convicción de introducir en la formación de los arquitectos la problemática del hábitat social. La experiencia acumulada adicionada a la consolidación formativa del equipo docente, escoltó el desafío de apostar a la formación académica superior, mediante la oferta de una carrera de posgrado como continuidad al proceso formativo profesional.

La Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social creada en el año 2013, no sólo se suma a las actividades de investigación y formación, sino que logra impactar en el medio nacional, regional y

local, debido a la conformación de cuadros técnicos de diferentes disciplinas que se desempeñan en organismos públicos y privados en el campo de la política habitacional, así como de recursos humanos especializados en la temática dentro de la academia.

Las actividades de extensión se realizan mediante la programación, diseño y ejecución de proyectos experimentales de obra y/o intervenciones profesionales en situaciones reales; asesorías, arbitrajes y estudios en relación con actores externos. La transferencia de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica se concreta a través de asesorías técnicas a los ministerios de provincias, municipios de la región, organizaciones sociales, entre otros.

Las competencias señaladas se complementan con tareas de divulgación científica mediante publicaciones que reúnen los resultados de los trabajos realizados y a través de la revista indexada *Cuaderno Urbano* gestionada desde el Instituto y que trasciende la producción propia. El Instituto participa también en el dictado y la organización de conferencias, seminarios, jornadas, entre otras actividades.

Un camino de "hormigas" en la construcción de capacidades para la acción

La labor institucional cuenta con una larga trayectoria en el abordaje del problema habitacional de los sectores en situación de pobreza. En su etapa inicial, se abordó de modo exploratorio la temática de la consolidación de las "villas", cuando la consolidación orgánica de los asentamientos informales no llegaba a ser admitida por los organismos estatales. El proyecto Barrio Santa Catalina (Resistencia), encarado por el grupo (1975-1977), fue precursor en Argentina en el desarrollo de procesos de regularización, implementado en el marco de un conjunto de premisas basadas en la participación activa de los habitantes en la gestión y en una concepción progresiva del desarrollo de la solución habitacional. Esta experiencia constituyó el punto de partida de una serie de desarrollos teóricos y proyectos experimentales sobre el tema que se extendieron hasta la década de los noventa, tras el duro paréntesis impuesto por el gobierno de facto (1976-1983).

Desde el año 2001, comenzó una fase de investigaciones abocadas a estudiar las nuevas políticas habitacionales –que tomó como referencia empírica al Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR)– con la finalidad de detectar debilidades y de proponer soluciones desde una perspectiva de integralidad, equidad y participación de las soluciones al problema habitacional de los hogares en situaciones deficitarias de la región que abarca a más de la mitad de la población, de acuerdo con datos oficiales. Esta labor fue implementada desde proyectos de investigación y planes de trabajo de becas y tesis de pre y postgrado. A lo largo de esta etapa se puso a prueba una metodología de análisis de la política habitacional, que se perfeccionó con el tiempo, así como también la consolidación del grupo de investigación actual.

Desde 2013, las investigaciones se articulan en un sistema de proyectos que se nuclean en torno al estudio de procesos de fragmentación y segregación en áreas urbanas del Gran Resistencia. Esta línea central se complementa y alimenta de otros tres proyectos de investigación que abordan temas de hábitat, desigualdad social, profundización en la dimensión urbano-ambiental, participación, metodologías y herramientas de actuación.

El estudio sobre la política habitacional en Argentina de 2003-2007 y sobre su implementación en el AMGR se desarrolló desde un marco teórico conceptual propio tendiente a superar la perspectiva de focalización que tuvo en la década de los noventa. Esto permitió visibilizar y proponer ajustes a la forma de interpretación y aplicación de los diferentes programas de vivienda para atender el déficit cuali y cuantitativo. Asimismo, se logró avanzar en el desarrollo conceptual de Áreas Urbanas Deficitarias

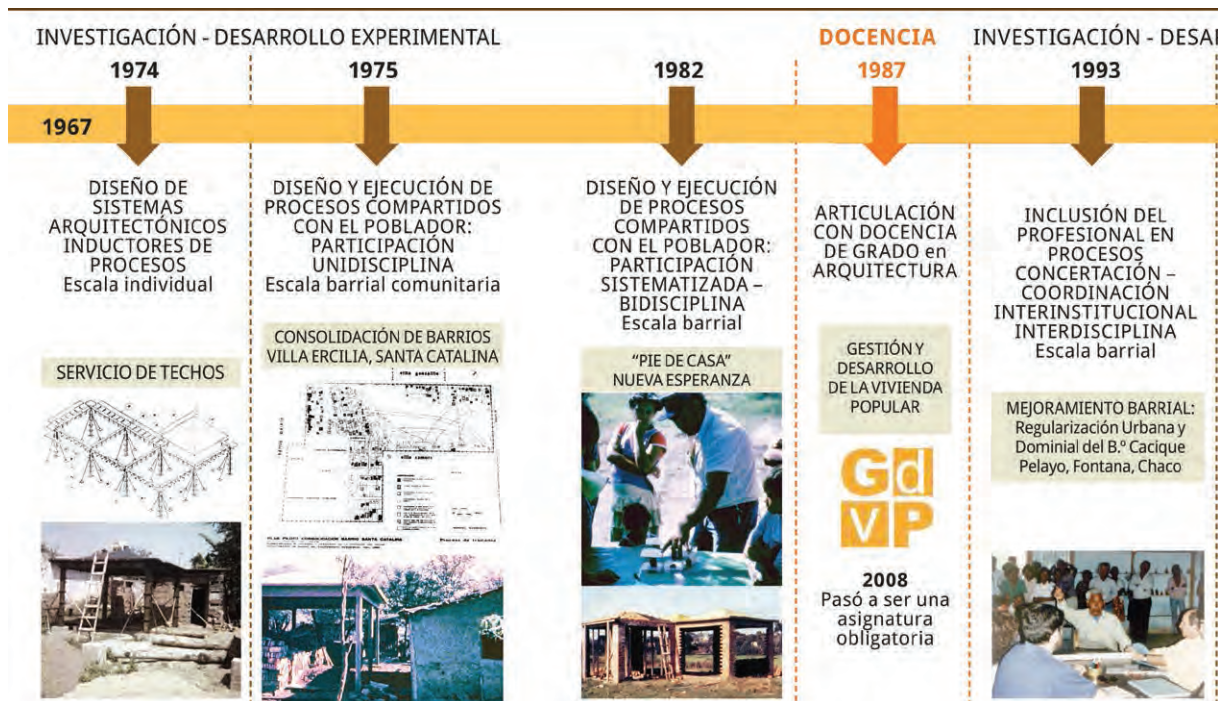


Gráfico 3: Esquema síntesis de la evolución institucional en la investigación y formación académica científica.

Críticas (AUDC) como unidades de observación, y posterior intervención, de mayor integralidad de dimensiones, que participan en los fenómenos de fragmentación-segmentación y desigualdad en aspectos socio-urbano-territoriales en el AMGR.

Otra línea temática de investigación actual se propone conceptualizar dimensiones, escalas e interrelaciones implícitas en la solución integral de necesidades habitacionales básicas; construir indicadores socio-urbano-ambientales para perfeccionar instrumentos de diagnóstico; diagnosticar y tipificar situaciones habitacionales críticas en el Gran Resistencia; y elaborar criterios de diseño y pautas de intervención para proyectos integrales de vivienda social de áreas vulnerables, adecuados y eficientes al logro de umbrales urbano-ambientales básicos.

El abordaje de la desigualdad entendida desde la multideterminación de su producción y reproducción, se adiciona en el sistema de proyectos con aportes en la elaboración de pautas para el desarrollo de instrumentos de intervención urbana que contrarresten la desigualdad social en las AUDC. Se trata de un abordaje cualitativo de comprensión de la situación de los actores que padecen y reproducen relaciones de desigualdad en los procesos urbanos.

Por último, desde la revisión y profundización en la complejidad de la metodología de actuación en diferentes escalas urbanas, la investigación tiene como objeto desarrollar pautas metodológicas, instrumentos de participación y mecanismos de comunicación e información.

En la evolución del IIDVI también fue cambiando la manera de hacer transferencias y extensión. De la realización de proyectos experimentales vinculados principalmente a la investigación (lotes con servicios para población inicialmente dispersa, regularización urbana dominial, construcción de viviendas progresivas y participativas, entre otros, llevados adelante en barrios del AMGR), el Instituto pasó progresivamente hacia actividades de asesoramiento y capacitación a organismos públicos encargados de implementar la política habitacional en la provincia del Chaco. Así también se transitó a la realización de proyectos de extensión



universitaria y de acción directa en el territorio del AMGR y Corrientes, vinculados principalmente a la formación de estudiantes. Esto ocurrió como consecuencia de cambios que posibilitaron una universidad de mayor presencia y articulación con el medio en que realiza sus actividades, así como de la necesidad de formación requerida por los equipos técnicos gubernamentales para trabajar con las nuevas políticas habitacionales.

Es así que se realizaron, por ejemplo, trabajos de asistencia técnica en el marco de un acuerdo de cooperación con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco (2008-2010). Como parte de estos trabajos, se pusieron a prueba hipótesis iniciales de abordaje por áreas como la correspondiente a la actuación del Programa de Mejoramiento Barrial en el sur de la ciudad de Resistencia, con base en los criterios de integralidad y multiescalaridad incluidos en la formulación del proyecto pero que no se habían aplicado hasta ese momento por este programa nacional.

Actualmente se está terminando el desarrollo de un proyecto de extensión orientado a la recuperación de un espacio público como medio inductor de procesos de integración social de áreas urbanas críticas, en relación a la fragmentación y segregación urbana.

Después de 50 años, se puede dar cuenta de profesionales que han transcurrido su formación en estos espacios, y que actualmente se desempeñan en puestos jerárquicos en dependencias públicas de la región nordeste del país, que proponen y actúan con un paradigma diferente al hegemónico. Paradigma que promueve centrar la atención en los habitantes, en la ciudad, en la producción social del hábitat, en acompañar y construir procesos sociales de resolución de situaciones habitacionales críticas, desde una perspectiva integral y con fuerte protagonismo de la población.

Sin embargo, la labor de esta institución en la consolidación de una perspectiva de integralidad y participación en el abordaje de la resolución del hábitat, si bien ha permeado progresivamente algunos ámbitos de producción del hábitat social, todavía constituye una visión emergente respecto a la producción de mercado, dominada por la lógica de rentabilidad, lo cual nos desafía a continuar y profundizar nuestra tarea.



FICHA 28.

Proyecto Habitar: arquitectura con compromiso social

Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Premio Arquisur 2011,
Bienal de Quito 2016, Premio BIAAR 2016, Mención y 3er Premio CAPBA 2017
Sitio web: <http://proyectohabitar.org>

Proyecto Habitar es un colectivo integrado por 20 profesionales, en su mayoría mujeres, que trabaja en la realización de proyectos urbanos y arquitectónicos, en articulación con organizaciones sociales, movimientos políticos, instituciones estatales y organismos no gubernamentales. En el ámbito académico, también promueve esa articulación a partir del desarrollo de propuestas de formación que vinculen los conocimientos técnicos con los saberes populares, a través de una práctica educativa anclada en los territorios populares.

Sobre los inicios: del aula al barrio

El colectivo se originó en 2008, en el marco del proyecto de Investigación y Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires denominado Proyecto Habitar, con el que se buscaba ofrecer a los estudiantes la posibilidad de probar sus habilidades y servir al mismo tiempo a las poblaciones que de otro modo nunca hubieran accedido a una asesoría profesional. Desde este enfoque, se comenzó a desarrollar el concepto de Atención Primaria de Hábitat (APH) que consiste en la búsqueda de soluciones a viviendas recuperables que poseen problemas sanitarios, estructurales y hacinamiento, sin perder de vista su vinculación con el barrio.

Con el paso del tiempo, el equipo fue creciendo e incorporando nuevas experiencias y propuestas que van desde la escala doméstica hasta la urbana. Hoy, Proyecto Habitar es una asociación civil y una cooperativa de trabajo independiente que persigue tres estrategias principales de intervención en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): 1) consultorios de atención primaria de hábitat; 2) programas de transformación del espacio colectivo; y 3) gestión de procesos de urbanización de villas, asentamientos y conjuntos.

En todos los casos, se trata de integrar el aporte técnico y la participación de los pobladores/as en los procesos de transformación del territorio, especialmente en contextos de urbanización de barrios populares. Además de buscar el intercambio con las organizaciones barriales, los diversos proyectos de intervención, investigación y extensión se aprueban y se discuten desde la asamblea de arquitectas y arquitectos, asegurando de este modo la construcción de un saber colectivo y de una identidad propia a este grupo joven que se ha planteado la arquitectura comunitaria como horizonte de trabajo.



Según el censo de 2010, existen 2.16 millones de viviendas con algún tipo de déficit en Argentina, de las cuales más de 75% son recuperables. Por otro lado, de las 13.8 millones de viviendas construidas, 2.5 millones están deshabitadas. En vez de mejorar y redistribuir el stock existente, la política de vivienda orienta la casi totalidad de los recursos públicos a la construcción de vivienda nueva.

Atención Primaria de Hábitat. En las jornadas de devolución, los espacios comunitarios sirven como espacios de exposición. En las láminas se aprecian las casas de cada participante y dos opciones de modificación. Al socializar el proyecto concertado con cada familia, se toma conciencia del carácter colectivo de los problemas habitacionales que afectan a los habitantes del barrio. *Fotografía: Miguel M. Caamaño.*

Consultorios de Atención Primaria de Hábitat

La propuesta de llevar consultorios de APH a los asentamientos precarios fue desarrollada por el equipo en un momento de expansión de las políticas sociales. En el ámbito de la política de vivienda –pensaban los promotores/as de Proyecto Habitar–, los consultorios servirían como experiencias piloto hacia la consolidación de un “sistema público de hábitat” semejante a los sistemas educativos y de salud pública. En este sentido, se ensayaron instrumentos de pequeña escala que pudieran generalizarse e insertarse en las políticas públicas para reducir el déficit habitacional cualitativo.

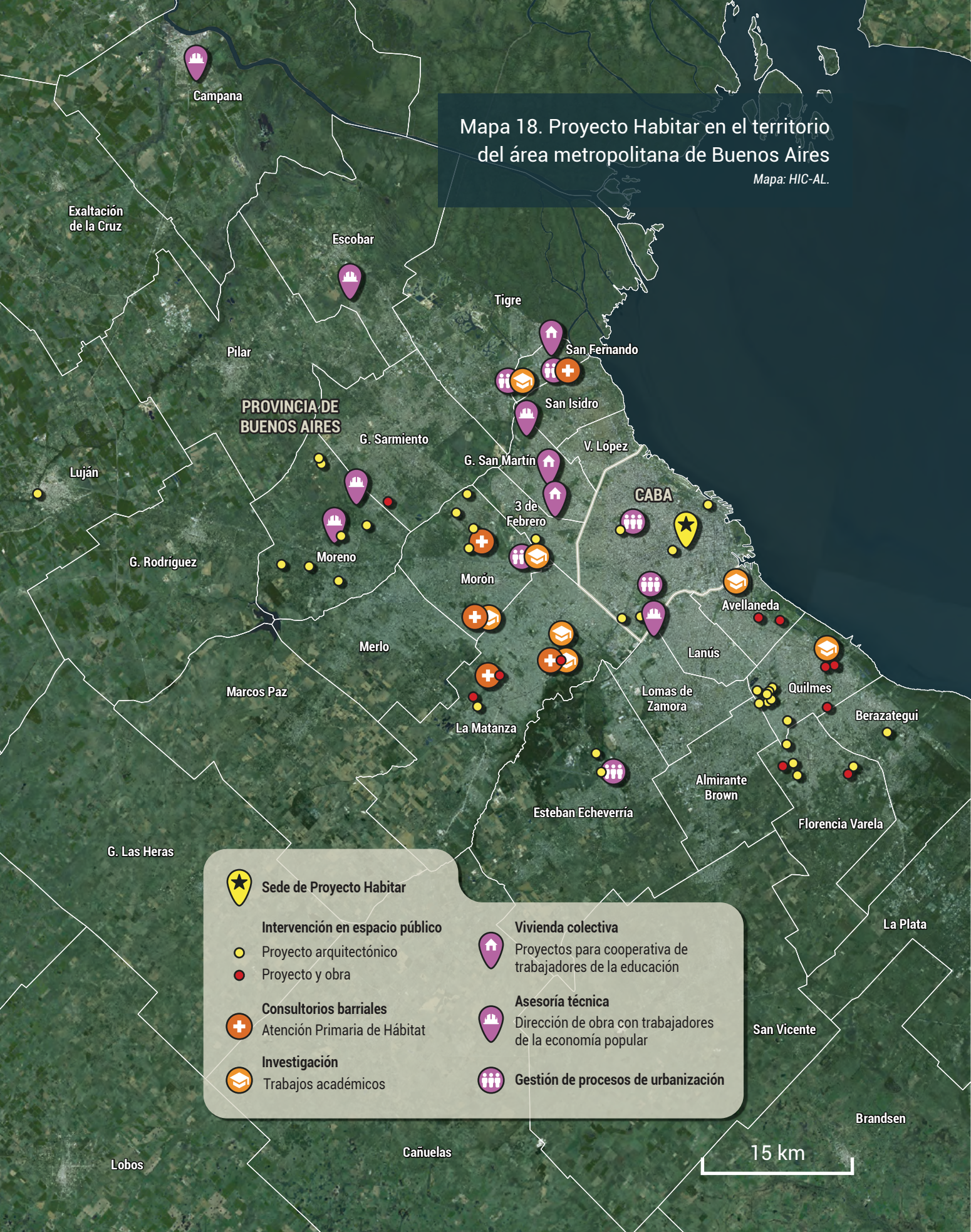
En diez años de trabajo por toda el ÁMBA, la metodología se ha nutrido de diversas influencias –como la del *arquitecto de la comunidad* en Cuba– y se ha modificado a partir de procesos de autoevaluación. Un criterio central que ha guiado el desarrollo de esta estrategia es propiciar el encuentro, la reunión, el tratamiento colectivo de los problemas; propiciar el trabajo en talleres para comprender que las viviendas son parte de un contexto urbano común, un barrio, y hacerlo junto con los vecinos y técnicos.

El tipo de participación en los procesos de obra ha dependido de los recursos de los que disponen los pobladores/as y/o sus organizaciones: en algunas experiencias se ha llegado a la entrega de carpetas de proyectos para cada familia, en otros casos se ha podido realizar el seguimiento de las primeras etapas de obra, y en otros se ha alcanzado la materialización total de la propuesta proyectada.

Finalmente, la experiencia de los consultorios también ha servido para la generación de propuestas de política pública. En el marco de Habitar Argentina –espacio multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat–, el colectivo impulsa actualmente un proyecto de Ley de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público, para garantizar el derecho de todas y todos a consultar un profesional del hábitat (accesible en su sitio web).

Mapa 18. Proyecto Habitar en el territorio del área metropolitana de Buenos Aires

Mapa: HIC-AL.



Sede de Proyecto Habitar

Intervención en espacio público

- Proyecto arquitectónico
- Proyecto y obra

Consultorios barriales

- Atención Primaria de Hábitat

Investigación

- Trabajos académicos

Vivienda colectiva

- Proyectos para cooperativa de trabajadores de la educación

Asesoría técnica

- Dirección de obra con trabajadores de la economía popular

- Gestión de procesos de urbanización

15 km

Programas de transformación de espacios barriales

Proyecto Habitar ha acompañado más de cuarenta obras dirigidas a transformar los espacios de referencia comunitaria en distintos barrios del AMBA, donde ha desarrollado tareas de programación y proyecto, tanto en espacios abiertos (plazas, clubes o parques urbanos) como en centros comunitarios (comedores populares, centros de salud, sedes de organizaciones sociales y jardines de infantes, entre otros). Por lo general, estas intervenciones no se desenvuelven sobre espacios "vírgenes": operan sobre territorios marcados física y socialmente por décadas de autoproducción habitacional y barrial.

En cada caso se produce una guía que establece el tipo de espacios que se pretende generar, los acuerdos sobre las actividades deseadas y el camino a seguir por los diversos actores que intervienen en el proceso para alcanzar los objetivos trazados. El acuerdo contempla además un listado de espacios definidos según las actividades que se van a desarrollar y las calidades que requieren. Con estos insumos, y en consideración de cada contexto ambiental y urbano, se generan soluciones y alternativas arquitectónicas que son permanentemente dialogadas con los futuros usuarios.

Es así como se proyectó, por ejemplo, el Centro Misionero Padre Pere Riera, sede de la Fundación Concordia, organización vecinal con la que Proyecto Habitar trabaja desde 2012 en el barrio Un Techo Para Todos. Este asentamiento precario es resultado de una toma de tierras que comenzó en 2002 en la periferia de Ciudad Evita, de la municipalidad de La Matanza, a 20 kilómetros del centro de Buenos Aires.

El Centro se organiza en torno a una nave central que oficia de espacio multipropósito y genera una franca comunicación entre el patio interior y el acceso, el cual se brinda a la plaza pública al otro lado de la calle. El proyecto propone una secuencia espacial que va promoviendo mayores niveles de apropiación en la medida que se especializan las funciones. En el sector central del volumen prismático se incorpora una bandeja donde se realizan proyecciones, esta bandeja desdobra la altura del ingreso y propone una lectura relacional del espacio sin muros fijos, de modo que se recupera la idea de "rincones de trabajo".

En cuanto a su materialización, las definiciones se tomaron también en función del aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades locales. La propuesta constructiva recupera el uso de materiales conocidos por la comunidad e incorpora aspectos técnicos y espaciales que tienen como propósito facilitar el mantenimiento, la construcción, la iluminación y la flexibilidad del espacio. Los materiales están trabajados para que su terminación sea a la vista. La estructura combina muros portantes de bloques de hormigón con una estructura que sostiene la cubierta y arriostra los muros a los que se incorporan ladrillos de vidrio portantes. Los muros de cerramiento son bloques de hormigón, carpinterías de aluminio y cubierta combinada de chapa de zinc y losa de hormigón armado.



Centro Misionero Padre Pere Riera. El proyecto fue diseñado y construido entre 2013 y 2015, frente a la plaza pública del barrio. La demanda de la comunidad era la construcción de un espacio de culto, imaginado como un galpón que serviría de capilla. Tras un largo proceso de diálogo, Proyecto Habitar generó una propuesta que prefigura al espacio colectivo como posibilitador de la integración comunitaria, ya que propicia el encuentro con otros y permite realizar actividades simultáneas en espacios adecuados para proyección de películas, reuniones de diversa índole, aulas de capacitación, comedor, talleres varios y reuniones barriales. Véase también foto introductoria a la ficha: Proyecto Habitar.

Gestión de procesos de urbanización de villas, asentamientos y conjuntos

Proyecto Habitar entiende que la escala barrial posee un enorme potencial como unidad de gestión territorial. Por ello retoma los valores sociales que se observan desde el origen en este tipo de espacios urbanos, donde los pobladores construyen acuerdos para la producción y uso del hábitat. La comunidad, que ha autoproducido su hábitat, contiene un tejido de relaciones físicas, sociales y ambientales que es posible articular en función de un territorio gestionado de manera más democrática y justa. En la propuesta del equipo, este trabajo requiere para la instrumentación de espacios de participación efectiva, que se incluyan a los actores involucrados y el necesario acompañamiento técnico interdisciplinario.

En su práctica, el colectivo ha integrado diversos instrumentos de intervención intersectorial y participativa como mesas de gestión, censos barriales, distintos tipos de relevamientos e informes; y promueve siempre el protagonismo de la población y sus organizaciones sociales, políticas o vecinales. La diversidad y riqueza de las experiencias de intervención del equipo de Proyecto Habitar continúa creciendo. Así, por ejemplo, se ha participado del programa de viviendas colectivas para el sindicato de docentes de la Provincia de Buenos Aires, en localidades como San Martín y San Fernando. Asimismo, el colectivo se ha sumado a los equipos técnicos que trabajan con la Central de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep) para la culminación de más de mil viviendas en Moreno, Campana y Escobar.

Finalmente, hay que destacar que la actividad académica de Proyecto Habitar también crece y se desarrolla, principalmente porque varios de sus integrantes participan de los equipos docentes de cinco universidades públicas del AMBA, por las cuales transitan más de diez mil estudiantes de arquitectura y urbanismo. En este ámbito, el colectivo trabaja sostenidamente para trascender la naturalización de una enseñanza universitaria que promueve un modelo profesional acrítico que separa las respuestas técnicas de las respuestas sociales.



FICHA 29.

Proyectos de Aplicación Profesional en colonias populares de Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque, Área Metropolitana de Guadalajara, México.
Facebook "haciendobarrioconstruyendoconlagente"

La Red de Centros Comunitarios del Cerro del Cuatro (RCCC4) es una iniciativa autónoma, promovida por líderes vecinales y algunos ex miembros de la Unión de Colonos Independientes (UCI), organización popular que tuvo su auge en los años ochenta en esta zona periférica del área metropolitana de Guadalajara. A través de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) –que son parte de la formación estudiantil de todos los planes de estudios de licenciatura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso)– se involucra a estudiantes de arquitectura, ingeniería civil, ciencias de la educación, psicología, ingeniería ambiental y gestión cultural, para que conozcan las problemáticas urbanas más sentidas de la población y se comprometan con su transformación.

Contexto

El Cerro del Cuatro se encuentra en la parte sur del área metropolitana de Guadalajara, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los orígenes del poblamiento de su ladera poniente datan de fines de los años setenta, cuando personas de escasos recursos comenzaron a comprar terrenos a líderes de la comunidad de Santa María Tequepexpan.

Estas colonias están catalogadas como asentamientos irregulares y carecen de condiciones de seguridad en la tenencia de la propiedad y el suelo. Los servicios de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público y electrificación doméstica han sido introducidos por los habitantes o por autoridades municipales, pero de forma discontinua y deficiente. La mayoría de las calles y pendientes no están pavimentadas, lo que complica la accesibilidad.

Nos comenzamos a organizar para conseguir cable para la luz y mangueras para poder tener agua, después nos empezamos a reunir para ir al ayuntamiento y exigir que nos pusieran servicios. Poco a poco fue acudiendo más gente a las reuniones de todas las colonias del cerro para organizarse en las manifestaciones. La gente aportaba trabajo y con la ayuda de los maestros del Iteso nos juntamos en una organización llamada Unión de Colonos Independientes. Sr. Agustín, líder vecinal.

La mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza y no tiene acceso a servicios de salud pública. En las últimas dos décadas, la drogadicción, el narcomenudeo y la violencia han crecido de manera exponencial. Más allá de la escuela, no hay oferta de programas culturales y recreativos en los que la población pueda utilizar su tiempo libre; esto es grave cuando se piensa en la cantidad de adolescentes y jóvenes que abandonan la escuela y no tienen empleo formal.

Origen y finalidad de los Centros Comunitarios del Cerro del Cuatro

Desde el 2004, a petición de los miembros de la Cooperativa de Servicios a la Comunidad La Mezquitera, el voluntariado Manos Solidarias –del Centro Universitario Ignaciano (CUI)– se involucró en la creación de la ludoteca El Caracol, cuyo propósito era promover el desarrollo integral de la niñez a través del juego, como una alternativa ante la situación de violencia y pobreza que se vive en la comunidad. Asimismo, los universitarios asesoraron el proceso de Planeación Estratégica y Evaluación de la cooperativa, mediante el cual se definieron las líneas estratégicas para desarrollar este espacio: legalización del terreno, mantenimiento del inmueble, variedad de servicios y trabajo en equipo.

La experiencia de El Caracol fue un elemento inspirador para la fundación de los otros centros comunitarios que actualmente existen e integran la Red CCC4.

- › Centro comunitario El Taller en la colonia Nueva Santa María Poniente.
- › Centro comunitario El Caracol en la colonia La Mezquitera.
- › Centro comunitario Casa Hermano Javier en la colonia Francisco Madero 2ª sección.
- › Centro comunitario Jardín de Niños Paulo Freire en la colonia Nueva Santa María Poniente.

En 2011, a petición de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, el Iteso elaboró un diagnóstico integral y un plan de acción comunitario para las colonias Nueva Santa María y Francisco Madero⁵. Este proceso dio pie a una colaboración más permanente del Iteso a través de los PAP *Haciendo barrio y cultura y Transformación social*, que adoptaron como escenario de intervención esta zona del Cerro del Cuatro a partir del otoño de 2012. Asimismo, la Universidad llegó a apoyar la decisión de establecer dos nuevos Centros Comunitarios Autónomos: El Taller y la Casa Comunitaria Hermano Javier.

La mayor parte de los vecinos que participan en estos esfuerzos pertenecen a la generación que integró las Comunidades Eclesiales de Base y la Unión de Colonos Independientes en los años ochenta y noventa. Para ellos, tiene un alto valor social el contar con espacios físicos que funcionen como elementos para el encuentro, la reflexión y la toma de decisiones para la acción concertada y orientada hacia el desarrollo humano y social de sus comunidades.

A partir de los avances logrados en cada uno de estos centros, así como de reflexionar sobre sus limitaciones y los retos a los que se enfrentan, hoy se propone como estrategia establecer formalmente una red de centros comunitarios que permita fortalecer su acción y articular de mejor manera la colaboración de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que han manifestado interés en apoyar su labor; es así como nace la Red de Centros Comunitarios del Cerro del Cuatro (Red CCC4).

⁵ Tanto el diagnóstico como el plan de acción se enmarcaron en la estrategia Convivir Mejor, una iniciativa del gobierno federal cuyo objetivo era fortalecer dinámicas comunitarias a través de la implementación y réplica de un modelo de acompañamiento federal a iniciativas locales para la construcción de cohesión social.

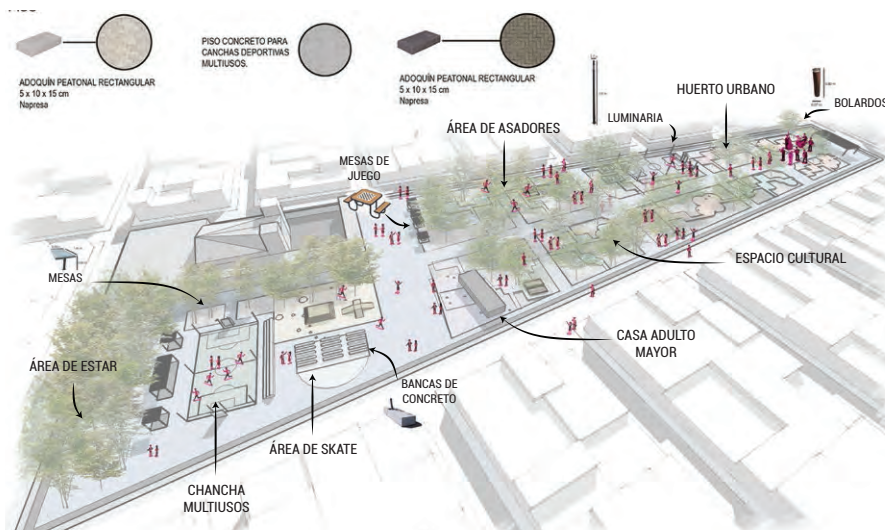


Gráfico: Propuesta de mejoramiento del parque Roberto Montenegro, PAP Hacienda barrio. El mayor reto consiste en conservar los árboles en buen estado, por lo que se plantean módulos integrales de 4 x 4 m que se ajustan al área que se produce entre cada árbol. Allí se generarán las distintas dinámicas en función de la lista de necesidades. El proyecto respeta el eje principal y modifica los ejes secundarios para conectar y crear flujos entre las calles perpendiculares al parque, aumentando así su permeabilidad.

El acompañamiento y la asesoría a la RCCC4 por parte de los PAP y del voluntariado del CUI, se ha enfocado en la realización de un taller de autogestión para animadores comunitarios, incluyendo sesiones para reactivar la memoria histórica de cómo se poblaron las colonias y sesiones más prospectivas en las que se trabajan las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de centro comunitario quieren? ¿Qué deben hacer para lograrlo? ¿Qué debe saber un buen animador comunitario? El objetivo es definir colectivamente lo que implica el papel del animador, aprender a trabajar en equipo, adquirir herramientas de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos, así como apropiarse de los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos.

Aunque apenas se han realizado cuatro reuniones plenarias, la Red ya ha generado una agenda dirigida a autoridades municipales que contiene demandas como regularización de la tenencia de la propiedad; mejoramiento urbano y rehabilitación de infraestructura (redes de agua potable y drenaje sanitario); rehabilitación o creación de espacios públicos de esparcimiento; y la adecuación de los centros comunitarios para que brinden un mejor servicio a un mayor número de pobladores. Algunos miembros de la RCCC4 han dado seguimiento continuo a esta agenda, mediante el enlace con el director de políticas públicas del Ayuntamiento, con el jefe de gabinete y con la secretaria técnica de la Comisión Municipal de Regularización (Comur). El Iteso ha servido de enlace para que se generen estas reuniones y pueda haber acuerdos entre ciudadanos y gobierno.

Por otra parte, la RCCC4 solicitó al Iteso a través de los PAP mencionados y del CUI, que se le brindara asesoría en materia de organización ciudadana, por las continuas intervenciones de partidos políticos para agregarlos a sus cuadros o para intervenir en las actividades que realizan. En este contexto, se ha llevado a cabo un taller sobre ciudadanía, en el cual se enfatiza la importancia de la autonomía política de la Red, con el objetivo de que se reconozcan como ciudadanos y no como “siervos” de un agente externo, en este caso los partidos políticos, los cuales históricamente han sacado ventaja para sus intereses particulares.

Naturalmente, al tratarse de grupos de personas que tienen diversos puntos de vista sobre su realidad y sobre las acciones a realizar, se ha dado cierta conflictividad interna. Ante esta situación, y a solicitud expresa de los grupos, los asesores universitarios han sabido fungir como mediadores y han ofrecido talleres para la resolución positiva de estos conflictos.

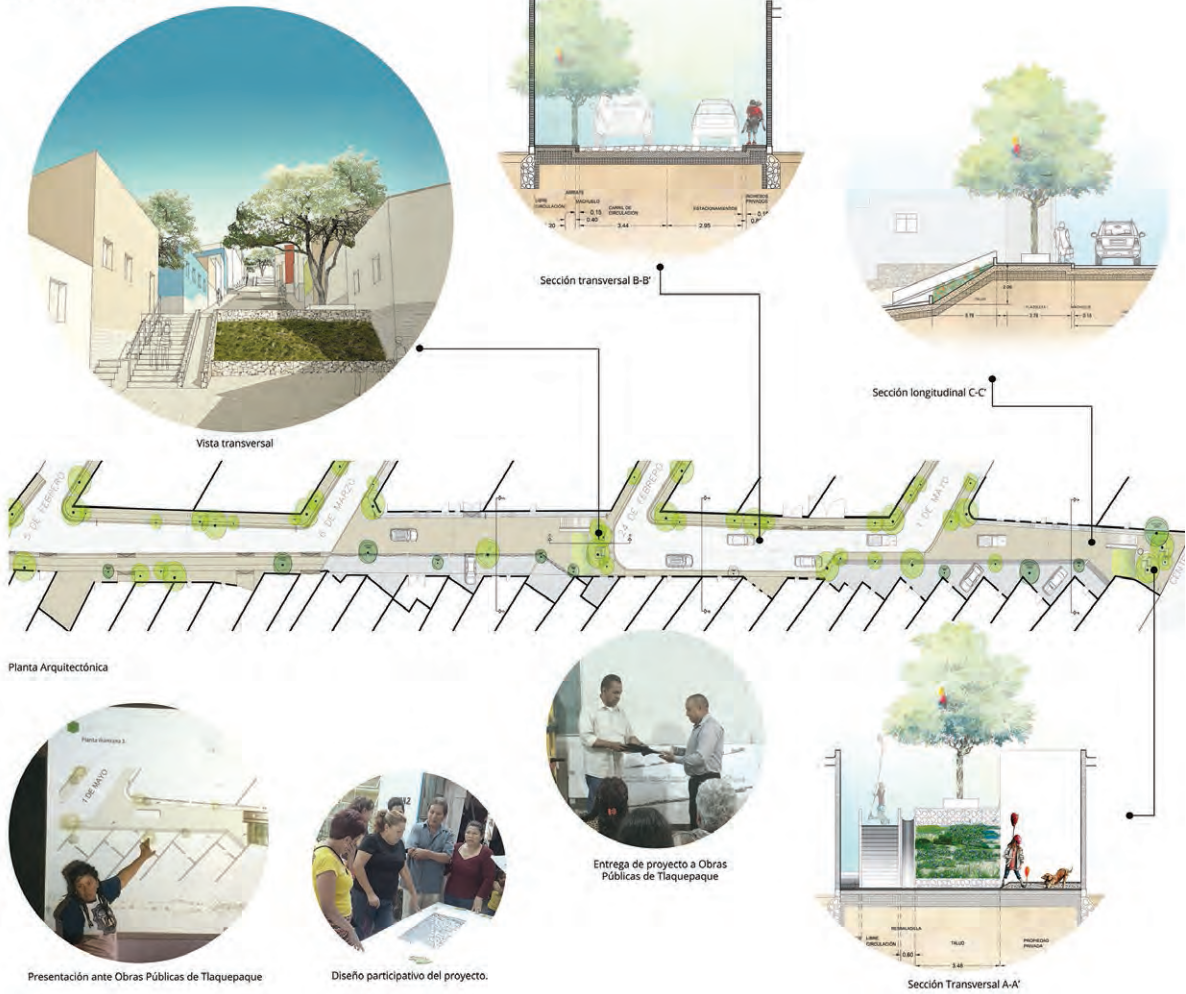


Gráfico: Propuesta arquitectónica para la calle 10 de Mayo, de la colonia Francisco Madero. PAP Haciendo barrio.

Vinculación entre ITESO y Centros Polanco

A partir del 2016, después de una reunión con colectivos de vecinos de la RCCC4 y de Lomas de Polanco, surgió de este últimos la petición apoyo técnico en el proceso de regularización de su colonia. Para tal efecto, el PAP *Haciendo barrio* y el PAP *Regularización y autoproducción de vivienda social* ha vinculado a la población con el ayuntamiento de Guadalajara, que comenzó a brindar asesorías personalizadas junto con personal de la Comur, ofreciendo además la elaboración de los planos técnicos que se requieren.

Por otra parte, los universitarios del Iteso asesoraron la realización de una propuesta de diseño urbano para la rehabilitación del parque Roberto Montenegro. La propuesta generada junto con los colectivos que hacen vida en el Centro Polanco fue bien recibida por las autoridades municipales, quienes han aceptado destinar dos millones de pesos para la primera fase, que incluye poda, cambio de luminarias, arreglo de las canchas de fútbol rápido, arreglo banquetas, entre otras acciones.



FICHA 30.

Confluencia en Los Pinos: de la ocupación a la planeación participativa

Cantón de Mejía, Área Metropolitana de Quito, Ecuador. Regularización y planeación para 300 familias. Premio PSH - América Latina 2017.

⁶ Marcelo Rodríguez, Gino Grondona-Opazo, Jaime Erazo y Justine Festjens, "Disputas urbano-populares: creatividad y antagonismos para la construcción de barrios del Buen Vivir en Quito" en *Ciudades populares en disputa*, Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Clacso, UFRJ, UPS, 2016.

⁷ Véase: Architecture Sans Frontières UK, *Change by design. Nuevas imaginaciones espaciales en Los Pinos*, Informe, 2013. https://issuu.com/beatricedecarli/docs/cbd2013_lp_report_140120-online

La comunidad surgió en 2006 tras la ocupación de un terreno perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador. Fueron más de 300 familias las que tomaron el sitio y decidieron planificar colectivamente el proceso de ocupación, sin reproducir las condiciones de extrema precariedad que caracterizan a muchos de los barrios informales que surgieron en Quito en los años ochenta. Así, el área fue dividida en parcelas y una pequeña cantidad de casas se construyeron por ayuda mutua (Mingas). A la par, se creó el Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos (CDCLP), con representantes a elegir cada dos años, quienes se reúnen periódicamente en el salón comunal⁶.

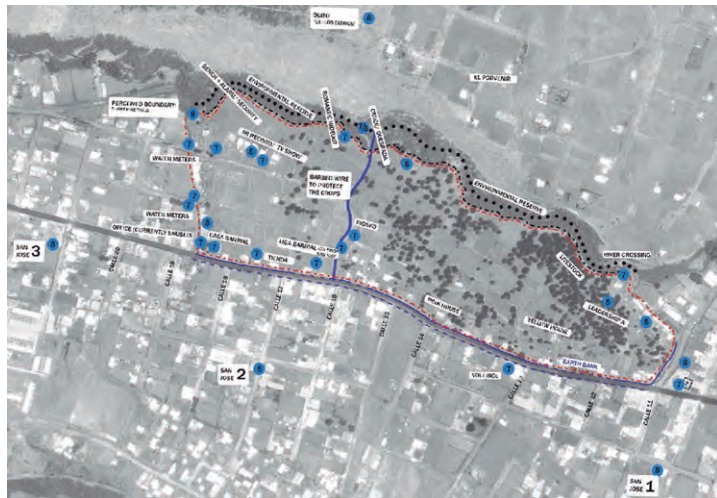
Mientras se realizan los trámites para el traspaso del suelo, se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento comunitario y organizativo por parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Por su parte, la organización Architecture Sans Frontières se ha involucrado en la realización de un ejercicio de diseño participativo del barrio⁷.



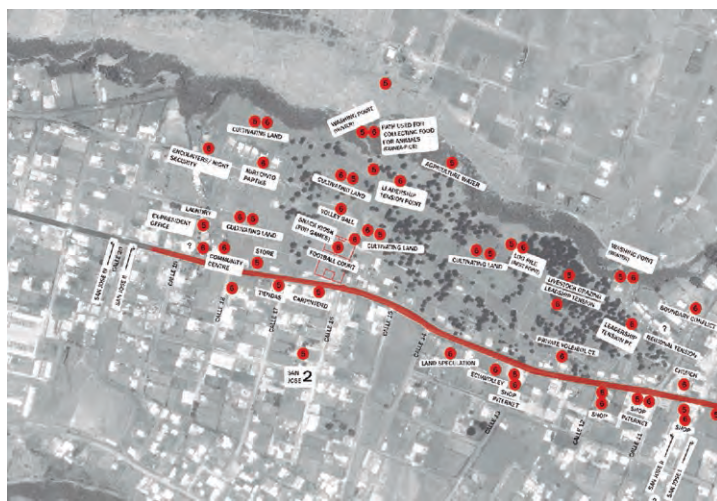
Aspectos de los talleres de diagnóstico y diseño participativo que fueron impartidos por la asociación Architecture Sans Frontières.



Servicios básicos:
vialidad, agua,
electricidad y seguridad.



Espacios comunitarios:
canchas, sitios
recreativos y cruces.



Desarrollo productivo:
cría de animales, huertos
y negocios.



Los procesos de producción social del hábitat –es decir, aquellos que se realizan bajo el control de los propios usuarios y sin ánimo de lucro– no sólo son una alternativa para concretar el derecho social a la vivienda adecuada, también generan diversidad de abordajes y soluciones que difieren de las tendencias homogeneizantes y reduccionistas propias a la producción de mercado. Los 30 casos que integran esta publicación se caracterizan por haber ensayado prácticas transformadoras y por haber creado espacios de esperanza donde prima el interés colectivo, el cuidado de la naturaleza, la solidaridad y el buen vivir. Es nuestro deseo que este esfuerzo de documentación, además de resultar de utilidad para aquellos grupos que se plantean la creación o el apoyo a nuevos proyectos, ayude a dimensionar el ámbito territorial que han adquirido ciertas iniciativas tanto urbanas como rurales. Asimismo, esperamos que contribuya al diseño e implementación de sistemas de apoyo adaptados a las aspiraciones y formas de trabajo de las y los pobladores organizados.

